

NUEVA SOCIEDAD | 237

Los laberintos del capitalismo

COYUNTURA

Pablo Rossell Arce
Alberto Koschützke

TRIBUNA GLOBAL

René Ramírez Gallegos

TEMA CENTRAL

Pierre Salama
Jorge Eduardo Navarrete
Alma Espino
Oscar Ugarteche
Martín Schorr
Eduardo Gudynas
Javier Rodríguez Pardo
Sandro Mezzadra

ENSAYO

Yaotzin Botello

NUEVA SOCIEDAD

es una revista latinoamericana abierta a las corrientes de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social.

Se publica cada dos meses en Buenos Aires, Argentina, y circula en toda América Latina.

Directora: Svenja Blanke

Jefe de redacción: Pablo Stefanoni

Equipo editorial: Silvina Cucchi, Florencia Grieco

Administración: Natalia Surraco, María Eugenia Corriés

NUEVA SOCIEDAD Nº 237

Diseño original de portada: Horacio Wainhaus

Arte y diagramación (portada e interior): Fabiana Di Matteo

Ilustraciones: Calvi

Fotografías: Shutterstock

Corrección: Germán Conde, Vera Giaconi

Traducción al inglés de los sumarios: Kristie Robinson

Impreso en Talleres Gráficos Nuevo Offset,
Viel 1444, Buenos Aires, Argentina

Los artículos que integran **NUEVA SOCIEDAD** son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Revista. Se permite, previa autorización, la reproducción de los ensayos y de las ilustraciones, a condición de que se mencione la fuente y se haga llegar una copia a la redacción.

NUEVA SOCIEDAD – ISSN 0251-3552

Oficinas: Defensa 1111, 1º A, C1065AAU Buenos Aires, Argentina.

Tel/Fax: (54-11) 4361-4108/4871

Correo electrónico: <info@nuso.org>

<distribucion@nuso.org> (distribución y ventas)

<www.nuso.org>

El portal **NUEVA SOCIEDAD** es una plataforma de reflexión sobre América Latina.
Articula un debate pluralista y democrático sobre política y políticas latinoamericanas.



**NUEVA
SOCIEDAD**

es un proyecto de la

**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

■ **ÍNDICE**

COYUNTURA

3816	Pablo Rossell Arce. 2011: ¿el parteaguas del evismo? Bolivia después del conflicto del Tipnis	4
3817	Alberto Koschützke. Chile frente a sí mismo. Los límites del fundamentalismo de mercado y las protestas estudiantiles	17

TRIBUNA GLOBAL

3818	René Ramírez Gallegos. Izquierda y «buen capitalismo». Un aporte crítico desde América Latina	32
------	---	----

TEMA CENTRAL

3819	Pierre Salama. Preguntas y respuestas sobre la crisis mundial	50
3820	Jorge Eduardo Navarrete. La crisis global: las brechas se reducen. El desafío de los países emergentes	65
3821	Alma Espino. La dimensión de género de la crisis. ¿Existe una agenda feminista?	87
3822	Oscar Ugarteche. México: tan lejos de Dios, tan cerca de la crisis. Mecanismos de contagio económico en América del Norte	99
3823	Martín Schorr. Argentina: ¿nuevo modelo o «viento de cola»? Una caracterización en clave comparativa	114
3824	Eduardo Gudynas. Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano	128
3825	Javier Rodríguez Pardo. Testimonio: nuevos colonialismos en América del Sur y África. Radiografía de la megaminería	147
3826	Sandro Mezzadra. Capitalismo, migraciones y luchas sociales. La mirada de la autonomía	159

ENSAYO

3827	Yotzin Botello. México: el país de los muertos sin nombre	179
------	--	-----

SUMMARIES

■ Segunda página

La crisis se resiste a abandonar la escena. Mientras los políticos europeos se reúnen sin exhibir resultados, los mandatarios latinoamericanos parecen regocijarse de que esta vez se haya «vuelto la tortilla» y sean las naciones ricas las que ocupan un terreno pantanoso –tradicionalmente transitado por los países «periféricos»–, pero a la vez comienzan a tomar precauciones por si los nubarrones finalmente llegan a estas costas. Entre tanto, gobernantes, cientistas sociales y simples ciudadanos discuten las causas de las convulsiones que ponen en cuestión la propia supervivencia de la eurozona. ¿Se trata de una crisis causada por una excesiva desregulación financiera? ¿Es peor esta crisis que la de 1929? Las turbulencias económicas y financieras ¿amenazan el capitalismo tal como lo conocemos? ¿Se trata, en resumen, de una crisis del «mal capitalismo»?

En este número de NUEVA SOCIEDAD nos proponemos aportar al debate económico echando luz sobre los diversos pliegues de los cambios que se están operando en el mundo actual. Esta vez, las diferentes secciones de la revista aportan al Tema Central: «Los laberintos del capitalismo». Sin duda, el artículo de coyuntura de Pablo Rossell Arce sobre las tensiones del modelo boliviano (entre las ilusiones desarrollistas y un hasta ahora impreciso «buen vivir» posdesarrollista) y el de Alberto Koschützke sobre las protestas estudiantiles y los límites del fundamentalismo de mercado en Chile dan cuenta de los problemas que enfrenta América Latina en el contexto actual, y de la necesidad de avanzar en definiciones desde las izquierdas.

En la Tribuna Global, René Ramírez Gallegos polemiza sobre un tema neurálgico para el progresismo, en diálogo crítico con el texto de Will Hutton publicado en el número anterior de NUEVA SOCIEDAD: ¿deben luchar las izquierdas por el «buen capitalismo»? Para desarrollar su argumento, se enfoca en la iniciativa ecuatoriana Yasuní-ITT y la considera un ejemplo de cómo conservar el necesario pragmatismo de la gestión sin perder de vista la necesidad de avanzar en dirección a la «utopía» poscapitalista.

Ya en el Tema Central, Pierre Salama se enfoca en los efectos de la descontrolada financierización sobre la economía real y en las formas de expansión de la crisis en el

marco de la creciente complejización de los instrumentos financieros. El artículo de Jorge Eduardo Navarrete, a su turno, permite analizar los vínculos entre economías «avanzadas» y «emergentes» en la actual coyuntura crítica y deja ver cómo esta ha permitido a los países del Sur cerrar algunas brechas con las naciones del Norte, especialmente las vinculadas al PIB.

Dos artículos se concentran en casos nacionales: Martín Schorr evalúa el desempeño del modelo implementado por Argentina desde el estallido de la convertibilidad en 2001, ponderando sus propios méritos en términos de crecimiento económico –y de reversión parcial de la desindustrialización– y las externalidades favorables alentadas por el *boom* de los precios internacionales de las materias primas. Todo ello, en clave comparativa con Brasil, la principal economía de la región. Por su parte, Oscar Ugarteche analiza las correas de transmisión de la crisis estadounidense hacia su vecino México, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Un tema nuclear del capitalismo del siglo *xxi* es, sin dudas, el auge del extractivismo, al calor de la demanda china. En su artículo, Eduardo Gudynas desentraña las diferencias entre el extractivismo clásico y el «neextractivismo progresista», en el que los Estados juegan un rol de mayor relevancia, aunque sin romper con los mecanismos de inserción dependiente en el mercado mundial. La acción compensadora del Estado termina por cancelar la discusión sobre vías alternativas para lograr mayores niveles de bienestar, pero no alcanza para impedir la emergencia de numerosos conflictos socioambientales. Por su parte, desde el activismo social, Javier Rodríguez Pardo traza una radiografía de la megaminería y describe cómo esta ha «colonizado» amplios territorios de África y América del Sur aprovechando legislaciones en extremo benevolentes, que a menudo son justificadas con el argumento de la necesidad de crear puestos de trabajo.

A su vez, la crisis es inseparable de las migraciones; es el tema que aborda Sandro Mezzadra, desde una mirada centrada en la autonomía, en diálogo polémico con otras escuelas de pensamiento y utilizando el estudio de las migraciones como clave de lectura del capitalismo contemporáneo. Desde otro ángulo, Alma Espino enciende una luz de alerta sobre la necesidad de incorporar una perspectiva feminista al momento de analizar la crisis y las respuestas de los gobiernos progresistas en la región, que aún mantienen visiones que dejan fuera los enfoques de género y las reivindicaciones específicas de las mujeres. Al mismo tiempo, el artículo pone en evidencia que, desde el propio feminismo, es necesario un esfuerzo mayor por estudiar más en profundidad la relación entre la economía y las diversas fuentes de desigualdad.

Finalmente, el ensayo de Yotzin Botello ilumina una de las experiencias más trágicas en términos de la articulación entre criminalidad y economía: el descontrol creciente en el que operan las mafias en México, a pesar de las numerosas detenciones producidas en el marco de la publicitada «guerra contra el narcotráfico». Un negocio que sin duda deja ver la combinación del drama humano, las grietas en los sistemas financieros que permiten el lavado del narcodínero y la corrupción, y la impunidad extendida hasta la médula en varios Estados de la región.

2011: ¿el parteaguas del evismo?

Bolivia después del conflicto del Tipnis

PABLO ROSSELL ARCE

Evo Morales protagonizó un momento histórico cuando asumió la Presidencia de Bolivia, empujado por una masa de actores de origen indígena-campesino que nunca antes habían logrado tal nivel de acceso a los espacios de poder estatal. Su primera gestión de gobierno (2006-2009) estuvo marcada por una serie de hitos que consolidaron su liderazgo, en el ámbito de un programa nacional-popular con el que enfrentó con éxito a la oposición de derecha. Su segunda gestión, con un liderazgo ya sólido, está marcada por la sucesión de luchas de poder entre quienes integran su base social. El reciente conflicto por el Tipnis se enmarca en la tónica de estas disputas internas.

Evo Morales irrumpió en la historia de Bolivia como la encarnación de las aspiraciones de las grandes mayorías populares, y marcó un momento histórico por cuanto sintetiza un programa de país que recoge las aspiraciones de reconocimiento de ciudadanía de los pueblos indígenas. Pero esto no debe ocultar que la potencia de Morales proviene de la aglutinación de un variopinto abanico de fuerzas sociales, conformado

por coccaleros, campesinos, comerciantes informales, mineros, comunidades indígenas y también profesionales de las clases medias. Hablamos de una multiplicidad de grupos sociales, en su mayoría marginados por el Estado, con el que se relacionaron para arrancarle concesiones y, por ende, frente al cual nunca ejercieron una ciudadanía plena; se trata de amplios segmentos sociales que tradicionalmente vivieron de espaldas al

Pablo Rossell Arce: economista con estudios de maestría en Políticas Públicas y Desarrollo. En los últimos años ha sido consultor de varios organismos internacionales y ha trabajado como asesor en diversas entidades del gobierno de Bolivia.

Palabras claves: modelo de desarrollo, conflicto social, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis), Evo Morales, Bolivia.

Estado y construyendo organización social en lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) denomina los «huecos» de ese Estado¹, es decir, en una ambivalente dinámica de legalidad/ilegalidad (o informalidad).

Pero tan diverso como es el abanico de fuerzas sociales que llevó a Morales a la Presidencia es el abanico de aspiraciones y demandas que está detrás. El común denominador de estas corrientes sociales es su pretensión de superar su situación de sujetos subordinados, en un entorno histórico fuertemente marcado por un manejo del poder de tipo señorial. Por otro lado, mientras que los valores del evismo² –nacionalismo económico, soberanía y ciudadanía para la población de origen indígena– se han legitimado frente a los paradigmas señoriales y neoliberales, se multiplican demandas particularistas de los diversos grupos de su propia base social. El reciente conflicto por el proyecto de construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis) es, probablemente, un hecho emblemático en ese sentido.

El Tipnis es un área protegida que fue declarada Parque Nacional en 1965 y se constituyó en Territorio Indígena a principios de la década de 1990, como uno de los más importantes logros de la «Marcha por el Territorio y la Dignidad»³, una larga caminata hacia La Paz encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente

Boliviano (Cidob). Actualmente, este territorio de una superficie superior a los 12.000 km² está habitado por más de 60 comunidades indígenas, cuya economía es esencialmente de pesca y recolección, aunque varias de ellas se dedican hoy a la agricultura y la venta de madera e incluso participan de ciertos circuitos de turismo ecológico.

Por otro lado, Bolivia exhibe importantes déficits de infraestructura en comparación con sus vecinos latinoamericanos; en la actualidad, las dos capitales de departamento del norte amazónico del país (Trinidad y Cobjija) carecen de vinculación caminera adecuada con el resto del país⁴. En ese sentido, la vertebración interna (integración física del país) ha sido una de las más importantes prioridades para Morales, quien ha retomado un programa vigente desde la Revolución Nacional de 1952.

Así, en 2008 el gobierno inició el proceso para la construcción de una carretera entre San Ignacio de Moxos (departamento de Beni) y Villa Tunari

1. PNUD: *El estado del Estado en Bolivia. Informe nacional sobre desarrollo humano*, PNUD, La Paz, 2007.

2. Ver Álvaro García Linera: «El evismo: lo nacional-popular en acción» en *OSAL. Observatorio Social de América Latina* año VI N^o 19, 7/2006, pp. 25-32.

3. Ver Silvia Molina y Miguel Lora: «Costos sociales y ambientales de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos», s./f., <www.isiborosecure.com/tipnisdocumolinalora.htm>.

4. V. mapa interactivo de la Red Vial Fundamental en *Administradora Boliviana de Carreteras*, <www.abc.gob.bo/Mapa-interactivo>.

(departamento de Cochabamba), obra que estaba proyectada desde años atrás con el objetivo de unir las ciudades de Trinidad y Cochabamba. El proyectado tramo II de la ruta atravesaba el Tipnis, motivo por el cual los indígenas de las comunidades del parque, encabezados por la Cidob, se opusieron a la iniciativa y marcharon durante más de 60 días con amplio apoyo de sectores urbanos de clase media en el ámbito nacional. Esto culminó en una complicada y tensa negociación en la ciudad de La Paz, que dio paso a la promulgación de una «Ley Corta»⁵ que declara el Tipnis como territorio intangible. Hasta el momento, el caso del Tipnis es, de lejos, el más intenso conflicto dentro de la propia base social que ha encarado el gobierno.

Este artículo ensaya algunas interpretaciones del conflicto, situándolo en la perspectiva de la trayectoria del gobierno de Morales a lo largo de sus dos mandatos presidenciales: el primero, comprendido entre 2006 y 2009, y el segundo, iniciado en enero de 2010. El argumento que guía este texto sugiere que cada periodo presidencial está marcado por momentos políticos con características específicas, y que la consolidación de un cambio de grandes proporciones en la cultura política boliviana se ha producido mediante el tránsito de una situación en la que las disputas políticas enfrentaban al oficialismo con adversarios políticos que estaban fuera de la propuesta de cambio, a

una situación en la que las pugnas de poder ocurren entre los grupos que enarbolan la bandera del proceso de cambio.

■ **Evo Morales en la Presidencia: primer momento (2006-2009)**

En 2006, Morales llegó al gobierno de Bolivia como el primer presidente de origen indígena, portando un programa que bien podría ser caracterizado como «nacional-popular». «Nacional», en el sentido de que deconstruye valores referenciales de las capas oligárquicas para construir una nación más densa, y también en el sentido de que reafirma el principio de la soberanía nacional. «Popular», porque se basa en movimientos de masas que construyen su identidad frente a las elites dominantes y al sistema tradicional de dominación⁶.

Hay que destacar que el primer mandato de Morales se vio favorecido por un contexto internacional inusualmente propicio para los países productores de materias primas y recursos energéticos: entre 2003 y 2008, los precios de las exportaciones de Bolivia se incrementaron en más de 200%

5. *El Deber*, 25/10/2011.

6. Hugo Cancino: «La reemergencia del discurso nacional-popular en la nueva izquierda latinoamericana. Para una discusión de los movimientos nacional-populares» en *Diálogos Latinoamericanos* N° 13, 6/2008.

en el caso de los minerales y hasta en 65% en el caso del gas natural⁷; el crecimiento promedio de América Latina en esos años se situó por encima de 3%. En el mismo periodo, Bolivia creció más de 4% anual y desde 2006 logró superávits externos y fiscales inéditos.

Durante su primer mandato, Morales logró algunos avances que marcaron una rotunda diferencia frente a sus antecesores:

- la nacionalización de las actividades estratégicas⁸, que permitió captar el grueso de la renta gasífera del país y generar excedentes en minería y servicios;
- la redacción y promulgación de una nueva Constitución Política del Estado, que institucionaliza el ejercicio de ciudadanía de los sectores populares de origen indígena-campesino y establece las bases de un nuevo pacto social.

En el ámbito del desarrollo económico, las nacionalizaciones de las actividades y empresas estratégicas facilitaron un flujo de caja incrementado para el Tesoro de la Nación, lo que hizo posible la aplicación de políticas sociales redistributivas basadas en transferencias directas de renta, como el bono Juana Azurduy para embarazadas y madres⁹, el bono Juancito Pinto para los niños escolarizados¹⁰ y la Renta Dignidad para los mayores de 60 años¹¹.

En el ámbito de las relaciones internacionales, el acontecimiento más importante del periodo es, sin duda alguna, la expulsión del país del embajador estadounidense en septiembre de 2008, acusado por el gobierno de Morales de promover y apoyar acciones de desestabilización.

En el ámbito político, la primera gestión de Morales quedó marcada por el intenso grado de polarización entre las elites afincadas en las regiones del este y sur del país: por un lado, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y circunstancialmente Chuquisaca –la llamada «media luna», cuya vocación productiva gira alrededor de los hidrocarburos, la ganadería y la agricultura de exportación–; y por el otro, los movimientos sociales populares (indígenas, cocaleros, campesinos y urbano-populares), cuya base social mejor organizada está en el occidente del país¹². En este primer momento político de la gestión de Morales, los

7. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2009*, Santiago de Chile, Cepal, 2010.

8. P. Rossell Arce: «¿Cómo sorteó Bolivia la crisis económica? Retos» en *Ola Financiera* N° 5, 1-4/2010, pp. 193-202.

9. Para recibir el bono, las beneficiarias deben cumplir con una serie de controles pre- y postnatales. V. <www.presidencia.gob.bo/documentos/bono%20juana%20azurduy.pdf>.

10. V. <www.presidencia.gob.bo/bono.php>.

11. V. <www.presidencia.gob.bo/documentos/renta%20dignidad.pdf>.

12. V. Fernando Mayorga: «Conflictos y acuerdos políticos 2006-2008» en Rolando Costa (ed.): *Del conflicto al diálogo. Una mirada hacia el futuro*, FES-Ildis / FBDM, La Paz, 2009.

indígenas de tierras bajas aglutinados en torno de la Cidob se constituyeron en parte de las fuerzas de apoyo del presidente y se articularon con indígenas y campesinos de las tierras altas bajo el mando del Pacto de Unidad.

Como efecto de la polarización política, los conflictos se manifestaron con diferentes grados de intensidad y violencia en los territorios de la «media luna» y fueron resolviéndose, en lo coyuntural, mediante el uso de la fuerza pública –en su momento requirieron la intervención incluso de las Fuerzas Armadas– y, en lo estructural, mediante una larga sucesión de actos electorales que fueron consolidando paulatinamente el liderazgo de Evo Morales:

- la elección de los representantes a la Asamblea Constituyente, que favoreció al oficialismo con 51% de los votos, en julio de 2006;
- el referéndum revocatorio de julio de 2008, en el cual Morales obtuvo 67% de los votos en favor de su continuidad;
- el referéndum para la aprobación de la nueva Constitución del Estado en enero de 2009, en el cual se aprobó el texto constitucional con 62% de los votos;
- las elecciones generales de diciembre de 2009, en las que Morales obtuvo un segundo mandato presidencial con un histórico 64% de los votos.

Los hitos de la primera gestión de Evo Morales se enmarcan en una

fuerte corriente de nacionalismo en lo económico y en el plano de las relaciones internacionales –ámbito en el cual, por otra parte, se mantiene hasta hoy un tinte latinoamericanista–. Por otro lado, se produjo un reordenamiento del pacto social mediante la nueva Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, y las mencionadas políticas redistributivas. Esa corriente nacionalista fue producto del rechazo popular a los resultados de dos décadas de neoliberalismo ortodoxo. En esta línea, se puede comprender la mencionada nacionalización de las actividades estratégicas (hidrocarburos, parte de la minería, electricidad, telecomunicaciones) como la construcción de un relato que expresa los antagonismos actuales como una querrela entre la nación y la antinación o, para el caso, el pueblo contra la oligarquía y las transnacionales.

Al mismo tiempo, el gobierno de Morales promovió activamente una serie de pactos internacionales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y, más recientemente, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), constituidos con la pretensión de superar la hegemonía estadounidense en la región.

La redacción y la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009 lograron, entre otros efectos,

mantener movilizadas a las bases del evismo; la defensa de la nueva Constitución se erigió en una bandera de lucha que fijó posiciones y consolidó el discurso oficialista, arrinconando y estigmatizando la retórica de la oposición de derecha como un discurso antipatriótico. Por su parte, la política de bonos acercó al Estado a la población bajo la forma de ayuda directa y universal, una modalidad que las familias pobres desconocían en el pasado; así se generó una identificación unívoca entre el beneficio recibido en efectivo y el gestor de tal beneficio: Evo Morales.

Sin embargo, el hito más valorado y más significativo para las grandes masas de la población de origen indígena-campesino es el cambio en sus posibilidades reales y potenciales de acceso al poder, no solo por la vía de la participación en instancias gubernamentales de toma de decisiones, sino también a través de la dirigencia de las organizaciones de base, que hoy gozan de una influencia significativa en la definición de algunos aspectos de las políticas públicas. Para estos sectores, Morales personifica la ruptura de una especie de *apartheid* nunca formalizado, que excluía a los bolivianos de origen indígena-campesino de los espacios de poder y que estuvo vigente en Bolivia hasta 2006. Este liderazgo tiene la capacidad de solidificar una adhesión política/emotiva de largo plazo que se asemeja –aunque parece más profunda– a la

que logró el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) entre el campesinado, luego de la reforma agraria de 1953.

■ El segundo momento de Morales en la Presidencia (2009 hasta el presente)

Actualmente, Evo Morales se encuentra transitando la mitad de su segundo mandato presidencial. Este momento está caracterizado por una pérdida de brillo en la imagen del gobierno, ocasionada por el natural desgaste que acarrea el tiempo y por la forma en que el conflicto político se ha trasladado desde la lucha contra un adversario externo al evismo –«la antinación», «la oligarquía», «los neoliberales»– a la lucha entre las distintas corrientes particulares que cada movimiento social encarna.

Morales asumió este mandato en un entorno inmejorable: ganó con total transparencia las elecciones de diciembre de 2009 y logró un porcentaje de votación que haría palidecer de envidia a cualquier político; las medidas de nacionalización de las actividades estratégicas mostraban su éxito al permitir la captura de los excedentes que los altos precios de los productos de exportación generaban, y la oposición política de derecha se sumió en un descalabro del que no se recupera hasta hoy. En ese entorno, las prioridades de Morales en materia de gestión estatal se dirigieron

hacia el ámbito económico, y el presidente intensificó los esfuerzos del Estado para ejecutar un ambicioso programa de infraestructura. Pero, al mismo tiempo, en este periodo se empezaron a multiplicar las pugnas políticas internas entre las diversas corrientes de la base social del evismo¹³. Por ejemplo, información de Fundación UNIR Bolivia da cuenta de que en la primera mitad de 2010 los conflictos de carácter político-ideológico estuvieron relacionados con pugnas en torno de las listas de candidatos para las elecciones locales dentro del propio oficialismo; en ese mismo periodo, surgieron conflictos de carácter económico a partir de disputas por el control de los recursos naturales en sectores y regiones afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y, para el año 2011, se puede observar que las organizaciones que protagonizaron la mayor cantidad de conflictos son las cooperativas mineras, los sindicatos campesinos y de transportistas, las juntas de vecinos, las organizaciones indígenas etc.; es decir, sectores afines al proyecto político de Evo Morales.

Una constante a lo largo de las últimas décadas de la historia del país es el conflicto salarial, que protagonizan ritualmente los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) durante los primeros meses de cada año. El gobierno de Morales no ha sido inmune a este tipo de conflictos, a pesar de haber intentado estrechar alianzas

con una COB que expresó al principio un apoyo distante y condicionado a Morales y que, en el último año, se ha decantado por el enfrentamiento directo con el gobierno. Un elemento característico de los conflictos internos del evismo es que, cuando logran sacudir la agenda nacional, exigen la intervención del presidente en persona como juez de última instancia¹⁴, en un intento por esquivar la función del Parlamento y de las autoridades sectoriales.

Las presiones por una mayor eficiencia en la gestión económica llevaron al gobierno de Morales a eliminar, en diciembre de 2010, la subvención a los precios internos de los carburantes, vigente desde 1997¹⁵. El impacto de esta medida, que los sectores populares bautizaron como «gasolina-zo», generó masivas demostraciones

13. Esta tendencia a los enfrentamientos internos estaba presente antes de 2010, con episodios graves: un bloqueo de caminos en la zona de las yungas de La Paz, electoralmente comprometida con Evo Morales, se saldó con dos manifestantes muertos en 2009. «Caranavi consigue una planta de cítricos y Alto Beni tendrá la suya» en *La Razón*, 12/5/2009.

14. Las demandas sociales se dirigieron masivamente hacia el nivel central del Estado: en 2011, 46% de los conflictos. Fundación UNIR Bolivia: *Informe sobre la conflictividad en Bolivia. Enero a junio de 2011*, UNIR, La Paz, 2011.

15. Se estima que la subvención a los precios de los carburantes estuvo por encima de los us\$ 300 millones; para 2011 se situó en us\$ 633 millones y se espera que en 2012 llegue a los us\$ 755 millones. V. Ministerio de Hidrocarburos y Energía: *Boletín Energético* año 2 N° 61, 9-15/11/2011, <www.hidrocarburos.gob.bo/sitio/images/stories/Boletin/boletin%2061.pdf>.

de descontento social en todo el país, pero particularmente en las ciudades de La Paz y El Alto, dos baluartes de la base social del oficialismo. Luego de días de intentos infructuosos por calmar la convulsión con anuncios de medidas paliativas, el gobierno finalmente decidió dar marcha atrás y restaurar la subvención el 31 de diciembre. No obstante, el conflicto por el gasolinazo modificó las expectativas de las movilizaciones sociales que se dieron posteriormente, dado que fue la primera vez que el gobierno de Morales debió revertir una de sus decisiones de manera absoluta y contundente.

En ese contexto explota el conflicto del Tipnis, el más severo que Morales haya enfrentado en relación con su base social. Si bien la marcha de los indígenas del Tipnis cuestionaba el trazado de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos que atravesaba su hábitat, no se puede entender ese episodio sino en el marco de un conflicto que los indígenas de las tierras bajas mantienen con el gobierno desde, por lo menos, un año atrás. En efecto, una de las raíces del enfrentamiento por el Tipnis en 2011 fue la inconclusa resolución de su antecedente más inmediato: la marcha de los indígenas de tierras bajas en 2010¹⁶, cuyas demandas se centraban en el logro de la asignación de una cuota significativamente más alta de escaños para parlamentarios indígenas que la que finalmente fue establecida en la Ley Electoral. Ambas marchas, la de 2010

y la de 2011, fueron encabezadas por la Cidob. La marcha de 2010 no logró su objetivo principal y pudo ser desarticulada por el gobierno en la ciudad de Santa Cruz, a más de 700 km de La Paz, lo que implicó una pérdida de poder por parte de la confederación indígena.

Este 2011, la propuesta de construcción del tramo San Ignacio de Moxos-Villa Tunari encerraba una serie de elementos que tenían la cualidad de devolverle a la Cidob la iniciativa política: el trazo proponía atravesar un área protegida; los afectados eran indígenas cuyos derechos colectivos han sido constitucionalizados justamente bajo este gobierno, y el principal impulsor del proyecto –Evo Morales– se mostraba en los foros internacionales como un firme defensor de los derechos de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, el contenido programático central en el conflicto del Tipnis está referido a la orientación del modelo de desarrollo. La propuesta de la carretera se constituye en un hito material y simbólico de la preeminencia de un modelo de desarrollo convencional (integración física del país) y conlleva los riesgos de la expansión de la frontera agrícola en detrimento de la preservación de zonas boscosas vírgenes.

16. Lorenzo Solíz y Claudia Vedia: «Bolivia, nueva marcha indígena» en *Cidob*, <www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=446:bolivia-nueva-marcha-indigena&catid=82:noticias&Itemid=2>, 1/7/2010.

El avance de la marcha de los indígenas del Tipnis logró –por supuesto– la adhesión de las figuras políticas de la oposición, que nunca pudieron superar el estigma del oportunismo, pero también la de amplios segmentos de clase media urbana. El recibimiento multitudinario de la marcha en la ciudad de La Paz es elocuente al respecto. Las clases medias urbanas, cuyas prácticas cotidianas de consumo excluyen por completo cualquier consideración ambientalista, expresaron sin embargo su apoyo a los dirigentes de la Cidob con un discurso radical de defensa de la Madre Tierra.

No quedan muy claros los motivos por los cuales esta adhesión se dio de manera tan intensa; se puede especular, por ejemplo, que ya se nota cierto rechazo a las actitudes del gobierno en relación con quienes intentan desde el oficialismo expresar públicamente sus desacuerdos y juzgar acerca del rumbo que toma el proceso. La respuesta que ha dado el gobierno a este tipo de expresiones ha sido contundente y se ha centrado en la descalificación moral e ideológica de los descontentos. También es posible ver en la actitud de las clases medias urbanas un rechazo al uso de instrumentos legales para suspender autoridades regionales opositoras que fueron en su momento elegidas por voto popular, en un intento de cambiar los tableros regionales de poder¹⁷.

Pero, sin duda, el acontecimiento que concitó el rechazo generalizado de la

población fue la violenta intervención policial que sufrieron los marchistas el día 25 de septiembre, en un intento del gobierno de resolver el problema por la vía de la fuerza¹⁸. La intervención fue televisada y transmitida al país de inmediato. La reacción de la opinión pública fue de tal intensidad que el gobierno tuvo que resignarse a que horas más tarde los marchistas retomaran su medida vitoreados en cada localidad por donde pasaban. Este acontecimiento dañó la imagen del gobierno y activó el apoyo de una gran cantidad de gente que en otras circunstancias no habría salido a las calles.

En relación con el modelo de desarrollo, el conflicto por el Tipnis ha reflatado viejas tensiones entre las organizaciones de indígenas y las de campesinos que conformaron el Pacto de Unidad como plataforma de apoyo a la realización de la Asamblea Constituyente, sobre la base de la demanda de tierra y territorio, entre varias otras¹⁹. En este

17. Desde 2010 fueron suspendidos dos alcaldes de ciudades capitales, y actualmente los departamentos de Tarija y Beni tienen gobernadores interinos porque también se suspendió a los titulares a través de medidas jurídicas.

18. «La policía interviene la marcha por el Tipnis» en *La Razón*, 26/9/2011.

19. En este artículo, solo aludimos a algunos aspectos de las complejidades de las a menudo inestables fronteras identitarias entre campesinos e indígenas. V. la Declaración del III Encuentro de las Organizaciones Indígenas, Originarias y Campesinas, La Paz, 20 de junio de 2006, disponible en <www.constituyentesoberana.org/info/?q=originarios-pronunciamiento-encuentro>.

punto, es importante destacar que ambos conceptos marcan significativas diferencias en los horizontes de progreso social planteados por cada tipo de sujeto. Para las organizaciones que se autorreconocen como esencialmente *indígenas*, el territorio es lo central, puesto que se constituye en la base de una vida económica fundada en usos y costumbres ancestrales. Las organizaciones indígenas –especialmente las de tierras bajas– propugnan el acceso al territorio y la gestión de los recursos naturales bajo formas comunitarias. Para las organizaciones que se autorreconocen como esencialmente *campesinas*, en cambio, la demanda central es el acceso a la tierra cultivable y la gestión individual o, en el mejor de los casos, familiar, del recurso tierra²⁰.

En la disputa que así se plantea, se puede entrever el impulso de un sector –el campesino, compuesto mayoritariamente por población de ascendencia quechua y aymara–, cuya organización política y económica alrededor de los sindicatos agrarios persigue fines de expansión territorial y de acceso a la tierra –entendido como un recurso económico–, mientras que los indígenas del Oriente pregonan la preservación, no la expansión de su modo de vida. Los reclamos del sector campesino por la titulación individual de las tierras –en detrimento de la titulación colectiva– dan indicios de la formación de un campesinado «protocapitalista», que en el largo plazo se vería beneficiado

por el usufructo de la tierra en tanto capital productivo gestionado de manera privada²¹.

En el campo de la compleja disputa política, la realización de la marcha indígena coincidió con el primer proceso electoral para elegir a los miembros del órgano judicial, en un hecho desconocido hasta entonces en el país y en América Latina. Las elecciones se dieron días antes de la llegada de la marcha a La Paz. Durante las semanas previas a la elección, toda la gama de partidos de la oposición hizo campaña para convertir las elecciones judiciales en un plebiscito reprobatorio de la gestión de Evo Morales, en un intento por llevar a su cauce la fuerza política del descontento de las clases medias urbanas. Y en efecto, en el conteo oficial, los votos válidos sumaron alrededor de 42%, un porcentaje similar al de los votos nulos²². No obstante, es dudoso que estas cifras puedan interpretarse como un indicador adecuado del respaldo popular a la figura de Morales;

20. «Hay disputas en el oficialismo por nuevo régimen de tierras» en *Página Siete*, 4/8/2011.

21. Los cocaleros son un ejemplo paradigmático de esta identidad campesina mayoritaria en regiones como los valles y el trópico de Cochabamba. «La futura ley de tierras divide más a indígenas y campesinos» en *Página Siete*, 24/10/2011.

22. «TSE: Participación ciudadana fue del 79,7% para elegir a 56 magistrados en comicios de octubre» en *Cambio. Periódico del Estado Plurinacional Boliviano*, 11/11/2011, disponible en <www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-11-11&idn=58221>.

si bien este ha caído en las encuestas, sigue siendo sin duda el líder político con mayor capacidad de arrastre en el ámbito nacional.

Si el conflicto del Tipnis ha generado algún debate sobre los horizontes deseables de sociedad –uno de estilo «desarrollista» y otro más apegado al respeto por la naturaleza–, tal debate parece estar de alguna manera ya zanjado en la esfera dirigenal del gobierno de Morales. El programa que el presidente tenía bajo el brazo al jurar su segundo mandato indica explícitamente una ruta desarrollista convencional para la Bolivia de los próximos años, y esto ha sido refrendado por las prioridades en la asignación de los recursos públicos.

En resumen: durante el segundo periodo de Evo Morales, la tónica del conflicto político está marcada por las pugnas de poder dentro de su base social. En ese contexto, el conflicto por el Tipnis cobra sentido como una lucha de poder y, de alguna manera, de cosmovisión entre los pueblos indígenas del Oriente, por un lado, y campesinos y colonizadores, por el otro²³.

■ Interpretaciones, presunciones y tendencias

Los movimientos recientes en la política boliviana son el reflejo de una tendencia que interpela el accionar de Evo Morales desde el interior del

evismo. El conflicto del Tipnis, que ha sido el de mayor trascendencia en este periodo, ha surgido desde las bases que erigieron el movimiento nacional-popular que llevó a Morales a la Presidencia, y desde un ámbito programático –la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza– que forma parte de los postulados constitucionales del gobierno actual.

En ese marco, pese a la importancia que los actos electorales han cobrado como termómetro de la vigencia del liderazgo de Morales, sería equivocado colegir que los resultados de la elección judicial son un indicador de aprobación o de desaprobación de la gestión presidencial. Igualmente incorrecto sería atribuir a la cifra del resultado electoral la cualidad de preservar un margen respetable de aceptación de Morales.

En primer lugar, el mandato del presidente no estuvo en juego durante el acto electoral. De haber sido así, lo más probable es que se hubieran activado las lealtades de largo plazo generadas por los logros de ciudadanía de las capas populares de origen campesino, que aún ven en Morales a

23. Diferenciamos la identidad campesina/colonizadora y la indígena a partir de las formas de organización sociopolítica de cada una: el campesinado se articula mediante formas modernizantes de organización (el sindicato agrario), mientras que los indígenas recurren a (y defienden) las formas ancestrales precolumbinas.

la persona que les dio la posibilidad real de acceder al poder y de aspirar a la ocupación de cualquier espacio de la vida social, económica y política de Bolivia. Por lo tanto, el voto nulo puede representar tanto a la derecha como a la izquierda opositoras, y también a los simpatizantes del gobierno que desean enviar al poder una señal en pro de una actitud más conciliadora.

Ahora bien, ¿qué tendencias se perciben una vez que los marchistas del Tipnis han regresado a sus lugares de origen? Una primera tendencia es que el carácter desarrollista de la gestión de Evo Morales se mantendrá e intensificará. Y esto es así no solo porque esa tendencia se plasmó claramente en la oferta electoral de su segundo mandato²⁴, sino también porque –aunque esto no siempre se ve con claridad– son los campesinos y colonizadores, con sus enormes capacidades de movilización y de organización, quienes están detrás de ese programa. En la reciente cumbre de diciembre de 2011, los empresarios privados se sumaron con entusiasmo al programa.

Una segunda tendencia es la profundización en la pérdida de iniciativa política de la oposición de derecha, al menos en los grandes temas de la agenda nacional. Estos grandes temas se presentan desde el interior del evismo, lo que deja un espacio marginal para que la oposición de derecha a lo sumo se adhiera reactivamente a las

demandas de las organizaciones sociales.

Asociada a lo anterior, se percibe en la población boliviana una tendencia a desacoplar las lealtades políticas nacionales y las lealtades locales. En lo nacional, el gobierno se hace cargo de los grandes lineamientos; en lo local y regional, se mantienen espacios para las otras tendencias políticas, en tanto tengan la sensibilidad de representar las voluntades colectivas territoriales. Así, es probable que en los próximos años el evismo se vea obligado a compartir el poder en los espacios regionales y municipales.

Una tercera tendencia está fundamentada en el debate que puede llegar a darse en la sociedad boliviana acerca de la pertinencia de profundizar la vía desarrollista de progreso social, en contraposición a una vía ideológicamente anclada en el discurso de la Pachamama (el «vivir bien»), que aún no muestra claridad programática. En ese sentido, es posible imaginar que los liderazgos indígenas de tierras bajas se animen a articular una corriente política explícitamente ambientalista.

Para Evo Morales, queda claro que la capacidad de mantenerse en el poder

24. MAS-IPSP: *Bolivia país líder. Programa de gobierno*, 2009, disponible en <<http://es.scribd.com/doc/19548042/Programa-de-Gobierno-MASIPSP>>.

se basa en tres pilares: primero, en la consolidación de las lealtades de las masas populares nacionales (con demandas de producción y desarrollo económico); segundo, en la capacidad de seguir actuando como mediador de última instancia en los conflictos internos del bloque oficialista; en tercer lugar, en la posibilidad de que la crisis financiera que azota el corazón del capitalismo mundial llegue a Sudamérica con el rezago suficiente como para pensar en un aterrizaje suave, que no ponga en riesgo el crecimiento y la bonanza de la economía boliviana en los próximos tres años.

pobreza en Bolivia ha ensanchado la clase media en el país, que en los últimos años creció en un millón de personas²⁵. En el futuro, esto implica el crecimiento de una masa de votantes cuyas aspiraciones estarán cada vez más marcadas por el acceso a bienes de consumo, por hábitos urbanos más alejados del disciplinamiento de las prácticas políticas sindicales, por identidades más individualizadas y menos corporativas, pero también por imaginarios de progreso social más alineados con la Bolivia industrial del programa de gobierno con el que Evo Morales alcanzó su segundo mandato. ☐

Si el liderazgo de Morales logra capear una catástrofe económica global, seguramente encontrará nuevos retos en la relación Estado-sociedad a raíz del éxito económico de su gestión. La lenta pero consistente reducción de la

25. Datos de *Cambio*, 8/11/2008 y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): «Los cambios detrás del cambio. Informe de Desarrollo Humano en Bolivia», PNUD, La Paz, 2010.



REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2011

Gijón

Nº 68-69

LA SOCIEDAD DIGITAL
Especial 25 años (1986-2011)

SUSCRIPCIONES

Suscripción personal: 30 euros

Suscripción bibliotecas e instituciones: 45 euros

Suscripción internacional: Europa - 60 euros (incluye gastos de envío)

América y otros países - 80 euros (incluye gastos de envío)

Ábaco es una publicación trimestral de CICEES, C/ La Muralla, 3 entlo. 33202 Gijón, España. Apartado de correos 202. Tel./Fax: (34 985) 31.9385. Correo electrónico: <revabaco@arrakis.es>, <revabaco@telecable.es>. Página web: <www.revista-abaco.com>.

Chile frente a sí mismo

*Los límites del fundamentalismo de mercado
y las protestas estudiantiles*

ALBERTO KOSCHÜTZKE

El ciclo de manifestaciones abierto en Chile con las revueltas estudiantiles contribuyó a alentar un debate sobre el modelo de país construido en la posdictadura, el cual, pese a los indudables avances en varios terrenos, ha consolidado una profunda mercantilización de la vida social. Más allá de las demandas en materia de educación, derechos indígenas, medio ambiente o género, el carácter masivo de las protestas desarrolladas durante 2011 ha puesto al país frente a sí mismo, en un momento en el que el actual presidente ha profundizado la retórica promercado y gobierna como si fuera el director de «Chile SA», y los ciudadanos, meros usuarios y consumidores.

La prensa internacional está sorprendida. La joven líder estudiantil chilena Camila Vallejo es nombrada personalidad del año por el periódico británico *The Guardian* con gran ventaja sobre la canciller alemana Angela Merkel. En 2011 se produjeron en Chile alrededor de 6.000 manifestaciones. América Latina –y el mundo– miran con atención... De forma sorpresiva, Chile se ha convertido en un dinámico laboratorio social,

luego de años en que se constituyera en un país presentado y autopresentado como modelo en términos de transición democrática, estabilidad política, reducción de la pobreza y políticas modernizadoras de mercado.

Ese carácter ejemplar quedó especialmente ratificado en febrero de 2010, cuando elecciones libres llevaron al poder, por primera vez en 50 años, a un presidente del bloque

Alberto Koschützke: politólogo alemán, ex-director de *Nueva Sociedad* (1982-1993).

Palabras claves: modelo educativo, Estado, mercado, movimientos sociales, Sebastián Piñera, Camila Vallejo, Chile.

Nota: traducción de Florencia Martin.

de derecha. La Concertación –alianza de centroizquierda conformada por partidos de orientación socialdemócrata¹ y por el Partido Demócrata Cristiano– había liderado la transición durante 20 años y cuatro periodos legislativos. Hoy, después de dos años de gobierno de la alianza de derecha integrada por los partidos Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI) –aún influido por seguidores de Augusto Pinochet– se confirma que el resultado electoral de 2010 significó una bisagra histórica. Con la elección como presidente del magnate Sebastián Piñera (según Forbes, el hombre más acaudalado del país), el periodo de transición democrática quedó sellado. Adicionalmente, teniendo en cuenta el resultado electoral y analizando la derrota de la Concertación, pueden encontrarse los puntos débiles de la fase de reconstrucción democrática y los desafíos de la nueva etapa de la historia chilena.

■ El balance de la Concertación: logros y desaciertos

La estabilidad y los logros de la democracia chilena están basados en dos pilares heredados de la dictadura militar: el modelo político, garantizado por la Constitución de 1980, y el modelo económico, promotor de un curso liberal que alentó las privatizaciones y redujo al mínimo la participación económica estatal. En esta nueva fase de modernización democrática, ambos

modelos deben ser revaluados (y están siendo revaluados en forma contundente, tal como lo demuestra el actual ciclo de protestas). Es necesario analizar si estos modelos responden de manera satisfactoria a las exigencias, expectativas y necesidades de la nueva etapa o si, por el contrario, han conducido a dejar como «agenda pendiente» demasiados problemas durante los primeros 21 años de democracia.

El enfoque central para poder entender la actual crisis parte de la constatación de que, desde 2010, Chile vive una situación de quiebre en la cual los mecanismos institucionales vigentes y los principales actores políticos no han sido capaces, o no han tenido la voluntad política, de responder a este nuevo desafío. Los logros de la Concertación –la actual oposición– fueron considerables. Su aporte a la restitución del sistema democrático, después de 17 años de desolación civilizatoria bajo la brutal dictadura pinochetista, no puede ser lo suficientementepreciado. No obstante, también es posible observar que la Concertación desarrolló e instauró la democracia como sistema de instituciones y de procesos, pero no como principio de organización social. De acuerdo con el credo neoliberal, se entendió la sociedad como una suma de usuarios y consumidores, y no de

1. El Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Socialdemócrata.

ciudadanos y ciudadanas; por eso los movimientos sociales de los últimos meses articulan precisamente los reclamos de los ciudadanos excluidos por el fundamentalismo de mercado y sus representantes.

Los 20 años de gobierno de la Concertación llevaron a un desgaste y a una pérdida de credibilidad que derivaron en el cambio de poder a comienzos de 2010, un cambio que desde el punto de vista de la alternancia político-democrática es muy loable. Los conflictos surgieron en particular en la interacción entre las políticas fiscal, económica y social. Un gobierno de izquierda es medido, posiblemente más que una conducción conservadora, por su intención de obrar en favor de la justicia social. Y cuando no lo hace, sobrevienen grandes decepciones y déficits de legitimidad. La gran distancia que separa a la sociedad civil de los partidos y la esfera política, y una sociedad que ya no está de acuerdo con un sistema que, si bien puede demostrar logros económicos, no es capaz de llevar a cabo reformas estructurales profundas, son otros de los aspectos que explican la actual situación de descontento. Parte importante de las elites políticas se adaptó a las estructuras de poder que aseguran su propio statu quo y no solo adoptó, sino que también defendió, la lógica de una economía de mercado en gran medida desregulada. Una vez que la unión que generaba la lucha por la democracia cedió,

la política de lo posible, de los pequeños pasos, de la adaptación a las condiciones dadas no bastó para garantizar el poder de la Concertación. Pero la derecha tampoco está encontrando el apoyo esperado.

La movilización estudiantil de Chile en 2011, tan comentada más allá de sus fronteras, se transformó así en el catalizador central de un proceso en el que el país, según palabras del Premio Nacional de Ciencias Sociales Manuel Antonio Garretón, se reinventa política, económica y socialmente.

■ La discusión educativa

El debate educativo comenzó a principios de 2011 de un modo que pasó casi inadvertido, con una manifestación de estudiantes en contra de los altos costos y los bajos niveles de formación en universidades públicas y privadas. Ocho meses y unas 210 manifestaciones después, la política educativa no solo ha pasado a ser el tema número uno de los medios, del ámbito político, la sociedad, los cafés, las familias, los *talk shows* y las encuestas de opinión, sino que además acapara los debates presupuestarios y las discusiones sobre la gobernabilidad, la calidad democrática del actual gobierno y el modelo de desarrollo político, económico y social. La discusión también ha tocado los principios fundamentales de la vida social cotidiana: pone sobre el tapete

la relación entre Estado y mercado, la educación organizada desde el ente público o desde el sector privado, el sistema de enseñanza como mercancía y el lucro que se persigue en el sector. Se trata de definir financiación y costos, ganancias y beneficios, calidad y acceso igualitario al sistema educativo. Pero detrás de estos aspectos se plantean sin duda varios interrogantes esenciales: ¿la educación es un derecho civil, una cuestión social, un deber estatal y un bien público, como sostienen los estudiantes chilenos remitiéndose a la Unesco, o es una cuestión privada y un bien de consumo que se produce en el mercado libre por iniciativa empresarial?

El presidente Piñera defendió en televisión el fin de lucro², incluso en el marco universitario, y reconoció: «Si al fin del día una institución, de cualquier nivel, entrega educación de calidad, respeta las leyes, si cumple con la obligación y hace con los recursos públicos lo que el Estado quiere que haga con ellos y le queda un excedente, esa es una justa compensación... No creo que tengamos que crear instituciones con fines de pérdidas»³.

Los gobiernos de la Concertación tuvieron una notable participación en la construcción del actual sistema universitario, que de hecho bate algunos récords: el arancel en las universidades chilenas llega a 41% del PIB per cápita; es el mayor porcentaje en

el ámbito mundial (en Canadá, por ejemplo, es de aproximadamente 10%). En los últimos 12 años, estos aranceles aumentaron 60% más que la inflación general. Chile invierte 0,5% de su PIB en las universidades, la proporción más baja del mundo. Si una familia que pertenece al 60% pobre de la población quiere enviar a un hijo a la universidad, debe hacer uso de más de 40% de sus ingresos⁴. A su vez, los créditos públicos y privados que se otorgan con aval del Estado para que los estudiantes puedan financiar su formación significan un gran perjuicio para el futuro de los jóvenes académicos: un estudiante de periodismo que, por ejemplo, se ha formado durante cinco años en la Universidad Católica de Santiago, deberá abonar durante 20 años un 28% de su eventual ingreso mensual (si es que consigue un puesto en los medios) para

2. En Chile está prohibido el fin de lucro en el ámbito de la educación superior; las universidades son entidades sin fines de lucro. Sin embargo, está permitido, por ejemplo, que los titulares de las universidades posean firmas inmobiliarias y hagan cuantiosas ganancias alquilando predios e instalaciones a sus propias instituciones, con lo cual, además, se justifican los descomunales aranceles de estudio.

3. José Miguel Wilson: «Piñera defiende que educación de calidad tenga 'justa compensación'» en *La Tercera*, 5/9/2011, disponible en <<http://diario.latercera.com/2011/09/05/01/contenido/pais/31-82608-9-pinera-defiende-que-educacion-de-calidad-tenga-justa-compensacion.shtml>>.

4. Christian Palma: «Patricio Meller: 'Los estudiantes equivocaron el enfoque al atacar el lucro'» en *La Tercera*, 13/9/2011, disponible en <<http://diario.latercera.com/2011/09/13/01/contenido/pais/31-83458-9-patricio-meller-los-estudiantes-equivocaron-el-enfoque-al-atacar-el-lucro.shtml>>.

saldar la deuda contraída. El sistema de becas y créditos está lejos de compensar las desventajas educativas a las que de por sí se ven sometidos los estratos más pobres de la sociedad. Aproximadamente 30% de las 122.000 becas estatales benefician a jóvenes que pertenecen al 30% de las familias más adineradas, es decir, a jóvenes que a su vez ya han podido cursar en las mejores escuelas (privadas) del país⁵. En otras palabras, los hijos de los más acaudalados (los que tienen un ingreso mensual superior a us\$ 2.000) obtienen el doble de becas que los de las familias más pobres (quienes ganan mensualmente unos us\$ 60).

Los detalles del debate sobre la financiación son extremadamente complejos. Desde que la reforma de la dictadura estableció en 1981 que el sistema educativo también se desarrollaría en el marco de la economía radical del libre mercado y desató el consiguiente auge de las universidades privadas, las instituciones de este tipo (y con el tiempo, también las de nivel secundario) fueron en aumento hasta llegar a representar hoy una mayoría frente a los establecimientos públicos. Las 25 universidades «tradicionales» de épocas previas a la dictadura (la mayor parte de ellas, públicas, a excepción de algunas como la Católica), que operaban sobre la base de aranceles definidos según el ingreso que tuviesen los padres de los estudiantes, son las que conforman hasta el día de hoy

el Consejo de Rectores. Sus estudiantes, nucleados a escala nacional en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), son los que organizan y representan; ellos «son» el movimiento estudiantil. Las universidades privadas tienen una participación únicamente periférica.

Si bien Camila Vallejo, miembro de las Juventudes Comunistas y presidenta en 2011 de la Confech, no logró contar con suficientes votos en diciembre pasado para conservar el cargo al frente de la confederación, fue coronada mundialmente como «rostro del movimiento estudiantil», dada la sed mediática de personalidades y estrellas. La prensa nacional e internacional ofreció su imagen al mercado y no dudó en incluir comentarios sexistas sobre su belleza. Las exigencias estudiantiles son claras y convincentes: que se ponga fin a los negocios con la educación; que se ofrezca educación gratuita e igualdad de oportunidades educativas para todos; que las posibilidades de formación ofrezcan un alto nivel y que se otorgue preeminencia al sistema de educación pública. Estos objetivos cuentan con el respaldo de más de 70% de la población, incluso después de ocho meses de movilizaciones permanentes. En decenas de manifestaciones, que en varias oportunidades convocaron a más de 100.000 personas en Santiago y a varios cientos de miles

5. Estudio de la Secretaría General de la Presidencia en *La Tercera*, 22/10/11.

en otras regiones universitarias del país, puede observarse a madres, padres, abuelos, maestros, profesores, rectores y representantes de organizaciones civiles. En resumen, no solo los estudiantes, sino gran parte de la población, se han alzado para avalar esta «causa noble, hermosa y legítima», según definió el presidente Piñera los objetivos del movimiento estudiantil en su discurso frente a la Asamblea de las Naciones Unidas⁶, ante la reacción incrédula, irónica o indignada de los chilenos.

■ Un uso ambivalente de la violencia

Al parecer, para el jefe de Estado no fue una contradicción dispersar –al día siguiente de sus declaraciones– a los representantes y defensores de esta causa noble y legítima haciendo uso de gases lacrimógenos y carros lanza agua. En las manifestaciones masivas suelen hacer aparición grupos minoritarios de violentos que se enfrentan con las fuerzas de seguridad y destrozan automóviles, semáforos y vidrieras. Mientras que en mayo, al iniciarse las protestas, la policía reportó 50 personas que causaban desmanes, en agosto los «encapuchados» ya eran 200, y en la actualidad la cifra de quienes parecen estar dispuestos a generar destrozos en forma regular ya asciende a 2.000. Con frecuencia estos grupos son mantenidos en jaque por los propios estudiantes movilizados.

La policía parece ser increíblemente incapaz de poner freno a este tipo de incidentes o de realizar detenciones con pruebas contundentes. En los últimos meses, de los 1.871 presuntos agresores detenidos (90% no eran estudiantes, sino en su mayoría jóvenes desclasados sin empleo), solo cinco fueron condenados. Por ello, la policía y sus arrestos por lo visto apresurados pasaron a estar en el centro de los debates. El propio ministro de Justicia llamó la atención a los jueces y amenazó sin reservas con evaluar, antes de aprobar ningún ascenso, de qué manera se había actuado en cumplimiento del deber en el marco de los procesos contra los encapuchados. Más aún, el gobierno impulsó un proyecto de ley en «resguardo del orden público», que debe ser entendido como un peligroso intento por criminalizar el movimiento de manifestaciones, no solo de los estudiantes. Haciendo uso de una serie de conceptos legales no muy definidos, la propuesta amenaza con imponer duras sanciones a quienes convoquen congregaciones en las que, por cualesquiera razones, se produzcan «desórdenes». El clima se tornó más áspero.

Pero los estudiantes mantienen despierto el interés de la opinión pública local y mundial mediante movilizaciones sumamente innovadoras y creativas: despliegan bandas de música, tambores y trompetas, entonan

6. Nueva York, 22 de septiembre de 2011.

cantos en coro, aparecen bailarines y grupos disfrazados o enmascarados, malabaristas y elementos de la cultura pop que siempre se destacan por su vigor y alegría, haciendo que las manifestaciones, sin perder de vista sus objetivos políticos, sean todo un acontecimiento. Quedó demostrado que no se trata de cabecillas encarnizados que tienen la mira puesta en la política, sino de gente joven que, segura de lo que quiere, exige con naturalidad el cumplimiento de ciertos derechos, entre los que destaca el otorgamiento de us\$ 1.800 millones, la suma que estiman necesaria para poner en práctica sus exigencias. Eso llevó a que el número 1.800 se convirtiera en una cifra emblemática de las protestas⁷.

Las huelgas de hambre de estudiantes secundarios, el campamento de protesta en las riberas del río Mapocho –que fue noticia tras haber sido dispersado por la policía para «proteger» a los escolares, porque varios de los «protegidos» debieron ser internados con heridas severas producidas por golpes– y la muerte de un alumno por el impacto de una bala disparada por el arma de un policía, son episodios que generan solidaridad y adhesión por parte de la población.

Chile, tras su denostación internacional durante la dictadura de Pinochet, se muestra muy susceptible a lo que ocurre con su imagen en el extranjero.

Hoy los líderes estudiantiles pueden impactar de un modo diestro y totalmente innovador en la esfera internacional y presentar sus argumentos ante la Unesco, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fundaciones y movimientos sociales; pueden proponer que la ONU medie en su disputa con el gobierno y lograr que la Comisión de Derechos Humanos de esa organización y visitantes internacionales destacados califiquen los operativos policiales de desmedidos y exagerados. Todo esto es algo que, además de otorgar al movimiento social una dimensión asombrosamente mundial, constituye un estorbo para un gobierno que lucha por mantener su imagen dentro y fuera del país.

Pese a su constante retórica, el gobierno no parece estar dispuesto a acceder a las exigencias de los estudiantes. Al observar el presupuesto de 2012, no se puede reconocer que la «causa noble y hermosa» de la educación vaya a obtener una financiación copiosa. La oposición de la Concertación, en temeroso y estrecho acuerdo con la conducción de la Confech

7. Si 12.000 parejas jóvenes se besan durante 1.800 segundos (30 minutos) delante del Palacio Presidencial y ante los ojos de la prensa y la televisión internacional («besatón») como forma para manifestarse a favor de la enseñanza pública y gratuita, tienen la presencia garantizada en los noticiosos durante la principal franja horaria de la BBC y la CNN. Lo mismo puede decirse de una corrida de postas de 1.800 horas (75 días) alrededor del Palacio de la Moneda.

—que se encontraba en la sala anexa de las comisiones parlamentarias de negociación— rechazó el presupuesto educativo para no caer en total des- crédito ante los estudiantes. Pero ese fue precisamente el punto que se le criticó en las elecciones universita- rias de fin de año a la conducción de la Confech: su disposición a la nego- ciación. Los nuevos directivos hacen hincapié en su independencia radical y hasta en su enemistad con todos los partidos políticos.

Empero, independientemente de cómo continúe el debate después del receso estival, lo cierto es que el movimien- to estudiantil ha introducido nuevas formas de experiencia y perspectivas sobre la sociedad y el Estado que ya no pueden ser ignoradas, y ese giro, a su vez, puede ser entendido como uno de los mayores cambios políti- cos y socioculturales que ha vivido Chile desde la recuperación de la de- mocracia. La cuestión educativa está anclada en la agenda como un desa- fío político central. Pero esa discusión tiene, además, consecuencias de gran alcance en otros campos problemá- ticos de la política que ahora son in- cluidos en los debates públicos, como por ejemplo la reforma fiscal, cambios constitucionales democratizadores, la secularización de la sociedad, los de- rechos de las mujeres y las llamadas minorías sexuales y, más en general, la relación Estado-mercado-sociedad. Adicionalmente, a través de la movi- lización de los estudiantes y de otros

grupos de protesta, el año 2011 abrió los ojos a los conflictos ecológicos, é- tnicos y sociales generales, y la exigen- cia de reformas políticas y económi- cas pasó a ser omnipresente.

■ Nueva Constitución, nueva política

El modelo político chileno está basa- do en la Constitución de Pinochet y su sistema binominal⁸, que, por un lado, garantiza estabilidad, si bien al punto de la inmovilidad, y, por el otro, esta- blece una administración en divisio- nes electorales que hace que en el sur del país, escasamente poblado, alrede- dor de un décimo de los votos neces- rios en la capital sean suficientes para obtener un escaño en el Parlamento.

8. En el sistema binominal, actualmente im- plementado en el nivel legislativo, cada divi- sión electoral elige dos candidatos. Las ban- cas son otorgadas en relación con la cantidad de votos obtenidos en una división electoral, lo que equivale a decir que los votos no son medidos por agrupación política a escala na- cional. Resultan elegidos los dos candidatos cuyos partidos o coaliciones logren la mayor cantidad de votos dentro de una división, y el resto de los candidatos queda descartado. Si una lista logra obtener el doble de votos que la segunda más votada, obtiene ambos escaños. De esta manera, el sistema electoral deriva en un sistema bipartidario o de dos bloques, impide que agrupaciones menores lleguen a estar representadas en el Parlamento y fuerza a los partidos a sellar grandes alianzas para poder resultar primeros (o segundos, pero sin un amplio margen de diferencia) en las urnas de cada división. En Chile, esta organización lleva a una distribución casi equitativa entre ambos bloques (la Concertación y la Alianza) tanto en la Cámara baja como en la alta. Fuera de Chile, el único país del mundo que aplica este sistema es Indonesia.

En este tipo de intento por lograr una representación justa de las regiones en la esfera nacional, el principio *one (wo)man one vote* queda prácticamente anulado. La Constitución pone límite a las reformas legislativas de relevancia por medio de refinadas normas de quórum y suele exigir una mayoría de 4/7 o superior, cosa que en los hechos solo se puede lograr mediante un acuerdo entre ambos bloques. Este procedimiento le otorga a la minoría una especie de derecho de veto.

Por otro lado, hacia fines de 2011 y tras casi siete años de debate, el Congreso chileno abolió tanto el deber de inscribirse en los registros electorales para poder votar como la obligación de votar una vez que el ciudadano se hubiera inscrito. Con la nueva disposición, la inscripción se produce en forma automática, con lo cual en los comicios municipales de octubre de 2012 se incorporarán 4,8 millones de nuevos votantes, el mayor incremento electoral desde que se implementó el sufragio femenino en 1949. (Como punto de comparación pueden tomarse las últimas elecciones, en las que participaron casi 7 millones de los aproximadamente 7,4 millones de ciudadanos inscritos). Además, se espera que en los próximos comicios presidenciales de 2013 también puedan participar los chilenos que viven en el extranjero, decisión que pondría fin al debate sostenido desde 1990. Estos cambios vuelven extremadamente difícil hacer un pronóstico electoral. Puede suponerse

que, ante la composición etaria de los 4,8 millones de nuevos potenciales votantes (80% está por debajo de los 35 años), la elección se incline más bien por las variantes políticas «jóvenes» y no tanto por los antiguos partidos de lento recambio. Según los cálculos, por el momento solo 7% de los estudiantes que se manifiestan tienen derecho a votar, y las posibilidades de que la alianza de gobierno obtenga el respaldo de la mayoría de los habilitados son más bien bajas.

Las reformas constitucionales menores efectuadas durante la Presidencia del socialista Ricardo Lagos apartaron a algunos de los senadores activos nombrados por Pinochet, que habían seguido representando la voluntad del anciano dictador durante los dos primeros periodos legislativos en épocas de democracia. Pero el reclamo de una Constitución nueva y democrática que no esté marcada por el espíritu de la dictadura se ha hecho cada vez más fuerte. Las exigencias apuntan a que se elimine o al menos se modifique el sistema binominal y a que se contemplen derechos más participativos como las consultas populares y los plebiscitos. Asimismo, se reclama que los gobernadores de cada región no sean nombrados por el presidente sino elegidos; una ley de partidos; el financiamiento público de las agrupaciones políticas; una mayor democracia intrapartidaria; una cuota quizás de 30% de participación femenina en los cargos; primarias para

la elección de los candidatos y la reducción del mandato de diputados y senadores. El catálogo de reformas sigue siendo amplio y demuestra cuánto se ha acumulado en estos últimos 21 años de democracia.

■ Igualdad y justicia social

El modelo económico de la dictadura chilena se basa en el pilar de la intangibilidad del patrimonio privado escotado por los principios sacros del mercado y la competencia, y fue incorporado, prácticamente sin cambio alguno, por la Concertación. Es casi el único país del continente en el que el fundamentalismo de mercado pudo imponerse de manera tan contundente.

En el marco de las libertades radicales de mercado (y de niveles de corrupción reconocidamente bajos), Chile atravesó un periodo de una política de apertura activa de los mercados (firmó 20 tratados de libre comercio con 57 países) y vivió un profundo cambio estructural. El PIB casi se triplicó entre 1990 y 2010; los niveles de pobreza arrastrados desde la dictadura, de 40%, se redujeron a 15% en 2009; y la pobreza absoluta pudo ser llevada a menos de 4%.⁹ En la actualidad, Chile es el segundo país con el mayor ingreso per cápita de América Latina (us\$ 16.000, levemente por debajo de Argentina), pero las desigualdades heredadas de la dictadura han permanecido prácticamente inalteradas.

Los considerables logros económicos y las exorbitantes tasas de crecimiento registradas llevaron a que el país fuese incorporado a la OCDE; pero, a su vez, ser miembro de la OCDE hace que los demás integrantes sean el punto de referencia a partir del cual se miden los logros, las fallas y los déficits chilenos.

Al menos durante sus primeros dos mandatos al frente del país, desde 1990 hasta 2000, los gobiernos de la Concertación no pudieron –ni quisieron– implementar más que unos pocos cambios cautos al modelo pinochetista, mientras gobernaban como una «democracia condicionada» bajo la amenaza de un eventual regreso de la dictadura. Dados la Constitución y el derecho electoral impuestos por la dictadura, no disponían de la mayoría de dos tercios necesaria para efectuar muchas reformas en el Senado y en la Cámara baja, lo cual los obligaba permanentemente a sellar compromisos con la oposición. Esa es la justificación esgrimida por los actuales partidos de oposición (no siempre ateniéndose a la verdad) frente a las críticas por las fallas o los desaciertos de su periodo gubernamental. Muchos de los caminos fallidos tomados –como, por ejemplo, en el sector educativo– se remontan a esa época y hacen que los cuestionamientos opositores al actual gobierno resulten poco creíbles.

9. Ministerio de Planificación: Encuesta Casen 2009, <www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen2009/RESULTADOS_CASEN_2009.pdf.

Tampoco existió una gran predisposición a hacer cambios en el modelo económico, debido a que quienes ocupaban cargos decisivos en el gobierno de centroizquierda también sucumbieron a los discretos encantos de las promesas de bienestar neoliberales, que no solo los beneficiaban a título personal, sino que también hacían aumentar los ingresos de las arcas públicas a través de las materias primas, en particular del cobre, cuyo precio en los últimos años había ido en aumento. Este último aspecto llevó a que la estructura de producción y de exportación de Chile no fuera sometida a verdaderas reformas. El país sigue teniendo una estructura económica y de exportación propia de una nación en vías de desarrollo durante los años 60 y 70 del siglo pasado. Su principal socio comercial, Estados Unidos, ha sido reemplazado por China como gran consumidor de cobre. No obstante, a grandes rasgos la exportación sigue evidenciando la misma estructura que hace 40 años: se destaca por la venta de cobre, de otras materias primas y de unos pocos alimentos elaborados (vino, pescado y frutos marinos).

Este modelo económico también evidencia un «subdesarrollo exitoso». La política energética, absolutamente insuficiente, pone coto a las esperanzas de crecimiento. Además, los proyectos de instalación de cinco enormes centrales hidroeléctricas en la Patagonia, una región sensible en

materia ecológica, y unos 2.000 km de red nacional de transmisión de energía –la llamada «carretera eléctrica»– suscitan desde hace un año protestas masivas en todo el país. El gobierno chileno, pese a que el país ha sufrido no pocos terremotos, tampoco descarta la opción de la energía nuclear. En el marco de la visita del presidente estadounidense Barack Obama a Santiago, ambos Estados firmaron en marzo del año pasado, es decir, poco después de la catástrofe de Fukushima, un acuerdo de cooperación para el desarrollo de ese tipo de energía.

La falta de regulaciones y controles en diversos sectores de la economía también daña la imagen de país modelo. El fetichismo de mercado de los últimos 40 años descuidó de modo inaceptable, y a menudo muy a conciencia, la aplicación de mecanismos de control y de regulación a bancos e institutos de crédito, por poner tan solo un ejemplo. En virtud de las actuales estructuras de poder, la competencia exenta de controles y la falta de disposiciones regulatorias por parte del Estado derivan en un mercado interno altamente monopólico u oligopólico. En la actualidad, las prestaciones que solían ser públicas (transporte, comunicación, infraestructura, energía, agua y salud) están en manos de unos pocos conglomerados privados. Esta concentración adquiere una enorme relevancia política en el sector de los medios de comunicación, dominados por unos pocos grupos financieros conservadores

que, además, al tener nexos transversales con bancos y entidades financieras, representan un sólido cartel de intereses de las elites de poder tradicionales y económicas.

La distribución extremadamente desigual de la propiedad y de los ingresos, que lleva a que Chile, con un coeficiente de Gini de 0,52, esté en la cola de la OCDE, es, entre otros, resultado de dicha política. Uno de los factores que actúa como garante central de la desigualdad es, sin duda alguna, el sistema fiscal. Con una carga tributaria menor a 20% y teniendo en cuenta el PNB para establecer la comparación mundial, Chile está muy por debajo de los estándares internacionales. La oposición, después de haber gobernado durante 20 años, se ha enarbolado a sí misma como defensora de la lucha contra la «desigualdad» y en favor de la justicia social, pero los índices de popularidad extremadamente bajos que registran los partidos de la oposición son un claro indicador del déficit de credibilidad por el que atraviesan. El oficialismo, no obstante, comparte esta situación.

■ Coyuntura política y perspectivas

Después de casi dos años de gobierno, el actual gabinete, y en primer lugar el presidente, aún le deben a la población una agenda político-programática coherente. Falta un «relato conservador» generador de sentido, que pueda sistematizar y estructurar (y

por ende explicar) la acción gubernamental. Sebastián Piñera es más bien un presidente «de anuncios», y casi no asume su función consensual y de liderazgo ni siquiera ante la coalición de gobierno, cada vez más escindida en lo ideológico. Su popularidad ha caído a 23%¹⁰, al tiempo que la oposición ha ganado perfil desde que insta a analizar de cerca «la letra chica» de las grandilocuentes promesas del proyecto.

El presidente-empresario Piñera, que había prometido una «nueva forma de gobernar», actúa dentro de una concepción política radical de mercado, en parte como si fuese director general de «Chile SA», manejándose con sus ministros como si se tratase de jefes departamentales o gerentes. Que algunos de ellos hayan actuado como si en efecto lo fuesen facilitó la crítica lanzada por los mismos partidos de la coalición oficialista, que no se ven lo suficientemente representados por su propio gobierno. La actuación presidencial es más bien una suma de medidas individuales aisladas. El conflicto (que ya se avizoraba en las primeras semanas de gobierno) por la redefinición de un «conservadurismo democrático moderno» (que ahora ha desaparecido del discurso y de la práctica) frente a la derecha tradicional reaccionaria afecta a casi todas las

10. «Una histórica crisis de popularidad obliga a Piñera a cambiar el gabinete» en *Clarín*, 30/12/2011, disponible en <www.clarin.com/mundo/historica-popularidad-Pinera-cambiar-gabinete_0_618538223.html>.

áreas: la política educativa, la reforma fiscal, la relación con la oposición, la actuación de la policía, etc.

Sin embargo, hasta el momento este derrumbe de la popularidad del gobierno le ha servido de poco a la oposición. Si bien ha habido áreas de conflicto político particulares que se manejaron y llevaron adelante con mayor consenso y resolución, siguen faltando orientaciones programáticas claras, una conducción política decidida, alternativas decisivas a las estrategias gubernamentales y, ante todo, dadas las falencias de los últimos 20 años de gobierno de la Concertación, credibilidad. Las vanidades personales en pugna por las candidaturas presidenciales para 2013 y la estrategia aún no resuelta de la alianza opositora para las elecciones municipales de 2012 hacen que no resulte del todo realista esperar un pronto fortalecimiento del bloque de centroizquierda. El nuevo Partido Progresista (PRO), del disidente de la Concertación Marco Enríquez Ominami, quien en las últimas elecciones logró un sensacional 20%, ya es una agrupación política legal, y Ominami sigue en las encuestas a la ex-presidenta Michelle Bachelet –que ostenta un excepcional apoyo a su persona– como único político de la oposición que cuenta con un sostén claro, muy por encima de los demás representantes, incluso del gobierno.

En lugar de debatir programas, los partidos de la antigua Concertación

discuten si la alianza aún existe, si debería existir o si no resultaría mejor fundar una alianza de centroizquierda totalmente nueva (que integrara al PRO, a los comunistas y a otras pequeñas agrupaciones) para las próximas elecciones presidenciales y municipales. Pese a los drásticos valores que arrojan las encuestas, los bloques más conservadores dentro de los partidos de izquierda insisten en la continuidad de la Concertación y no consideran que la renovación del programa o de sus representantes políticos sea una prioridad, ya que apuestan por la fuerza de la figura de la ex-presidenta Bachelet como candidata presidencial para 2013 en tanto tabla de salvación para la crisis partidaria. En cambio, las fracciones de estos partidos que tienen una postura más crítica hacia el *establishment* no definen sus objetivos según las chances de adquirir poder o victorias electorales. Insisten, más aún ante los movimientos sociales de los últimos meses, en redefinir los contenidos, las metas y los procesos políticos. Están en vías de establecer una agenda de reformas que se propone recuperar la confianza y la credibilidad entre los electores y construir nuevos puentes hacia la sociedad civil. En este marco, también esperan que Bachelet, en caso de estar dispuesta a abandonar su cargo como directora de ONU Mujeres (la agencia de la ONU para la igualdad de la mujer), respalde su agenda.

■ Una población en movimiento

La debilidad de la oposición política parlamentaria es compensada por la oposición social, que crece por reclamos puntuales a la par y junto con el movimiento estudiantil de protesta. Los que se mostraron más cautos fueron los sindicatos, que en un primer momento adoptaron una postura más bien distante hacia la movilización, para luego aproximarse lentamente a los estudiantes a través de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que convocó dos huelgas generales en las que los dirigentes estudiantiles y sindicales marcharon codo a codo.

Además, en lo que para un país católico como Chile fue todo un suceso, hubo marchas en las que se congregaron 40.000 gays, lesbianas, heterosexuales, familias con sus hijos y abuelas con carteles pintados a mano con la leyenda «Mi nieto es gay y yo lo respaldo», en reclamo de la legalización de las uniones homosexuales.

Las mujeres también lograron reunir a miles de personas para exigir la igualdad de derechos de género y de participación política. Si bien las cifras evidenciaron una leve mejora durante la presidencia de Bachelet, la presencia de mujeres en funciones políticas es escandalosamente baja: de 38 senadores, solo cinco son mujeres, y entre los 120 diputados hay solo 18 mujeres; en el ámbito regional no hay más

de 43 alcaldesas sobre 345 alcaldías; 493 de 2.140 concejalías y solo cuatro de las 22 carteras ministeriales están encabezadas por mujeres.

En las luchas regionales como la de Magallanes, la provincia más austral del país, los encolerizados pobladores de la Patagonia paralizaron las actividades para llamar la atención sobre los problemas que generaban los costos energéticos y el descuido y las desventajas estructurales básicas a las que están sometidas las provincias. Las protestas de la comunidad mapuche, sus huelgas de hambre y sus movilizaciones, de un fuerte impacto en la opinión pública, tienen lugar desde 2010 en reclamo por el histórico sometimiento de su pueblo y la falta de derechos.

Miles y miles se alzan en todo el país contra la construcción de embalses en la Patagonia, rechazados por 70% de la población. Ahora se verá si los poderosos intereses que tienen la mira puesta en las multimillonarias inversiones serán más fuertes que la amplia red «Patagonia sin represas», que ya cuenta con nexos internacionales y agrupa a casi 80 ONG, organizaciones ecologistas y movimientos civiles.

En resumen: la cultura política del país, que siempre optó por generar equilibrios y evitar conflictos sobre la base de una estructura autoritaria, se ve radicalmente cuestionada por las protestas masivas, entre las que destacan

en particular las movilizaciones estudiantiles. Cualquier intento de los partidos políticos por ponerse a la cabeza de estos levantamientos es rechazado de cuajo, por ser considerado una clara instrumentalización de los reclamos («el pueblo unido avanza sin partido», dicen los movilizadores). Más allá de las demandas concretas –en materia de educación,

derechos indígenas, medio ambiente, género–, el carácter masivo de las protestas manifiesta el abismo que separa a la sociedad civil de la política, así como la pérdida de credibilidad, de unión y de liderazgo que han experimentado los partidos, algo característico de las sociedades posdemocráticas. De pronto, Chile ha comenzado a moverse. ☒

TEMAS

CULTURA, IDEOLOGÍA, SOCIEDAD

Octubre-Diciembre de 2011

La Habana

Nº 68

COMUNICACIÓN Y ESFERA PÚBLICA

ENFOQUE. Elogio de la razón y de la locura: los caminos encontrados de la opinión pública, **Raúl Garcés**. Prensa e imaginarios del riesgo, **Alain Basail Rodríguez**. Diálogos radiales: influencias culturales norteamericanas en la música alternativa cubana, **Susan Thomas**. La otra revolución, **Kathryn Currier Moody**. La imagen país y la diplomacia pública: una mirada desde la comunicación institucional, **Alina Altamirano Vichot**. Escuchando el cambio: reguetón y realidad cubana, **Nora Gámez Torres**. Beatriz Maggi y la palabra como compinche, **Denia García Ronda**. ¿Equilibrio en la frontera? México en la prensa norteamericana, **Michael Shifter y Rachel Schwartz**. CONTROVERSIA: El Mariel treinta años después, **Antonio Aja, Jesús Arboleya, Andrés Gómez, Magali Martín Quijano, Rafael Hernández**. ENTRETENEMAS: Cuba, su economía y la Unión Soviética, **José Luis Rodríguez**. Límites del cambio: de la desigualdad de razas a la diferencia de culturas, **Wilder Pérez Varona y Reynier Abreu Morales**. Desigualdades de género en la ciencia minera cubana, **Yuliuva Hernández García**. Nuevo debate sobre los problemas institucionales de la historiografía cubana, **Jorge Ibarra**. Protestantismo cubano desde lo ecuménico histórico, años 90, **Amós López Rubio**. LECTURA SUCESIVA: Memorias en cuerpos fragmentarios, **Cira Romero**. Literatura, historia y la república perdida, **Román de la Campa**. Raúl: revolucionario durante toda su vida, **Gustavo Placer Cervera**.

Próximo número: *Ciencia y sociedad*.

Temas es una publicación trimestral cubana, dedicada al análisis de los problemas de la cultura artística y literaria, de las ciencias sociales y las humanidades, la teoría política y la sociedad contemporáneas. Colaboraciones y suscripciones: Calle 23, No. 1155, entre 10 y 12, El Vedado, La Habana, Cuba. Tel.: (537) 838 3010. Correo electrónico: <temas@icaic.cu>. Página web: <www.temas.cult.cu>.

Izquierda y «buen capitalismo»

Un aporte crítico desde América Latina

RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS

En el debate sobre la construcción de un proyecto político de izquierda existen dos opiniones o vertientes contrapuestas: por un lado, la de quienes proponen administrar y regular mejor el capitalismo –como Will Hutton en el artículo publicado en el número anterior de NUEVA SOCIEDAD–; por otro, la de quienes sostienen posiciones anticapitalistas, en la que se enmarca el presente texto. El autor defiende el argumento de que una izquierda que no renuncia a la generación de alternativas al capitalismo, pero que al mismo tiempo es responsable de gestionar el gobierno, debe pensar la «gran transición» sin perder de vista el horizonte de la «gran transformación». En este contexto, analiza la iniciativa Yasuní-ITT impulsada en Ecuador y la presenta como un ejemplo de cómo conjugar propuestas concretas innovadoras (transición) y utopías superadoras del desarrollo capitalista (transformación).

El mundo no necesita alternativas *de* desarrollo sino alternativas *al* desarrollo. El mundo no precisa aprovechar «mejor» el capitalismo, sino transformarlo. Ese es el gran desafío histórico que debiera asumir intelectual y políticamente la izquierda. El concepto «desarrollo» se ha reciclado para renacer una y otra vez de to-

das sus críticas y detractores, pero en estricto sentido nunca ha sido puesto en cuestión como noción, ni tampoco la forma de alcanzarlo. El desarrollo «humano», el desarrollo «sostenible», el desarrollo «con perspectiva de género», etc., si bien constituyen avances importantes para producir un mundo más humano, amigable con el medio

René Ramírez Gallegos: secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y presidente del Consejo de Educación Superior del Ecuador. Fue secretario nacional de Planificación y Desarrollo.

Palabras claves: izquierda, capitalismo, «buen vivir» (*sumak kawsay*), Yasuní-ITT.

Nota: el autor agradece la lectura crítica y minuciosa de Analía Minteguiaga.

ambiente o donde imperen relaciones de género más igualitarias, no buscan cambiar de raíz el modo de acumulación y (re)distribución propio del capitalismo¹.

En el marco de estas consideraciones, resulta interesante analizar el proyecto político que desde el año 2007 se está llevando adelante en Ecuador. Este ha propuesto a la ciudadanía nacional y mundial un cambio de paradigma, que no solo busca dejar atrás el propio concepto de «desarrollo» –y, con este, el capitalismo– sino construir una sociedad que tenga como eje la garantía de las condiciones de vida de los seres humanos y de la naturaleza. Dicha propuesta ha sido conocida públicamente como la «sociedad del buen vivir» o «del *sumak kawsay*». Se trata en definitiva de un nuevo paradigma, que en el caso ecuatoriano parte de una dinámica constituyente y que tuvo como resultado el establecimiento de un novel pacto de convivencia colectivo. Es decir, supuso la elaboración y aprobación popular de una nueva Constitución Política en 2008.

El nuevo paradigma, además de establecer una serie de principios y pautas de interacción social, buscó deliberadamente repensar alternativas de acumulación, (re)distribución y regulación y nuevas formas democráticas para la sociedad. Sin embargo, en Ecuador existe plena conciencia de los límites o, mejor dicho, de

los «tiempos» involucrados en una dinámica de cambio tal. Sería pretencioso e ingenuo postular que de la noche a la mañana se puede salir teórica, conceptual y hasta empíricamente del paradigma del desarrollo y, asociado a este, del esquema capitalista. En consecuencia, se argumenta que una propuesta sería desde el pensamiento de izquierda debería ponderar detenidamente la «gran transición». Empero, esto no significa abandonar la reflexión sobre la transformación social, ya que eso supondría resignarse a vivir –en el mejor de los casos– en una sociedad «menos» injusta, pero injusta al fin.

La nueva Carta Constitucional que propone Ecuador al mundo marca una ruptura con los anteriores paradigmas, ya que busca construir un pacto social en favor de lo que se ha denominado «socialismo del *sumak kawsay*» o «biosocialismo republicano»².

En esta ocasión no interesa debatir en profundidad y de manera exhaustiva la propuesta política de Ecuador en torno de la construcción de ese socialismo. Ese análisis se ha desarrollado

1. Parte de la raíz del problema, que no se tratará en este artículo, es la relación que se configura entre el capitalismo y la democracia representativa.

2. R. Ramírez Gallegos: «Socialismo del *sumak kawsay* o biosocialismo republicano» en Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades): *Socialismo y sumak kawsay. Los nuevos retos de América Latina*, Senplades, Quito, 2010, disponible en <www.senplades.gob.ec/web/senplades-portal/publicaciones>.

ampliamente en otros escritos³ y está plasmado también en el *Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013*⁴. En esta oportunidad, resulta más pertinente plantear un análisis filosófico-político de una de las iniciativas más emblemáticas que ha presentado Ecuador al mundo y que constituye un ejemplo simbólico de disputa del sentido lógico del «desarrollo capitalista»: la iniciativa Yasuní-ITT⁵. Este proyecto consiste en mantener el petróleo bajo tierra (no explotarlo) en una de las zonas más megadiversas del mundo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, y en ese sentido es un ejemplo concreto de las formas en que es posible construir una sociedad del buen vivir. El marco para este análisis es la discusión que se está dando a escala global entre cierto sector del pensamiento de izquierda que considera que lo más progresista y realizable hoy en día es idear y producir mejoras en la administración del capitalismo —en otras palabras, fomentar su lado «bueno»⁶—, y otra posición que plantea el anticapitalismo desde una perspectiva puramente teórica, sin preocuparse por la viabilidad política de sus propuestas.

Antes de profundizar en la reflexión sobre la iniciativa Yasuní-ITT, en la primera parte de este artículo quisiera ubicar en qué contexto se considera la propuesta de mantener el petróleo bajo tierra, a fin de no caer ni en una postura ahistórica, que en nombre del

realismo clausura la posibilidad de la transformación social y se resigna a lo innecesario de alcanzar las uvas «porque están verdes y son amargas», ni en otras alternativas posmateriales y anticapitalistas inviables para sociedades con altos niveles de necesidades insatisfechas. En esa sección se reflexionará sobre el mercado, el capitalismo y otras formas de economía. La segunda sección definirá en qué consiste la propuesta Yasuní-ITT. En la tercera sección se presentan 11 tesis que explican por qué esta iniciativa es un buen ejemplo de una potencial transformación radical. Como parte de la transición socioecológica, el cuarto apartado plantea una vía concreta adicional para financiar la iniciativa y disputar el sentido del capitalismo.

■ Capitalismo, mercado, trabajo y pluralidad de economías

A fin de no caer en pragmatismos que proponen cambios epidérmicos ni en falsos romanticismos teóricos, resulta necesario contextualizar el momento histórico que vive Ecuador en

3. *Ibíd.*

4. Senplades: *Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural*, Senplades, Quito, 2009, disponible en <<http://plan.senplades.gob.ec/>>.

5. La sigla ITT refiere a los nombres de los pozos petroleros ubicados en el Parque Nacional Yasuní: Ishpingo, Tiputini y Tambococha.

6. Will Hutton: «La socialdemocracia liberal, la equidad y el buen capitalismo» en *Nueva Sociedad* N° 236, 11-12/2011, disponible en <www.nuso.org/upload/articulos/3805_1.pdf>.

el marco del sistema mundo. En las últimas décadas, el planeta ha experimentado la dominancia de una representación del mundo con efectos políticos concretos: el neoliberalismo. Siguiendo a David Harvey, el neoliberalismo es una estrategia política global que, entre otras cuestiones, ha buscado restituir la tasa de ganancia capitalista, principalmente del sector financiero, a través de políticas regresivas⁷. Esa operatoria fue posible gracias a la hegemonía de alianzas socioeconómicas y políticas tanto globales como propias de cada país, que condujeron a la construcción de un mundo «hipercapitalista».

Este escenario pudo concretarse por la participación fundamental de un actor clave: el Estado. Como brillantemente lo explica Giovanni Arrighi,

el carácter capitalista del desarrollo basado en el mercado no está determinado por la presencia de instituciones y dispositivos capitalistas sino por *la relación del poder del Estado con el capital*. Se pueden añadir tantos capitalistas como se quiera a una economía de mercado, pero a menos que el Estado se subordine a su interés de clase, la economía de mercado sigue siendo no capitalista.⁸

Esto justamente permite analizar los límites y alcances del capitalismo y del mercado –en su fase neoliberal– en el marco de una estrategia política viable desde la izquierda. La idea es no confundir el desarrollo capitalista con el mercado.

Esta distinción es muy importante para los objetivos de este escrito. Más adelante se tratará el tema del «valor» en la economía; no obstante, por el momento se debe señalar que las herramientas de mercado son las menos malas para redistribuir bienes y servicios dentro de una economía (más allá, quizá, de un barrio o una parroquia) en cantidad y diversidad de productos. Una perspectiva de izquierda innovadora no debería excluir las herramientas del mercado⁹, sino subordinarlas al interés general, y debería incorporar la pluralidad de economías que existen y que han sido invisibilizadas al momento de construir el orden social hegemónico; nos referimos a las economías cooperativa, asociativa, del cuidado, entre otras. La sociedad del buen vivir o del *sumak kawsay* que se consagra en la Constitución de la República del Ecuador se propone edificar una economía ecológica, social y solidaria, que busca ser una economía

7. D. Harvey: *Breve historia del neoliberalismo*, Akal, Madrid, 2007.

8. *Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo xx*, Akal, Madrid 2007, p. 345, énfasis del autor.

9. En otros artículos se ha planteado que, sin dejar de utilizar las herramientas de mercado pero con una unidad de análisis e intercambio diferente del dinero (tiempo, energía, biomasa) se podría construir otro orden social. Ver R. Ramírez Gallegos: *La felicidad como medida del Buen Vivir en Ecuador. Entre la materialidad y la subjetividad*, Senplades, Quito, 2011, disponible en <www.senplades.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=447b0e8e-2edf-42b7-aa22-6eb8a32a2d28&groupId=18607>.

«con mercado»¹⁰ no capitalista, y no «de mercado capitalista».

Siguiendo la perspectiva señalada por Arrighi, se puede mencionar que en Ecuador –a partir del proceso denominado «Revolución Ciudadana» y como producto de una crisis de hegemonía de las alianzas dominantes– ha habido avances muy importantes en la ruptura con el lado capitalista de la economía, dado que parte de ese sector (principalmente ligada al capital financiero) vio debilitada su capacidad de imponer sus intereses en el campo de las políticas públicas¹¹. El desplazamiento de las representaciones gremiales de los empresarios de las instituciones públicas ha sido una de las principales acciones políticas en este sentido. Así, en todo consejo de políticas públicas en el nivel estatal en el que tuvieron voz y voto diversas fracciones del capital privado se eliminó su representación y, por tanto, su influjo en la determinación de la agenda pública; por ejemplo, en el ámbito bancario, de comercio exterior y en los sectores estratégicos. Por otro lado, quizá la política más clara en la que se ha dado tal separación entre Estado y poderes económicos privados ha sido en la recientemente aprobada Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado. Con esta ley se pone fin al abuso en que han incurrido los capitalistas en Ecuador al explotar a los pequeños y medianos productores, e incluso al avasallar a los propios ciudadanos en tanto

consumidores. Asimismo, esta legislación norma la separación de la banca de los medios de comunicación y de otros negocios económicos fuera de su ámbito de acción estrictamente financiero. Además, someter a transnacionales petroleras y energéticas a contratos de prestación de servicios en los que queda claro que los recursos no renovables son propiedad del conjunto de los ecuatorianos representados por el Estado; declarar ciertos tramos de la deuda externa como ilegítimos; crear el impuesto a la salida de capitales¹¹ y llevar adelante reformas tributarias con énfasis en los impuestos directos son otras medidas que ponen de manifiesto el

10. Usualmente se señala que el sistema económico que se plantea en la Constitución de Ecuador está en contra de procesos de revolución industrial (y no «industrial», v. la diferencia en G. Arrighi: ob. cit.). Como se ha sostenido en otros espacios, el proceso de industrialización puede regirse por una lógica que respete principios ecológicos, sociales y solidarios diferentes de los del mercado capitalista. Muchas veces se da por supuesto que los sistemas económicos contrarios al capitalismo son por definición ineficaces e ineficientes, lo cual tampoco es una verdad sin matices.

11. Lo mencionado no niega la particularidad del caso ecuatoriano durante el momento neoliberal ni las evidentes dificultades de las clases acomodadas para superar sus fracciones y divisiones internas y llevar adelante un proyecto hegemónico de capitalismo a ultranza. En este sentido, debe distinguirse la hegemonía de estos grupos de la hegemonía neoliberal en tanto representación del mundo, ideología y hasta proyecto político-cultural. Esta última funcionó efectivamente en Ecuador más allá de las especificidades señaladas.

12. En la última reforma tributaria aprobada en el mes de noviembre de 2011, este impuesto subió de 2% a 5% y ahora se aplica también al dinero producto de las exportaciones que no retorna al país.

nuevo equilibrio entre el capital y el poder político como espacio de representación del bien común y de los intereses generales.

A su vez, la eliminación de la tercerización; el incremento de la cobertura de la seguridad social; la formalización y protección del trabajo de las empleadas domésticas; la promulgación de la Ley de Economía Social y Solidaria, que crea la Corporación de Finanzas Populares como parte de la recuperación de la banca de desarrollo; el incremento sistemático del salario mínimo, que ha permitido mejorar significativamente (en 90%) la cobertura de la canasta básica, así como la puesta en marcha del salario dignidad¹³; el aumento salarial para maestros, policías y empleados de la salud; y la categorización como delito de la no afiliación al Instituto de Seguridad Social del Ecuador de trabajadores en relación de dependencia, son pruebas claras de que el proceso de cambio iniciado ha dado primacía al trabajo sobre el capital y ha modificado la lógica que hizo del Estado una pura herramienta de las clases dominantes.

No es aventurado sostener, en este marco, que así como la revolución liberal alfarista producida en Ecuador tuvo como uno de sus principales objetivos construir un Estado laico, la denominada «Revolución Ciudadana» ha tenido como objetivo separar al Estado de los poderes económicos fácticos. Esto no implica pretender la

desaparición de estos, como defiende el discurso de cierta izquierda poco madura, pero sí someterlos al bien común, expresado fundamentalmente en la capacidad del Estado para procesar las demandas populares y revertir las prioridades de intervención y redistribución y las del conjunto de la acción pública dirigiéndolas hacia la mayoría de la población¹⁴.

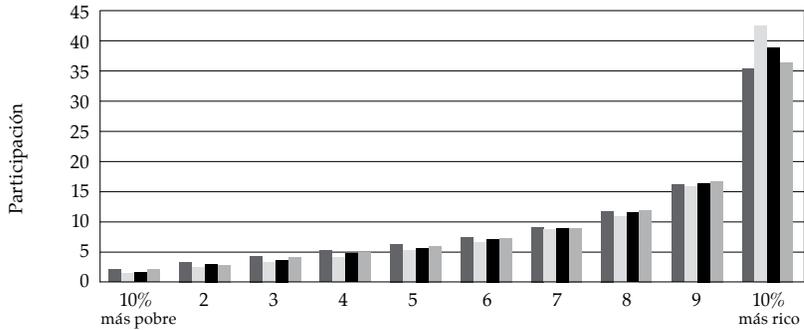
Estas medidas han dado paso a algo que es fundamental y constituye el primer objetivo del *Plan Nacional para el Buen Vivir* y de un proyecto de izquierda: redistribuir la riqueza y buscar la igualdad social. Como puede verse en los gráficos de la página siguiente, ha disminuido la desigualdad (medida a través del coeficiente de Gini), pero no de cualquier forma: el decil más rico ha visto disminuir su «porción» del pastel luego de casi dos décadas en que fue el único estrato económico que vio crecer su participación. La porción en que se redujo la participación del 10% más rico ha sido redistribuida entre el 90% de la población, sobre todo entre los más

13. En el Código Orgánico de la Producción aprobado en diciembre de 2010 se establece que para que un empresario pueda cobrar utilidades todos sus empleados deben tener un salario igual al costo de la canasta básica («salario dignidad»).

14. En este texto se hace hincapié en el actor estatal sin menospreciar el papel de los actores sociales. Sin embargo, se deben dejar sentados el reflujo y la fragmentación que los movimientos sociales han experimentado en Ecuador desde 2003 a la fecha. Ver R. Ramírez Gallegos: *La felicidad como medida del Buen Vivir en Ecuador*, cit.

Gráfico 1

Ecuador: distribución del ingreso según deciles, 1990-2011(en porcentaje)

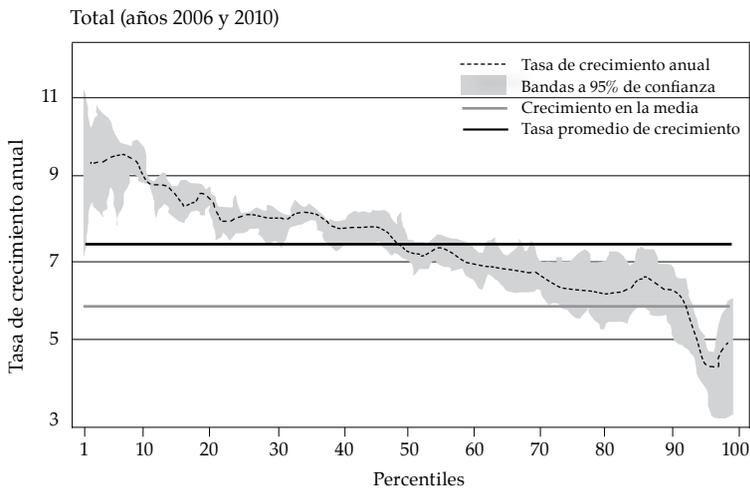


■ 1990	1,9	3,1	4,2	5,1	6,1	7,4	9,1	11,5	16,2	35,5
■ 1996	1,2	2,3	3,2	4	5,1	6,5	8,5	10,7	15,8	42,7
■ 2009	1,3	2,6	3,5	4,5	5,6	7	8,7	11,4	16,3	39
■ 2011 (marzo)	1,88	2,71	3,82	4,73	5,77	7,12	8,9	11,86	16,71	36,5

Fuente: elaboración del autor a partir de la Encuesta Nacional de Hogares de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENENDHU) 1990 (previo al neoliberalismo), 2006 (inicio de la «Revolución Ciudadana»), 2009 (crisis) y 2011 (marzo). Para 1990, 2006 y 2009, la encuesta ha sido tomada en diciembre.

Gráfico 2

Ecuador: tasa de crecimiento anual según percentil de ingreso, 2006-2011 (en porcentaje)



Fuente: elaboración del autor a partir de ENENDHU 2006 y 2010 (diciembre).

pobres (el crecimiento ha sido pro-pobre¹⁵) y ello sin dejar de fortalecer a la clase media¹⁶.

Es claro que lo realizado todavía no es suficiente como para romper la lógica de mercado capitalista que ha imperado en Ecuador desde prácticamente la etapa poscolonial, ni tampoco para cerrar las brechas sociales aún flagrantes. Profundizar en la distribución de los medios de producción sigue siendo un reto político para el gobierno ecuatoriano. Pero son señales de la orientación global del proceso en el vigente momento político, lo cual no resulta un dato menor en el marco de las posturas que se conforman con encontrar «lo bueno» del capitalismo y aquella izquierda que plantea falsas ilusiones que no son viables social ni políticamente.

Algunas veces se escuchan voces desde la izquierda que argumentan que el objetivo es que la lógica del sistema económico sea anticapitalista sin importar cómo. Las alternativas anticapitalistas que defienden algunos sectores de la izquierda muchas veces no son aplicables a escala meso o macro, dada justamente la imposibilidad de coordinación, distribución e información a escala global de los modelos propuestos, o dado que simplemente no cumplen el objetivo básico de satisfacer las necesidades de la gente. Por ejemplo, ¿el trueque puede ser reproducible a escala provincial o nacional? Incluso en el nivel micro

sirve muchas veces solo como estrategia de supervivencia, pero no constituye una vía alternativa, dado que no siempre mejora las condiciones de vida de los productores. En efecto, de acuerdo con el censo de población de 2012, 12% de la población económicamente activa (PEA) de Ecuador que trabaja dentro del hogar (es decir, que pertenece a la economía social y solidaria) es mayoritariamente pobre (en un 60%) según la satisfacción de sus necesidades básicas. Una economía que busca ser anti- (o incluso post-) capitalista y no mejora las condiciones materiales de producción y reproducción de la vida social de la población ni permite superar la pobreza no solo es políticamente inviable, sino que tampoco es éticamente deseable, por más lógica de «acumulación no capitalista» que suponga.

Sin perder de vista el horizonte de la gran transformación, una izquierda no demagógica debería entonces plantear estrategias viables en la gran transición, tomando en cuenta sobre todo de dónde se parte y el poder real que tiene el Estado en el ámbito nacional y

15. Al observar el crecimiento del país en los años de gobierno del presidente Rafael Correa, se puede apreciar que, a mayor nivel de pobreza, la velocidad de crecimiento del ingreso es mayor.

16. En menos de cinco años casi se ha revertido la distancia entre el decil más rico y el más pobre a lo que era 21 años atrás (1990), año en el que todavía no empezaba en Ecuador la etapa de políticas neoliberales más fuertes y decididas. Ver R. Ramírez Gallegos: *La felicidad como medida del Buen Vivir en Ecuador*, cit.

en el concierto del sistema global. En el caso ecuatoriano, no es menor reconocer que la economía está dolarizada, que depende del sector primario, que es de baja productividad y genera poco valor agregado; además de que Ecuador es un país pequeño con poca capacidad de influencia en un mundo globalmente capitalista. No se debe olvidar tampoco que el objetivo es la reproducción de una vida plena, de la buena vida¹⁷, en la cual la dinámica económica no debe suponer un divorcio entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida.

Antes de terminar esta sección, es relevante señalar que una de las bisagras entre la gran transición y la gran transformación pasa por el manejo de la sostenibilidad ambiental del mundo. La disputa por salir del capitalismo y construir otro orden está asociada –entre otras razones– a los límites biofísicos (materiales, de espacio y tiempo) que las economías se impongan. La economía capitalista es una economía ficticia, porque basa su construcción en el dinero, un ente artificial, lo que potencia la desconexión con lo real. En este marco, esa artificialidad puede ser puesta en jaque a través del manejo del patrimonio natural (vida) del mundo¹⁸.

■ La iniciativa Yasuní-ITT

Una de las principales propuestas concretas que Ecuador ha planteado al mundo en relación con lo que implica

salir del desarrollo capitalista y entrar en la sociedad del buen vivir es el proyecto Yasuní-ITT¹⁹. ¿En qué consiste?

Por este proyecto, Ecuador se compromete a mantener inexploradas por tiempo indefinido las reservas recuperables de 846 millones de barriles de petróleo del campo ITT. De esta forma se evita la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que reduce los impactos sobre el cambio climático. La explotación petrolera de este campo supondría la producción de aproximadamente 107.000 barriles diarios durante 13 años, y luego los pozos entrarían en su fase declinante por 12 años adicionales. Aunque las reservas probadas del campo ITT alcanzan 944 millones de barriles, existen reservas posibles adicionales de 1.530 millones, cuyo valor permanece incierto debido

17. Para un más amplio desarrollo del concepto de «vida buena» o «buena vida», v. R. Ramírez Gallegos: *La vida (buena) como «riqueza» de las naciones. Hacia una socio-ecología política del tiempo*, IAEN / SENESCYT, Quito, en prensa.

18. No es casualidad que EEUU no haya firmado el Protocolo de Kioto ni que Rusia, Canadá y Japón hayan anunciado que no formarán parte del segundo periodo de compromisos de Kioto luego de la reciente cumbre realizada en Durban. De acuerdo con los expertos, al final, en el segundo periodo, Kioto solo controlará 15% de las emisiones. Poner límites a la emisión de dióxido de carbono es poner límites al crecimiento del capital. En este sentido, paradójicamente, tampoco es casualidad que la «mejor» acción para reducir la emisión de gases que producen efecto invernadero haya sido la crisis financiera que viven los países denominados «desarrollados».

19. V. la página web de la iniciativa, <<http://yasuni-itt.gob.ec/>>.

a que no se ha realizado prospección sísmica 3D. A 2008, dadas las reservas probadas, el valor actual neto de explotar el petróleo equivaldría a recibir casi us\$ 7.000 millones²⁰. Sin embargo, Ecuador espera una contribución monetaria²¹ por no explotarlo de tan solo la mitad de los ingresos futuros petroleros. El resto sería asumido implícitamente por el pueblo ecuatoriano, que pasaría a ser así el principal «contribuyente».

En efecto, la iniciativa no solo reduce la contaminación global, sino que muestra un respeto irrestricto a la biodiversidad al buscar la reproducción indefinida de las especies y de las culturas humanas. En este caso específico, dentro del Parque Nacional Yasuní se encuentran dos de los pocos pueblos en aislamiento voluntario a escala mundial: los Tagaeri y los Taromenane.

Partiendo de esta iniciativa, en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático realizada en Cancún en 2010, el presidente Correa planteó el concepto global de «emisiones netas evitadas» (ENE), referido a las emisiones de gases que una economía se abstiene de hacer. En términos netos, como bien señaló el primer mandatario en esa reunión, «no ensuciar el medio ambiente (compensación por omisión teniendo el derecho de realizar la acción) es equivalente a limpiarlo (compensación por acción sin tener la obligación de realizarla)»²².

Desde la mirada neoclásica economista, esta iniciativa podría ser leída como parte de una nueva «maldición de la abundancia»²³ que llevaría a reemplazar la dependencia del petróleo por la de la biodiversidad. Pero esto es así solo si se piensa en términos monetarios, ya que ningún otro país que no tenga conjuntamente biodiversidad y petróleo podría plantear tal propuesta. Frente a tal lectura, existe una perspectiva que resguarda el lado emancipador de la propuesta Yasuní-ITT, aquella que rompe con la episteme neoclásica. A continuación, se esbozan algunas ideas en este sentido.

■ **Once tesis de ecología política sobre el Yasuní-ITT**

Cuando se habla de transitar del desarrollo capitalista a la sociedad del buen vivir, la lectura no debiera restringirse a los modos de producción.

20. Es importante señalar que si no hubiera existido la voluntad política de mantener el crudo bajo tierra y hubiera empezado la explotación a inicios del gobierno de Correa, el país contaría ya con los primeros flujos de recursos monetarios de la explotación. Por otra parte, a los precios actuales del barril de petróleo, los ingresos para el Estado ecuatoriano en valor presente neto podrían incluso duplicarse.

21. Sobre iniciativas para financiar el proyecto, v. <www.yasunisupport.org>.

22. R. Correa: «Discurso ante el pleno. XVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático», Cancún, 8 de diciembre de 2010.

23. En términos simples, la «maldición de la abundancia» describe la situación de aquellas economías que, por tener abundantes recursos naturales no renovables, no desarrollan otros sectores económicos de mayor valor agregado y se vuelven así dependientes de esos recursos.

Lo que está en disputa es otro orden social y, por lo tanto, otro marco de valores de la sociedad. En esta sección se intentará evidenciar por qué la iniciativa Yasuní-ITT da cuenta de esa contienda mediante la formulación de una serie de tesis que expresan tales trastocamientos.

1. Del antropocentrismo al biocentrismo. Desde la mirada liberal, únicamente el que es capaz de asumir obligaciones puede tener derechos. Con esta precondition, las generaciones futuras y también la naturaleza quedan excluidas de cualquier pacto de convivencia. Por el contrario, la iniciativa Yasuní-ITT busca garantizar los derechos de la naturaleza estipulados en la nueva Constitución²⁴; por lo tanto, el pacto realizado es posthumanidad (más allá de los seres humanos) y transgeneracional. El objetivo de la mirada biocéntrica es garantizar la reproducción de la vida en su más amplia acepción. En el marco de ese biocentrismo, «vida» no solo se refiere a la del ser humano sino también a la de las demás especies que, a su vez, garantizan la supervivencia del ser humano en el futuro. El reconocer valores intrínsecos a la naturaleza es uno de los puntos centrales de la construcción de una sociedad del buen vivir que supone una ética biocéntrica. Con ello se busca romper la postura antropocéntrica (que se maneja en el campo de los valores instrumentales) y productivista que ha primado en el capitalismo.

2. De la remediación a la prevención.

Usualmente, cuando se habla sobre el calentamiento global, las principales acciones buscan reducir la contaminación o concretamente la emisión de dióxido de carbono. La iniciativa Yasuní-ITT, por el contrario, no tiene por objetivo reducir esas emisiones, sino evitar generarlas. El cambio no es menor, dado que ataca la raíz del problema: la generación de la contaminación. Esta perspectiva, podría sostenerse, es similar a lo que en el campo de la salud implica pasar de la medicina medicamentada a la medicina preventiva.

3. Del genocidio y la intolerancia a la diversidad y la prolongación indefinida de las diferentes culturas humanas. Desde un enfoque de izquierda, una de las transiciones importantes es la que lleva del capitalismo al socialismo, pero también constituye una transición pasar del colonialismo a la construcción del Estado plurinacional. Esto implica reconocer la diversidad de culturas que coexisten en una comunidad política. La iniciativa Yasuní-ITT se ha propuesto respetar el aislamiento voluntario de los Tagaeri y los Taromenane, y busca de esta manera concretar uno de los objetivos fundamentales de la sociedad

24. Ecuador es el único país del mundo que garantiza derechos a la naturaleza en su Constitución. Otros países también han actuado en el mismo sentido, como por ejemplo Bolivia, pero lo estipulan en una normativa inferior (leyes o reglamentos).

del buen vivir: el respeto a la diversidad y la prolongación indefinida de las culturas humanas, una propuesta significativa en un mundo cada vez más xenófobo y que en ocasiones ha generado su «progreso» a costa del genocidio y la intolerancia hacia el diferente.

4. De la economía primaria exportadora a la sociedad del (bio)conocimiento. La moda de lo «verde» (desarrollo sustentable) no es una moda anticapitalista sino procapitalista: su fin es hacer sostenible la acumulación de capital. Los recursos obtenidos por la iniciativa Yasuní-ITT tienen por objetivo construir la sociedad del (bio)conocimiento para satisfacer las necesidades de la población. Sus recursos serán utilizados principalmente en el cambio de la matriz energética del país así como en investigación, ciencia y tecnología para, a través del conocimiento de la biodiversidad, resolver las necesidades vitales de los seres humanos. Al tener un objetivo más trascendente: la vida, atarnos las manos al mástil (en este caso, no explotar el petróleo) permite no caer en la tentación de ser seducidos por el canto de las sirenas (los ingresos de la explotación), para usar la imagen de Homero.

5. De la toma de decisiones individual a la toma de decisiones colectiva. En el marco de la soberanía del país, para instrumentar esta iniciativa Ecuador ha propuesto un comité colectivo de toma de decisiones en el cual no solo participa el Estado sino

también los contribuyentes y los pobladores que viven en el Parque Nacional Yasuní. Es un buen ejemplo de la relación existente entre lo local y lo global.

6. Del donante al contribuyente o copartícipe del cambio. En el mundo de la cooperación internacional, es usual que el donante imponga su voluntad al decidir el destino de los recursos donados. La lógica de la propuesta Yasuní-ITT cambia la mirada del donante por la del contribuyente o copartícipe del cambio. En este caso, al ser el cambio climático un problema público y común a la humanidad, el contribuyente busca ser parte de una acción colectiva mundial para solucionarlo.

7. De bienes privados a bienes públicos, comunes y relacionales. Cuando existen problemas ambientales, la mirada neoclásica que busca el «capitalismo bueno» intenta internalizar las externalidades y considerar el medio ambiente como un bien transable de mercado. Por su parte, la iniciativa Yasuní-ITT busca construir el sentido de que la biodiversidad y el cambio climático son bienes públicos y comunes a la humanidad, razón por la cual no son asunto de un Estado-nación sino un asunto transestatal y posnacional. De la misma forma, su valoración no está asociada en sentido estricto a una cantidad de dinero que se espera recibir, sino a la construcción de una relación diferente entre el ser humano y la naturaleza y a una valoración de

la biodiversidad no cuantificable monetariamente. Si bien uno de los principios del socialismo es la supremacía del trabajo sobre el capital, como se ha sugerido en otros artículos, la sociedad del buen vivir tiene un principio adicional: la supremacía de la vida (buena) sobre el trabajo²⁵. Esa vida pone el centro de atención en la generación de bienes (no males) relacionales, que incluyen la relación armoniosa de la mujer y el hombre con la naturaleza. Este es uno de los principios rectores que rigen la iniciativa Yasuní-ITT.

8. De Bretton Woods a la construcción de una nueva arquitectura financiera mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial se construyó una arquitectura financiera que ha sido perjudicial para los países denominados «periféricos». Incluso podríamos señalar que estos han financiado a los países «desarrollados» a través del depósito en el Sistema de Reserva Federal de EEUU de sus reservas de libre disponibilidad²⁶. La iniciativa Yasuní-ITT, dado que ataca un mal común mundial, necesita de una arquitectura financiera transestatal, por lo cual crea un fideicomiso en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). No obstante, en sus inicios la idea fue que esos fondos fueran parte del Banco del Sur, impulsado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)²⁷, algo que no pudo concretarse por los ritmos de su creación. No se puede discutir

el sentido del capitalismo si no se disputa la arquitectura financiera imperante, lo que incluye la discusión sobre el papel del dólar como moneda de intercambio mundial.

9. Del valor de cambio al valor de uso. Siguiendo las palabras de Oscar Wilde, se podría ironizar diciendo que la economía capitalista «conoce el precio de todo pero no sabe el valor de nada». La iniciativa Yasuní-ITT es un ejemplo no del precio que se asigna a un bien en el mercado, sino del valor de uso que tiene para la humanidad, en este caso, la biodiversidad; en otras palabras, se trata de dar prioridad al valor de uso y no al valor de cambio.

10. De la valoración y análisis unidimensional al análisis multicriterio y complejo. Por lo general, en la economía del capitalismo se usa unidimensionalmente el dinero como unidad de valoración y análisis de la sociedad y de la economía. Así, dado el valor de cambio utilizado en el mercado, resultaría económicamente irracional no explotar el Yasuní-ITT. Como se ha

25. R. Ramírez Gallegos: *La vida (buena) como «riqueza» de las naciones*, cit.

26. Banco Mundial: *Global Development Finance 2006*, BM, Washington, DC, 2006, p. 139.

27. En el año 2009, mientras el presidente Correa preparaba una presentación sobre el Yasuní-ITT en Londres, se produjo un debate entre este, el autor de este escrito y el ex-canciller Fander Falconí Benítez. En aquella ocasión el primer mandatario de Ecuador posicionaba la idea de la importancia de que el fideicomiso se creara en el Banco del Sur a fin de contrarrestar el poder que han tenido durante décadas las instituciones fundadas en el marco de Bretton Woods.

sostenido en otras ocasiones, mientras no se dispute la valoración de la sociedad con otras unidades de análisis (tiempo, energía, biomasa, etc.) será difícil construir un orden social diferente. Por el contrario, desde la iniciativa Yasuní-ITT resulta racional no explotar el petróleo justamente porque se contemplan en el análisis otras variables que no tienen precio: la prolongación indefinida de las culturas, el tiempo de vida de la biodiversidad, la construcción social del sentido de lo público y común a escala mundial, entre otros. En Ecuador se ha realizado una valoración de la iniciativa a través de la metodología multicriterio que arroja como resultado que es más valioso dejar el crudo bajo tierra que explotarlo²⁸. Esta situación devela la necesidad de contender en el campo epistemológico a fin de revisar el valor de las cosas y las acciones humanas. En este proceso, la unidad de análisis de las relaciones económicas y sociales debería dejar de ser el dinero y pasar a ser –por ejemplo– el tiempo²⁹ o lo biofísico³⁰.

11. De la valoración de la acumulación del capital al «valor de no hacer nada» o de la no acumulación. Desde una mirada neoclásica, la riqueza de las naciones está asociada a la capacidad de acumulación de capital que tiene una economía. En oposición a esa perspectiva, la iniciativa Yasuní-ITT propone justamente valorar la «no acumulación», al dejar intacto el patrimonio. En ese sentido, el mayor valor

de la iniciativa se conseguirá cuando el mundo reconozca el *valor de no hacer nada* (dejar el parque intacto); porque esto implicará reconocer el significado de un bien mundial, público y común, así como el valor de la naturaleza, el valor de una acción colectiva global, el valor de la «no acumulación», y también el valor de la vida.

■ Una propuesta adicional para la transición: el impuesto Yasuní-ITT

En sí misma, la iniciativa Yasuní-ITT no es un proyecto que permita generar la suficiente riqueza como para sacar a todos los pobres de la pobreza ni satisfacer las necesidades básicas de todos los ecuatorianos. No obstante, es una iniciativa que permite evidenciar que la izquierda no solo no se debe conformar con buscar un «buen capitalismo», sino que debe plantear innovaciones que disputen el sentido del capitalismo y busquen construir otro mundo. En este marco, es necesario buscar el modo de hacer viable la iniciativa.

El modelo que subyace a la propuesta Yasuní-ITT apunta a resolver el problema desde la fuente; así, se convierte en la mejor iniciativa de abatimiento de

28. María Cristina Vallejo: «Resultados del análisis multicriterial de la iniciativa Yasuní-ITT», Senplades / MCP / MAE / MDG, Quito, 2011, mimeo.

29. R. Ramírez Gallegos: *La vida (buena) como «riqueza» de las naciones*, cit.

30. M.C. Vallejo: «Perfiles metabólicos de tres economías andinas: Colombia, Ecuador y Perú», tesis de doctorado en Economía, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Sede Ecuador, 2010, mimeo.

carbono que se haya presentado jamás en un país petrolero. Durante la gran transición, un proyecto de izquierda debe buscar formas de limitar el capitalismo, sobre todo el especulativo. Si no se asocia capitalismo con deterioro ambiental, realmente no se podrá dar soluciones a los problemas que afectan a la naturaleza ni tampoco se podrá dar el salto cualitativo para buscar la sociedad pro-buen vivir o poscapitalista.

En el marco de Río+20, desde las ideas contenidas en este escrito se planteó la necesidad de establecer un impuesto que permita cumplir con dos objetivos³¹: poner límites al capitalismo y «yasunizar» el mundo. La propuesta consiste en gravar la salida de capitales (tasa Tobin) para financiar proyectos, principalmente en países en vías de desarrollo, semejantes a la iniciativa Yasuní-ITT. Así, esa tasa iría al corazón de la transición mencionada: desalentaría el flujo de capital especulativo («capitales buitres»), que no inyectan recursos a la economía real, y daría incentivos no solo para que se reduzca la emisión de contaminación, sino para que se evite producirla, dando prioridad a las zonas con patrimonio natural más valioso (lugares con mayor biodiversidad).

El impuesto Yasuní-ITT sería parte de una agenda de mayor alcance que Ecuador ha venido planteando al mundo durante los últimos cinco años. Esta agenda incluye el pago de

la deuda ecológica (como contrapropuesta al pago de la deuda externa), así como el impuesto Daily, que consiste en gravar la emisión de dióxido de carbono en general y, en particular, cobrar un impuesto a las exportaciones de petróleo. Estas iniciativas financieras podrían ser recaudadas por un fondo mundial para la transición socioecológica, que podría ser administrado regionalmente (África, Asia, Sudamérica, etc.) mediante una nueva arquitectura financiera (Fondo del Sur, Banco del Sur) que aún se debe concretar.

■ Consideraciones finales

Lo desarrollado en las secciones precedentes se inscribe en lo que teóricamente se ha planteado en otros escritos: que el proyecto político de Ecuador tiene que recorrer algunas fases (que no implican secuencialidad) para llegar a la gran transformación social (la sociedad del buen vivir). La gran transición implica pasar por el posneoliberalismo, el socialismo de mercado o socialismo redistribuidor y el biosocialismo republicano o socialismo del *sumak kawsay*³². Incluso, en ciertos ámbitos, implica continuar con políticas del ciclo neoliberal.

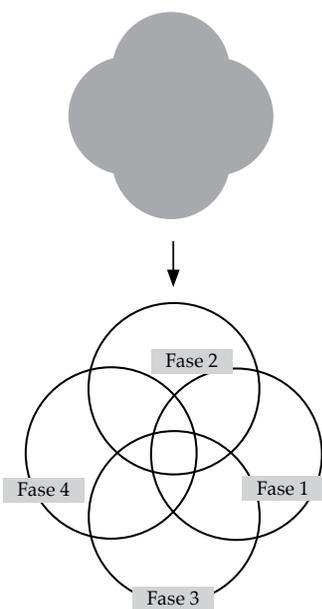
Estas fases, más allá del número y la caracterización precisa, involucran

31. La propuesta fue planteada por el autor de este texto.

32. R. Ramírez Gallegos: «Socialismo del *sumak kawsay* o biosocialismo republicano», cit.

diferentes modalidades de acumulación y (re)distribución en la economía y la sociedad ecuatorianas³³. Estas modalidades no son lineales. Implican en su consecución contradicciones, avances y contramarchas, justamente porque lo que está en juego son intereses políticos y económicos que frenan o permiten acelerar los cambios. Si pudiese ilustrarse una imagen de la transición, sería algo parecido a un trébol de cuatro hojas, con una representación similar a la del gráfico:

Gráfico
Las fases de la transición



Las intersecciones de las hojas de este trébol justamente dan cuenta de la convivencia de diferentes estadios en un mismo momento: rezagos y aristas

de la sociedad futura. Por ejemplo, se podría decir que la política social por un tiempo podrá seguir siendo neoliberal³⁴, la política económica, posneoliberal³⁵ y propuestas como la iniciativa Yasuní-ITT serían consideradas

33. Quizá una idea errónea que creo separa a los socialistas clásicos de los que piensan incluso el «postsocialismo» (si cabe ese concepto) es justamente la creencia de que el cambio solo pasa por la organización económica –acumulación y (re)distribución–. El desafío está en construir un nuevo orden social, lo que implica una nueva ética, nuevos valores, nuevas formas de democracia y de Estado y también nuevas formas de generación de riqueza, de distribución y redistribución.

34. Analía Minteguiaga: «Política y políticas sociales en el Ecuador reciente: dificultades asociadas a la salida del ciclo neoliberal» en *Revista de Ciencias Sociales*, en prensa. En la misma línea de análisis, mientras un sector de la izquierda sostiene que no ha habido cambios sustantivos en la política social dado que, por ejemplo, las transferencias monetarias condicionadas continúan bajo la misma lógica del neoliberalismo, el otro grupo (el «pragmático») defiende que estas políticas deben sostenerse. Su justificación principal refiere a que ahora ya no es un «bono de pobreza» sino un «bono de desarrollo humano» que incluye condicionalidades que protegen capacidades humanas (educación y salud). Según la tesis que propone este artículo, podríamos señalar que no se puede abandonar de la noche a la mañana tal política, dado que esa transferencia de dinero no es despreciable para cierto grupo de población. A su vez, para la viabilidad de la «transición» es sin duda necesario mantener tales intervenciones; no hacerlo implicaría importantes restricciones para la supervivencia del gobierno en el poder y, por ende, cuestionaría la posibilidad misma de disputar a mediano plazo la «transformación social». Empero, resignarse a mantenerlas *ad infinitum*, sin signos de esfuerzos y planteos alternativos, supone también poner entre paréntesis y paralizar la gran transformación. En el gobierno de Ecuador, varias propuestas plantean que el Bono de Desarrollo Humano debería vincularse a una meta más ambiciosa: la universalización de la seguridad social.

35. R. Ramírez Gallegos: *La felicidad como medida del Buen Vivir en Ecuador*, cit.

—como se ha sostenido— poscapitalistas. Como se expresa en el gráfico, esto no implica ir para «adelante» (en términos de progreso), pero tampoco para atrás. Es simplemente intentar construir otra sociedad contemplando los diversos ritmos sociales y naturales y los tiempos políticos.

La posibilidad de transformación desde la izquierda está en plantear una transición viable ética y políticamente, lo cual implica sin lugar a dudas también esgrimir una estrategia clara de acumulación y (re)distribución³⁶. Por ejemplo, como se señaló anteriormente, querer construir una economía popular y solidaria por el simple hecho de ser anticapitalista no es una propuesta viable para la izquierda si no garantiza la superación de la pobreza³⁷. A su vez, pensar, en nombre de un pragmatismo ciego, que lo único que debe hacer la izquierda es buscar el lado bueno del capitalismo o simplemente administrarlo de una mejor manera, es no tomar en cuenta la historia, casi como ignorar que la humanidad ha transitado por otras formas de convivencia social a lo largo de sus días, y creer que realmente nos encontramos en la última y definitiva etapa de la historia de la humanidad: en su fin.

Este artículo ha tratado de evidenciar que Ecuador se encuentra en un proceso de transición, intentando construir un nuevo orden social. En este momento se está disputando

políticamente la desestructuración del Estado capitalista, desarrollando al mismo tiempo propuestas innovadoras, como la iniciativa Yasuní-ITT, que implican avanzar en la construcción de un nuevo *ethos*, una nueva episteme, una nueva escala de valores, no solo para los ecuatorianos sino para el mundo global.

Si bien el camino no es fácil, el punto radica en no renunciar a la búsqueda de la emancipación social, a la par de no perder de vista las condiciones de viabilidad para alcanzarla. No hacerlo es plantear un proyecto político «muerto antes de nacer». ☐

36. La acumulación de esta riqueza no tiene por objetivo la acumulación en sí misma, sino la reproducción de la vida humana (una vida plena) y la de la naturaleza.

37. Un debate contemporáneo que resulta clave para la izquierda en todo el continente tiene que ver con la decisión de explotar o no recursos naturales no renovables (petróleo u otros productos de la minería). La situación es compleja. Por un lado, debe admitirse que negar esta explotación supone no pensar en una propuesta política viable. En el caso de Ecuador, sin el petróleo el país no podría encarar ninguna transformación social sostenible. Lo que sí se debe disputar es un pacto territorial para la no explotación en áreas con alta biodiversidad. ¿Por qué no hacer minería en territorios con alta erosión de la tierra? La racionalidad de la explotación o no de recursos naturales está asociada a una debida planificación y ordenamiento del territorio según sus paisajes ecológicos (por ejemplo, no explotar en áreas protegidas o territorios con fuentes que garanticen el derecho al agua).



TEMA CENTRAL



Los laberintos del capitalismo

Preguntas y respuestas sobre la crisis mundial

La creciente complejización de los instrumentos financieros implica cada vez más dificultades a la hora de evaluar las causas, las formas de contagio y los efectos diferenciados de las actuales turbulencias económicas y financieras. Este artículo se enfoca en algunas de estas interacciones y busca aportar luz sobre la relación entre el sistema financiero y la economía real, la desconexión parcial de los países emergentes de este mundo en crisis, los riesgos actuales y los problemas derivados de las respuestas aplicadas por los gobiernos de la eurozona.

PIERRE SALAMA

■ ¿Cómo operan la globalización y la liberalización comercial en la crisis?

La crisis actual se desarrolla en un contexto específico: el de la desindustrialización de muchos países, provocada y acelerada principalmente por la globalización comercial y, en segundo lugar, por la desregulación financiera. A excepción de Alemania, el conjunto de los países avanzados experimenta desde hace una década una desindustrialización masiva. Una parte importante de las economías emergentes también atraviesa esta desindustrialización, a diferencia de algunas grandes economías asiáticas. Detengámonos en el ejemplo de las economías emergentes. La desindustrialización de algunos de estos países, principalmente latinoamericanos, ocurre en un momento en

Pierre Salama: latinoamericanista y profesor de la Universidad de París XIII; fue director científico de la *Revue Tiers Monde* y es autor de numerosos libros y artículos publicados en francés, español, portugués, inglés y chino. Página web: <<http://perso.wanadoo.fr/pierre.salama/>>.

Palabras claves: crisis, desindustrialización, desregulación financiera, deslocalización, eurozona.

Nota: traducción de Lucas Bidon-Chanal.

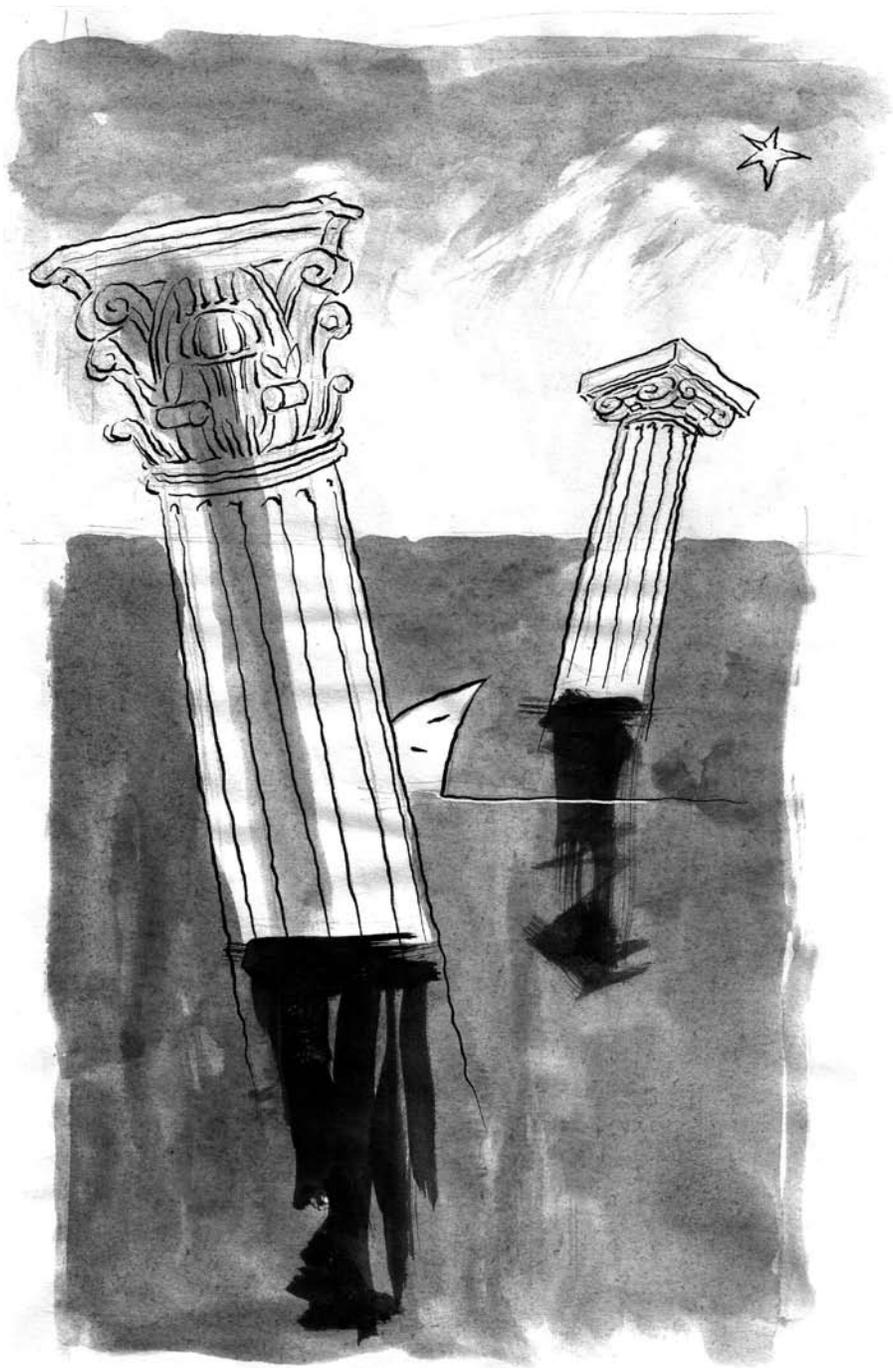
que el PIB per cápita es aún relativamente bajo. La crisis actual puede precipitar los procesos de desindustrialización ya iniciados en numerosos países y así conmocionar la estructura de la economía mundial. Sin embargo, China, el «taller del mundo», no puede beneficiarse mecánicamente de esta crisis. Por una parte, su modelo de desarrollo encuentra ya límites, y a menos que pueda dinamizar su mercado interno, su índice de crecimiento podría disminuir en provecho de otros países asiáticos cuya mano de obra sea menos costosa; por otro lado, la disminución en las importaciones de las naciones afectadas por la crisis puede debilitar el crecimiento de China y volver obsoleta la tesis del «desacoplamiento» de coyuntura. Eso es lo que vamos a precisar.

Las economías emergentes asiáticas registran un fuerte crecimiento desde hace unos 30 años, las latinoamericanas se restablecen desde hace una década con un crecimiento más o menos elevado, y ambos conjuntos tienden a converger. Pero no sucede lo mismo con las economías avanzadas. Esta situación no es totalmente nueva. En la década de 1930, las economías avanzadas sufrieron una crisis profunda y duradera. En cambio, durante el mismo periodo, ciertas economías exportadoras latinoamericanas conocieron una industrialización pronunciada, después de una fase de crisis. Pero las relaciones entre el «centro» y la «periferia» ya no funcionan como antes, puesto que el contexto mundial ha cambiado profundamente y hoy en día estos conceptos parecen anticuados y pierden su pertinencia. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la corriente estructuralista latinoamericana, basta con que estos vínculos se distiendan en virtud de una crisis en las economías avanzadas, o de una guerra entre países del centro, para que en algunas de las economías periféricas se produzca un proceso de sustitución de importaciones. La distensión de los vínculos significó históricamente una «oportunidad» de industrialización para países como Brasil, México o Argentina. La crisis estructural que atraviesan las economías avanzadas ¿ofrecerá hoy la misma oportunidad? La situación es diferente de la que se daba en los años 1930 por dos razones: por una parte, la dimensión financiera se convirtió en un parámetro en extremo importante; por la otra, se han intensificado los vínculos comerciales entre algunas economías emergentes (en particular de América Latina y Asia). El comercio de América Latina con China y la India ha aumentado mucho. Brasil ha trabado vínculos comerciales cada vez más estrechos con China: los intercambios entre estos países se han triplicado entre 2006 y 2010. Pero la relación es asimétrica: el gigante asiático exporta a Brasil esencialmente productos manufacturados y le compra materias primas, y lo mismo ocurre con Argentina. México no le vende casi nada a China, pero le compra productos manufacturados. Gracias

a la amplitud de sus exportaciones al país asiático, la restricción externa de Brasil y Argentina ya no funciona como límite a su crecimiento, como ocurría en el pasado. El elevado crecimiento chino «implica» en parte el de Brasil y Argentina, pero no el de México. No obstante, la crisis de la deuda pública y las amenazas de estallido de la eurozona y del euro como moneda de reserva debilitan el sistema bancario. La búsqueda de liquidez puede ampliar el contagio financiero y repercutir en las economías emergentes, cuyos márgenes de maniobra en materia de políticas contracíclicas son más estrechos hoy que en 2009, aun en China.

El crecimiento económico no es siempre sinónimo de industrialización creciente. En los países avanzados, a excepción de Alemania, tiene lugar un proceso de desindustrialización, sobre todo desde el comienzo de los años 2000. La desindustrialización no se limita a la pérdida del peso relativo de la industria en el PIB en beneficio de los servicios, sino que es causada por el avance de las deslocalizaciones de actividades industriales y servicios hacia economías emergentes y por la casi ausente política industrial por parte de los países en cuestión. La deslocalización, facilitada por la fuerte reducción de las medidas proteccionistas y la reducción del costo de los transportes, implica a menudo la posibilidad de burlar las dificultades legales que se imponen en los países desarrollados. En los países receptores, los salarios son mucho más bajos, los derechos sociales, casi inexistentes, y las exigencias respecto del cuidado del medio ambiente a menudo están ausentes o son más endebles; en fin, los beneficios son menos gravados. El libre comercio es, desde este punto de vista, una manera de esquivar legalmente las normas de los países de origen.

Mientras los países asiáticos experimentan un fuerte proceso de industrialización, otros, especialmente en América Latina, se encaminan hacia una «desindustrialización precoz». En Asia, aumenta el peso de la industria en el PIB, el valor agregado de los bienes producidos crece y su grado de complejidad tecnológica también; como resultado, el saldo de la balanza comercial de los productos industriales es ampliamente positivo. En América Latina, por el contrario, el peso de la industria disminuye de manera relativa en numerosos países y el valor agregado de los bienes producidos baja, así como su complejidad tecnológica; en suma, el déficit comercial de la industria de transformación crece, más concretamente para los bienes de contenido tecnológico medio y alto. Destinadas cada vez más a las economías asiáticas, las exportaciones de materias primas –en absoluto producidas con tecnologías de punta– compensan los déficits de la industria de transformación, permiten lograr un saldo positivo de la balanza



comercial y limitan el déficit de la balanza de cuenta corriente. La excepción es México, donde son las transferencias monetarias de quienes han migrado a Estados Unidos las que reducen fuertemente las obligaciones externas. A diferencia de los años 60 a 90, la obligación externa pesa menos a medida que aumentan los grados de libertad para definir una política económica en favor del crecimiento.

¿Qué hacer entonces? ¿Aceptar la desindustrialización precoz en nombre del libre comercio, rechazar esta desindustrialización practicando una apertura controlada o cerrar las fronteras esperando que los otros países sigan comprando lo que se produce? Gracias al apoyo de un Estado estratega, la economía «abierta» no es una economía «ofrecida» a los intereses exteriores como

**No es la apertura externa
 la que conduce a la
 «desindustrialización precoz»;
 la apertura a los mercados
 internacionales no es
 sinónimo de *laisser-faire*, ya
 que puede ser controlada ■**

ocurre en el caso del mero libre comercio. La apertura controlada permite transformar el tejido industrial y preparar al país para las mutaciones necesarias requeridas por la crisis. No es la apertura externa la que conduce a la «desindustrialización precoz»; la apertura a los mercados internacionales no es sinónimo de *laisser-faire*, ya que puede ser controlada. «Desindustrialización precoz» e industrialización

dependen de la manera de practicar la apertura. Si se permite a las fuerzas del mercado fijar los precios y orientar las inversiones, la probabilidad de que tenga lugar un proceso de «desindustrialización precoz» es alta y debilita las capacidades de resistencia frente a las crisis como la iniciada en los países avanzados en 2008.

■ ¿Qué diferencia la crisis actual de la gran crisis de 1929?

El paso de una gran crisis financiera a una recesión económica y luego, tras una corta reactivación, a una crisis de deudas soberanas portadora de riesgos recesivos en varios Estados de la eurozona es, sin duda, lo que diferencia la crisis actual de las economías avanzadas de la registrada en la década de 1930. Lejos de estar superada, la crisis abierta con la quiebra de Lehman Brothers resurge. La crisis financiera se desarrolla por el momento en dos etapas: una crisis de las instituciones financieras, seguida de una crisis de las deudas públicas en varios países de la eurozona, cada una de las cuales tiene un impacto negativo en el crecimiento de los países avanzados.

Mucho se ha escrito sobre los orígenes y las causas de la crisis de las instituciones financieras en los países desarrollados y sobre sus consecuencias fuertemente negativas sobre la actividad económica. El desarrollo de las burbujas especulativas y sus estallidos fueron facilitados por: a) la aprobación de normas contables que valorizan los activos a partir de sus precios de mercado (*mark to market*); b) la posibilidad para los bancos de vender de manera muy lucrativa los riesgos tomados, gracias a la creación y a la emisión de productos financieros derivados cada vez más complejos (titulización) y a la posibilidad de eliminarlos de sus balances; y, finalmente, c) las técnicas por lo menos «pícaras» de evaluar estos riesgos. Así concebida, la ingeniería financiera facilita una lógica de desbocamiento: el crédito se asigna cada vez menos a partir de las perspectivas de ingresos de los prestatarios y cada vez más a partir de la anticipación del valor de los patrimonios así adquiridos por esos prestatarios, como se pudo observar con las burbujas inmobiliaria y financiera. Para retomar una expresión de Hyman Mynski, se llega muy rápidamente a una financiación de tipo Ponzi¹ y se perfila la inestabilidad.

El sistema financiero implosiona con una desvalorización brutal de los activos, y lo que ayer favorecía la burbuja (el *equity value*, es decir, la diferencia positiva entre el valor de mercado de los bienes y las obligaciones asumidas) se transforma en su contrario (el valor de mercado se hunde y se sitúa por debajo del valor de los préstamos que deben reembolsarse). La inversión del ciclo causa un drenaje brutal de la liquidez. Las empresas financieras buscan liquidez para financiar un riesgo que antes era transferido y diseminado y hoy se revalúa fuertemente. Los bancos dejan de prestarse entre sí y, *a fortiori*, frenan brutalmente sus préstamos a las empresas y a los particulares. Con la desvalorización de su capitalización, las empresas no financieras ven cómo toda una serie de ratios «viran al rojo», y se enfrentan a una falta creciente de liquidez. La restricción crediticia (*credit crunch*) transforma la crisis financiera en una crisis económica. La crisis se vuelve *sistémica* y afecta incluso a empresas que muestran una gestión prudente –lejos de la manipulación que era lucrativa antes de la crisis– de los productos financieros titulizados. Finalmente, la crisis se propaga con fuerza más allá de las fronteras mediante los canales creados por la globalización financiera.

1. El esquema Ponzi es una operatoria fraudulenta construida a partir del pago a los inversionistas de intereses desmesurados que son financiados con el ingreso de nuevos aportantes de capital, por lo cual se forma una suerte de pirámide, que se «cae» si se corta el ingreso de nuevos participantes [N. del E.].

El efecto de contagio ha sido especialmente potente y afectó al conjunto de las economías mundiales. Los PIB sufrieron tasas de crecimiento negativas o fuertes ralentizamientos, y el desempleo aumentó por todas partes. En lugar del recurso a políticas de austeridad, cuyos efectos acumulativos habrían podido profundizar la crisis, el despliegue de políticas de reactivación permitió que el crecimiento se reanudara sensiblemente en ciertas economías emergentes y de manera modesta en las avanzadas. Algunos economistas pensaron entonces que lo peor de la crisis se había superado y que se podía volver al juego sin modificar las reglas. Al contrario, otros economistas, más lúcidos y generalmente a contracorriente, consideraron que la caída y la reanudación de los índices de crecimiento no eran más que una etapa de una crisis más amplia que podía tomar un perfil en forma de W o en V. Eso fue de hecho lo que

A diferencia de la registrada en los años 30, la actual no es una crisis de inversión excesiva en los países avanzados ni una crisis de realización, sino una crisis financiera causada por la desregulación «salvaje» del conjunto de los mercados, y en especial de los mercados financieros y del mercado laboral ■

ocurrió, pero con una particularidad difícilmente prevista: de una crisis de las deudas privadas se pasó a una crisis de las deudas públicas.

A diferencia de la registrada en los años 30, la actual no es una crisis de inversión excesiva en los países avanzados (las tasas de inversión no atravesaron ningún desbocamiento a lo largo de la década de 2000), ni una crisis de realización (el consumo disminuye poco gracias al aumento de los créditos en los países anglosajones), sino una crisis financiera causada por la desregulación «salvaje» del conjunto de los mercados, y en especial de los

mercados financieros y del mercado laboral. Como hemos visto, la debacle financiera comienza en efecto con una crisis surgida de las deudas privadas. Los bancos, en riesgo de sufrir iliquidez y quiebra, dejan de otorgarse préstamos entre sí y limitan mucho sus créditos a la economía, lo que precipita la crisis económica. La intervención del Estado para salvaguardar el sistema bancario tiende más a acentuar las deudas públicas y menos a financiar nuevamente el crédito a las empresas por parte de los bancos. Sin embargo, no es solo la ayuda del Estado al sistema financiero la que causa un aumento del endeudamiento público. Varios otros factores intervienen en ese aumento: a) la contrarrevolución fiscal iniciada en los años 80, que reduce la carga fiscal y, en consecuencia, los ingresos recaudados, además de aumentar la regresividad del sistema, al

mismo tiempo que acentúa la doble desigualdad entre los salarios, por un lado, y entre los salarios y las rentas del capital, por otro; b) la caída de los ingresos fiscales en sentido estricto y de las contribuciones al sistema de protección social, ligada al cambio de la coyuntura; c) el aumento del volumen de algunos gastos, como la ayuda al creciente número de desocupados, a las personas especialmente afectadas por la crisis y a las empresas en dificultades; d) la suba de las tasas de interés debida a los *spreads* en aumento, y el consecuente crecimiento del servicio de la deuda. Estos factores, a los cuales se agrega la ayuda masiva aportada al sistema bancario –y reembolsada en parte con la devolución de los beneficios bancarios, a excepción de las instituciones hipotecarias en EEUU–, explican el desborde de los déficits y del endeudamiento públicos.

Gracias a la liquidez así obtenida y a la ausencia de una efectiva regulación relativa al funcionamiento del sistema financiero, las instituciones financieras se volvieron hacia los mercados de obligaciones y, en particular, hacia los títulos públicos de los Estados que se mostraban más frágiles: Grecia, Italia, Portugal, España y Francia, lo que les permitió obtener beneficios considerables en una primera instancia. Pero al final esta especulación debilitó las cuentas de los bancos, cuando apareció más claramente la posibilidad de cesación de pagos. El riesgo de *default* alimenta el alza de las tasas que, a su vez, refuerza el riesgo.

Dado que no era posible prever el momento preciso del estallido, el cambio de coyuntura sorprendió a las instituciones financieras que, ávidas de ganancias, conservaron estos títulos convertidos en fuente de pérdidas. El valor de los bonos de los países más frágiles bajó, lo que se tradujo mecánicamente en un aumento de la tasa de interés (por la relación inversa existente entre el precio de un bono –de renta fija– y la tasa de interés). Esto explica que, posteriormente, las instituciones financieras pretendieran vender estos títulos y comprar otros, emitidos por países que se consideran más seguros aunque ofrezcan tasas de interés más bajas.

La diferencia con las crisis de las deudas públicas latinoamericanas de los años 1980-1990 es importante. En ese momento, los bancos pretendían adquirir divisas fuertes vendiendo moneda local; en el caso actual, estas transacciones se hacen en la misma moneda, el euro. Los bancos venden títulos emitidos por su propio país para comprar títulos emitidos por Alemania y algunos países de Europa del Norte. Los Estados afectados por esta desconfianza hacia sus títulos entran en una situación

de fragilidad. El aumento de las tasas de interés no les permite ya garantizar el servicio de sus deudas. Las políticas de austeridad decididas para reducir los déficits públicos producen el efecto opuesto al esperado: estos déficits aumentan mientras bajan los ingresos fiscales, a causa de la acentuación de la crisis económica provocada por esas políticas de austeridad. El aumento de las tasas y la reducción de los ingresos fiscales agudizan el problema de la reprogramación de las deudas, de sus reestructuraciones y de las garantías que pueden ofrecer los países de la eurozona. A falta de estas garantías y de una solidaridad interestatal, la imposibilidad de devaluar refuerza los riesgos de *default* de algunos Estados de la eurozona. A la inversa, la posibilidad de permitir la depreciación de sus monedas explica que países que no pertenecen a la eurozona (Japón, Reino Unido, etc.) no experimenten hasta ahora amenazas a su solvencia, aunque sus cocientes de endeudamiento (es decir, la relación entre sus deudas y su PIB) sean también elevados.

Otrora lucrativa, la especulación se convierte en fuente de importantes pérdidas. Es lo que se pudo observar durante el desarrollo de la crisis griega y su efecto dominó sobre los títulos italianos, e incluso franceses, en noviembre de 2011. Como los márgenes de maniobra de los gobiernos se revelan más reducidos en la fase actual que en la anterior, debido al endeudamiento masivo

Dos aspectos distinguen la crisis actual de la de 1929: la crisis de la deuda pública y la pertenencia de varios países a una zona monetaria cuyo funcionamiento sufre la ausencia de una política presupuestaria común ■

derivado, los riesgos de profundización de la crisis económica aumentan a la par que se pretende disminuir los déficits presupuestarios mediante políticas de austeridad.

Es difícil saber si la crisis que afecta desde hace unos años las economías avanzadas es más fuerte que la de 1929. En principio, son diferentes. Dos aspectos distinguen la crisis actual de la de 1929: la crisis de la deuda pública y la pertenencia de varios países a una zona monetaria cuyo funcionamiento sufre la ausencia de una política presupuestaria común. Solo medidas de carácter estructural pueden permitir superar esta crisis en forma duradera:

nencia de varios países a una zona monetaria cuyo funcionamiento sufre la ausencia de una política presupuestaria común. Solo medidas de carácter estructural pueden permitir superar esta crisis en forma duradera:

a) en cuanto a las instituciones financieras, la superación de la crisis pasa por una modificación sensible de la arquitectura financiera que establezca, como en los años 30, una separación entre las actividades de depósito-crédito de los

bancos y las de inversión y, de manera más general, por una reglamentación más estricta de sus actividades;

b) en cuanto al aspecto salarial y las distintas formas de solidaridad inter- e intrageneracionales y, tal como se hizo en la década de 1940 con el desarrollo de la protección social, parece necesario tener más en cuenta los bienes colectivos, los bienes no comerciales, y reducir las desigualdades de ingresos;

c) en cuanto a la intervención del Estado en las actividades económicas, se presenta como necesaria una coordinación de las políticas.

■ **¿Existe aún relación entre el sistema financiero y el sistema productivo?**

Contrariamente a la opinión más extendida, existen relaciones entre, por una parte, la desregulación financiera y el desarrollo de las finanzas y, por otra parte, el sistema productivo. Este último padece los efectos de aquel desarrollo; el crecimiento del PIB en la mayoría de los países avanzados se vuelve más o menos «flojo» según los niveles de endeudamiento de cada economía y las capacidades para exportar de ciertos países. El mercado laboral sufre las consecuencias: los salarios ya no siguen o siguen poco la evolución de la productividad, se busca la flexibilidad laboral y los empleos precarios, de tiempo parcial, se multiplican.

La financiación mediante el crédito a la inversión de las empresas y al consumo doméstico es necesaria para el desarrollo de la producción. Pero la desregulación de los mercados financieros permitió que se incrementaran excesivamente nuevos productos financieros que funcionan como instrumentos de comportamientos especulativos. La financierización de la actividad económica tiene un costo: la moderación salarial y, junto con esto, el aumento considerable de la distancia entre el 10% –o incluso el 1%– que percibe los salarios más elevados y los demás asalariados. Ilustremos los mecanismos que establecen una relación entre la desregulación financiera, el sistema productivo y el mercado laboral a partir de tres cuestiones: el crédito, la financierización y la moderación salarial.

a) El desarrollo del crédito a los particulares, muy importante sobre todo en los países anglosajones, va a la vez a estimular el consumo y la actividad inmobiliaria y a impulsar una financierización de la economía, gracias al endeudamiento masivo de los hogares y a la creación de productos financieros complejos, objetos de especulación. La moderación salarial observada

en estos países en los años 1990 y principios de los 2000 no ha acarreado un escaso crecimiento o un estancamiento económico, al contrario de lo que se pudo observar en otros países europeos. Antes bien, estuvo acompañada de un índice de crecimiento más o menos elevado y de una tasa de desempleo baja; el desempleo sigue siendo elevado en los países que recurren menos al endeudamiento interno, como Francia. Los créditos acordados compensan los efectos depresivos de la moderación salarial. La elevada demanda interna, sostenida gracias al crédito, permite la valorización del capital.

b) El efecto positivo de los créditos fáciles actúa también sobre el sistema financiero. En efecto, antes del estallido de la crisis de 2007-2008, la multiplicación de los productos financieros contruidos a partir de créditos concedidos y de derivados complejos, que se supone cubren los riesgos corridos, favoreció comportamientos especulativos que se tradujeron en la aparición de burbujas, sobre todo en el sector inmobiliario y en los mercados financieros. Al privilegiar especialmente el corto plazo, los fondos de inversión comenzaron a comprar empresas gracias a los efectos de palanca obtenidos de los créditos

concedidos, con dos objetivos: buscar una elevada rentabilidad inmediata y obtener más valor en la reventa.

El mundo de las finanzas parece separarse del de la producción. El dinero parece autonomizarse de lo real y el capital, volverse «ficticio», como lo analizó Marx ■

Como toda especulación, esta parece autoabastecerse, y así el mundo de las finanzas parece separarse del de la producción. El dinero parece autonomizarse entonces de lo real y el capital, volverse «ficticio», como lo analizó Marx. Tiende a desarrollarse la ilusión

de que el dinero produce dinero, independientemente de lo que ocurre en el mundo de la producción. El misterio del origen del dinero se oscurece y el desarrollo de los mercados financieros parece comparable al «milagro del pan» del que habla la Biblia. Mientras que en el sector financiero los salarios y las bonificaciones crecen vertiginosamente –por lo menos para los *traders* y otros analistas–, el poder de los accionistas aumenta y los dividendos pagados crecen, los salarios medios en la economía real se estancan o aumentan débilmente. El peso creciente de las finanzas en la gestión de las empresas tiene también consecuencias en la elección de las inversiones, ya que se privilegia a veces el corto y mediano plazo respecto del largo plazo. Los portafolios de inversión se desarrollan en detrimento de la inversión productiva en las empresas. El peso creciente de las finanzas y las exigencias de rentabilidad

de los mercados financieros influyen sobre la organización del trabajo y la administración (*management*) de las firmas.

c) La abundancia de liquidez y las bajas tasas de interés son factores de autonomía del mercado financiero, pero esa autonomía es solo aparente. Las relaciones que existen entre los mercados son más profundas de lo que parece cuando el análisis queda en un nivel superficial. La pregunta pertinente es pues de dónde vienen las ganancias o las pérdidas de las finanzas.

En el conjunto de los beneficios, los de origen financiero adquieren un lugar cada vez más importante. Así, provocan efectos colaterales sobre los salarios, el empleo y las formas de organización del trabajo, ya que la única manera de que puedan crecer suficientemente es que la parte de los beneficios en el valor agregado aumente y luego se estabilice a un nivel elevado, en detrimento de la parte correspondiente a los salarios. *El origen de las ganancias de las finanzas está pues en el trabajo.* Pero la desregulación financiera no es la única causa de la moderación salarial. La competencia con países de salarios bajos favorece también la búsqueda de un estancamiento salarial y una movilidad más elevada de los trabajadores, especialmente en los sectores que utilizan mucha mano de obra. Esto se debe a que el diferencial de productividad no es lo suficientemente elevado como para compensar el efecto de unos salarios relativamente altos, respecto de los de las economías emergentes, sobre el costo unitario del trabajo en los países avanzados.

■ ¿Es entonces la desregulación financiera la responsable de la crisis?

El círculo virtuoso crédito-producción-finanzas ha funcionado durante muchos años creando la ilusión de un régimen de crecimiento original y sólido, caracterizado por un bajo crecimiento de los salarios, o incluso un estancamiento, y una demanda interna constante. Este crecimiento se sostiene «al filo de la navaja» del endeudamiento interno. Cuando los deudores ya no pueden reembolsar los préstamos, el edificio construido a partir de esos préstamos se derrumba. Forzados a saldar sus deudas y a vender sus activos incluso a pérdida, los deudores sufren la caída del precio de estos activos y, arruinados, se encuentran cada vez más imposibilitados de desendeudarse. Los productos financieros construidos sobre la base de estos créditos –ellos mismos objeto de especulaciones y fuente de beneficios financieros muy importantes– son alcanzados por la desconfianza y considerados como activos «tóxicos», y pesan entonces sobre la rentabilidad de las instituciones financieras que los poseen. La llamada crisis de las hipotecas *subprime* transforma el círculo virtuoso en círculo vicioso.

Ante el temor de notas negativas por parte de las agencias de calificación, muchos gobiernos aplican hoy políticas de austeridad que, al afectar el empleo y los salarios, tienen un efecto recesivo y dificultan aún más la financiación del servicio de sus deudas ■

El precio que se debe pagar es entonces alto. La crisis financiera se transforma en crisis económica. Para salvar a los bancos y a las instituciones financieras amenazadas de derrumbe y reactivar el crecimiento, los Estados piden grandes préstamos. A partir de un cierto nivel de endeudamiento y déficit, disminuye la capacidad de esos Estados de financiar el servicio de sus nuevas deudas. Ante la amenaza de no poder hacer frente a sus obligaciones financieras y el temor de notas negativas por parte de las agencias de calificación, muchos gobiernos aplican hoy políticas de austeridad que, al afectar el empleo y los salarios,

tienen un efecto recesivo y dificultan aún más la financiación del servicio de sus deudas. El sistema financiero internacional sufre la amenaza de derrumbe y la crisis, al parecer superada en 2010, resurge esta vez con Estados inermes para hacer frente a la situación mediante una política de reactivación.

■ **¿Servirán las respuestas de la cumbre del G-20 y las propuestas de la eurozona para superar la crisis, o más bien la agravarán?**

Las propuestas de la presidencia francesa del G-20 de proceder a una reforma del sistema financiero internacional, colocar fuera de la ley los paraísos fiscales y establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, aunque fuera mínimo, siguen siendo «letra muerta». El orden del día de la cumbre de Cannes de 2011 fue alterado por la crisis del euro y la propuesta del gobierno griego, más tarde abortada, de convocar a un referéndum sobre el plan de rescate.

Esta reunión fue precedida por una cumbre de la eurozona y las decisiones tomadas en esa ocasión fueron saludadas por el G-20. Varios aspectos pueden destacarse en relación con el acuerdo del 27 de octubre de 2011 firmado por el conjunto de los responsables de la eurozona: a) la ineficacia de las políticas de austeridad aplicadas para solucionar el problema de las deudas públicas de algunos Estados de la eurozona; b) la demora en las propuestas y reformas, que llegaron demasiado tarde para aliviar la deuda de Grecia; c) el enorme poder de los mercados, que produjo la dimisión de los responsables políticos de Grecia e Italia –se puede destacar, de paso, la manera particularmente humillante en que han sido tratados los responsables políticos del Estado–; d) la existencia

de un federalismo *de facto* dirigido por Alemania y Francia que pone en cuestión la propia democracia.

Pero analicemos esto último más en detalle.

a) Las políticas de austeridad establecidas para superar los problemas planteados por las deudas públicas se oponen a las aplicadas luego de la crisis provocada por las deudas privadas (que fomentaban la reactivación). Como reacción a la crisis, los Estados ejecutaron políticas presupuestarias, rompiendo en cierta medida con las políticas monetarias restrictivas preconizadas por las instituciones internacionales en los años anteriores. Pero con la crisis de las deudas públicas, en lugar de continuar las políticas de reactivación y proceder a una reforma del sistema fiscal que se volvió regresivo, los gobiernos buscan reducir los gastos públicos con el fin de disminuir los déficits presupuestarios y, de esa manera, el endeudamiento. No obstante se corre el riesgo de que el resultado obtenido sea el contrario del esperado. La reducción de los gastos públicos puede contribuir a la recesión o, en el mejor de los casos, frenar el crecimiento. Los ingresos públicos no están a la altura de lo esperado y el déficit presupuestario no se puede reducir tanto como se desearía. La disminución del crecimiento se traduce entonces mecánicamente en un aumento del cociente de la deuda sobre el PIB y refuerza las dudas de los mercados sobre las capacidades de algunos países para saldar sus deudas (es el caso de España, Grecia, Italia luego de la reunión del G-20, y Francia, en menor medida).

b) Según el plan de ayuda previsto en julio de 2011, y habida cuenta del riesgo inminente de *default* en Grecia, las nuevas medidas decididas en octubre de 2011 por los responsables políticos de los países de la eurozona para reducir su deuda pública consideraron un aumento de la quita del valor nominal de los títulos (que pasa de 21% en julio a 50%), y confirmaron el préstamo, emitido a una tasa de interés sin *spread*, de € 100.000 millones financiado por el refuerzo del Fondo Europeo de Estabilización Financiera, como contrapartida del refuerzo de la política de austeridad. Como los Estados que otorgan los préstamos no pueden emitir moneda –una atribución que es exclusiva del Banco Central Europeo–, estos rescates aumentan su propio endeudamiento. Apenas implementado, este plan parece ya obsoleto. La reprogramación podría haber sido «eficaz» si se hubiera hecho un año antes y si no la hubiera acompañado el refuerzo de las políticas de austeridad. Estas últimas empeoraron la gestión de la deuda griega y han creado un fuerte sentimiento de injusticia. Al seguir siendo profundamente injusto el sistema fiscal y al multiplicarse las fugas de capitales y la evasión fiscal, el plan de austeridad afectó

sobre todo a algunas clases y protegió a las más acomodadas. La crisis se agudizó, lo que disminuyó los ingresos fiscales e hizo imposible atender el servicio de la deuda, más aún teniendo en cuenta el descontrol de las tasas de interés. A medida que se acerca el *default*, las tasas se desbocan y la especulación se vuelve más ventajosa, hasta el día en que el peligro de *default* se vuelve demasiado importante, los bancos buscan vender estos títulos y «se refugian» en títulos más seguros. La crisis de la deuda pública griega, seguida por la italiana y luego por la francesa, profundizó las distancias entre las tasas de interés pagadas por estos países y las de Alemania. Luego, al extenderse la crisis y volverse más creíble el efecto dominó, la desconfianza afectó también los títulos emitidos por el gobierno alemán, lo que a su vez generó el temor a una desaparición de la eurozona. Esto explica que se celebraran nuevas reuniones para prever distintos escenarios, como el de una eurozona con distintas velocidades, con el fin de proteger a algunas economías de los posibles efectos de contagio.

c) Hasta la víspera de la crisis de las deudas públicas, el federalismo, que implica el abandono de la unanimidad en favor de un sistema mayoritario de decisión en la Unión Europea, choca contra una profunda desconfianza en el conjunto de los gobiernos de la eurozona por dos razones: por un lado, significa un abandono parcial de la soberanía de cada uno de los Estados, que podrían verse frente a la imposición de una decisión tomada por la mayoría de los miembros; por el otro, implica el rechazo de la solidaridad de los más poderosos hacia los más débiles, especialmente en materia financiera.

Sin la coordinación de las políticas presupuestarias, sin el establecimiento de una armonización fiscal, la política monetaria común encuentra límites. La eficacia de esta última podría crecer si los préstamos de cada uno de los países que pertenecen a la eurozona se efectuaran en eurobonos. Si se mutualizaran las deudas, todos los países podrían entonces pedir préstamos a la misma tasa. La contrapartida de esta solidaridad sería una «socialización» de las decisiones, especialmente en materia presupuestaria, es decir, el abandono parcial de la soberanía sobre los presupuestos públicos nacionales y sobre la armonización de los sistemas fiscales. Estas modalidades, poco factibles hasta la crisis de la deuda pública, se abren paso al agravarse esta y al manifestarse el riesgo de implosión de la eurozona. Esto explica que se puedan buscar soluciones que, por un lado, permitirían un despliegue de ciertas formas de solidaridad y, por otro, no delegarían en uno o dos países la totalidad del poder. Tales soluciones parecen pasar hoy por la instauración de una Europa a distintas velocidades. Las decisiones que se deben tomar, aparentemente técnicas, son de hecho altamente políticas; por lo tanto, no deberían evitar el debate democrático. ☐

La crisis global: brechas que se reducen

*El desafío de los países
emergentes*

Mientras la mayor parte de las economías avanzadas sufre los efectos de la crisis financiera –y económica–, el bloque emergente ha ido cerrando algunas brechas con esas economías, al menos en lo que refiere a su producto bruto. Sin duda, las que se refieren a otras variables, como ingreso per cápita, gasto en tecnología o niveles medios de nutrición, siguen abiertas en favor del Norte. Aún así, el concepto de «década perdida», acuñado en el análisis de la periferia, es cada vez más utilizable para los países desarrollados. Frente a una crisis sin horizonte de solución, el G-7 repite una serie de expresiones de deseos, mientras las políticas de ajuste amenazan con generar efectos contrarios a los buscados.

JORGE EDUARDO NAVARRETE

A mediados del verano boreal de 2011, *The Economist* llamó la atención sobre el siguiente hecho:

El PIB real de la mayoría de las economías opulentas se encuentra todavía por debajo del nivel alcanzado al final de 2007. En contraste, el producto de las economías emergentes ha crecido en alrededor de 20% en el mismo periodo. Las calamidades del

Jorge Eduardo Navarrete: economista y diplomático mexicano. Es coordinador del Programa Prospectiva Global-Estudio de Futuros en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es embajador eminente del Servicio Exterior Mexicano. Fue subsecretario de Asuntos Económicos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (1979-1985) y de Política y Desarrollo en la Secretaría de Energía (1995-1997). Es miembro de la South Commission.

Palabras claves: crisis, depresión, economías avanzadas, BRIC, G-7, G-20.

mundo de los ricos han acelerado, de manera muy clara, la transferencia del poderío económico global hacia las economías emergentes.¹

De hecho, a partir de 1998, la contribución de estas últimas al producto global bruto medido a paridad de poder adquisitivo (PGB/PPA) es mayor que la de las economías avanzadas. En otras palabras, se modificó la brecha de producción entre los dos grandes segmentos de la economía mundial: ahora la aportación del Sur al producto mundial es mayor que la del Norte².

Como la Gran Recesión (2007-2009) se manifestó en disminuciones del PIB de distinta gravedad en prácticamente todas las 23 economías avanzadas, al tiempo que solo desaceleró el crecimiento de algunas de las mayores economías emergentes, tuvo también como consecuencia precipitar esa transferencia. Si se examinan las tasas de crecimiento económico real en 2010 calculadas a paridad de poder adquisitivo por el Banco Mundial (BM)³, el producto total de las 23 economías avanzadas en ese año resultó equivalente a 47,2% del producto global, lo que supone una diferencia a favor de las economías del Sur de 2,5% de la producción mundial así medida.

No obstante, esta transferencia –según la formulación del Fondo Monetario Internacional (FMI)– del poderío económico global hacia las economías emergentes dista de ser un fenómeno reciente. Al menos desde 1980, cuando el BM empezó a calcular las cifras nacionales de PIB a paridad de poder adquisitivo, el crecimiento ha sido en general más acelerado en las economías del Sur que en las avanzadas, y la diferencia a favor de las primeras se ha ampliado de manera bastante consistente.

Las proyecciones de crecimiento del BM para 2013 resultan congruentes con la tendencia observada en estos últimos años. En los próximos dos, el crecimiento medio de las economías del Sur será alrededor de cuatro puntos mayor que el de las avanzadas.

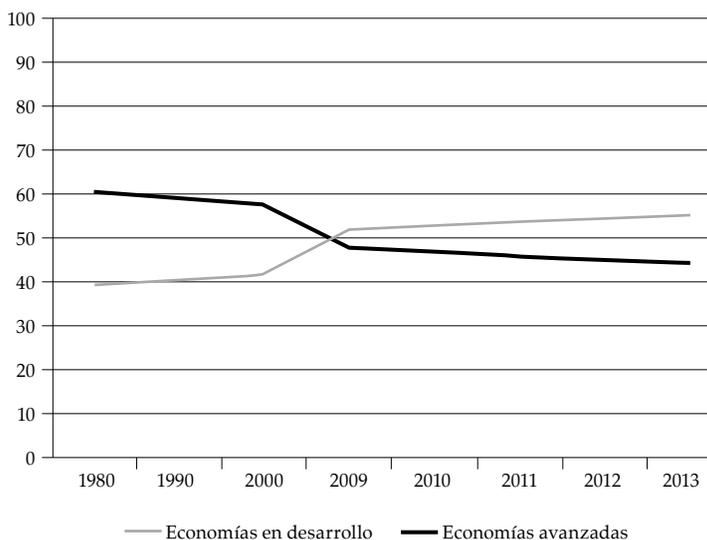
1. «Economic Focus – Why the Tail Wags the Dog – Emerging Economies Now Have Greater Heft on Many Measures than Developed Ones» en *The Economist on line*, 6/8/2011, <www.economist.com/node/21525373>.

2. Hay que advertir que para este análisis, la revista londinense vuelve a la formulación más tradicional de estos conjuntos: la antigua frontera Norte-Sur que caracterizó los debates económicos multilaterales en los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando el Sur planteaba un nuevo orden económico internacional. Este concepto ha reaparecido ahora en otros debates: 23 economías avanzadas, por una parte, y el resto de las economías del mundo por otra.

3. BM: *Global Economic Prospects June 2011: Maintaining Progress amid Turmoil*, BM, Washington, DC, 2011, p. 2, cuadro 1.

Gráfico 1

Participación porcentual en el PGB/PPA, 1980-2013



Fuente: BM: *World Economic Indicators 2011* y *Global Economic Prospects*, Junio de 2011.

En suma, como culminación de una tendencia de varios decenios, en los años finales de la primera década de este siglo, la brecha de producto total se invirtió en favor de los países en desarrollo. Otras brechas –como la de ingreso per cápita, gasto en ciencia y tecnología o niveles medios de nutrición, para mencionar unas cuantas– siguen abiertas a favor de los países avanzados, aunque en muchos casos con tendencia a cerrarse. Así, en la primera mitad del presente siglo, las diversas distancias entre el Norte y el Sur serán, cada vez más, brechas que se estrechan.

■ Una visión a mediados de 2011: actividad y empleo

El verano boreal de 2011 ha traído consigo, por otra parte, una serie de acontecimientos en extremo negativos y desalentadores. Actores claves del segmento avanzado de la economía mundial, en especial Estados Unidos y la Unión Europea, entraron en espirales perversas que dañaron, de muy diversas maneras y con diferentes grados de intensidad, tanto sus perspectivas económicas y financieras cuanto la funcionalidad de sus sistemas políticos y condiciones de gobernabilidad presentes e inmediatas. Las crisis de deuda, los programas de ajuste recesivo y las manifestaciones agudas de tensión social –que asolaron

Las crisis de deuda, los programas de ajuste recesivo y las manifestaciones agudas de tensión social –que asolaron en las décadas de 1970 y 1980 a diversas regiones del mundo en desarrollo– parecen haberse relocalizado en algunos países avanzados ■

en las décadas de 1970 y 1980 a diversas regiones del mundo en desarrollo, en particular América Latina y el Caribe– parecen haberse relocalizado en algunos países avanzados, sobre todo, pero no exclusivamente, en lo que se ha denominado la «periferia europea». Incluso la expresión «década perdida», que se acuñó para subrayar el impacto más amplio de aquellas crisis, ajustes y tensiones en Latinoamérica, ha empezado a emplearse para aludir a una consecuencia no del todo descartable, tres o cuatro decenios después, en algunas economías avanzadas. Las crisis de deuda y sus secuelas parecieron trasladarse al mundo desarrollado⁴.

El panorama en el mundo en desarrollo ofrecía, por contraste, una visión en general más favorable. Al iniciarse 2011, se esperaba que estos países continuaran impulsando la recuperación económica global, aunque con un empuje un tanto menor que el observado en 2010. La expansión esperada en las economías en desarrollo –6% real, inferior en un punto a la observada en 2010– se vería afectada por el debilitamiento previsto en el sector avanzado de la economía mundial y por la propia renuencia de muchos países en desarrollo a reforzar o incluso mantener los estímulos fiscales, la expansión crediticia y las demás políticas anticíclicas empleadas para combatir la recesión⁵. Más específicamente:

- Las perspectivas para África en 2011 permanecían optimistas, a pesar de algunos peligros, y se esperaba un crecimiento del orden de 5% real. Entre los factores positivos, destacaban el repunte de la demanda por exportaciones y de los precios de los productos básicos; las mayores entradas de recursos por inversión directa en industrias extractivas y ayuda al desarrollo; mayor actividad en el sector servicios, en especial telecomunicaciones, y una más robusta demanda de los consumidores. Esta recuperación estaba aún por trasladarse

4. V., por ejemplo, «Are the Advanced Economies Facing a Lost Decade?», *Oxford Economics, Special Report*, 7/2011.

5. V. Organización de las Naciones Unidas (ONU): *World Economic Situation and Prospects 2011*, 18/1/2011, disponible en <www.unctad.org/templates/webflyer.asp?docid=14329&intItemID=2068&lang=1>. Se trata de un estudio conjunto del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DESA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas.

al mercado laboral en la forma de abatimientos sensibles de la desocupación, sobre todo entre los jóvenes y los grupos vulnerables⁶.

- En América Latina y el Caribe, se esperaba que se mantuviera en 2011 la recuperación iniciada en la segunda mitad de 2009 tras la crisis internacional y que la región creciera 4,7% gracias al impulso de la demanda interna, lo que suponía un aumento de 3,6% del PIB por habitante y una reducción de la tasa de desempleo de 7,3% en 2010 a entre 6,7% y 7% en 2011. Para 2012, debido a un contexto internacional menos favorable, se preveía que la región crecería solo 4,1%⁷.

- Para las economías en desarrollo de Asia y el Pacífico, como reflejo de la consolidación del proceso de reactivación económica, el crecimiento previsto era 7,3% en 2011, alrededor de 1,5 puntos porcentuales menos que en el año precedente, debido al retiro de las políticas de estímulo fiscal, la adopción de políticas monetarias restrictivas y la debilidad del crecimiento en las economías avanzadas. La recuperación se dejó sentir en los mercados de trabajo a través de la creación de nuevos empleos, pero seguía habiendo preocupación por la calidad de estos y por la vulnerabilidad de los trabajadores⁸.

- Respecto de Asia occidental, la perspectiva de crecimiento para 2011 se presentaba relativamente robusta, con tasas de crecimiento del PIB del orden de 4,2% en los países del Consejo de Cooperación del Golfo y de 5,7% en las economías más diversificadas (previstas antes de los brotes de inestabilidad sociopolítica). Pese a esta perspectiva positiva para la economía y el crecimiento, el panorama social se mostraba negativo, y se consideraba probable que se registraran mayores deterioros en casi todos los indicadores de desarrollo social (pobreza, empleo e igualdad de género) y humano (salud y educación). Si bien la región parecía haber capeado bien la crisis financiera global, era de esperar que el desarrollo social se viera afectado en forma adversa en los próximos años⁹.

■ Recuperación a dos velocidades

Como resultado de dos acontecimientos casi simultáneos, ocurridos a principios de agosto de 2011 –la primera reducción de la calificación del crédito

6. Comisión Económica para África (CEPA): *Economic Report on Africa 2011*, CEPA, Addis Abeba, 2011, cap. 2, disponible en <www.uneca.org/era2011/>.

7. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): *Estudio económico de América Latina y el Caribe 2010-2011*, presentación de prensa, 13 de julio de 2011.

8. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico: *Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2011*, resumen ejecutivo, mayo de 2011, disponible en <www.unescap.org/pdd/publications/survey2011/download/survey2011-summary.pdf>.

9. Comisión Económica y Social para Asia Occidental: *Survey of Economic and Social Developments for the ESCWA Region 2009-2010*, prefacio, febrero de 2011.

soberano a largo plazo de EEUU por una de las principales agencias calificadoras y el riesgo inminente de que dos miembros centrales de la UE cayeran en insostenibilidad crediticia–, se produjeron caídas de alcance global en las bolsas de valores, que recordaron las registradas en 2008 y 2009 en los momentos álgidos de la Gran Recesión. Quedó en claro el riesgo inminente de que la economía global entrara en una segunda fase recesiva o, si se prefiere, de que la Gran Recesión volviera a manifestarse: el riesgo del *double-dip*.

El sector avanzado: crecimiento inestable y desempleo persistente. La recuperación económica, que empezó a activarse desde el tercer o cuarto trimestres de 2009, nunca ha llegado a consolidarse y a sostenerse por sí misma. Numerosos analistas registraron este hecho en la prensa financiera internacional. Uno de ellos, Nouriel Roubini, lo hizo en estos términos a principios de agosto:

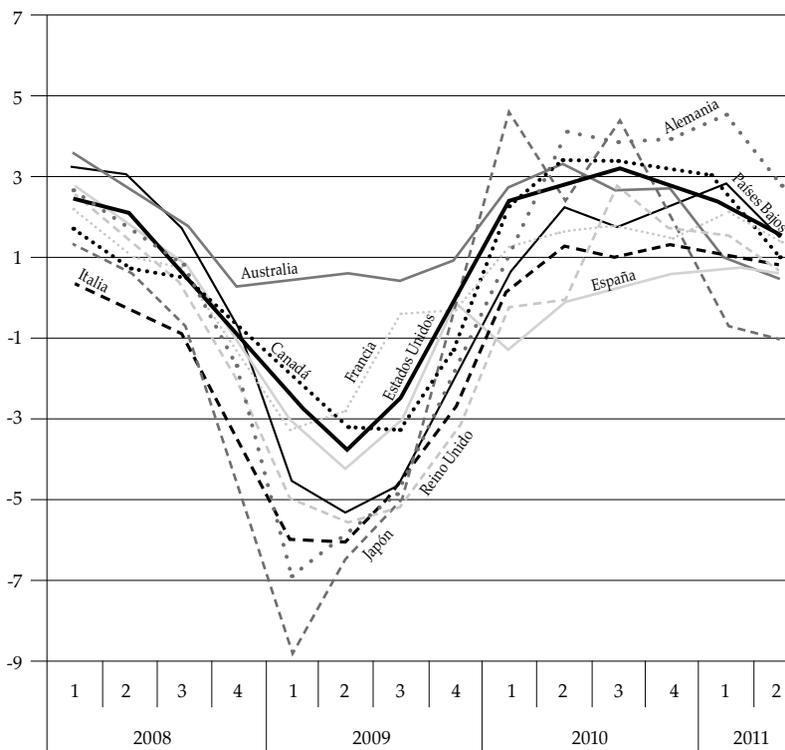
- la primera mitad de 2011 presenció una desaceleración del crecimiento –si no una contracción abierta– en la mayoría de las economías avanzadas;
- los datos recientes de EEUU han sido deplorables: creación de empleos muy limitada, depresión persistente del sector vivienda, confianza en descenso, con perspectiva de caer aún más, de las empresas y los inversionistas;
- del otro lado del Atlántico, la periferia europea se está contrayendo o, en el mejor de los casos, creciendo apenas. Es muy elevado el riesgo de que Italia, España, o ambos, pierdan acceso a los mercados de deuda;
- Reino Unido ha tenido un crecimiento aplanado a resultas de la austeridad, y un Japón estructuralmente estancado crecerá algunos trimestres, tras la recaída después del terremoto, solo para estancarse de nuevo cuando los estímulos se disipen¹⁰.

En efecto, como se advierte en el gráfico 2, después de los trimestres recesivos, que ocurrieron en general del cuarto de 2008 al cuarto de 2009 –con las excepciones de España y Reino Unido, donde la recesión se extendió hasta los primeros trimestres de 2010–, hubo un rebote inicial más o menos vigoroso en la mayoría de las economías avanzadas del G-20. No obstante, la reactivación se ha debilitado, en algunos casos de manera muy marcada, desde el último trimestre de 2010 y, en forma aún más generalizada, en los dos primeros de 2011. En general, la contracción se acentuó en el segundo respecto del primero.

10. N. Roubini: «Mission Impossible: Stop Another Recession» en *Financial Times*, 7/8/2011, <www.ft.com/intl/cms/s/0/f443f640-c115-11e0-b8c2-00144feabdc0.html#axzz1ijPdBWgw>.

Gráfico 2

G-20, economías avanzadas: tasas trimestrales interanuales
de crecimiento real del PIB (en porcentaje)



Fuente: elaboración del autor a partir de datos del cuadro «Output, Prices and Jobs» de la sección «Economic and Financial Indicators» de *The Economist*, varios números de 2008 a 2011.

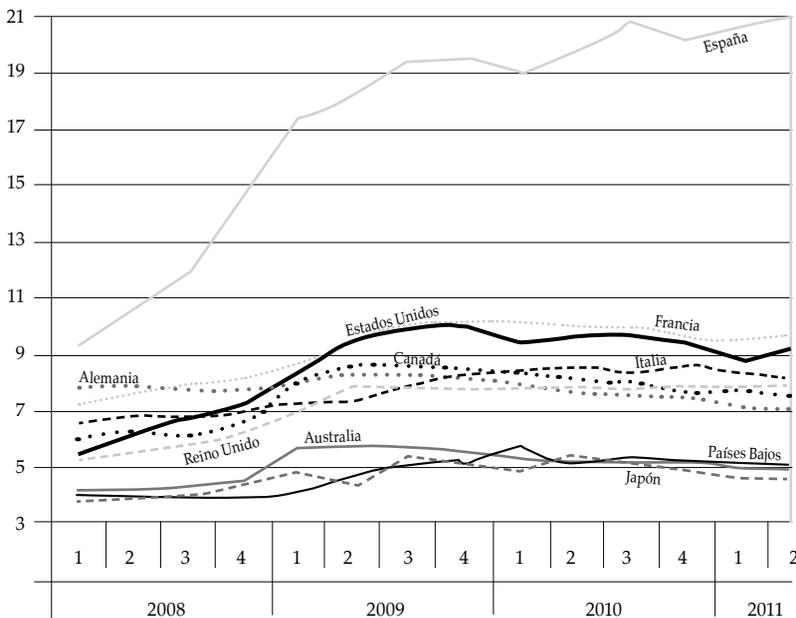
Las previsiones de crecimiento para 2011 y los dos años siguientes han sido revisadas a la baja y se ha impuesto la convicción de que el sector avanzado enfrenta una perspectiva de estancamiento o crecimiento sumamente bajo, si es que se logra evitar que reaparezca la recesión. Paul Krugman ha advertido que cabe esperar una «prolongada era de desastroso funcionamiento económico» a la que, en contraste con la histórica Gran Depresión, ha llamado la «Depresión Menor»¹¹.

11. «The Political Economy of the Lesser Depression» en *The Conscience of a Liberal*, blog de *The New York Times*, 16/7/2011, <<http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/07/16/the-political-economy-of-the-lesser-depression/>>.

Junto con la caída del producto, la Gran Recesión se manifestó en la explosión del desempleo. En este frente, la frágil recuperación no trajo consigo ningún alivio significativo. Como se muestra en el gráfico 3, las economías avanzadas del G-20 (con excepción de Alemania) registraron, al cierre del segundo trimestre de 2011 y tras varios trimestres de actividad económica creciente, tasas de desempleo sustancialmente iguales o solo marginalmente menores a las más elevadas que se observaron durante la contracción económica. La otra excepción es, desde luego, España, donde la contracción de la actividad se extendió hasta mediados de 2010 y el desempleo continuó ascendiendo de manera irrefrenable hasta mediados del siguiente año.

Gráfico 3

G-20, economías avanzadas: tasas de desempleo trimestrales o último mes del trimestre, 2008-2011 (en porcentaje)



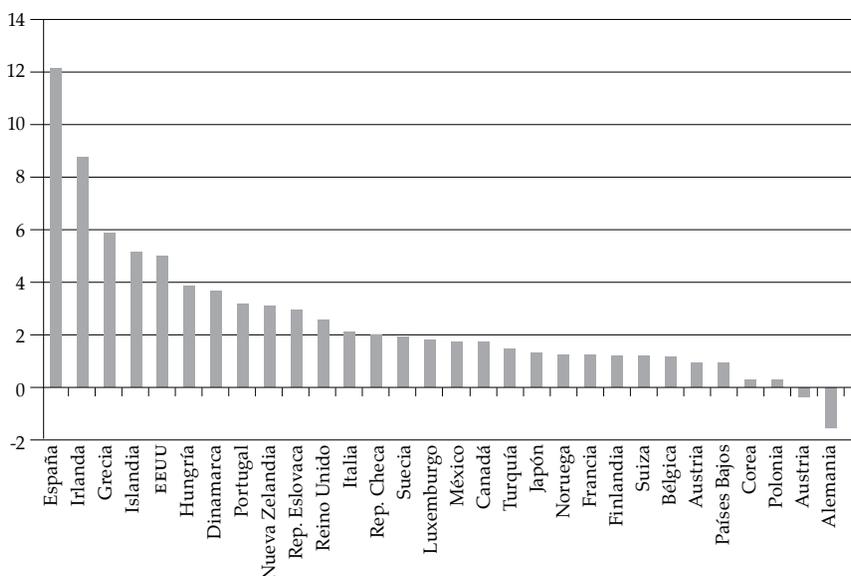
Fuente: elaboración del autor a partir de datos del cuadro «Output, Prices and Jobs» de la sección «Economic and Financial Indicators» de *The Economist*, varios números de 2008 a 2011.

Respecto de la persistencia del desempleo, un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha hecho notar que, transcurridos dos años desde el inicio de la recuperación de la actividad

económica, a finales de 2010, la tasa media de desocupación entre sus miembros «se encontraba aún próxima al máximo histórico alcanzado durante la crisis: dos puntos porcentuales o más por encima del nivel pre-crisis en 12 de ellos»¹². Además, entre el tercer trimestre de 2007 y el cuarto de 2010, el desempleo había aumentado en 28 de los 30 países de la organización.

Gráfico 4

**OCDE: cambio en puntos porcentuales de desempleo,
2007 (3^{er} trimestre)-2010 (4^o trimestre)**



Fuente: OCDE: ob. cit.

Nota: excepto Irlanda, Italia, México, Suiza y Turquía: 2007 (3^{er} trimestre)-2010 (3^{er} trimestre).

«Una preocupación central –agrega el estudio– es que en los países más severa y persistentemente afectados por niveles elevados de desempleo, con un número creciente de trabajadores desocupados por largos periodos, se producirá un extendido deterioro del capital humano, desaliento y abandono del mercado de trabajo»¹³.

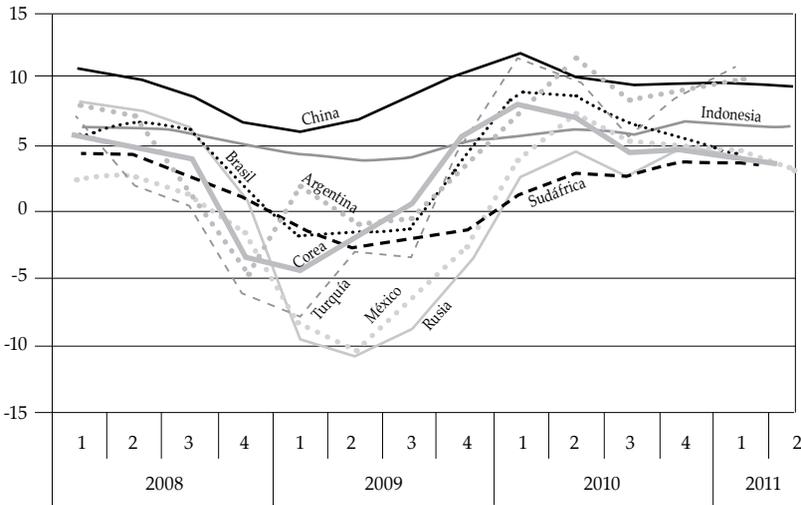
12. OCDE: «Persistence of High Unemployment – What Risks? What Policies?», *OECD Economics Department Policy Notes* N^o 5, 2011.

13. *Ibíd.*

El segmento emergente: reactivación sin empleo suficiente. En siete de las diez economías emergentes del G-20 para las que se dispone de cifras trimestrales de evolución del PIB¹⁴, la reactivación económica se inició desde el último trimestre de 2009. Las excepciones fueron México, Rusia y Sudáfrica, que siguieron registrando contracción en ese lapso. En general, la velocidad de la reactivación, medida en las tasas trimestrales de crecimiento del PIB observadas entre el primer o segundo trimestre de 2010 y, nuevamente, el primero o segundo de 2011, superó al crecimiento previo a la recesión, es decir al observado en los tres primeros trimestres de 2008. Las excepciones fueron la India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica, cuya reactivación no superó la dinámica de crecimiento previa a la crisis. Adviértase que la India e Indonesia no registraron contracción alguna, aunque vieron desacelerado su crecimiento.

Gráfico 5

G-20, economías emergentes: tasas trimestrales interanuales de crecimiento real del PIB, 2008-2011 (en porcentaje)



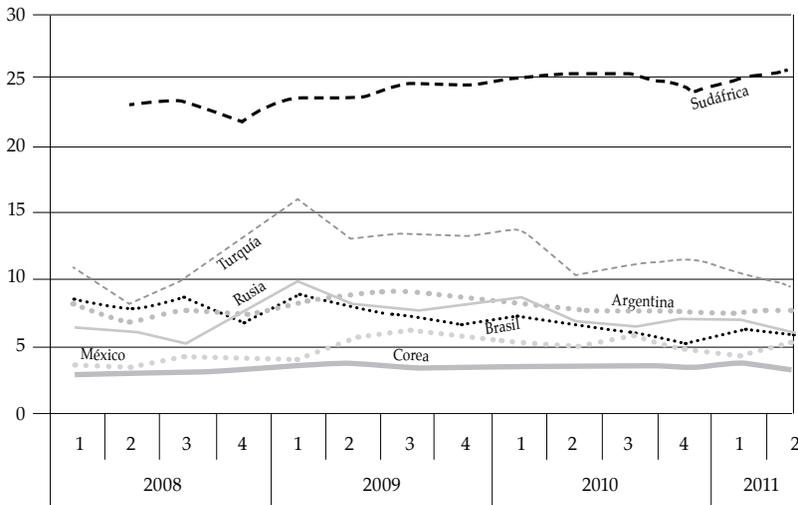
Fuente: elaboración del autor a partir de datos del cuadro «Output, Prices and Jobs» de la sección «Economic and Financial Indicators» de *The Economist*, varios números de 2008 a 2011.

14. Como es bien sabido, *The Economist* publica semanalmente, dentro de su sección «Economic and Financial Indicators», una utilísima tabla de cifras actualizadas sobre producto, precios y empleo en la que se advierte que Arabia Saudita, la décima economía no avanzada del G-20, solo divulga cifras anuales de crecimiento económico, lo que impide incluirla en el tipo de análisis que aquí se presenta. En cuanto a desocupación, las cifras de China y la India son también anuales y las de Indonesia, semestrales (febrero y agosto).

Por otra parte, la recuperación de las economías emergentes del G-20 ha sido en general más vigorosa que la del segmento avanzado. Siete de los diez países que integran el primer grupo han registrado tasas trimestrales de crecimiento promedio por encima de 5% entre comienzos de 2010 y el primer o segundo trimestre de 2011. Las excepciones fueron, nuevamente, los tres países en que se rezagó la recuperación –México, Rusia y Sudáfrica–, cuya reactivación se ha mantenido en tasas medias inferiores a 5%. Además, en el segundo trimestre se advierte un debilitamiento generalizado. La reactivación tampoco trajo consigo una mejora apreciable del desempleo en los países emergentes del G-20.

Gráfico 6

**G-20, economías emergentes: tasas de desempleo trimestrales
o último mes del trimestre, 2008-2011 (en porcentaje)**



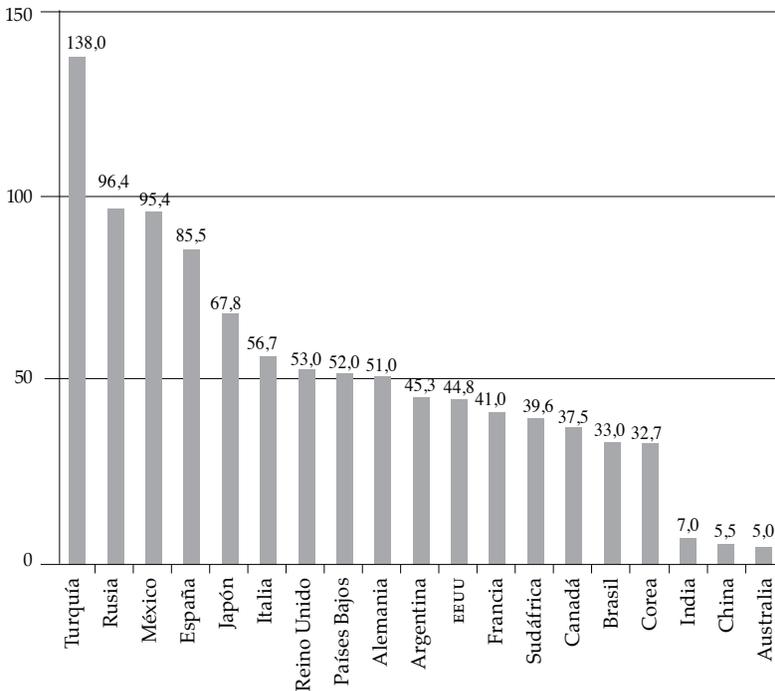
Fuente: elaboración del autor a partir de datos del cuadro «Output, Prices and Jobs» de la sección «Economic and Financial Indicators» de *The Economist*, varios números de 2008 a 2011.

Los niveles de desocupación observados en los trimestres de más aguda contracción durante la crisis no han registrado disminuciones significativas. Las excepciones, en este caso, se encuentran en China, Rusia y Turquía. En Sudáfrica, por el contrario, se observa un deterioro.

Índice de solidez de la recuperación. En un trabajo realizado en 2010¹⁵, construí un índice elemental de gravedad de la crisis en el G-20 que reflejaba, en un solo número, el grado de disminución de la actividad económica, medido por la caída trimestral del PIB; la extensión del periodo recesivo, medida por el número de trimestres con tasa negativa de crecimiento; y la destrucción o ausencia de creación de empleos, medida por el alza en las tasas de desocupación. Un índice más alto significa mayor gravedad en términos de pérdida de dinamismo económico, extensión de la recesión y aumento del desempleo. El resultado del ejercicio se presenta en el gráfico 7.

Gráfico 7

G-20: índice de gravedad de la crisis



Fuente: J.E. Navarrete: «Crisis y reactivación: rumbos y desvíos», cit.

Nota: la carencia de información impide calcular el índice para Arabia Saudita, que no divulga cifras trimestrales de crecimiento y ninguna de desocupación, y para Indonesia, que da a conocer solo ocasionalmente sus cifras de desempleo.

15. J.E. Navarrete: «Crisis y reactivación: rumbos y desvíos» en *Economía UNAM* N° 21, 9-12/2010, pp. 57-79.

De manera similar, puede construirse un índice de solidez de la recuperación. Para hacerlo, se suma la tasa trimestral promedio de aumento real del PIB en el periodo de reactivación –por lo general desde el tercer o cuarto trimestre de 2009 hasta el segundo de 2011– a la reducción de la tasa de desempleo entre el máximo alcanzado durante la crisis y el nivel observado en el segundo trimestre o al cierre de junio de 2011, y el resultado se multiplica por el número de trimestres con tasa positiva de crecimiento del PIB desde el inicio de la recuperación. Cuanto mayor sea la cifra resultante, la recuperación habrá sido más sólida; es decir, a una reactivación más vigorosa y sostenida en el tiempo se suma un mayor abatimiento del desempleo. Los resultados de este ejercicio aparecen en el gráfico 8.

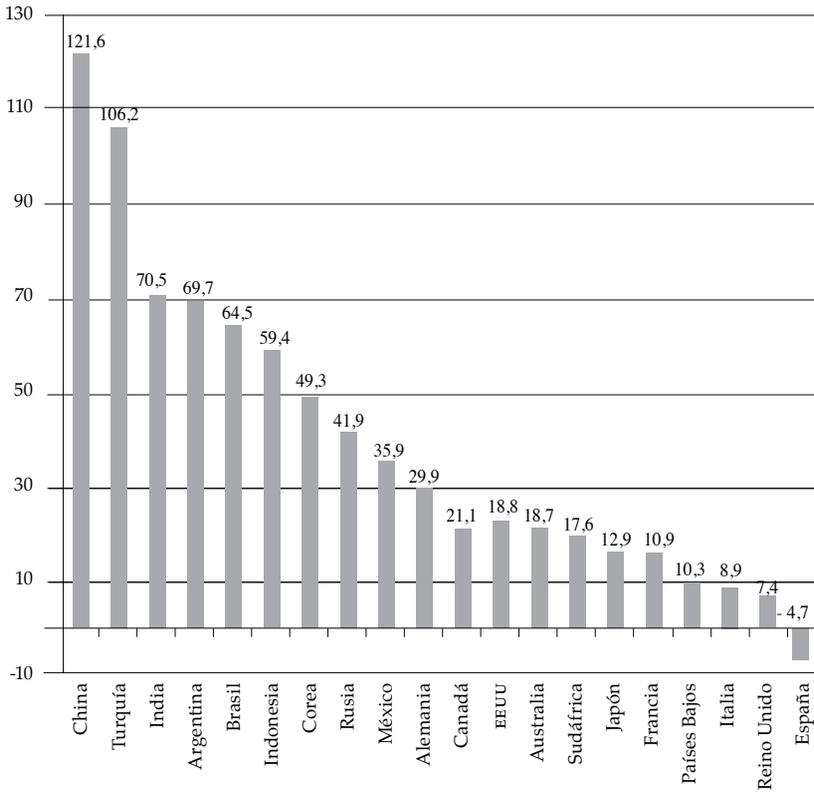
En general, el índice coincide con la visión intuitiva que se desprende de la información pública sobre la evolución de las economías del G-20. A continuación se enumeran algunas precisiones:

- China y la India se encuentran a la cabeza y las demás economías emergentes del G-20 ocupan la parte superior de la tabla, con los índices más altos, algo que no resulta sorprendente;
- la excepción de Sudáfrica se debe a los incrementos del desempleo, simultáneos a una leve recuperación del producto. El índice alto de Turquía, que registró la mayor gravedad de la crisis, refleja las tasas de crecimiento de dos dígitos alcanzadas en varios trimestres y la continuidad de la recuperación por siete trimestres consecutivos, aunque su tasa de desempleo se mantiene elevada;
- tampoco es sorprendente que la recuperación más sólida de los países avanzados del G-20 sea la de Alemania, ni que las más débiles sean la italiana y la británica.
- el índice negativo de España muestra la persistencia de la contracción económica hasta el segundo trimestre de 2010, la muy débil reactivación subsiguiente y, sobre todo, el alza imparable del desempleo, que solo registró una mejoría marginal en el primer trimestre de 2010 y ha empeorado en el resto del periodo considerado.

En su blog *Daily Chart* del 18 de agosto, *The Economist* se pregunta qué economías se han comportado mejor o peor desde el inicio de la crisis. La respuesta se vale de un solo indicador: el PIB per cápita en 29 países (que incluyen los considerados en los índices de gravedad de la crisis y de solidez de la recuperación) entre el último trimestre de 2007 y el segundo de 2011. Encuentra

Gráfico 8

G-20: índice de solidez de la recuperación



Fuente: elaboración del autor a partir de datos del cuadro «Output, Prices and Jobs» de la sección «Economic and Financial Indicators» de *The Economist*, varios números de 2008 a 2011.

Nota: la carencia de información impide calcular el índice para Arabia Saudita, que no divulga cifras trimestrales de crecimiento y ninguna de desocupación. Para China, la India e Indonesia se utilizaron cifras anuales o semestrales de desempleo.

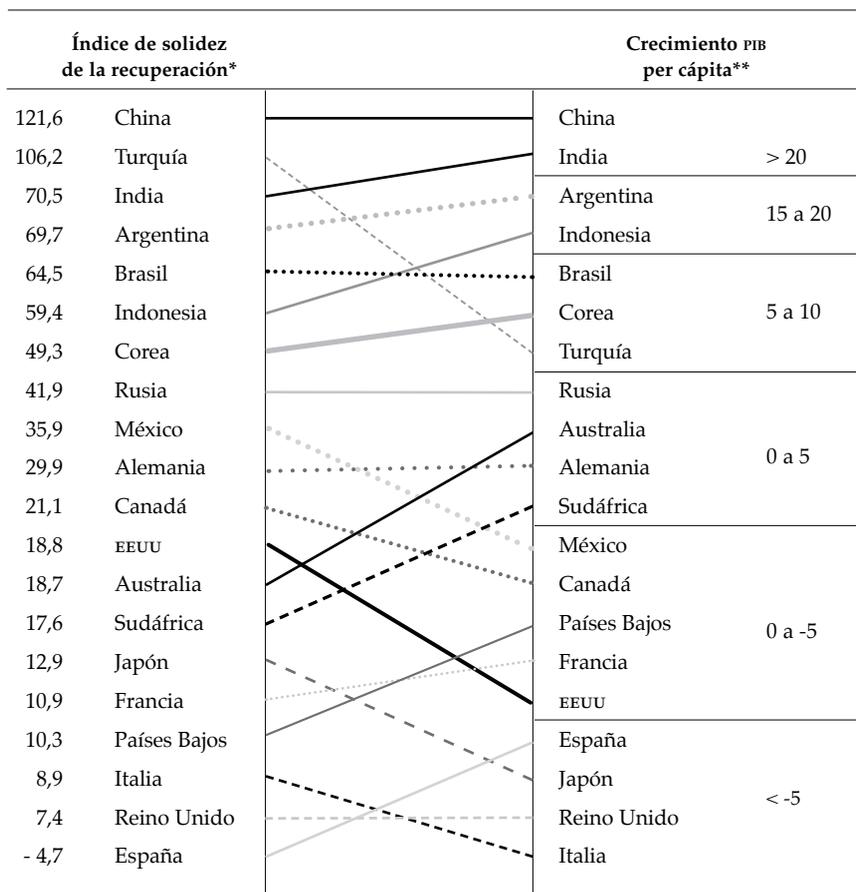
que «con esta medición, Canadá está aún 1% por debajo de su nivel antes de la crisis y EEUU, 3,5% por debajo. Entre los países del G-7, solo Alemania ha rebasado el nivel precrisis»¹⁶.

16. «GDP Recovery since the Recession: Deep Freeze» en *Daily Chart Blog, The Economist on line*, 18/8/2011, <www.economist.com/blogs/dailychart/2011/08/gdp-recovery-recession>.

Llama la atención la coincidencia de resultados entre ambas mediciones: los ocho países con mejor índice de solidez son también los ocho con mejor evolución del PIB per cápita y, en el otro extremo, con una excepción, los ocho países con índice más bajo coinciden con los de menor crecimiento del PIB per cápita en el periodo considerado, como muestra el gráfico 9.

Gráfico 9

Otra visión de la solidez de la recuperación



* V. el gráfico 8 y el texto de este apartado sobre la construcción, fuentes y sentido del índice.

** Crecimiento real entre el 4º trimestre de 2007 y el 1º trimestre de 2011. Fuente: «GDP Recovery since the Recession – Deep Freeze», cit.

■ El fin de semana euroestadounidense

A semejanza del «Mexican weekend» de agosto de 1982, que se tornó el momento de arranque de la crisis de la deuda de América Latina y desembocó en la década perdida y otras calamidades, podría señalarse el del 6 y 7 de agosto de 2011, casi tres decenios después, como el «fin de semana euroestadounidense», que puede marcar la recaída en la Gran Recesión. La víspera, Standard & Poor's redujo a AA *plus* la calificación de la deuda soberana de largo plazo de EEUU, y en la misma semana muchos de los índices de cotizaciones de las bolsas de valores del mundo registraron las caídas más severas desde los peores momentos de la crisis financiera que desembocó en la Gran Recesión. Como señaló un cronista:

Al tiempo que las preocupaciones financieras de Europa se extendían a nuevos países, EEUU y otros mercados globales experimentaban una de las semanas más tumultuosas de que se tenga memoria en las bolsas de valores. Los mercados reabrieron el lunes 8 con persistentes preocupaciones sobre Europa, ansiedad respecto de la perspectiva de una recaída recesiva y las desalentadoras secuelas de la histórica baja de calificación crediticia de EEUU por parte de Standard and Poor's días antes.¹⁷

En los días anteriores y siguientes al fin de semana euroestadounidense hubo muchas informaciones sobre los riesgos de extensión y contagio de la crisis, pero prácticamente ninguna respecto de intentos coordinados para hacerle frente. Se dio cuenta de consultas telefónicas entre altos funcionarios de ambos lados del Atlántico, pero lo que terminó anunciándose fueron acciones nacionales por parte de EEUU y algunas decisiones europeas. Los mecanismos de coordinación, en especial los del G-20, parecen haber quedado al margen de toda acción significativa.

En el fin de semana o en los días inmediatamente posteriores, tanto el G-7 como el G-20 propalaron sendas declaraciones. La primera, divulgada el domingo 7, estuvo a cargo del G-7¹⁸. Se trató de un texto cargado de retórica y ayuno de elementos de credibilidad. En sus 350 palabras, distribuidas en seis párrafos, se acudió, una vez más, a reiterar objetivos más generales con los que nadie puede estar en desacuerdo, ante la imposibilidad de anunciar acciones específicas sobre las que sus integrantes no logran ponerse de acuerdo.

17. Zachary A. Goldfarb y Neil Irwin: «Geithner, Bernake Have Little in Arsenal to Fight the Crisis» en *The Washington Post*, 14/8/2011.

18. La declaración del G-7 fue reproducida, *inter alia*, por el *Financial Times*, 8/8/2011.

El G-7 empieza por celebrar «las acciones decisivas adoptadas en EEUU y en Europa». De las primeras, es decir, del acuerdo para elevar el tope de endeudamiento público y acotar el gasto, espera «en el mediano plazo, una reducción sustancial del déficit», y de las segundas, relacionadas con la adquisición por el Banco Central Europeo (BCE) de bonos españoles e italianos, la estabilización de los mercados financieros. Prefiere no aludir a sus consecuencias sobre el crecimiento y el empleo, que en ambos casos bien pueden ser negativas.

En cambio, de los recortes de gasto adicionales anunciados por España e Italia, el G-7 espera que «refuercen la recuperación de la actividad económica y la creación de empleos». Olvida, desde

luego, que el ajuste recesivo en ambos países ya ha provocado debilidad de la reactivación y expansión del desempleo. En ambos se frenó la recuperación y se disparó la desocupación en el primer semestre de 2011, como parte del panorama de estancamiento con desempleo que vivió Europa en ese periodo.

Más adelante, el G-7 reitera su compromiso de «adoptar acciones coordinadas, cuando sea necesario, para asegurar la liquidez y apoyar la operación de los mercados financieros, la estabilidad financiera y el crecimiento económico». No alude a las políticas, acciones o medidas específicas que permitirían cumplir estos propósitos, pues no hay acuerdo suficiente al respecto, ni en Europa ni en el G-7. Cuando se refiere a acciones ya adoptadas, lo hace para subrayar sus limitaciones y condicionantes: «la participación del sector privado en Grecia es una medida extraordinaria, debida a circunstancias únicas, que no será aplicada en ningún otro Estado miembro de la zona del euro». Cabe preguntarse por qué en la coyuntura crítica del fin de semana euroestadounidense se juzgó necesario tranquilizar a los tenedores de bonos italianos, españoles y franceses, reiterándoles que cualquier arreglo no supondrá un «hair-cut». Quizá habría sido preferible intentar tranquilizar a los jóvenes desempleados que, entre otros grupos, manifestaron su descontento en numerosas ciudades europeas en este tórrido agosto.

Un día después del G-7, los ministros de Finanzas y los gobernadores de bancos centrales del G-20 divulgaron su propia declaración¹⁹. No deben haber requerido

El G-7 espera que «refuercen la recuperación de la actividad económica y la creación de empleos». Olvida que el ajuste recesivo en ambos países ya ha provocado debilidad de la reactivación y expansión del desempleo ■

19. V. «Statement of G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors – August 8, 2011» en <www.g20.org/Documents2011/08>.

debate alguno para adoptarla, pues se limitaron a copiar el primer y el último párrafos de la declaración del G-7, agregando una referencia al llamado «Framework for Growth» aprobado en alguna de sus pasadas reuniones.

Debe deplorarse esta triste muestra de subordinación del G-20 respecto del G-7. En la circunstancia más delicada y riesgosa por la que atraviesa la economía global desde los momentos más tensos de la Gran Recesión, el G-20 –autoproclamado como foro por excelencia para la cooperación económica y financiera internacional– no ha sido capaz de añadir una sola idea o planteamiento original respecto de lo señalado por los voceros de las siete economías dominantes, que ya ni siquiera lo son tanto.

El peligro de recaída en una recesión generalizada, cuya probabilidad ha aumentado, no ha llevado a una reformulación de fondo de las estrategias frente a la crisis, ni las nacionales ni la hasta ahora inexistente estrategia conjunta del G-20. En esta situación, se torna imperioso definir los términos de ese replanteamiento. Hay que abandonar las políticas de ajuste recesivo que se están imponiendo a los deudores como condición de las acciones de rescate financiero. Debe reconocerse que, en condiciones de estancamiento prolongado y desempleo agudo, será imposible restablecer la estabilidad y viabilidad de los sistemas financieros. La respuesta real a las crisis de deuda es la restauración del crecimiento económico y el abatimiento del desempleo. Es posible que el costo de las acciones para conseguirlos agrave temporalmente los desequilibrios financieros y lleve a resentir alguna presión inflacionaria, pero proporcionará también los marcos para restablecer, en el mediano plazo, condiciones sostenibles de estabilidad, financiera y de precios, en un clima de crecimiento sostenido y empleo suficiente²⁰.

■ Economías avanzadas y emergentes: una visión de largo plazo

La tarea de analizar la perspectiva de largo plazo ha sido asumida, sobre todo, por corporaciones financieras privadas, deseosas de orientar a sus clientes en materia de oportunidades de inversión en horizontes muy amplios. Los estudios

20. Una visión de contenido muy similar fue presentada por la recién designada directora-gerente del FMI en las páginas de opinión del *Financial Times* el 15 de agosto. *In nuce*, Christine Lagarde propone que se prioricen tanto la consolidación fiscal a mediano plazo como los estímulos inmediatos al crecimiento y al empleo, pues «¿quién va a creer que los compromisos de recorte [de gasto] van a sobrevivir un extendido estancamiento con alta desocupación e insatisfacción social prolongadas?». Ch. Lagarde: «Don't Let Fiscal Brakes Stall Global Recovery» en *Financial Times*, 15/8/2011, disponible en <www.ft.com/intl/cms/s/0/315ed340-c72b-11e0-a9ef-00144feabdc0.html#axzz1ijPdBWgw>.

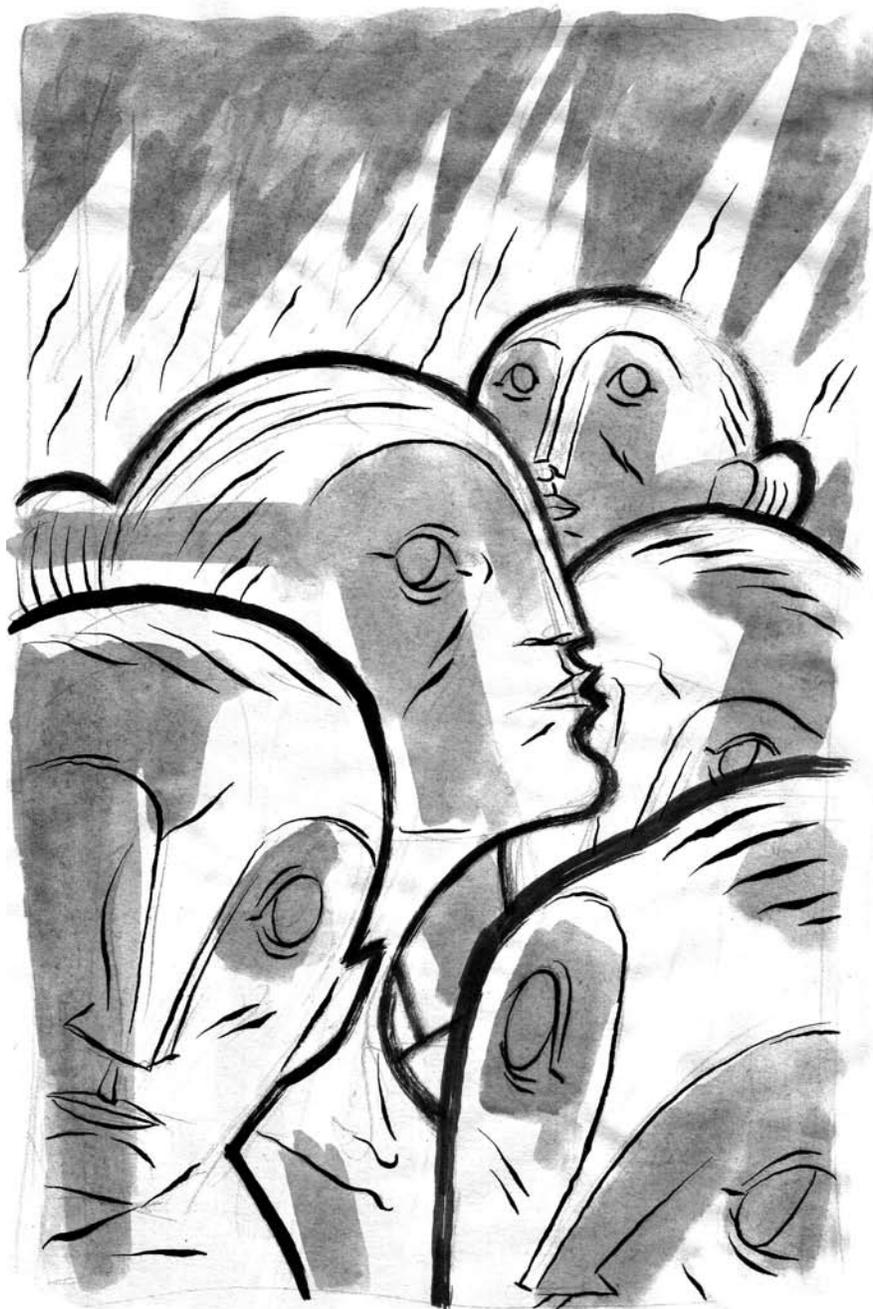
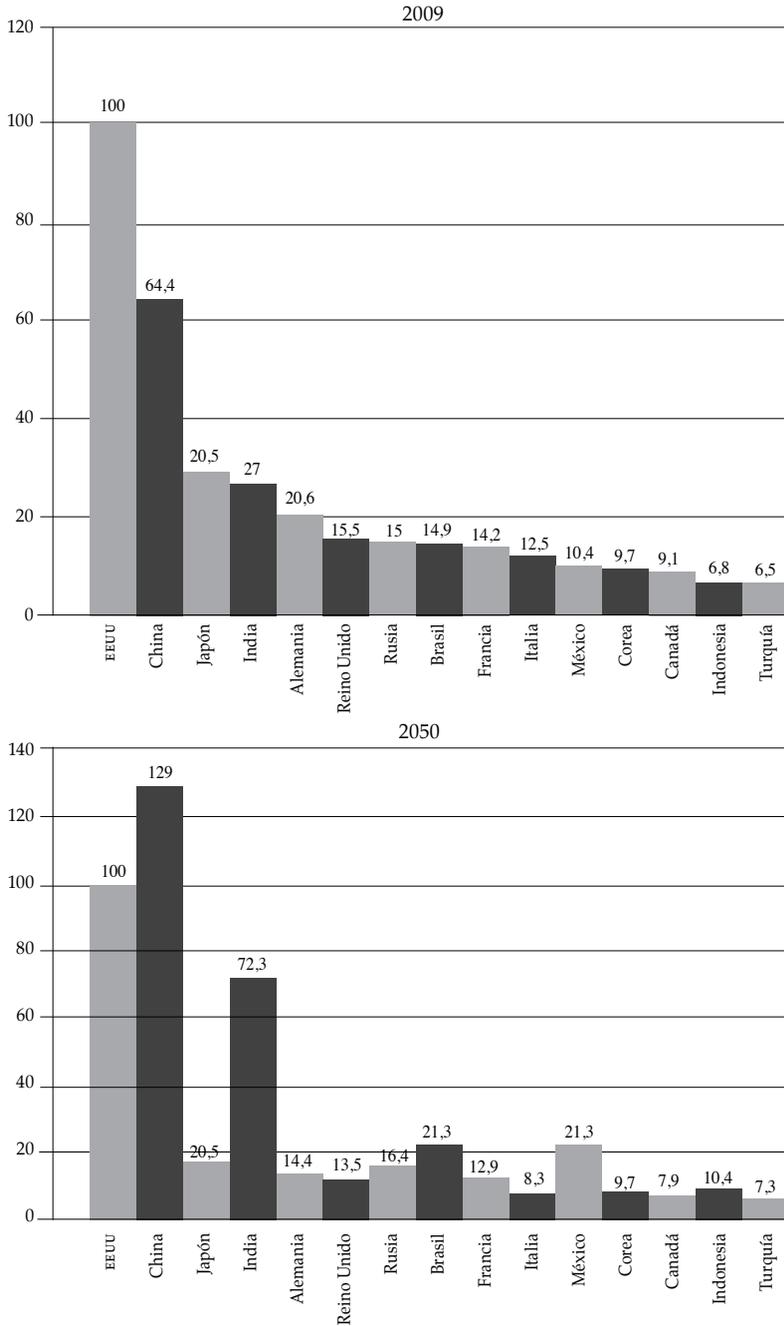


Gráfico 10

Tamaño de economías avanzadas y emergentes frente a EEUU, 2009 y 2050 (en porcentajes)



de prospectiva de Goldman Sachs (GS) y de PricewaterhouseCoopers (PWC) son los más frecuentemente citados. No he encontrado estudios de prospectiva amplios posteriores a la crisis, pues esta no ha concluido y sus repercusiones reales aún no decantan²¹. El más reciente análisis de prospectiva de PWC data de principios de 2008, tiene al año 2050 como horizonte y se concentra en las diez economías emergentes que, a su juicio, ofrecen las mejores perspectivas de avance económico²². Por su parte, GS, tras haber explotado la idea de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China), maneja ahora un conjunto de ocho economías (a los BRIC les suma México, Corea del Sur, Indonesia y Turquía), a las que denomina «mercados en expansión», sobre la base de proyecciones de crecimiento y otras variables económicas que datan de finales de 2005²³. Tanto GS como PWC comparan las economías seleccionadas con EEUU –como economía líder– y con los restantes países del G-7²⁴.

De acuerdo con las proyecciones de GS y, con leves diferencias numéricas, de PWC, en la primera mitad del siglo las economías emergentes –o mercados en expansión– ganan terreno respecto de la economía de EEUU y, por tanto, respecto de las restantes economías avanzadas y dentro de la economía mundial. En algunos casos, el avance es imperceptible (Corea, Turquía), en otros, relativamente modesto (Indonesia, Rusia), en otros, más importante (Brasil, México) y en los dos casos por todos conocidos (la India y China), espectacular. Además de que para 2050 China habrá rebasado ampliamente a EEUU, hay que advertir que la India, Brasil y México habrán superado a Japón y a las restantes economías avanzadas que ahora integran el G-7.

Entre los supuestos básicos de las proyecciones se encuentran algunos relativos a las políticas económicas que permitirían este comportamiento virtuoso de las economías emergentes:

21. Hay que tener en cuenta que los estudios de prospectiva disponibles fueron elaborados antes de la Gran Recesión. Además, en general, sus proyecciones y modelos no incorporan posibles acontecimientos catastróficos –como la Gran Recesión misma para la economía mundial o el terremoto, tsunami y accidente nuclear de 2011 para la economía de Japón– que se consideran impredecibles.

22. John Hawksworth y Gordon Cookson: *The World in 2050 – Beyond the BRICS: A Broader Look at Emerging Markets Growth Prospects*, PricewaterhouseCoopers, Nueva York, 2008, disponible en <www.pwc.com/en_gx/gx/world-2050/pdf/world_2050_brics.pdf>.

23. Jim O'Neill et al.: «How Solid are the BRICS», *Global Economics Paper* N° 134, Goldman Sachs, Nueva York, 1º de diciembre de 2005, revisado en mayo de 2011 en el video de Jim O'Neill: «Introducing 'Growth Markets'», <www2.goldmansachs.com/ideas/>.

24. Tanto México como Corea del Sur representan 1,6% del PIB mundial en términos nominales; Turquía e Indonesia, 1,2% y 1,1%, respectivamente; China es la segunda economía mundial, con 9,3% del PIB global (EEUU tiene 23,6%), mientras que Brasil, la India y Rusia tienen, en conjunto, 8%.

- altas tasas de inversión, que posibiliten el crecimiento del capital físico acumulado de la sociedad, en infraestructura e instalaciones productivas;
- crecimiento de la fuerza de trabajo, de suerte que su disponibilidad no se convierta en una restricción al crecimiento económico, como ocurrirá en las economías avanzadas;
- mejoramiento de la calidad de la fuerza de trabajo, resultado de altos niveles de cobertura del sistema educativo en todos los niveles y de una oferta suficiente de educación de calidad, y
- avance tecnológico sostenido, producto de una actividad dinámica en el sector de investigación y desarrollo científico-técnico, que potencie el crecimiento de la productividad total de los factores.

Como se advierte a primera vista, para cumplir estos cuatro requisitos esenciales que harían realidad la promesa de las proyecciones presentadas, los países emergentes requieren, más allá de la crisis, acentuar y mantener un ritmo de crecimiento sostenido y sustentable. De esta forma, las brechas continuarán estrechándose a favor de las economías emergentes en la primera mitad del siglo. ☐

REVISTA MEXICANA DE
**POLÍTICA
EXTERIOR**

Octubre de 2011

México, DF

Nº 93

OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA EXTERIOR EN AMÉRICA LATINA

Coordinadores: Guadalupe González González y Jorge A. Schiavon

ARTÍCULOS: **Rodrigo Morales Castillo**, Evaluación de la *gran estrategia* brasileña. **Arlene B. Tickner**, Opinión pública y política exterior en Colombia. **Beatriz Zepeda y María Gabriela Egas**, La política exterior de la *revolución ciudadana*: opinión y actitudes públicas. **Guadalupe González González y Jorge A. Schiavon**, Los mexicanos y el mundo: elementos para pensar y diseñar la política exterior. **Farid Kahhat**, Los peruanos y el mundo: opinión pública y política exterior. **Gerardo Maldonado y David Crow**, ¿Cómo se ubica América Latina en el mundo? Opiniones y actitudes de los latinoamericanos hacia países y regiones.

Revista Mexicana de Política Exterior es una publicación cuatrimestral del Instituto Matías Romero, Secretaría de Relaciones Exteriores. República de El Salvador Núms. 43 y 47, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc. México DF, CP 06080. Tel.: (55) 36 86 50 00 Exts. 8268 y 8247, (55) 36 86 51 63 y (55) 36 86 51 48. Correo electrónico: <imrinfo@sre.gob.mx>. Página web: <www.sre.gob.mx/imr/>.

La dimensión de género de la crisis

¿Existe una agenda feminista?

La desmercantilización del bienestar y la reubicación de las tareas de cuidado como categoría económica, articuladas a propuestas aún en construcción referidas al «buen vivir» y a críticas al desarrollismo tradicional, podrían ser elementos para constituir una agenda económica feminista.

No obstante, esta es todavía embrionaria y las políticas públicas, pese a algunos avances, siguen sin incluir una dimensión de género en el abordaje económico. Esta situación constituye un desafío para el feminismo y lo obliga a estudiar más en profundidad la relación entre la economía y las diversas fuentes de desigualdad.

ALMA ESPINO

Los impactos económicos y sociales de la crisis global en América Latina parecen haber sido menores a los esperados en un principio, y la recuperación, relativamente rápida. Luego de la contracción experimentada por las economías en 2009, ya en 2010 el PIB regional mostró una tasa de crecimiento de 5,9%, aunque con gran heterogeneidad entre países¹. Estos resultados se

Alma Espino: economista uruguaya. Es investigadora en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (Udelar).

Palabras claves: crisis económica, feminismo, políticas públicas, cuidados, desmercantilización, América Latina.

Nota: este artículo se basa en un trabajo realizado en el Área de Empleo y Distribución del Ingreso del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Udelar.

1. La evolución del producto para los 17 Estados sobre los que se cuenta con información permite observar que México y El Salvador registraron la mayor contracción entre 2008 y 2009 (en el caso de México, la recuperación estaba todavía a medio camino en 2010); tres países se encontraron en recesión durante cuatro trimestres (Costa Rica, Paraguay y Venezuela), Brasil y Chile durante tres trimestres y el resto recibió un impacto bastante menor (Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Perú). Cinco países tuvieron alguna reducción en la tasa de crecimiento y no entraron en recesión (Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Uruguay). Andrés E. Marinakis: «Explaining Latin America's Robust Recovery from the Crisis» en Organización Internacional del Trabajo (OIT): *The Global Crisis. Causes, Responses and Challenges*, OIT, Ginebra, 2011, disponible en <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_155824.pdf>; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): *La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir*, ONU, Santiago de Chile, mayo de 2010.

debieron en buena medida a la combinación de factores externos y a la implementación desde antes de la crisis de políticas de sostén a la producción, el empleo y los salarios, que incluyeron marcadamente el fortalecimiento de programas sociales y de inversiones intensivas en empleo y, en algunos casos, fijación de salarios mínimos para estimular la demanda interna. Mientras que en los países desarrollados las acciones para enfrentar la crisis privilegiaron la baja inflación, el déficit fiscal reducido y una política social moderada², las respuestas latinoamericanas procuraron apartarse de las recetas ortodoxas o centradas en el mercado.

Las opciones elegidas por las economías avanzadas podrían aumentar las restricciones a la demanda externa para los países de la región por la vía de la propagación de la austeridad. Asimismo, si las economías emergentes, especialmente China, que ha tendido a apoyarse en las exportaciones para impulsar el crecimiento, fallaran en fortalecer su propia demanda interna, esto acarrearía mayores problemas para gran parte del mundo emergente³. Este conjunto de observaciones advierte sobre posibles impactos todavía no completamente evaluados.

Los desafíos socioeconómicos de América Latina se relacionan tanto con la situación coyuntural derivada de la crisis como con sus problemas de largo plazo y factores de carácter estructural. El contexto previo a la crisis implicó un importante crecimiento del producto (entre 2003 y 2008), asociado al ciclo favorable de precios de materias primas y productos básicos. Esta evolución estuvo acompañada por una caída en el desempleo de más de tres puntos (de 11% a 7,4% en el promedio regional para el mismo periodo), mientras que los salarios se incrementaron, lo que dio lugar a una reducción del coeficiente de Gini promedio de la región en 2008 del orden de 4% en comparación con el de 2002. Pese a ello, cabe consignar que persiste el talón de Aquiles de las economías de la región: las desigualdades no se modificaron sustancialmente. No se registró un cambio significativo en los patrones distributivos prevalecientes y por tanto, la desigualdad continúa siendo mayor que en las demás regiones del mundo⁴.

2. Raymond Torres: «Responding to the Global Crisis: Achievements and Pending Issues», trabajo presentado en la conferencia «Key Lessons from the Crisis and Way Forward», OIT, Ginebra, 16 a 17 de febrero de 2011.

3. R. Torres: ob. cit.

4. Cepal: *Panorama social de América Latina 2008*, Cepal, Santiago de Chile, 2008, disponible en <www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/34732/P34732.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xslt>.

La tendencia al aumento en la participación en el empleo de los sectores de baja productividad se ha mantenido en el contexto regional, a expensas de los sectores de productividad media. Esto se relaciona con un rasgo distintivo de las economías latinoamericanas: la existencia de marcadas diferencias de productividad entre sectores productivos y dentro de cada uno de ellos. Las desigualdades en calidad y productividad de los puestos de trabajo entre distintos sectores de la actividad económica se reflejan en las desigualdades sociales, que obedecen a rendimientos muy desiguales entre trabajadores y entre capital y trabajo⁵.

Las desigualdades de ingreso derivadas de las divergencias en las remuneraciones por trabajo no se explican solamente por diferencias de productividad. En estas inciden otros factores de discriminación y segregación como los étnicos y raciales, que a su vez en todos los casos se ven reforzados por las desigualdades de género⁶. En este sentido, las desventajas que presenta la inserción laboral en los sectores de baja productividad en términos de ingresos, condiciones laborales y acceso a la seguridad social son mayores para las mujeres. Una prueba de esta afirmación se aprecia en el área de servicios, que es el sector de la actividad económica con mayores diferencias de productividad, predominio de empleos de baja calidad y estrategias de supervivencia diversas y, a la vez, la que más crece. Este sector es también el que incorpora más mujeres en todos los países de la región; la presencia femenina es fuerte en las actividades informales y los servicios peor remunerados y con peores condiciones laborales como el empleo doméstico, ocupación que concentra el mayor porcentaje de la fuerza de trabajo femenina.

Si bien la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en promedio se ha ido reduciendo, algunos estudios indican que la parte no explicada de la diferencia

Las desigualdades de ingreso derivadas de las divergencias en las remuneraciones por trabajo no se explican solamente por diferencias de productividad. En estas inciden otros factores de discriminación y segregación como los étnicos y raciales, que se ven reforzados por las desigualdades de género ■

5. Cepal: *La hora de la igualdad*, cit.

6. Ver Lourdes Benería: *Género, desarrollo y globalización. Por una ciencia económica para todas las personas*, Hacer, Barcelona, 2005, y Cepal: *La hora de la igualdad*, cit.

se mantiene⁷ o incluso aumenta⁸. Si el nivel socioeconómico de origen y el nivel educacional marcan considerablemente los destinos laborales de baja o alta productividad⁹, esto se refuerza para las mujeres, que en promedio necesitan un número bastante superior de años de estudio que los hombres para lograr insertarse en empleos formales¹⁰.

El empleo informal, que incluye aproximadamente a la mitad de la población ocupada en zonas urbanas, ilustra las situaciones de precariedad de los mercados laborales. El mantenimiento –y el aumento durante las crisis– de la proporción de trabajadores en sectores de baja productividad repercute en los niveles de equidad de la sociedad, ya que tiende a generar una distribución más desigual de los salarios, a favor de un grupo reducido de trabajadores que tienen más capacidades y están más plenamente insertos en actividades de mayor productividad.

Pero si bien una parte significativa de la desigualdad de la región se debe a los resultados del mercado de trabajo, determinados en gran medida por el modelo económico elegido por cada país y la dinámica de la productividad, las desigualdades de género no se explican solamente por lo que sucede dentro del mercado laboral. Pese a que la economía reproductiva se asume como dada, y su funcionamiento, como carente de articulación con la economía de mercado¹¹, ambos operan sobre la dinámica económica y sobre las posibilidades de las mujeres de aprovechar oportunidades. Precisamente, la inserción laboral está condicionada por desigualdades previas a la entrada en el mercado de trabajo, en parte debidas a las formas de organización de la reproducción social prevalecientes. La distribución sectorial de la fuerza de trabajo, si bien obedece a determinantes de oferta, depende en gran medida de las condiciones de la demanda y de su interrelación con las

7. Juan Pablo Atal, Hugo Ñopo y Natalia Winder: *New Century, Old Disparities: Gender and Ethnic Wage Gaps in Latin America*, IDB Working Paper Series N° 109, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC, 2009.

8. Máximo Rossi y Cecilia González: «Feminización y diferencias salariales en Uruguay en el periodo 1986-1997», Documento de Trabajo N° 4/07, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar, Montevideo, 2007.

9. Cepal: *La hora de la igualdad*, cit.

10. Valeria Esquivel: «Género y diferenciales de salarios en la Argentina» en Marta Novick y Héctor Palomino (coords.): *Estructura productiva y empleo. Un enfoque transversal*, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Buenos Aires, 2007.

11. William Darity Jr.: «The Formal Structure of a Gender-Segregated Low-Income Economy»; Bernard Walters: «Engendering Macroeconomics: A Reconsideration of Growth Theory» en *World Development* vol. 23 N° 11, 1995; y Diane Elson: «Gender Awareness in Modeling Structural Adjustment», todos en *World Development* vol. 23 N° 11, 1995.

desigualdades de género, amparadas en normas, costumbres y factores de discriminación, pero también en esa forma de organización.

■ Mercado laboral y desigualdad de género

La situación de las mujeres y las desigualdades de género en la región se relacionan tanto con las tendencias de largo plazo y las características estructurales de las economías como con la coyuntura planteada por la crisis. Con respecto a lo primero y como ha sido mencionado, la participación en el empleo de hombres y mujeres presenta en América Latina notables diferencias asociadas a los condicionamientos que imponen la división sexual del trabajo en los hogares y los factores institucionales. En lo que refiere a la crisis y su dimensión de género, precisamente debido a las particularidades de las economías respecto a su inserción internacional y a su situación previa, se han registrado impactos diferentes. Por tanto, hablar de la crisis y de cómo esta afectó las desigualdades de género requiere prestar atención a los mecanismos específicos de transmisión del fenómeno y a los avances de las mujeres en términos de educación, inserción laboral, autonomía económica y otras formas de autonomía que pueden contribuir a contrarrestar o amplificar tales impactos.

Hablar de la crisis y de cómo esta afectó las desigualdades de género requiere prestar atención a los mecanismos específicos de transmisión del fenómeno y a los avances de las mujeres que pueden contrarrestar o amplificar tales impactos ■

La oferta laboral tiene comportamientos diferenciados en el ciclo económico, y las diferencias también se relacionan con las conductas laborales predominantes entre hombres y mujeres. Los cambios en el empleo femenino (entrada) o el desempleo (salida) dependen de la composición de los sectores y las ocupaciones que resultan afectados por los ciclos económicos. La mayor flexibilidad de la fuerza de trabajo femenina –debido a los condicionamientos descriptos en relación con el trabajo doméstico y de cuidado¹² y a factores culturales– explica en parte su predominio en los sectores de baja productividad (autoempleo, microempresas, servicios con bajas remuneraciones y bajos

12. Debe considerarse además que en el caso de América Latina prácticamente no existe inversión en infraestructura de apoyo a las tareas domésticas y de cuidados de carácter público ni en corresponsabilidad con las empresas.

**La oferta laboral
femenina tiende a
comportarse de manera
procíclica en momentos
de crecimiento y puede
hacerlo de manera
anticíclica, por efecto
trabajador adicional
(sustitución), en la
recesión y la crisis ■**

niveles de calificación); además, en los momentos de crisis, se ve facilitada la entrada en este tipo de ocupaciones¹³.

Esto es, condicionada por la característica de mano de obra secundaria (por la práctica y la ideología predominantes), la oferta laboral femenina tiende a comportarse de manera procíclica en momentos de crecimiento y puede hacerlo de manera anticíclica, por efecto trabajador adicional (sustitución), en la recesión y la crisis. Por tanto, dependiendo de la racionalidad del ciclo económico, puede haber comportamientos procíclicos

o contracíclicos. La información empírica permite verificar que la situación planteada por la crisis en los mercados laborales de la mayor parte de los países de la región, y en particular en los más afectados por ella, hizo que entre las mujeres predominara el efecto «trabajador secundario»: la tasa de actividad masculina disminuyó debido al empeoramiento de las condiciones del mercado laboral, y la femenina se mantuvo y aumentó en algunos casos.

El análisis de la información disponible, en particular con referencia al mercado laboral y los índices de pobreza, permite establecer algunas conclusiones probablemente todavía preliminares. Los impactos de la crisis económica de mayor visibilidad se han traducido en el aumento del desempleo para hombres y mujeres en casi todos los casos, y las brechas de género se han mantenido o incluso se ampliaron. En la mayor parte de los países disminuyeron los ingresos personales, de los hogares y, por lo tanto, el bienestar. La pérdida de puestos de trabajo asalariados en el sector formal de la economía producida en varios países (El Salvador, Ecuador, México) deja un mayor porcentaje de la población sin cobertura de seguridad social, con lo cual, además de los problemas derivados de la caída en los ingresos y el bienestar en el presente, se generan pérdidas de beneficios sociales en el futuro, al momento del retiro. Por su parte, los aumentos en la proporción de trabajadores por cuenta propia –especialmente entre las mujeres– y en el subempleo visible en algunos países (México, El Salvador) ayudaron a evitar mayores tasas de desempleo.

13. Korkut Ertürk y Nilüfer Çağatay identifican en los momentos de crisis una tercera modalidad dada por el reemplazo de los hombres por parte de las mujeres en puestos de trabajo tradicionalmente masculinos. K. Ertürk y N. Çağatay: «Macroeconomic Consequences of Cyclical and Secular Changes in Feminization: An Experiment at Gendered Macromodeling» en *World Development* vol. 23 N° 11, 1995.

La gravedad de los efectos negativos de la crisis sobre la situación de las mujeres estará determinada por la profundidad y extensión de aquella en el tiempo. Asimismo, es fundamental en este sentido la capacidad de los gobiernos para garantizar un umbral mínimo de bienestar (acceso a los recursos productivos, trabajo decente, entre otros) para todos los ciudadanos, tanto mujeres como hombres. Los impactos de género pueden ir más allá de los años de crisis, si se frenan los (lentos) progresos previos, o si aumentan las brechas de género existentes¹⁴.

Las desigualdades imperantes, la insuficiencia de políticas públicas dirigidas a la equidad, la falta de una perspectiva de género en las políticas de recuperación económica son un problema para las mujeres, pero también podrían ser un problema para el bienestar general y la eficiencia económica. Con excepciones, las medidas tomadas para enfrentar la crisis procuraron con mayor o menor eficacia atender la situación de emergencia. En general, se previó mantener e incluso expandir el gasto público, y se observó una fuerte incidencia de las medidas orientadas a sostener el empleo y a aumentar o mantener las políticas sociales focalizadas, con marcado énfasis en las transferencias monetarias, en algunos casos a través de la expansión de los programas existentes. Pese a que los efectos de estas políticas pudieron haber influido en menores pérdidas de bienestar en general, y por tanto, esto puede haber sido beneficioso para las mujeres, los análisis de las políticas en términos generales no muestran la consideración de las desigualdades de género en la economía y la sociedad. Además de ponerse en evidencia la falta de avances en la transversalización de una perspectiva de género en las políticas económicas y sociales, parece confirmarse la debilidad de los mecanismos oficiales para la equidad de género para incidir en las políticas gubernamentales.

En particular, ciertos factores estructurales que operan sobre las causas de la discriminación de género en el mercado laboral no han sido tomados en cuenta de manera conveniente (tampoco en el periodo inmediato anterior de acelerado crecimiento) como parte de las políticas de recuperación. O sea, no se han privilegiado medidas para modificar la falta de corresponsabilidad entre hombres y mujeres respecto a los cuidados, ni la debilidad de las políticas de conciliación. Esto se mantiene en los hechos como parte de las dinámicas de los hogares, como un asunto de responsabilidad privada y del ámbito micro. Se desconoce de este modo el aporte que significaría para la recuperación, y en

14. Irene Staveren: «Gender Trends in Developing Countries during Financial Crises», *Working Paper* N° 511, Institute of Social Studies, La Haya, 2010.

general para el funcionamiento de la economía, una organización del trabajo y el empleo más eficaz.

■ Los ejes del debate feminista

La crisis económica y financiera por la que todavía se atraviesa a escala internacional no ha sido un accidente, sino el resultado de las características del funcionamiento del sistema económico; las desigualdades sociales y de género no son un rasgo contingente de ese funcionamiento, como tampoco lo son la forma en que se procesan las decisiones de política económica ni las asimetrías de intereses y de poder que estas reflejan.

Analizar la dimensión de género de la crisis, de las políticas para enfrentarla y de la fase de recuperación de las economías desde una perspectiva feminista supone cuestionar los objetivos mismos de la economía, así como rediscutir el rol del Estado y el mercado. En ese sentido, la crisis es una oportunidad para profundizar un proceso de debate y construcción de otro proyecto económico, en el que la economía feminista puede realizar un significativo aporte, en la medida que coloca en el centro de este proceso otra dimensión: la sustentabilidad de la vida humana, la reproducción social de la vida hu-

Analizar la dimensión de género de la crisis, de las políticas para enfrentarla y de la fase de recuperación de las economías desde una perspectiva feminista supone cuestionar los objetivos mismos de la economía, así como rediscutir el rol del Estado y el mercado ■

mana valorada tanto como la dimensión económica. Esta resignificación le permitiría a la perspectiva feminista en América Latina establecer una agenda compartida con, por ejemplo, planteos como los del «buen vivir», que reubican el cuidado como categoría económica, así como con voluntades políticas que se expresan en objetivos de desarrollo humano.

Los ejes del debate feminista se insertan en los diferentes niveles de la economía y la sociedad (macro, meso y micro), en los que se producen y sostienen las desigualdades sociales y de género. Las políticas económicas y sociales y la participación

del Estado tienen un papel en cada uno de esos ámbitos. En el nivel macro, existen varios canales de política que afectan las relaciones de género determinando quién consigue qué trabajo, así como las diferencias en los ingresos laborales. Las políticas macro influyen también en el grado de volatilidad

económica y en los recursos disponibles para la seguridad social y el gasto en infraestructura, lo que conlleva implicancias de género para la educación y la salud, tanto como para las relaciones de género en los hogares.

La investigación desarrollada ha mostrado que la promoción de la igualdad de género es un elemento constitutivo del crecimiento, tanto como un instrumento para poner en marcha círculos virtuosos de desarrollo. Pero ello requiere de un entorno macroeconómico en el que la equidad sea compatible con el crecimiento; que las reglas de comercio e inversión, así como la regulación de las finanzas, estén subordinadas a los objetivos más amplios de igualdad social y de género, la creación de empleo y la seguridad económica. El cumplimiento de estos objetivos precisa un más amplio papel del Estado para administrar el comercio internacional, regular los flujos de capital y promover incentivos a la innovación y a las mejoras de productividad, de manera de reducir la heterogeneidad estructural y las desigualdades sociales.

Por lo tanto, desde el feminismo se enfatiza en la necesidad de cambios en las políticas macroeconómicas y en su contenido social, debido a su rol crucial para la inclusión, por su relación con el dinamismo del desarrollo, la inversión productiva y el incremento de la productividad. En este sentido, el entorno macroeconómico repercute en –y es condición de, por supuesto– el crecimiento, pero las características de este último inciden en la viabilidad de construir equidad.

Una importante área de la investigación feminista en las últimas dos décadas se ha focalizado en el impacto de las políticas fiscales contractivas y del reducido rol del Estado sobre el bienestar de las mujeres, con sus consecuentes efectos en el potencial de largo plazo del crecimiento y la mejora de la calidad de vida. Las políticas fiscales y el pacto necesario para adaptar el gasto social y la recaudación de ingresos a las necesidades existentes son fundamentales para lograr un proceso de distribución que, entre sus pilares, debe considerar la desmercantilización del bienestar¹⁵. La inversión pública en infraestructura y construcción –que ha sido una de las bases de las políticas anticrisis– puede seguir un orden de prioridades, que al tiempo que contribuya a la dinamización de las economías, aproveche la oportunidad para subsanar el déficit social histórico de servicios de cuidado. La inversión en servicios públicos amortigua el

15. Juliana Martínez Franzoni define la «mercantilización» del bienestar como el acceso a los servicios sociales básicos a través del mercado, en regímenes o periodos en los que el Estado deja de proveer estos servicios. J. Martínez Franzoni: «Regímenes de bienestar en América Latina», documento de trabajo N° 11, Fundación Carolina / Cealci, Madrid, 2007.

desempleo con la creación de puestos de trabajo (directos e indirectos) y atiende a necesidades sociales. Se trata de una inversión económicamente rentable a mediano y largo plazo que, además, potencia un modelo de sociedad más justo relacionado con la responsabilidad del Estado en crear condiciones para

Se ha reconocido el aporte del trabajo no remunerado al funcionamiento de las economías. Sin embargo, se está muy lejos de avanzar en sistemas de cuidado que combinen adecuadamente la participación del Estado, el sector privado y las familias ■

mejorar los cuidados; en particular, al permitir la universalización de la educación infantil pública y la atención a las distintas formas de dependencia de las personas.

En el plano político institucional, se ha reconocido el aporte del trabajo no remunerado al funcionamiento de las economías, y esto se empieza a reflejar en legislación, normas y regulaciones. Sin embargo, se está muy lejos de avanzar en sistemas de cuidado que

combinen adecuadamente la participación del Estado, el sector privado y las familias. Esto, aunque de gran importancia para la emergencia planteada por las crisis –por su impacto directo sobre la vida cotidiana de las mujeres, sobre los intereses de género y las posibles ganancias en diversas formas de autonomía–, sienta las bases para una redistribución de ingresos y capacidades en el más largo plazo.

La socialización de los servicios de cuidado es una cuestión central en la propuesta de la economía feminista, y no solamente porque es un objetivo político, en tanto mecanismo que puede ayudar a que las mujeres accedan a la autonomía económica, a un manejo más libre de los tiempos y, por lo tanto, a más espacios de poder. La socialización de los servicios de cuidado conlleva un potencial redistribuidor, mientras que su mercantilización refuerza las diferencias entre quienes tienen mayor y mejor acceso a los servicios de mercado y el resto de la población.

Está demostrado de manera suficiente que en todo el mundo el acceso de las mujeres a la educación, al empleo y a los ingresos impulsa enormemente el bienestar de las familias y el desarrollo de los países. La igualdad de género es clave para aprovechar el capital humano de las mujeres en el trabajo remunerado, tanto como el potencial cuidador de los hombres. El apoyo y fortalecimiento del empleo requieren una perspectiva de género tanto en los objetivos como en las acciones, considerando las actividades reproductivas como una

responsabilidad de toda la sociedad. En el campo de las regulaciones laborales, las modificaciones tendientes a recombinar las diferentes modalidades del empleo para hombres y mujeres deben contribuir a diversas formas de distribución que permitan establecer mejores arreglos para la relación entre vida cotidiana, familia y empleo. De nuevo, se habla de «redistribución» porque se trata de redistribuir recursos –ingresos, propiedades, capital– de tiempo y trabajo en la organización social del trabajo y la producción.

Uno de los desafíos más importantes se refiere a la definición de las características de las políticas sociales. A partir de los años 90, y como ha sido consignado, estas políticas pasaron a tener un rol compensatorio, desde una filosofía que hacía de ellas instrumentos para aliviar los resultados de las grandes reformas en diversos ámbitos de la economía. Si bien en la región las políticas sociales alcanzaron una estatura mayor y, en varios países, rasgos de universalidad, esto ha sido más la excepción que la regla, y se ha vinculado a patrones de crecimiento basados en los mercados internos. Los sistemas de seguridad social fueron paulatinamente desmontados en distinto grado según los países y se profundizó su carácter fragmentario, orientado principalmente a destinatarios insertos en el empleo formal. En parte, se observan algunas reformas en la materia que han sido comentadas, pero todavía se está lejos de un paradigma dirigido a incorporar más sectores y a alinear esos cambios con propuestas de modelos más incluyentes y como parte de los derechos ciudadanos de hombres y mujeres. Los tímidos esfuerzos orientados a políticas de carácter universal que son aún incipientes dependen de capacidades fiscales y, en gran medida, de pactos sociales y políticos que, si bien pueden ser difíciles de establecer, podrían impulsarse con los nuevos vientos.

Como forma de enfrentar las situaciones de crisis –cuando las redes familiares tienen menos capacidad de respuesta económica–, pero también las dificultades que se mantienen en las diferentes etapas del ciclo económico, es necesario atender a las personas más necesitadas de protección social, y las mujeres son las que presentan mayores grados de exclusión en toda la región. Rediseñar la seguridad social es un paso esencial para reducir los efectos de fragmentación y las diferencias en el bienestar y la seguridad entre hombres y mujeres.

Pese a los retrasos, el movimiento feminista de la región ha logrado cierto espacio para colocar propuestas en la agenda pública. En términos de proyectos conjuntos o que involucren al Norte y al Sur, las propuestas feministas tienen un rol, no solamente respecto a la crisis económica, sino también a las

crisis del sistema ecológico y social. Desde el punto de vista conceptual, esto supone cuestionar el capitalismo corporativo, junto con sus desigualdades y las estructuras de poder. El «bienestar» y la «sostenibilidad» de las personas en el centro de la política económica, junto con la igualdad de género, son parte de la apuesta feminista que requiere una construcción conjunta (Norte-Sur y Sur-Sur) y capaz de determinar estrategias orientadas a objetivos compartidos, al margen de posibles divergencias de intereses. Pero no se trata solamente de las feministas, sino de la necesidad de edificar alianzas con los grupos que estén dispuestos a elaborar propuestas para reestructurar las relaciones económicas, sociales y ecológicas. Ello puede formar parte de un verdadero debate democrático que incluya a las personas en tanto tales, y no solamente en tanto productores o consumidores, y también las necesidades de los diferentes países y grupos sociales. El involucramiento de las mujeres y otros sectores afectados por la crisis en las soluciones a los desequilibrios globales es esencial para obtener una respuesta en armonía con los estándares y compromisos internacionales con la igualdad de género, los derechos de las mujeres, los derechos humanos y el empoderamiento¹⁶. 

16. A. Espino: «Conferencia sobre financiamiento para el desarrollo ante la crisis global», ponencia presentada en el seminario internacional «Análisis de la crisis económica financiera desde la perspectiva de género. Atendiendo a su impacto sobre la pobreza y el trabajo de las mujeres», Unifem / Cepal / Instraw / SER / Instituto Nacional de las Mujeres, México, DF, 23 y 24 de julio de 2009.

México: tan lejos de Dios, tan cerca de la crisis

Mecanismos de contagio económico en América del Norte

En agosto de 2007 se inició la llamada «Gran Recesión», que se ha desplegado por etapas y se ha contagiado desde el epicentro, Estados Unidos, hacia el resto del mundo. Aparentemente se está dibujando una economía mundial en dos velocidades, en la que los países menos dependientes de la dinámica estadounidense o menos articulados al mercado financiero internacional resienten menos el impacto de la crisis. Desde EEUU, esta se ha desplegado hacia el resto de América del Norte y la cuenca del Caribe de manera distinta de como sucedió en los países europeos, porque hay en juego otras correas de transmisión además de las financieras: migraciones y remesas, inversiones de corto y largo plazo, turismo y comercio internacional.

OSCAR UGARTECHE

■ La naturaleza de la crisis

El epicentro de la crisis conocida como «Gran Recesión», que se inició en agosto de 2007 y se encuentra ya en su sexta etapa¹, es Estados Unidos y la

Oscar Ugarteche: es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinador del Observatorio Económico Latinoamericano (Obela), <www.obela.org>.

Palabras claves: crisis, migraciones, integración económica, Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México, Estados Unidos.

Nota del autor: este artículo fue escrito durante una estancia en el Latin Amerika Institut (LAI) de la Freie Universität de Berlín. El autor agradece a Ana María Aragonés, del IIEC-UNAM, por sus textos y visiones sobre migraciones, y a Francisco Martínez Cervantes, del Obela-IIEC-UNAM, por su invaluable ayuda técnica. Igualmente agradece al equipo del LAI con el que discutió partes del texto.

1. Sobre la bitácora de las etapas de la crisis, v. por ejemplo O. Ugarteche: *La crisis global y la regionalización. Una visión desde América Latina*, Latindadd, Lima, 2009.

zona incluida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): Canadá y México². Varios autores³ sugieren que esta es una crisis de ciclo largo estilo Kondratieff⁴: estaríamos al final de la fase B, en la cual se ha agotado un ciclo tecnológico, y a la espera del próximo salto para salir adelante hacia los siguientes 50 años de prosperidad, para ponerlo en términos de Carlota Pérez⁵. Por el contrario, el análisis anglosajón (Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Simon Johnson⁶) se centra principalmente en los elementos financieros y sugiere que la crisis es producto de la desregulación iniciada en los años 80 y culminada en 1999 con la Ley Gramm, Leach, Biley⁷ del gobierno de Bill Clinton. El análisis latinoamericano se concentra en los aspectos de más largo plazo y sugiere que la dinámica crítica se inició en los años 70. Esta visión «mandeliana» entronca con el análisis de los ciclos largos de Kondratieff en la medida que incide en los aspectos estructurales tecnológicos y en opinión de Arturo Guillén, José Deniz y Gregorio Vidal⁸ y el equipo de la Red Celso Furtado, se vincula al desplazamiento hegemónico y al cambio en las relaciones de poder internacionales. Theotonio dos Santos⁹, Carlos Eduardo Martins¹⁰ y Claudio Katz¹¹ proponen en sus trabajos que se trata de una crisis de hegemonía que se inició en 1973 con el fin del dólar como moneda de reserva obligatoria, y que se estaría llegando al clímax de esa crisis.

2. Las seis etapas de la crisis pueden resumirse de la siguiente forma: 1. crisis de las *subprime* y primera crisis bancaria; 2. *credit crunch*; 3. primera recesión; 4. crisis fiscal; 5. crisis de la deuda soberana y segunda crisis bancaria; y 6. segunda recesión.

3. Por ejemplo, Jürgen Schultdt: *Trasfondo estructural y sociopolítico de la crisis estadounidense*, Universidad del Pacífico, Lima, 2011.

4. Se trata de ciclos de 50 años que tienen dos etapas. En la etapa A, la nueva tecnología brinda altos márgenes de ganancias; en la etapa B se reduce la rentabilidad progresivamente, lo que empuja hacia el siguiente cambio tecnológico.

5. «Technological Revolutions, Paradigm Shifts and Socio-Institutional Change» en Erik S. Reinert (ed.): *Globalization, Economic Development and Inequality: An Alternative Perspective*, Edward Elgar, Cheltenham, 2004, pp. 217-242.

6. P. Krugman: *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*, W.W. Norton & Co., Nueva York, 2009; S. Johnson y James Kwak: *13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown*, Random House, Nueva York, 2010; J. Stiglitz: *Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy*, W.W. Norton & Co., Nueva York, 2010.

7. La regulación financiera se introdujo en 1934 para evitar la concentración del poder económico en manos de los banqueros. En los años 80 se inició el desmontaje de esa ley y se exportó la idea de la globalización financiera. La cúspide de este proceso fue en 1999, cuando se permitió a los bancos comerciales ser también bancos de inversión y operar mundialmente. Además se desreguló la creación de instrumentos nuevos, lo que dio pie a la crisis de las *subprime*.

8. A. Guillén, J. Deniz y G. Vidal (coords.): *Desarrollo y transformación. Opciones para América latina*, FCE, Madrid, 2010.

9. «Capitalismo contemporáneo: Notas sobre la crisis estructural y la crisis de la coyuntura» en *Camino Socialista*, 20/7/2010, <<http://caminosocialista.wordpress.com/2010/07/20/capitalismo-contemporaneo-notas-sobre-la-crisis-estructural-y-la-crisis-de-la-coyuntura/#more-929>>.

10. *Globalização, dependência e neoliberalismo na América latina*, Boitempo, San Pablo, 2011.

11. *Las tres dimensiones de la crisis*, 2010, disponible en <<http://katz.lahaine.org/>>.

Sin duda las actuales turbulencias tienen una naturaleza compleja que permite tejer los aspectos tecnológicos que han derivado en el calentamiento global con el consumo masivo que lo produce; el impacto de la revolución de género sobre el mercado de trabajo; y la crisis del modelo de acumulación basado en las exportaciones, en el marco del cual algunas sociedades consumen por encima de sus posibilidades mientras que otras, más pobres, subconsumen y financian a las primeras. Esto habría llegado a su límite con lo que ahora se conoce como una «crisis de la deuda» que está más allá de la deuda soberana. Es la crisis de la financierización, un estilo de vida y una teoría económica que permiten que la sociedad viva de prestado. Por esta razón, la esencia financiera separa a esta de las demás grandes crisis como la de 1930, 1870, 1820, etc.¹², si bien todas tienen características en común¹³.

■ La sincronidad de la dinámica económica de América del Norte

El crecimiento económico de México y el de EEUU han estado interrelacionados históricamente, pero desde los años 90 los grados de interdependencia parecen haber crecido, al tiempo que se afinó la sincronía entre ambas dinámicas económicas, ya que siguen la misma tendencia. En el gráfico 1 se puede apreciar que entre el primer trimestre de 1996 y el tercer trimestre de 2007 (el inicio de la crisis) hay una aparente sincronidad con dos trimestres de distancia, y que la economía mayor lidera a la menor. No obstante, no puede pasarse por alto que, con la caída del PIB estadounidense en 2006, el arrastre a la economía mexicana fue bastante menor que en todos los ciclos de caída anteriores, y que la aplicación de políticas contracíclicas en México parece haber sido positiva para evitarlo.

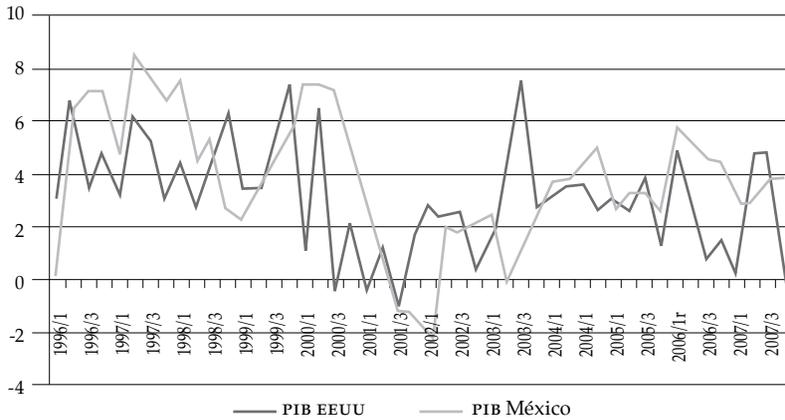
Cuando se revisan los datos entre 2008 y 2011, se confirma esa tendencia (v. gráfico 2). Es decir, los grados de interrelación entre ambas economías tienen como efecto que la una siga a la otra con dos trimestres de distancia, y eso no parece dejar mayores espacios para la aplicación de políticas contracíclicas durante un periodo muy largo. No hay contratendencia entre 1996 y 2007 ni entre 2008 y 2011, ni es posible pensar en que la economía menor (México) gane autonomía respecto de la dinámica de la economía mayor (EEUU). En este sentido, se refleja la estrecha articulación de las líneas de producción de ambas economías y se establece el problema de las asimetrías regionales en general.

12. Carlos Marichal: *Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 1873-2008*, Random House, Buenos Aires, 2010.

13. Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff: *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*, Princeton University Press, Princeton, 2011.

Gráfico 1

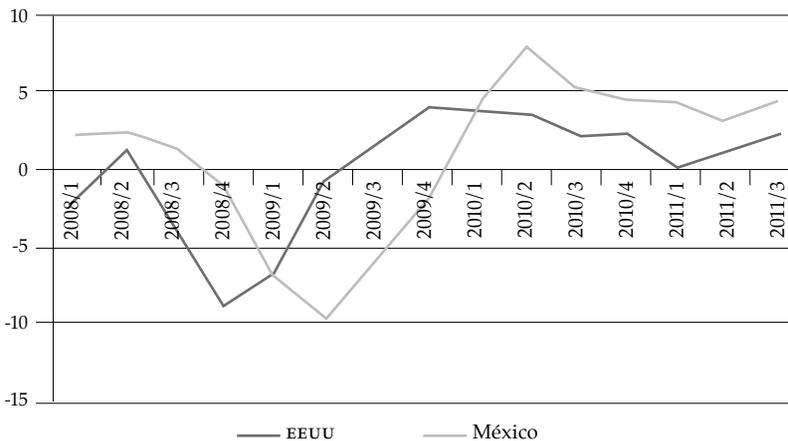
Correlación entre los PIB de EEUU y México, 1996-2007
 (tasas de crecimiento trimestral del PIB, en porcentaje)



Fuente: Banxico y us Bureau of Economic Analysis (BEA).

Gráfico 2

Tasas de crecimiento de los PIB de México y EEUU, 2008-2011 (en porcentaje)



Fuente: BEA e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México.

Lo que explica esta interdependencia regional se encuentra en al menos cinco canales de interconexión: a) las migraciones; b) los movimientos de capital de corto plazo; c) la inversión extranjera directa (IED); d) los movimientos de bienes (petroleros y no petroleros) y e) los servicios de turismo. La combinación de las tendencias en estos ámbitos explica por qué México sufre, ante las variaciones de la economía estadounidense, un impacto más grande que Canadá, pese a que ambos países tienen una estrecha relación económica con su socio regional y a que ambos desarticulaban su aparato productivo para rearticularlo con el estadounidense.

■ Las migraciones

Lo primero que salta a la vista de las migraciones mexicanas es que 98% de ellas se dirigen a EEUU por razones de cercanía, históricas y familiares. El grueso de la emigración va a California y Texas, que tradicionalmente han tenido población mexicana y donde el español está ampliamente difundido. Dentro de este panorama general, Ana María Aragonés, Esperanza Ríos y Uberto Salgado¹⁴ sugieren que hay una tendencia a la reducción de los flujos migratorios desde México hacia EEUU, incluidos los indocumentados, fruto de lo que se percibe como un alto nivel de desempleo en el país del Norte. Sin embargo, estos autores han encontrado que tampoco hay un flujo creciente de retornados. Antes bien, lo que aprecian es que los migrantes desempleados cambian de giro para poder mantenerse con ingresos del otro lado de la frontera antes que regresar a casa, y esto es posible debido al nivel de desregulación laboral existente. Hay consenso entre los investigadores en que se ha reducido en unas 400.000 personas la migración ilegal entre 2007 y 2010, y en que la migración legal continúa creciendo a una tasa menor a la de antes de la crisis.

La explicación de Aragonés, Ríos y Salgado¹⁵ es que el desempleo en EEUU ha crecido más en el sector de los migrantes con educación superior que en el de los estadounidenses con el mismo nivel educativo, lo que serviría de desincentivo para que otros migren. Sin embargo, el *BBVA Mexico Migration Outlook* de noviembre de 2011 señala que los profesionales más educados están migrando a tasas mayores y siendo empleados en sectores de altas remuneraciones¹⁶. Estos serían migrantes legales producto de la creciente inseguridad en el norte

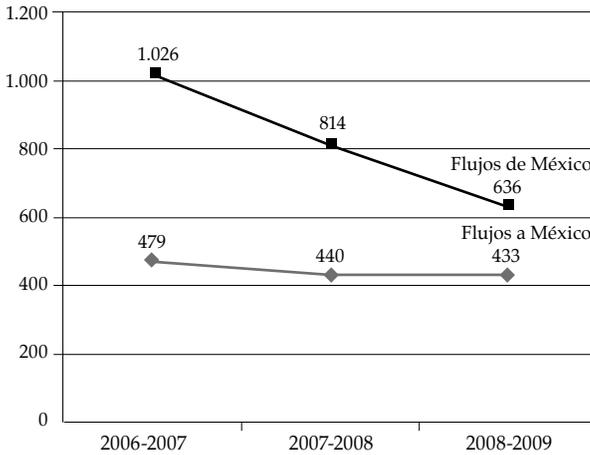
14. A.M. Aragonés, E. Ríos y U. Salgado: «Efectos de las crisis sobre la migración México-Estados Unidos 2000-2010», IIEC-UNAM, 2011, mimeo.

15. *Ibíd.*

16. BBVA Bancomer/BBVA Research: *Mexico Migration Outlook*, 11/2011 disponible en <www.bbvarsearch.com/KETD/fbin/mult/1111_MigrationOutlookMexico_Nov11_tcm348-280632.pdf?ts=1212012>

Gráfico 3

Flujo de inmigrantes mexicanos que ingresaron a EEUU y de emigrantes mexicanos que retornaron a México, 2006-2009 (en miles)



Fuente: Michael Fix, Demetrios Papademetriou, Jeanne Batalova, Aaron Terrazas, Serena Yi-Ying Lin y Michelle Mittelstadt: «Migration and the Global Recession. A Report Commissioned by the BBC World Service», Migration Policy Institute, Washington, DC, 2009 en A.M. Aragonés, E. Ríos y U. Salgado: ob. cit.

de México, lo que estaría abriendo brechas entre tipos de migrantes: los más educados con doctorados y maestrías; los que tienen educación superior, ya que cuentan con licenciaturas o educación técnica; y los que no han cursado educación formal más allá de la secundaria¹⁷.

Un análisis más detallado del tipo de actividad económica que efectúan los migrantes muestra que, con la crisis, se ha perdido empleo en el sector construcción y extracción; en la producción; en la preparación de comida y otros

17. Aragonés, Ríos y Salgado analizan las diferencias entre tipos de migrantes y concuerdan con el *BBVA Mexico Migration Outlook*; detallan que las visas para trabajadores con habilidades extraordinarias (visa o1) han crecido de 171 en 1996 a 3.147 en 2009, y que las visas para trabajadores especializados (visa H1B) han pasado de 5.273 en 1996 a 14.352 en 2009, si bien hay un descenso entre 2007 y 2009; las visas para empleados transferidos dentro de la misma firma de un país a otro (visa L1) han crecido de 4.759 en 1996 a 20.253 en 2009. El grueso de los migrantes documentados son fuerza de trabajo del campo: las visas para este grupo han crecido de 8.833 en 1996 a 140.540 en 2009 (en 2008 fueron 163.695). Los migrantes temporales no agrícolas también crecieron a la par de los agrícolas desde 1996, pero se han reducido entre 2007 y 2009 de 105.244 a 37.467. A.M. Aragonés, E. Ríos y U. Salgado: ob. cit.

servicios conexos; agricultura, pesca y forestales, y ocupaciones de gestión. Sin embargo, ese personal se ha desplazado a mantenimiento y limpieza de edificios; transporte de personas y materiales; ventas y conexos; instalación y mantenimiento de equipos, etc. Este proceso de sustitución de empleo también ha operado en el segmento de alto nivel de estudios, lo que ha evitado el retorno indeseado. El resultado es que el cambio de actividad de los migrantes ha impedido un desplome de las remesas –que igualmente han tenido una tendencia levemente descendente– a pesar del impacto de la crisis.

Las remesas. En el caso mexicano se observa que durante la década de 1990 y la primera del siglo XXI la IED se ha mantenido en niveles similares a las remesas, aunque finalmente ha ganado posiciones en relación con ellas, que han retrocedido como efecto de la crisis. Esto significa que el modelo económico está basado en la exportación de fuerza de trabajo así como en la exportación de bienes, y que la IED no reduce la emigración generando puestos de trabajo en México, sino que más bien la profundiza, al entrar en ramas que no generan empleo significativo.

La evidencia empírica en relación con las remesas muestra que, con la crisis, hay una leve tendencia descendente. El punto más bajo fue el cuarto trimestre de 2009, cuando llegaron casi a us\$ 4.760 millones por trimestre y un máximo de us\$ 6.393 millones al inicio de la recesión que aún no se ha logrado remontar. El volumen de la baja de las remesas en sí mismo no tiene un impacto tan significativo sobre el crecimiento del PIB mexicano como se podría esperar. Para explicar la severa contracción del PIB de 2009 hay que considerar la caída del comercio y de la IED, aunque es indudable que para muchas familias mexicanas que perdieron ingresos por remesas la situación de pobreza se agudizó.

■ Los movimientos de capitales

Hay dos tipos de movimientos de capitales: los de largo plazo y los de corto plazo; estos últimos llegan al mercado de capitales atraídos por el diferencial de la tasa de interés, pero se mantienen por periodos más bien reducidos.

Movimientos de capital de largo plazo. México es el principal destino de la IED estadounidense en el mundo, que se ha concentrado en la zona norte del país. Se articulan de este modo los aparatos productivos de ambos países y se exportan puestos de trabajo desde EEUU, pero esto no ha significado una mejora apreciable en las condiciones de trabajo mexicanas. La evidencia muestra que

las inversiones directas de largo plazo tuvieron una tendencia ascendente hasta el año 2008. El promedio de la década fue de us\$ 23.799 millones anuales, por encima de las remesas; y tras la crisis descendió a un promedio de us\$ 17.601 millones anuales, por debajo de las remesas (v. cuadro). Sin embargo, a este dato general hay que añadir que EEUU perdió participación en el mercado mexicano de capitales por la llegada de inversiones españolas.

Cuadro

IED en México, 2000-2010

	IED (en millones de US\$)	EEUU	Canadá	Otros
2000	18.110,00	71,8%	3,7%	24,5%
2001	29.858,60	71,8%	3,4%	24,8%
2002	23.913,00	54,9%	1,0%	44,1%
2003	16.246,20	54,6%	1,9%	43,5%
2004	24.818,00	36,8%	2,6%	60,6%
2005	24.280,40	48,1%	2,0%	49,9%
2006	19.951,00	64,7%	3,1%	32,2%
2007	30.069,70	41,4%	1,6%	57,1%
2008	26.948,00	40,8%	11,3%	47,9%
2009	15.575,20	44,8%	10,3%	45,0%
2010	19.626,50	27,0%	5,8%	67,2%

Fuente: Inegi.

El impacto de este cambio fue apenas percibido en la inversión real. Dentro de esta tendencia general hay un repliegue muy fuerte de la participación de EEUU en la IED en México: esta pasó de 72% a 27% entre inicios y fines de la década de 2000, con una caída significativa debida a la crisis. No obstante, la caída de la IED estadounidense ha tenido poco impacto en el empleo, los salarios y los impuestos nacionales, en parte porque son inversiones en zonas francas, donde los salarios son muy bajos y no existe la seguridad social, la densidad de capital por puesto de trabajo es muy alta y las empresas están libres de impuestos. Las inversiones tampoco contribuyen de manera significativa al crecimiento a través del comercio exterior, porque no están articuladas a una base productiva dentro de México: las empresas multinacionales importan partes, para armar en el país productos que más tarde se reexportan. Por otro lado, ese tipo de inversiones hacen que esas empresas sean más rentables y obtengan mayores dividendos, pero el beneficio no queda en territorio mexicano en forma de mayores ingresos tributarios.

Las inversiones canadienses han aumentado su participación en la década pero, al igual que las estadounidenses, con la crisis se contrajeron de us\$ 3.000 millones a us\$ 1.100 millones entre 2008 y 2010. La diferencia es que mientras las inversiones estadounidenses se concentran principalmente en la manufactura, las canadienses se dirigen hacia la minería, como en otras partes de América Latina. La Unión Europea como bloque es el inversionista más dinámico en el país, y dentro de este, España da cuenta de más de la mitad de las nuevas inversiones, que están concentradas en servicios: telecomunicaciones y sector financiero.

En definitiva, las variaciones en la IED no se reflejan en los cambios de la inversión real, que son significativamente menores. Es decir que la reducción de la dinámica económica mexicana se debe al impacto del repliegue de la IED en la balanza de pagos y no a su impacto sobre el aparato productivo. Debe mencionarse como singularidad la ínfima presencia en México de China como inversionista directo. Mientras que en los demás países de la cuenca del Caribe y los países sudamericanos las inversiones de ese origen son crecientes, en México generan aprensión¹⁸.

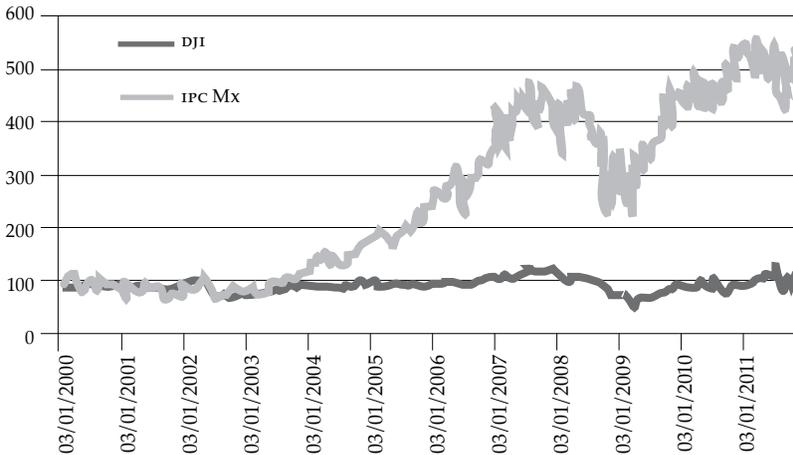
Movimientos de capital de corto plazo. Si se mide el papel de los capitales de corto plazo en la primera década de este siglo, se puede percibir la emergencia de una burbuja especulativa que llevó el índice IPC de la Bolsa de México muy por encima del Dow Jones de Nueva York, separándose de la tendencia general de las bolsas a moverse en la misma dirección. Lo interesante es que durante los primeros tres años de la década, como era de esperarse, los indicadores se movieron de manera conjunta. Pero en 2003 la Bolsa de México se despegó de la de Nueva York, y el efecto de esto fue la atracción de más capitales de corto plazo, lo que se ha reflejado en el aumento de las reservas internacionales y en la apreciación del tipo de cambio. Sin embargo, se trata de una apreciación especulativa y de una bolsa cuyo índice está inflado, dado que el crecimiento medio del PIB mexicano durante esa década ha sido de 2,8% al año, lo que no se corresponde con la velocidad de la valorización bursátil del mismo periodo.

El espejo de estas inversiones de cartera se encuentra en el tipo de cambio y en el nivel de reservas internacionales. Estas generan la idea de que la economía está «blindada» y de que hay una manera de «resistir el embate» de un ataque

18. Leonardo Peralta: «WikiLeaks revela los temores de México ante las inversiones de China» en *CNN México*, 7/1/2011, <<http://mexico.cnn.com/nacional/2011/01/07/wikileaks-revela-los-temores-de-mexico-ante-las-inversiones-de-china>>.

Gráfico 4

**Índices DJI e IPC de las bolsas de valores de Nueva York y México
 (números índices, datos diarios; enero 2000=100)**



Fuente: elaboración del autor a partir de datos de Yahoo Finance.

especulativo. Con estas inversiones de bolsa, el tipo de cambio se ha mantenido estable en términos nominales y se ha apreciado en términos reales. De esta forma, las reservas internacionales en efectivo crecieron de us\$ 35.500 millones en 2000 a us\$ 132.964 millones a mediados de 2011, y el tipo de cambio se mantuvo fuerte durante la década hasta que en septiembre y octubre de 2008 hubo un fuerte retiro de recursos de la Bolsa, causado por el pánico generado por la quiebra de Lehman Brothers, que lo alzó temporalmente de \$M 10 por dólar hasta el nivel de \$M 15. Pero regresó a \$M 11 pesos a lo largo de los años siguientes hasta el segundo semestre de 2011, cuando las bolsas del mundo nuevamente cayeron por la llamada «crisis europea».

Según el informe trianual del Bank for International Settlements (BIS), se operan diariamente us\$ 47.285 millones en pesos en el mercado cambiario. Durante la década, los *swaps* cambiarios han crecido seis veces, el mercado *spot* casi se cuadruplicó y los *forwards* relacionados con el comercio internacional crecieron nueve veces¹⁹. De estas operaciones, las únicas relacionadas con el comercio y la

19. BIS: *Triennial Central Bank Survey. Report on Global Foreign Exchange Market Activity in 2010*, BIS, Basel, 2010, p. 48, disponible en <www.bis.org/publ/rpfx10t.pdf>.

economía real son los *swaps*; las demás son productos financieros. La interrelación entre los mercados financieros, por lo tanto, no se refleja en el nivel de reservas internacionales ni en los montos de inversión directa sino en estos mercados de corto plazo, que movilizan unos us\$ 11,9 billones, un volumen más de 11 veces mayor que el tamaño de la economía mexicana, que era de us\$ 1,04 billones en 2010²⁰. Estos volúmenes cambiarios hacen que las reservas internacionales acumuladas se vuelvan irrelevantes cuando se produce un ataque especulativo contra el peso.

■ El comercio internacional

En las maquilas mexicanas, las nuevas líneas de producción posfordistas ensamblan o manufacturan piezas y partes de lo que se diseña en EEUU y las agregan a lo que se fabrica en diversas etapas al norte de la frontera; el resultado de este proceso sale finalmente al mercado como un producto estadounidense. Por esta razón, el crecimiento del PIB mexicano es inelástico respecto del crecimiento de las exportaciones. No obstante, la llegada de la recesión exportadora en 2009 tuvo un impacto negativo fuerte sobre el PIB. Entre los años 2008 y 2009, el PIB de EEUU cayó 3,3% (medido en paridad poder adquisitivo, PPA), mientras que el de Canadá cayó 2,9% y el de México,

México no es un país atípico respecto de las repercusiones de la crisis en la cuenca del Caribe, aunque sí lo es por la severidad del impacto sobre el PIB y el tipo de cambio ■

5,9%, acompañando la retracción de las exportaciones estadounidenses en 18%, las canadienses en 30% y las mexicanas en 21%²¹. Esto implica que la relación exportaciones/PIB es distinta para las tres economías. Si bien en México las exportaciones tienen más peso en el PIB que en los otros dos países de la región, la mayor caída del PIB no coincide con la mayor caída regional de las exportaciones, que fue la de Canadá. Esto puede deberse a diferencias en la elasticidad de las exportaciones/PIB, y al impacto de las variables de servicios en la agregación de las cuentas nacionales, en las que el turismo tiene un peso más significativo para México que para Canadá.

México no es un país atípico respecto de las repercusiones de la crisis en la cuenca del Caribe, aunque sí lo es por la severidad del impacto sobre el PIB

20. Fuente: BIS.

21. Datos del Inegi.

y el tipo de cambio. Cuando se revisan los datos de la cuenca del Caribe se aprecia que allí es donde la demanda estadounidense arrastra en mayor medida la dinámica de los países. En Honduras y Venezuela –más que en otras economías y dentro del modelo de crecimiento exportador– la desaceleración del PIB o contracción del comercio ha tenido más efecto, y el contagio ha sido más severo. En Guatemala, Costa Rica y República Dominicana hay otras variables que hacen contrapeso, como el turismo europeo, el mercado chino y las remesas. La cuenca del Caribe comparte con México las migraciones y el peso decreciente de la IED estadounidense.

Por tanto, el contagio de la crisis desde EEUU pasa a Europa en primer término por la vía financiera, pero a la cuenca del Caribe llega a través del comercio, las remesas, la IED y el turismo, y afecta de manera diferenciada a los países de la subregión, si bien a excepción de República Dominicana todos resintieron el impacto²².

■ El turismo

Con el inicio de la crisis estadounidense en 2007, se puede apreciar en México una desaceleración del crecimiento del PIB turístico, que a fines de 2008 se transformó en contracción. Aún no hay datos del desempeño de 2010 ni 2011. Esa contracción tiene efectos multiplicadores que trascienden la economía formal: propinas, compras en mercados callejeros (tianguis) y otros pagos no incorporados en el PIB.

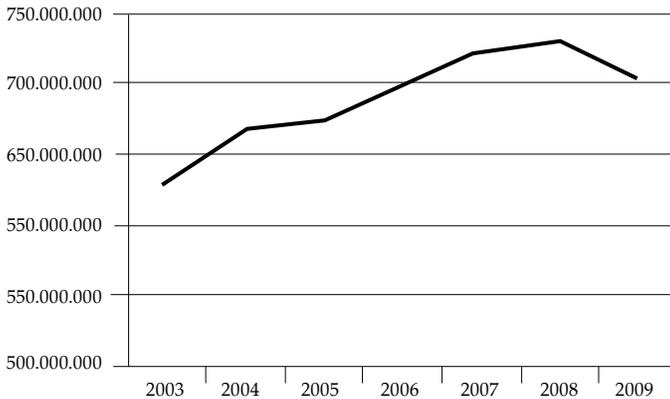
Observando el ingreso de personas a México –aquellas que pasan al menos una noche en el país–, se aprecia una reducción de 25% desde el año 2000. Esto se relaciona con el problema del narcotráfico y la violencia en el norte, que ahuyenta al tipo de pasajero que antes cruzaba la frontera por vía terrestre por el fin de semana; este nicho ha caído de 92 millones de pasajeros a 63 millones. El número de pasajeros que llegan por más tiempo a hacer turismo por vía aérea, es decir, desde una distancia mayor, creció hasta el año 2008, cuando alcanzó el pico de 11 millones; pero con la crisis se redujo en 14%. Los datos del Inegi acaban en 2009.

22. Parte del problema del contagio de la cuenca del Caribe radica en que varios de los países, como México y Venezuela, son exportadores de petróleo y por lo tanto son sensibles a las variaciones de sus precios, que tienen un impacto directo sobre el PIB.



Gráfico 5

México: PIB de turismo, 2003-2009 (en pesos constantes de 2003)



Fuente: Inegi: Cuenta Satélite del Turismo de México, <<http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieinti.exe/SER163790>>, fecha de consulta: 20/12/2011.

En general, según las estadísticas del aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México, que pueden servir de variable *proxy* para analizar la conducta del turismo en el país, se ha reducido en 8% el volumen de pasajeros que pasaron por esa terminal entre 2008 y 2010. Por su parte, el turismo terrestre de México a EEUU se ha reducido a la mitad entre 1999 y 2010. Esto también tiene que ver con los problemas del paso de pasajeros en zonas intervenidas por el narcotráfico. Un elemento adicional que frena el paso Sur-Norte es el endurecimiento de las condiciones para la emisión de visas a mexicanos para viajar a EEUU. Lo mismo se aprecia en relación con Canadá: el flujo se ha reducido a la mitad en cuatro años desde que Canadá comenzó a requerir una visa a los mexicanos que quieran entrar en su territorio. Las reducciones de los flujos del Sur al Norte coinciden con la crisis en su dimensión mayor. Las del Norte al Sur parecen ser coyunturales, ya que están vinculadas al narcotráfico y a la crisis de corto plazo. México no aplica reciprocidad en el tratamiento consular a los turistas de Norteamérica y ha simplificado el sistema de visas de forma que terceros que tienen visa para ir a EEUU pueden visitar México sin visa mexicana. Finalmente, la reducción de pasajeros hacia México parece ser menor que la reducción de pasajeros desde México hacia sus vecinos norteamericanos, a pesar de la violencia y de la crisis.

En síntesis...

En este panorama, la economía mexicana se encuentra con proyecciones económicas inusualmente altas que serán revisadas a la baja en el semestre y con un problema salarial y laboral severo. La vulnerabilidad cambiaria y de la Bolsa de Valores coloca a esta economía en un umbral delicado frente a cualquier inestabilidad de la Bolsa de Nueva York. El tamaño del mercado cambiario hace que sea más vulnerable que otras economías de la región salvo, quizás, Brasil. Ingresos por exportaciones no registrados oficialmente posiblemente compensen en parte esta vulnerabilidad pero, como se ha visto, no del todo.

Las proyecciones económicas del Instituto IFO, de Múnich, prevén para América del Norte un mal año 2012²³, de manera que se podría pensar que en el segundo semestre habrá más tensiones en la economía mexicana. Por otra parte, el actual es un año electoral, por lo que podría esperarse que el partido de gobierno use los recursos públicos para montar un escenario positivo para su candidato (que las encuestas muestran en desventaja), echando mano a políticas contracíclicas que serán bienvenidas. Si se logra un efecto como el de 2006 (v. gráfico 1), puede ser un año de crecimiento bajo pero estable. Todo dependerá de lo que ocurra con la Bolsa de Nueva York más que con la economía real de EEUU. La cuestión de la inflación continúa sobre la palestra: la tasa de interés básica del Banco de México sigue en 4,5%, encima de la inflación de 3,5%, lo que atrae capital de corto plazo desde EEUU, donde la tasa básica es cercana a 0%.

En este marco, hay un giro en la búsqueda de nuevos mercados para exportaciones y América del Sur se presenta como apetecible, por lo que se aprecia un interés en integrarse más con el Sur. Esta política puede servir sobre todo para contener el problema del empleo y las exportaciones y complementar lo que se pueda hacer en términos de políticas contracíclicas. Por el momento, no obstante, se trata de reacciones de corto plazo frente a una crisis que cada vez se prolonga más en EEUU y en gran parte del mundo. ☐

23. IFO *World Economic Survey*, WES QIV-2011, Instituto IFO, Múnich, 2011.

Argentina: ¿nuevo modelo o «viento de cola»?

*Una caracterización
en clave comparativa*

Luego de la salida del régimen de convertibilidad, después de la crisis de 2001, Argentina optó por un patrón de crecimiento que favoreció la expansión de los sectores productivos. Aunque el contexto internacional y los altos precios de las materias primas resultaron muy favorables, no explican por sí solos el fuerte crecimiento argentino de los últimos años, sostenido en gran medida en la inversión y el consumo. No obstante, la estructura productiva no ha cambiado sensiblemente, la dependencia de los recursos naturales sigue siendo muy marcada y la competitividad externa de la industria se ve frenada por la revaluación del tipo de cambio real, pero sobre todo, por la falta de un plan nacional de reindustrialización.

MARTÍN SCHORR

El proceso de apertura externa y desregulación económica iniciado en Argentina por la última dictadura militar y profundizado en la década de 1990 conllevó drásticas transformaciones en la estructura socioeconómica que se había consolidado en el país mientras se desarrolló el modelo de sustitución de importaciones. Si bien las reformas de orientación neoliberal se presentaron como la solución definitiva a los problemas de crecimiento que

Martín Schorr: sociólogo por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Es investigador de Flacso y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y docente en la UBA, el Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes) y Flacso.

Palabras claves: patrón de crecimiento, términos de intercambio, posconvertibilidad, tipo de cambio real, economías latinoamericanas, Argentina.

Nota del autor: en este trabajo se sintetizan algunos resultados de una investigación en curso sobre la evolución de la economía argentina en la posconvertibilidad, que se inscribe en el marco del proyecto «La industria argentina en la posconvertibilidad: continuidades y rupturas en la dinámica y la estructura del sector», bajo el patrocinio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

exhibía la economía local, su implementación estuvo lejos de garantizar un sendero de crecimiento sustentable e inclusivo en el mediano y largo plazos.

Por el contrario, el modelo económico neoliberal se tradujo en bajas tasas de crecimiento, a la vez que se asistió a una profunda retracción de la producción industrial, un fenomenal aumento del endeudamiento externo y una aguda contracción de los salarios reales. En efecto, entre los años 1976 y 2001 la economía argentina se expandió a una tasa anual acumulativa de solo 1,4%. Por su parte, el endeudamiento externo pasó de us\$ 9.278 millones a us\$ 139.783 millones en el mismo periodo, financiando la fuga de capitales locales al exterior por una suma superior a los us\$ 130.000 millones¹.

Este escenario de bajas tasas de crecimiento, dismantelamiento de la estructura fabril, endeudamiento externo y fuga de capitales se tradujo en una caída tendencial del nivel de empleo, a la vez que los salarios reales se redujeron en casi 25% entre mediados de la década de 1970 y el año 2001. Estas dinámicas se agudizaron en el marco de la crisis final del régimen de convertibilidad: a partir de 1998 y hasta mediados de 2002, la economía argentina ingresó en la fase recesiva más intensa, por su duración y profundidad, de la historia nacional (en ese lapso, el PIB se contrajo en 18,4%, mientras que la desocupación y la pobreza batían récords al alcanzar la primera a 18,3%² de la PEA y la segunda, a casi 60% de la población).

La devaluación de la moneda a comienzos de 2002 supuso no solo el fin del régimen de convertibilidad, sino también el agotamiento definitivo de un modelo de acumulación basado en la especulación financiera y el dismantelamiento de la estructura productiva. A partir de ese momento, en el marco de intensas pugnas sociales, se fue configurando un nuevo régimen económico, que derivó en cambios relevantes en la dinámica socioeconómica. Al respecto, en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2010, la economía argentina se expandió a una tasa anual acumulativa de 7,4%, a la vez que se generaron aproximadamente cinco millones de puestos de trabajo³.

1. Salvo indicación, las estadísticas que se mencionan en el texto provienen del Ministerio de Economía y Finanzas (Argentina), el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Brasil) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

2. La tasa de desocupación corresponde al total de aglomerados urbanos en el mes de octubre de 2001.

3. Sin lugar a dudas, la aguda contracción que había experimentado la economía argentina en el marco de la crisis final del régimen de convertibilidad determinó la existencia de un elevado grado de capacidad instalada ociosa. Si bien ese proceso facilitó la recuperación económica en los primeros años tras el colapso del régimen de convertibilidad, no alcanza por sí solo para explicar las elevadas tasas de crecimiento alcanzadas en el conjunto del periodo 2003-2010.

La nueva estructura de precios relativos conformada tras la devaluación de la moneda potenció la expansión de los sectores productores de bienes al encarecer las importaciones y hacer más competitivas las exportaciones. A la vez, la persistencia de reducidas tasas de interés en el mercado local favoreció aún más la actividad productiva, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, al hacer más barato el crédito para la producción y el consumo. Estos procesos posibilitaron una acentuada recuperación de la rentabilidad relativa de las inversiones productivas por sobre las financieras, lo que evidenció un punto de ruptura trascendente con el periodo precedente.

Se debe resaltar que la inédita –por su cuantía– devaluación real de la moneda a comienzos de 2002 implicó una pronunciada transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital, ya que los trabajadores vieron reducido su salario real en un tercio, aproximadamente. Esa reducción, por el efecto del aumento de los precios internos sin que se ajustaran los salarios nominales –dados los elevados niveles de desempleo–, condujo a una acelerada y significativa recomposición de la tasa de ganancia en el conjunto de la economía, especialmente para las firmas oligopólicas.

Por lo tanto, la nueva estructura de precios relativos posibilitó una rápida recuperación de la rentabilidad en el conjunto de la economía argentina, y en particular en los sectores productores de bienes, que lideraron hasta el año 2007 la expansión económica. Si bien a partir de ese momento presentaron

La producción industrial se expandió no solo con respecto a los deprimidos niveles de 2001 sino también respecto al conjunto de la década de 1990, ya que creció a una tasa anual acumulativa de 7% entre los años 2003 y 2010 ■

una tasa de crecimiento inferior a la del sector servicios, siguieron con su ritmo expansivo. Entre 2003 y 2010, los sectores productores de bienes se expandieron a una tasa anual acumulativa de 6,6% (con una contracción en 2009 de 3,5% por el impacto de la crisis internacional).

La sensible expansión de estos sectores se apoyó fundamentalmente en el sostenido crecimiento que experimentaron la construcción y, sobre todo, la

industria manufacturera. La producción industrial se expandió no solo con respecto a los deprimidos niveles de 2001 sino también sobre el conjunto de la década de 1990, ya que creció a una tasa anual acumulativa de 7% entre los años 2003 y 2010.

Al respecto, las evidencias disponibles indican que en el comportamiento de las distintas ramas que integran el espectro fabril se manifestaron dos etapas diferentes. Hasta 2007 se verificó un crecimiento generalizado, que fue particularmente importante en manufacturas que habían sido muy castigadas por la reestructuración sectorial regresiva del periodo 1976-2001 y que suelen caracterizarse por una presencia significativa de PYMES y elevados requerimientos de empleo: maquinaria y equipo, diversas metalmecánicas, textil e indumentaria, calzado y marroquinería, etc. De todos modos, es importante destacar que en el marco del «dólar alto» y la casi total ausencia de políticas industriales activas y coordinadas, en esta etapa no hubo cambios estructurales en el perfil industrial heredado de los años de hegemonía neoliberal.

En cambio, a partir de 2007, bajo el influjo de la crisis internacional y cuando comenzaron a erosionarse los extraordinarios niveles de competitividad asentados en el nivel del tipo de cambio real, se asistió a una desaceleración en el ritmo de crecimiento fabril. En la explicación de esta desaceleración concurren tres factores: por un lado, el dinamismo de un reducido número de ramas (sustancias y productos químicos, alimentos y bebidas, curtiembres, metales básicos, caucho y plástico, armaduría automotriz y ensambladoras de productos electrónicos en Tierra del Fuego –en los dos últimos casos, favorecidas por sendos regímenes especiales de promoción–); por otro, el menor ritmo de crecimiento de la producción en ramas diversas como, por caso, los minerales no metálicos y la elaboración de instrumentos de precisión, de productos textiles y vestimenta, de papel y derivados, de productos elaborados de metal y ediciones e impresiones. Por último, la caída en los volúmenes producidos por un conjunto de actividades que en la etapa 2003-2007 se habían expandido, en algunos casos en forma considerable: bienes de capital, productos de la madera, muebles y colchones, equipamiento de transporte e industrias refinadoras (estas últimas, por efecto de las restricciones existentes en el campo hidrocarburífero).

De modo que en la primera etapa (2003-2007) crecieron más intensamente las ramas industriales que más habían sido golpeadas durante el régimen de convertibilidad. De todas formas, ese crecimiento no bastó para alcanzar alteraciones sustantivas en el perfil estructural del sector. En la segunda etapa, por su parte, se manifestaron desempeños heterogéneos que derivaron en el afianzamiento de una estructura industrial muy volcada al procesamiento de recursos naturales y al sector automotor de armaduría. En 2010, alrededor de las dos terceras partes de la producción industrial provinieron de las industrias alimenticia, química, de acero y aluminio, de derivados del

petróleo y de la armadura automotriz. En la generalidad de los casos, se trata de rubros capital-intensivos, con débiles eslabonamientos internos asociados a una inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial, para los cuales los salarios pesan mucho más como costo empresario que como factor de la demanda, y caracterizados por mercados altamente concentrados (en su mayoría, en manos de capitales extranjeros). Estos aspectos estructurales plantean varios interrogantes en cuanto a las potencialidades que presenta la configuración industrial actual para oficiar de nodo dinámico de un «modelo de crecimiento con inclusión social».

Por su parte, el sector de la construcción registró una tasa de crecimiento aún más elevada que la verificada en la producción manufacturera (11,3% anual acumulativo entre 2003 y 2010). Este comportamiento estuvo asociado a la recuperación del nivel de actividad, pero también a la extraordinaria contracción –superior a 50%– que el sector había experimentado durante la crisis final de la convertibilidad. En tanto, los restantes sectores que componen la producción de bienes tuvieron un desempeño menos descollante. La producción agropecuaria ciertamente creció, pero lo hizo a una tasa que fue aproximadamente la mitad de la registrada en el conjunto de la economía (3,9%), debido sobre todo a que su crecimiento, sustentado en el nuevo «paradigma sojero», se había iniciado a mediados de la década de 1990 y no había sido mayormente afectado por la profunda crisis que marcó el final del régimen convertible, dada su independencia cada vez mayor del ciclo económico local. Por su parte, las producciones pesquera y minera, si bien se expandieron, evidenciaron un menor dinamismo, al crecer a tasas inferiores a 1% anual acumulativo.

En síntesis, este perfil de crecimiento implicó un giro copernicano respecto de la situación vigente durante la década de 1990. En esa etapa, la elevada rentabilidad de las colocaciones financieras, la apertura externa y la sobrevaluación de la moneda determinaron la contracción de los sectores productores de bienes, exceptuando las actividades ligadas al procesamiento de recursos naturales y aquellas que actuaban bajo regímenes especiales, como el sector automotriz. En efecto, si se centra la atención en la evolución de los distintos sectores a lo largo de la vigencia de la convertibilidad, se verifica una expansión de los servicios por encima de la media de la economía, mientras que los sectores productores de bienes, en particular el sector manufacturero, crecieron claramente por debajo del promedio.

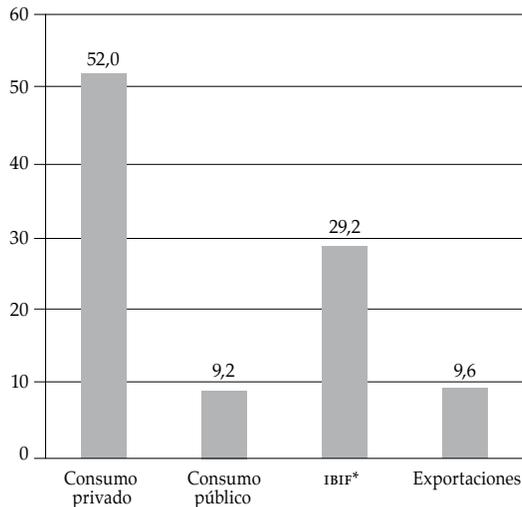
Como se analizó, el mayor dinamismo que exhibió la economía argentina desde 2003 parece poco discutible en comparación con el pobre desempeño

que había experimentado en las décadas previas. Sin embargo, desde diversos sectores se afirma que ese proceso no obedeció a las características del nuevo patrón de crecimiento, sino a la presencia de una coyuntura externa excepcionalmente favorable.

Si bien el proceso de crecimiento que atravesó Argentina tuvo lugar en el marco de una mejora en las condiciones prevalecientes en los mercados internacionales, no fue esta su causa principal, ni mucho menos la única. Por el contrario, fue la demanda interna el motor fundamental sobre el que se sustentó la importante fase de crecimiento de los últimos años. Al evaluar la contribución de los distintos componentes al incremento de la demanda global en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2010, se observa que el consumo doméstico, tanto público como privado, y la inversión tuvieron un rol protagónico en términos de su contribución al crecimiento, mientras que las exportaciones, a pesar de su fuerte expansión en términos históricos, dieron cuenta de algo menos de 10% (v. gráfico 1).

Gráfico 1

Contribución de los distintos componentes al crecimiento de la demanda global, 2003-2010 (en porcentaje)



* Inversión bruta interna fija.

Fuente: elaboración del autor sobre la base de información del Ministerio de Economía.

Nota: en la demanda global no se consideró discrepancia estadística y variación de existencias.

A su vez, si se compara el crecimiento experimentado por la economía argentina entre 2003 y 2010 con el de otros países de la región, se observa que presentó un desempeño más favorable, a pesar de que verificó una mejora relativamente menor en sus términos de intercambio externo. En efecto, como se puede observar en el gráfico 2, la economía argentina fue la de mayor dinamismo (64,7%) a pesar de haber tenido una mejora en sus términos de intercambio externo inferior a la registrada en los restantes países de la región (con la sola excepción de Uruguay).

Por otro lado, se debe señalar que si bien el crecimiento de las exportaciones de bienes en la economía argentina fue muy significativo, ya que pasaron de us\$ 29.938 millones en 2003 a us\$ 68.133 millones en 2010, Argentina fue el país con peor desempeño exportador de la región. En efecto, considerando el conjunto de las economías sudamericanas, las exportaciones crecieron a una tasa anual acumulativa de 16,2% en el periodo mencionado, mientras que en Argentina esa tasa se ubicó en 12,7%. Es más, el crecimiento del valor exportado por este país fue sensiblemente menor al de otras naciones, como Paraguay, Perú y Bolivia.

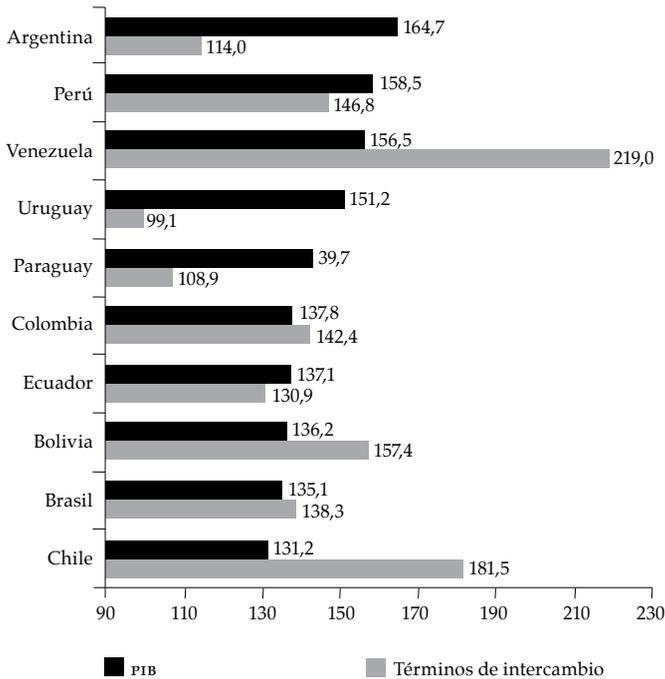
Estas tendencias ponen en evidencia dos elementos centrales. Primero, que el importante crecimiento experimentado por la economía argentina no puede explicarse solamente por la presencia de inéditas condiciones internacionales (el «viento de cola», como suelen señalar muchos analistas). Segundo, que la adopción del «dólar alto» como eje destacado de la política de «fomento a la producción», si bien puede considerarse una condición necesaria para una elevación en las ventas externas, no parece garantizar por sí mismo un notorio incremento en estas, ni mucho menos el avance hacia una diversificación de la canasta exportadora (de allí que en los años recientes tampoco se produjeran alteraciones significativas como para afirmar la existencia de un cambio estructural en el perfil exportador).

En definitiva, en una visión del conjunto del periodo, no se puede sostener que el crecimiento de la economía argentina en la posconvertibilidad se haya sustentado únicamente en la mejora de las condiciones externas. Es más, cabe destacar que estas últimas mejoraron de manera notoria solo a partir de 2007, en un proceso que sí tuvo impacto significativo en las economías de la región.

El aumento en el precio internacional de los principales *commodities* que tuvo lugar desde entonces supuso el ingreso de una masa de riqueza extraordinaria, con su consiguiente efecto apreciator sobre el tipo de cambio y acelerador

Gráfico 2

Sudamérica: variación del PIB a precios constantes y de los términos de intercambio, 2003-2010 (2003=100)



Fuente: elaboración del autor sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Nota: para la estimación de la variación en los términos de intercambio se consideró la relación de precios de intercambio de bienes y servicios elaborada por la Cepal.

del ritmo de variación de los precios internos. Estos procesos condujeron, por lo general, a una pérdida de competitividad cambiaria por parte de los sectores de menor productividad no basados en la explotación de recursos naturales, y se reforzaron de esta forma las tendencias hacia la reprimarización de la estructura productiva.

En este sentido, en la próxima sección se realiza un somero *racconto* de las políticas macroeconómicas llevadas adelante por las dos principales economías de la región a partir de 2007, intentando evaluar el impacto que tuvo el nuevo contexto internacional sobre estas economías.

■ El *shock* externo y su efecto en la economía interna

Como se mencionó, la notable elevación de los precios internacionales de los productos primarios y derivados a partir de 2007 condujo al ingreso de una masa de riqueza extraordinaria en las economías de la región y determinó una tendencia hacia la apreciación de sus monedas y una aceleración en el ritmo de variación de los precios. En este contexto, a diferencia de la inmensa mayoría de las economías latinoamericanas, Argentina persiguió una estrategia centrada en el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo. De esta forma, mientras que la mayor parte de los países apreciaban sus monedas, en el ámbito local se siguió el camino inverso.

La apreciación nominal seguida por la mayor parte de las economías sudamericanas comenzó, con intensidad, desde comienzos de 2007; este proceso fue interrumpido por la crisis financiera internacional durante el segundo semestre de 2008, para retomar la tendencia apreciadora desde comienzos de 2009. De esta forma, estos países procuraron evitar la denominada inflación «importada» a través del encarecimiento de sus monedas, para así amortiguar el efecto de la elevación de los precios internacionales sobre las respectivas economías. Como se puede observar en el gráfico 3, la apreciación nominal de las monedas fue muy intensa en los países de la región y varió entre 11,0% (Chile) y 20,5% (Brasil).

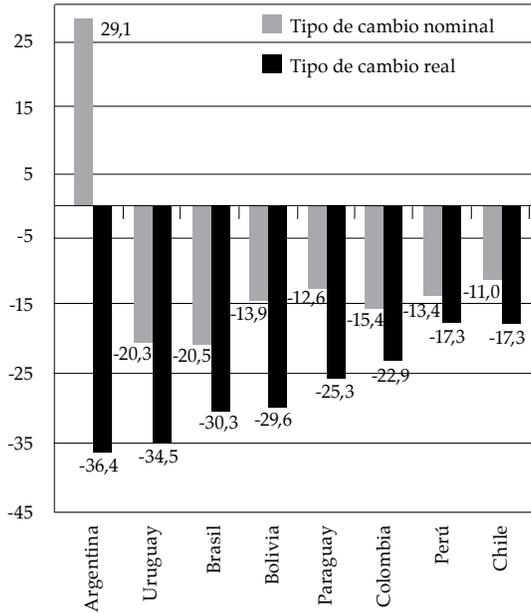
A fin de facilitar el análisis, nos centraremos en la evolución de las dos principales economías de la región, ejemplos antagónicos en términos de las políticas económicas aplicadas para hacer frente al nuevo contexto internacional. Si bien Brasil y Argentina llevaron adelante desde 2003 diferentes políticas macroeconómicas, las discrepancias se agudizaron ante la sensible mejora de los términos de intercambio externo a partir de 2007.

En el caso de la economía argentina, el nuevo patrón de crecimiento instaurado tras el colapso del régimen de convertibilidad tuvo como núcleo central de la estrategia económica el mantenimiento de un tipo de cambio «alto». En cambio, en Brasil el objetivo primordial fue el sostenimiento de reducidos niveles de inflación. De esta forma, las políticas aplicadas en cada uno de los dos países dieron lugar a una evolución diferencial en el ritmo de variación de los precios y en el tipo de cambio nominal.

El seguimiento por parte del Banco Central brasileño de metas de inflación desde 1999, y con mayor intensidad desde 2003, permitió el mantenimiento

Gráfico 3

Sudamérica: variación del tipo de cambio nominal y real con respecto al dólar, enero de 2007-diciembre de 2010 (en porcentaje)



Fuente: elaboración del autor sobre la base de información del CEI.

Nota: en el gráfico no se han incluido Ecuador (por poseer una economía dolarizada) ni Venezuela (por contar con un mercado cambiario desdoblado). En el caso de Argentina, se consideró el IPC-7 Provincias para la estimación del tipo de cambio real bilateral.

de reducidos niveles de inflación, que promediaron anualmente 5,8% entre ese año y 2010. Es más, entre 2007 y 2010, cuando se produjo un sensible incremento en los precios internacionales, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual promedio de 5,6%.

El objetivo de preservar un bajo nivel de inflación determinó la necesidad de una sensible apreciación de la moneda, de modo de reducir el impacto de la suba de los precios internacionales sobre la economía local. A su vez, se incrementaron las tasas de interés internas tendientes a controlar la demanda, para de esta forma aminorar las tensiones inflacionarias; pero esta medida agudizó aún más la apreciación, al favorecer el ingreso masivo de capital especulativo. En efecto, los diferenciales en las tasas de interés vigentes en el mercado local e internacional potenciaron el desarrollo de inversiones especulativas sobre

la base del endeudamiento en otras monedas a tasas más reducidas, y su posterior inversión en la plaza financiera brasileña, en la cual obtenían tasas de rentabilidad notoriamente más elevadas. A la vez, las ganancias se potenciaban por la apreciación nominal del tipo de cambio. Se trata de una mecánica ampliamente desarrollada en Argentina en el transcurso de distintas etapas por las que transitó el modelo de valorización financiera (1976-2001).

De modo que el aumento de los precios internacionales y el mantenimiento de una política macroeconómica centrada en el cumplimiento de estrictas metas de inflación condujo a una severa revalorización del real, que se apreció nominalmente un 20,5% entre enero de 2007 y diciembre de 2010, lo que agudizó las tendencias prevalecientes desde 2003. Si bien este proceso permitió el mantenimiento de bajos niveles de inflación, condujo también a una significativa pérdida de competitividad de la economía brasileña. Esa pérdida se tradujo en un proceso de reprimarización de la estructura exportadora, en un menor dinamismo de la producción industrial, en una baja tasa de inversión, en la reducción a prácticamente la mitad del saldo de la balanza comercial y en un sensible déficit de cuenta corriente que superó en 2010 los us\$ 55.000 millones. De todas formas, se debe señalar que la apreciación del real a lo largo de estos últimos años posibilitó una mejora relativa de las condiciones de vida

Argentina, que venía de un prolongado proceso de desindustrialización, persiguió desde 2003 el sostenimiento del «dólar alto» como mecanismo para consolidar una estructura de precios relativos favorable a las actividades productivas ■

de la población, al abaratar los bienes transables y, en particular, el valor de los alimentos en el mercado local.

Por su parte, Argentina, que venía de un prolongado proceso de desindustrialización, persiguió desde 2003 como objetivo central de la política macroeconómica el sostenimiento del «dólar alto» como mecanismo para consolidar una estructura de precios relativos favorable a las actividades productivas, pero también como soporte fundamental de

la política de fomento a la producción y el empleo. En ese marco, en el contexto de aguda mejora en los términos de intercambio iniciado en 2007, el país no solo no revaluó su moneda sino que el tipo de cambio nominal se elevó 29,1% entre enero de ese año y diciembre de 2010.

El aumento del tipo de cambio nominal potenció el incremento de los precios locales que ya se estaba produciendo como consecuencia de las variaciones

experimentadas a escala internacional. Más aún cuando, tras el fracaso de la Resolución N° 125 del Ministerio de Economía (que imponía retenciones móviles a las exportaciones de granos), el gobierno se vio imposibilitado de incrementar las alícuotas de los principales productos de exportación. A su vez, este impulso inicial al aumento en el ritmo de los precios fue robustecido por una exacerbación de la puja distributiva (con un componente destacado de la «inflación oligopólica»), en un contexto de políticas públicas activas para garantizar el nivel de actividad interno. Estos procesos derivaron en un sensible incremento en el ritmo de variación de los precios, que promedió anualmente 22,3% entre 2007 y 2010⁴.

En este marco, a pesar de la depreciación nominal del valor de la moneda, el tipo de cambio multilateral, en términos reales, se apreció en casi 20% entre 2007 y 2010. Por lo tanto, si bien la política macroeconómica tuvo por objetivo mantener la competitividad externa de la economía por la vía cambiaria, ese objetivo parece haberse desdibujado parcialmente durante los últimos años debido a la elevada inflación –en un marco de aceleración de la puja distributiva–. Es más, si se compara la variación del tipo de cambio real con respecto al dólar entre enero de 2007 y diciembre de 2010, se constata que Argentina registró la mayor revalorización en el valor de su moneda entre los países de la región y superó incluso a Brasil (v. gráfico 3).

De todas formas, desde el punto de vista estrictamente cambiario, el país mantiene niveles de competitividad externos bastante más elevados que los registrados en la economía brasileña, ya que el proceso de apreciación de ambas monedas en los últimos años partió de umbrales del todo distintos. Mientras que a comienzos de 2007 Argentina presentaba un tipo de cambio real multilateral sensiblemente más elevado que el vigente a fines del régimen de convertibilidad, en el caso de Brasil el nivel de apreciación ya era muy alto a raíz de las políticas macroeconómicas aplicadas durante la administración de Luiz Inácio Lula da Silva desde 2003.

Por ello, a pesar de la paulatina apreciación en el valor de la moneda, Argentina mantuvo desde 2007 un elevado superávit comercial y de cuenta corriente, aunque este último presentó una tendencia declinante, entre otras razones,

4. Ante la falta de confiabilidad de la información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desde 2007, se optó por emplear el denominado «IPC-7 Provincias», elaborado sobre la base de información suministrada por las Direcciones Provinciales de Estadística de las provincias de Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Salta. Este índice se utilizó además para estimar el tipo de cambio real multilateral y el tipo de cambio real respecto al dólar.

por efecto del creciente drenaje de divisas asociado a la remisión de utilidades y dividendos por parte del capital extranjero⁵. A la vez, no se produjo una desaceleración pronunciada en las tasas de crecimiento de la producción industrial, pero la apreciación de la moneda, en un marco de políticas industriales sumamente acotadas y con sesgos manifiestos, restringió las posibilidades de desarrollo de los eslabones más débiles del entramado fabril, sectores que fueron determinantes en la notoria recuperación industrial y del empleo a lo largo del primer quinquenio tras el colapso del régimen de convertibilidad.

No obstante, el aumento en el ritmo de variación de los precios internos y la apreciación del tipo de cambio real en los últimos años no implican que Argentina deba encuadrarse en los enfoques ortodoxos y perseguir las metas de inflación como objetivo central de la política económica. Por el contrario, la adopción de un patrón de crecimiento basado en una elevada competitividad externa de los sectores productores de bienes posibilitó alcanzar una de las fases de crecimiento económico más significativas de la historia argentina. Es más, el país creció a una tasa anual acumulativa de 7,4% entre 2003 y 2010, casi duplicando los niveles de crecimiento de la economía brasileña que, con una estrategia macroeconómica centrada en el control del nivel de precios, lo hizo a un promedio de 4,4% anual.

Si bien la competitividad externa de la economía argentina se redujo a lo largo de los últimos años, a fines de 2010 el tipo de cambio real multilateral era aproximadamente 50% más competitivo que el vigente en el último año del régimen de convertibilidad. De todas formas, no se puede soslayar la incapacidad de la política macroeconómica a lo largo de los últimos años para mantener un tipo de cambio competitivo. Es más, como ya se mencionó, a pesar de haber perseguido explícitamente una estrategia tendiente al mantenimiento de la competitividad externa, en términos reales Argentina fue el país que verificó una mayor apreciación en el valor real de su moneda en América del Sur⁶.

En este marco, se destaca la necesidad de avanzar en la discusión y la aplicación de un conjunto de políticas de desarrollo industrial que posibiliten una expansión sectorial asociada a un nuevo perfil de especialización y de inserción internacional, a partir de sectores cuya competitividad no dependa

5. A su vez, se debe señalar que desde 2007 se asistió a una intensificación en la fuga de capitales al exterior, que promedió anualmente los us\$ 14.376 millones entre 2007 y 2010.

6. Una medida estricta de competitividad requeriría de la utilización del tipo de cambio real multilateral de los distintos países de América del Sur.

exclusivamente del nivel del tipo de cambio en el corto plazo y de bajos salarios a escala mundial. Es indudable que para llevar a cabo semejante tarea se necesita de una activa intervención estatal. Ahora bien, el Estado no es un ente neutral e independiente de la sociedad civil, sino que en él se ven condensadas las relaciones de fuerzas entre las diferentes clases sociales y sus fracciones. De allí que, para avanzar con eje en las cuestiones apuntadas, resulte necesario repensar qué sujetos sociales tienen entre sus intereses modificar la pasiva inserción del país en la división internacional del trabajo. ☐

El Cotidiano

REVISTA DE LA REALIDAD MEXICANA

Noviembre-Diciembre de 2011

México, DF

Nº 170

VIOLENCIA Y DELITO EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO

VIOLENCIA Y DELITO EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO: No me mates: México en el túnel de la violencia, **Robinson Salazar Pérez e Ivonne Yenissey Rojas**. El campo de los delitos en México, **José Alfredo Zavaleta Betancourt**. Linchamientos en zonas urbanas: Estado de México y Distrito Federal, **Raúl Rodríguez Guillén**. El ocaso de la superstición punitiva, **Pedro José Peñaloza**. El crisol de la violencia en las universidades públicas, **Rafael Montesinos y Rosalía Carrillo**. A propósito de la violencia: Una mirada del sociólogo a nuestra violencia cultural, **José Luis Cisneros**. CONFLICTOS SOCIALES: Modernidad subordinada y Estado híbrido en México, **Luis Humberto Méndez y Berrueta**. EMPRESAS Y RELACIONES LABORALES: Estabilidad en el empleo y despido individual en la legislación laboral mexicana, **Karina Trejo Sánchez**. SECCIÓN INTERNACIONAL: Plan Colombia e iniciativa Mérida: negocio y seguridad interna, **Gian Carlo Delgado-Ramos y Silvina María Romano**. La dimensión mediática de la estrategia de miedo y securitización en América Latina, **Melissa Salazar Echeagaray**. La crisis europea en la actualidad, **Agustín Cue Mancera**.

El Cotidiano es una publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Av. San Pablo 180, Edif. K-011, Col. Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200, México, DF. Tel. 53 18 93 36. Apartado Postal 32-031, México, 06031, DF. Correo electrónico: <cotid@correo.azc.uam.mx>.

Estado compensador y nuevos extractivismos

Las ambivalencias del progresismo sudamericano

Sin duda América del Sur, gobernada mayoritariamente por partidos y movimientos que se autodefinen como progresistas, ha logrado varios avances en los últimos años, en general centrados en la reducción de la pobreza y el regreso de un Estado más activo. Sin embargo, parte de los buenos desempeños van en paralelo a la consolidación de un modelo sostenido en la explotación de la naturaleza –desde el gas hasta la soja, pasando por una diversidad de productos de la minería– y la consolidación de lógicas y prácticas extractivistas. El artículo analiza las potencialidades y los límites de los nuevos «Estados compensadores», la diferencia entre viejos y nuevos extractivismos y los crecientes conflictos socioambientales.

EDUARDO GUDYNAS

A lo largo de las últimas décadas se han sucedido diferentes descripciones del Estado latinoamericano. Tiempo atrás, se hablaba de un Estado desarrollista interesado en sustituir importaciones; su caída fue seguida por Estados que varios describieron como «burocrático-autoritarios»¹. Más recientemente, se difundió un Estado que aceptaba las reformas de mercado, se encogía y defendía discursos que varios definieron como «neoliberales».

Eduardo Gudynas: investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo. Es analista en temas de desarrollo sostenible. Su último libro es la colección de ensayos *Transiciones. Post extractivismo y alternativas al extractivismo en Perú* (en coautoría con Alejandra Alayza; Cepes / RedGE, Lima, 2011).

Palabras claves: extractivismo, Estado compensador, progresismo, ambiente, desarrollo, América del Sur.

1. Guillermo O'Donnell: *El Estado burocrático-autoritario*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1996.

Se sigan esas u otras caracterizaciones, lo cierto es que han ocurrido cambios sustanciales en el Estado a lo largo de estos años. En la actualidad, en el caso de América del Sur, el Estado está enmarcado en circunstancias no solo novedosas sino también muy particulares. En forma resumida, en la mayor parte de los países sudamericanos, el Estado está en manos de agrupamientos político-partidarios que se definen como progresistas o de la nueva izquierda y que navegan en una globalización turbulenta; y si bien varios países industrializados están sumidos en una grave crisis económico-financiera, el alto precio de las materias primas y el consumo asiático siguen alimentando una buena performance económica de la región.

En estas condiciones, están en marcha reformulaciones en las estrategias de desarrollo y, paralelamente, también está cambiando la conformación del Estado sudamericano. En este artículo se señala en primer lugar el papel clave desempeñado por el extractivismo exportador en las actuales e inusuales circunstancias globales. Seguidamente, se resumen los ajustes en las estrategias de desarrollo bajo la peculiar vocación de la izquierda progresista sudamericana, lo que desemboca en la configuración de lo que denominamos «Estado compensador». En esta nueva conformación hay una particular ecología política del desarrollo y el Estado, que expresa de nuevos modos los viejos mitos acerca de las enormes riquezas naturales que deben alimentar el crecimiento económico sudamericano.

■ Espectadores locales, crisis lejanas

Los países de América del Sur aparecen por momentos alejados de los problemas de la crisis global, que se mantendría anclada en las grandes economías industrializadas. En el Sur, casi todos los indicadores señalan buenas performances económicas, en especial las exportadoras. Así, los gobiernos sudamericanos, tanto en el pasado episodio agudo de la crisis de 2008 como en el actual, insisten en que sus economías estarían «blindadas» o «desacopladas» de lo que sucede en el Norte. En los casos en que se aceptan posibles efectos de una crisis global, los gobiernos pasan a señalar que las repercusiones serán limitadas, o que sus países se recuperarán mucho antes que otras naciones. De esta manera se adopta una postura de espectadores de una crisis que se concibe como distante.

Por el momento, las naciones sudamericanas muestran efectivamente buenos indicadores. El crecimiento económico se logró en todos los países en 2010 y 2011 –con excepción de Venezuela en 2010– y, en varios casos, a tasas altas –por ejemplo, para 2010 las más elevadas se registraron en Paraguay (15%),

Argentina (9,2%), y Uruguay (8,5%); el crecimiento promedio de América del Sur fue de 6,4% según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)².

Todas las administraciones impulsan estrategias que pueden ser esquematizadas como una defensa del crecimiento económico como motor del desarrollo, que se sustentaría especialmente en dos pilares: exportaciones e inversiones. En estos factores reside la confianza sudamericana frente a la crisis, ya que se asume que, sean unas regiones u otras, de todos modos se seguirán comprando sus materias primas. No es un hecho menor que esa postura también sea defendida por gobiernos que se definen como progresistas o de la nueva izquierda³. Aun reconociendo las diferencias con administraciones conservadoras o de la derecha clásica, y también aceptando las diversas posturas que existen en el seno del progresismo sudamericano, es impactante advertir que se sigue apostando al crecimiento económico mediado por exportaciones e inversiones. Y que esto se defiende en el contexto de una recurrente crisis del capitalismo en los países industrializados no deja de ser llamativo. En general, pese a ciertos discursos, se observa que la nueva izquierda gobernante ha aceptado ser reformadora dentro del capitalismo⁴.

A lo largo de los últimos años, las exportaciones también aumentaron, en valor, volumen y precio unitario en varios casos (exceptuando caídas en 2008). Pero también aumentó la proporción de materias primas en el total exportado (en el caso del Mercosur ampliado, pasó de 60,2% del total en 2005 a 68,4% en 2009). También la inversión extranjera se ha recuperado hasta recibir más de us\$ 85.000 millones en 2010; el principal destino son los recursos naturales: 43% del total⁵.

Las exportaciones y las inversiones se han vuelto mucho más importantes, y dentro de ellas, los recursos naturales tienen un papel más destacado. Esta situación se debe en buena medida a la expansión del llamado «extractivismo»,

2. V. Cepal: *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2011*, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2011.

3. Aquí se acepta la autodefinición de «izquierda» o «progresista» expresada por los propios gobiernos sin evaluar su pertinencia. En este conjunto se incluyen las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina; Evo Morales en Bolivia; Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil; Rafael Correa en Ecuador; Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay; y Hugo Chávez en Venezuela. En algunos casos se integran las pasadas administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, y la de Fernando Lugo en Paraguay, mientras que seguramente se deberá sumar a Ollanta Humala de Perú.

4. Francisco Panizza: «Unarmed Utopia Revisited: The Resurgence of Left-of-Centre Politics in Latin America» en *Political Studies* N° 53, 2005, pp. 716-734.

5. Todos los datos basados en indicadores de Cepal.

que incluye actividades como la explotación minera o petrolera, o los monocultivos intensivos. El extractivismo se caracteriza por la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales, que se exportan como *commodities* y dependen de economías de enclave (que pueden estar localizadas, como los campos petroleros o las minas, o bien ser espacialmente extendidas, como el monocultivo de soja).

La importancia del extractivismo exportador en buena medida responde a condiciones globales. Por un lado, la debacle de los mercados financieros convencionales hace que muchos se refugien en las materias primas, lo que contribuye a aumentar sus precios, o bien que busquen inversiones en plazas distintas de los países industrializados. Por otro lado, se mantiene la demanda de materias primas desde las naciones asiáticas, en especial China. El crecimiento económico, la reducción del desempleo, el abatimiento de la pobreza y un mayor acceso a bienes de consumo complementan la situación, y todo ello contribuye a la adhesión electoral que reciben muchos de los gobiernos progresistas.

Las exportaciones y las inversiones se han vuelto mucho más importantes, y dentro de ellas, los recursos naturales tienen un papel más destacado. Esta situación se debe en buena medida a la expansión del llamado «extractivismo» ■

■ Extractivismo clásico y neoextractivismo

El extractivismo propio de la minería y los hidrocarburos ha crecido en los últimos años. Mientras que Venezuela, Ecuador y Bolivia siguen siendo importantes exportadores de petróleo o gas, se observan cambios sustanciales en el sector minero. Se destaca la consolidación de Brasil, con enorme producción y exportación, que ha superado a las naciones andinas. Por ejemplo, la producción brasileña de bauxita aumentó de 19,3 millones de toneladas al asumir Lula en 2003, a 29 millones en 2010; la de hierro creció de 263,7 millones de toneladas a 370 millones en ese mismo periodo⁶. A partir de 2003 también hubo un incremento sustancial de la producción minera en Argentina, y aumentos moderados o estabilidad en Bolivia y Chile. Las exportaciones mineras originadas en el Mercosur ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) pasaron de más de us\$ 13.000 millones en 2003 a us\$ 42.000 millones en 2009, según datos de la Cepal.

6. Datos del Instituto Brasileño de Minería, <www.ibram.org.br>.

Bajo este empuje es necesario distinguir entre dos tipos de extractivismo. Por un lado, uno que podría calificarse como «clásico», en tanto fue el más común en las últimas décadas y es propio de gobiernos conservadores (como la Colombia de Álvaro Uribe y ahora Juan Manuel Santos, o el Perú de Alan García). En este modelo, las empresas transnacionales tienen un rol determinante, el Estado es funcional a esa transnacionalización y existen regulaciones y controles acotados (incluyendo regalías y tributos bajos). Se apuesta a que ese extractivismo genere crecimiento económico y a que este, a su vez, promueva «derrames» hacia el resto de la sociedad. Al mismo tiempo, se minimizan, niegan o reprimen las protestas ciudadanas por los impactos sociales y ambientales de la explotación.

Pero bajo los gobiernos progresistas tuvieron lugar varios cambios sustanciales. Los más llamativos han sido las llamadas «nacionalizaciones» de los recursos (los ejemplos más conocidos son los del sector petrolero y gasífero de Bolivia, Ecuador y Venezuela). Sin embargo, un examen más riguroso muestra que también hay muchas continuidades, y en consecuencia es más adecuado describir un estilo heterodoxo: persisten algunos elementos del pasado junto con otros nuevos, sus articulaciones son diferentes y, sobre todo, el extractivismo es defendido desde otras bases conceptuales. Esta nueva postura ha sido llamada «neoextractivismo progresista»⁷.

Este neoextractivismo se caracteriza por mantener, e incluso profundizar, la extracción minera y petrolera, sea por un aumento en los rubros clásicos o por la incorporación de nuevos recursos (por ejemplo, países tradicionalmente no mineros que intentan la megaminería como Uruguay, o países mineros que buscan nuevos rubros como el litio en el caso de Bolivia). A su vez, el modo extractivista de organizar la producción se expande a otros sectores, en particular los monocultivos de exportación.

El Estado juega un papel mucho más activo que en el extractivismo clásico, sea por una participación directa (por ejemplo, por medio de empresas estatales como la petrolera venezolana PDVSA) o por medios indirectos (asistencias financieras, subsidios, apoyos en infraestructura, etc.). El neoextractivismo va más allá de la propiedad de los recursos, sean estatales o no, ya que termina reproduciendo la estructura y las reglas de funcionamiento de los procesos

7. E. Gudynas: «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual» en AAVV: *Extractivismo, política y sociedad*, CAAF / CLAES, Quito, 2009.

productivos capitalistas, volcados a la competitividad, la eficiencia, la maximización de la renta y la externalización de los impactos sociales y ambientales. El empresariado transnacional no desaparece, sino que reaparece bajo otros modos de asociación, tales como la migración a contratos por servicios en el sector petrolero o *joint-ventures* para la comercialización (tal como sucede, por ejemplo, en Bolivia).

Se mantiene así una inserción internacional subordinada a la globalización, en la que los países siguen siendo tomadores de precios, no coordinan entre sí la comercialización de sus productos y defienden la liberalización del comercio global. Esto explica el apoyo de varios gobiernos progresistas a las instituciones de gobernanza global (como la Organización Mundial de Comercio, omc), así como el estancamiento de la integración regional dentro de América del Sur. Entretanto, el contexto global de altos precios de varios *commodities* y su demanda sostenida, junto con otros factores indicados antes, refuerzan los incentivos para promover el extractivismo.

Este estilo tiene fuertes efectos territoriales. Por unas vías, se mantiene o acentúa la fragmentación territorial que implica la existencia de sitios de explotación directamente vinculados a la globalización, mientras extensas zonas permanecen desatendidas por el Estado. Por otras vías, se impone una nueva geografía basada en bloques de concesión petrolera o licencias mineras que desplazan a comunidades locales, anulan otros circuitos productivos o rompen con territorios ancestralmente delimitados. También hay fuertes impactos ambientales y sociales. Los problemas por contaminación, pérdida de biodiversidad y otros efectos ambientales persisten, y en algunos casos se agravan.

Todo esto hace que las resistencias sociales, y en varios casos las protestas ciudadanas contra el extractivismo, estén presentes, con distinta intensidad, en todos los países con gobiernos progresistas. Estas van desde las movilizaciones ciudadanas contra la minería en Perú, Argentina y Ecuador, a otras, más institucionalizadas, pero también opuestas a la minería, en Uruguay. Las protestas ciudadanas están proliferando y el extractivismo está chocando contra un límite democrático.

Se mantiene así una inserción internacional subordinada a la globalización, en la que los países siguen siendo tomadores de precios, no coordinan entre sí la comercialización de sus productos y defienden la liberalización del comercio global ■

Bajo el neoextractivismo progresista, el Estado capta, o al menos intenta captar, mayores proporciones del excedente generado por los sectores extractivistas, apelando a medidas como regalías o tributos más altos. Sin duda, en varios países, como las economías andinas, el extractivismo sigue brindando un aporte crucial a los tesoros nacionales. A su vez, todos estos gobiernos defienden estas prácticas, y el propio extractivismo, sosteniendo que permiten recaudar fondos

Todos estos gobiernos defienden estas prácticas, y el propio extractivismo, sosteniendo que permiten recaudar fondos que son utilizados en programas de lucha contra la pobreza ■

que son utilizados en programas de lucha contra la pobreza. Estos van desde las conocidas transferencias monetarias –condicionadas a ciertas prestaciones– hasta las «misiones» venezolanas. No siempre hay un vínculo presupuestario directo; este está presente en Bolivia, por ejemplo, con el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH). Pero más allá de los recursos financieros verdaderamente

captados a partir de las actividades extractivas, el hecho sustancial es que todos los gobiernos progresistas defienden ese estilo, y uno de sus argumentos predilectos consiste en ligarlo a los planes contra la pobreza u otros tipos de programas en el campo de la justicia social. De esta manera ganan una legitimación social y política sustantiva.

Sin duda, esto también implica un viraje sustancial, ya que en el pasado la izquierda sudamericana criticaba duramente las economías de enclave extractivistas. Ahora las defiende como un componente indispensable para el desarrollo y el combate contra la pobreza. Es más, afirma que el Estado progresista será más eficiente e intensivo en ese aprovechamiento, y se acopla un discurso modernizador que alaba el éxito empresarial y comercial y el uso de innovaciones científico-técnicas y anuncia beneficios para toda la sociedad, especialmente los relacionados con el acceso al consumo material. De esta manera, se reconstruyen con otros componentes y distintas articulaciones las ideas tradicionales del desarrollismo sudamericano basado en el progreso y en la apropiación intensa de la naturaleza.

La impronta es tan fuerte que por momentos se instala un talante «extractivista» que se expande a otros sectores y tiñe los modos de concebir y organizar las economías. En efecto, prevalecen encadenamientos productivos muy cortos (incluyendo la fase de extracción y elaboración primaria de las materias primas, allí donde sea necesario), estructurados en especial como redes lo-

gísticas transnacionalizadas y flexibles. Su atención no se enfoca necesariamente en la propiedad de los recursos, sino en asegurarse la capacidad de controlar la extracción y comercialización; son mediadores en la apropiación de la naturaleza, y esos recursos pueden estar en control estatal, privado o mixto. Además, distintas empresas están comenzando a aceptar que deberán ceder parte de su renta para poder asegurarse acceso a los recursos y estabilidad en sus inversiones, y obtener protección estatal frente a los conflictos socioambientales.

Este talante extractivista no implica que se trate de un discurso conservador, sino que apunta al cambio y el futuro; no reniega del Estado, sino que lo necesita. A su vez se ajusta a la actual fase de la globalización, apelando a la flexibilización y la logística del transporte y la comercialización. Pero está desinteresado por otros aspectos, como puede ser una diversificación de las economías nacionales y su base en manufacturas o servicios, o bien considera que eso solo puede encararse en un futuro. Cuestiones como una transición del limitado fordismo sudamericano a un posfordismo no son relevantes, ya que es un estilo que no se organiza desde el empleo sino desde el acceso a los recursos naturales. Por estas razones, su dimensión en la ecología política se vuelve clave. El neoextractivismo es una postura defendida no solo por el progresismo, sino también por amplios sectores de la sociedad. Es más, puede afirmarse que es la expresión adoptada en el siglo XXI por la vieja cultura sudamericana de concebirse como región dueña de enormes riquezas ecológicas que deben ser intensamente aprovechadas.

■ **Contradicciones, equilibrios y Estado compensador**

El Estado sudamericano se ajusta al estilo de desarrollo de talante extractivista y a la vez lo reproduce. El éxito actual de los gobiernos, y en particular sus posturas optimistas frente a la crisis, solo son posibles en la medida que se mantenga el flujo de exportaciones de materias primas, sus altos precios y la atracción de inversiones. A su vez, hay una particular ecología política de concebir los recursos de la naturaleza y el desarrollo, que determina la marcha del Estado.

Por un lado, el Estado contemporáneo libera y apoya dinámicas propias de una economía capitalista, permitiendo una intensa apropiación de la naturaleza; pero por otro lado, intenta regular e intervenir esos ámbitos mercantiles. En efecto, todos los gobiernos progresistas proclaman que su objetivo en el área económica es lograr crecimiento, lo que sería indispensable para

generar empleo, captar renta para poder financiarse, etc. Por lo tanto, este Estado liberaliza y protege dinámicas propias del capitalismo contemporáneo, y se abstiene de intervenir cuando se ponen en riesgo esos procesos de acumulación. La promoción se hace con diferentes grados de apoyo y participación, que van desde cobertura jurídica hasta subsidios de diverso tipo; el

Posiblemente el Brasil de Lula y Rousseff sea el mejor ejemplo de esta nueva configuración, en la que el Estado ha asistido con enormes volúmenes de dinero a empresas exportadoras y ha contribuido a la transnacionalización de un pequeño grupo de grandes corporaciones ■

aliento y protección al ingreso de inversiones, y hasta en algunos casos directamente el desarrollo de la actividad por medio de empresas nacionales.

Posiblemente el Brasil de Lula y Rousseff sea el mejor ejemplo de esta nueva configuración, en la que el Estado ha asistido con enormes volúmenes de dinero a empresas exportadoras y ha contribuido a la transnacionalización de un pequeño grupo de grandes corporaciones (tales como JBS-FriBoi en ganadería y carnes, Odebrecht en construcción, Vale en minería, etc.). Por ejemplo, el plan agrícola 2011-2012 lanzado por Rousseff contempla asistencias financieras por unos us\$ 67.000 millones. En otros países, las capacidades de asistencia directa son mucho menores y los sectores involucrados son distintos, pero la vocación es esencialmente la misma. Se debe advertir que, por estas y otras vías, el Estado progresista es funcional a este capitalismo que descansa en la apropiación de recursos naturales para volcarlos a la globalización.

Pero, por otro lado, ese Estado también debe intervenir en el mercado y en los procesos de acumulación, por medio de instrumentos tanto económicos como no económicos, de manera de captar parte de la renta, impedir los efectos más negativos del capitalismo, intentar diversas acciones para elevar el bienestar de la población y combatir la pobreza, etc. Apunta en ese sentido para poder actuar en el campo de la justicia social (un elemento clave para poder sostener sus autodefiniciones de izquierda), a la vez que intenta algunas medidas de compensación social y ambiental. También hace esto por razones más mundanas, como reproducir la adhesión ciudadana electoral. Las intervenciones más enérgicas se observan en Venezuela, mientras que son menores en Ecuador y Bolivia, y bastante moderadas en países como Brasil o Uruguay.

De esta manera, en un sentido el Estado cede ante el capital, y en otro sentido trata de contenerlo, con lo cual se generan diversas tensiones. Si bien algunas de estas contradicciones recuerdan las alertas ya clásicas señaladas por Claus Offe⁸, su análisis enfocado en los países industrializados no puede trasplantarse a la realidad sudamericana actual. En varios países regidos por gobiernos progresistas no existe un Estado de Bienestar análogo al europeo, y naciones como Argentina, Chile o Uruguay, que se acercan a esas condiciones, de todas maneras muestran diferencias sustanciales. El neoextractivismo tampoco se estructura como una mediación para generar un Estado de Bienestar socialdemócrata *à la* sudamericana.

Si bien esas aproximaciones corresponden a diferentes contextos o a momentos históricos pasados, reconociendo esos aportes (así como otros, en especial el de Bob Jessop⁹), es posible examinar algunas tensiones presentes en el Estado progresista actual y, en particular, aquellas relevantes para una ecología política del extractivismo.

En primer lugar, se pueden mencionar las regulaciones que brindan instrumentos supuestamente objetivos, e independientes, por los cuales se otorgan o rechazan concesiones al capital. Es un intento de ofrecer medidas despolitizadas que logren evitar conflictos en la arena política. Se pueden mencionar como ejemplos los sistemas que otorgan beneficios fiscales a las inversiones o las exigencias en las evaluaciones de impacto ambiental. Sin embargo, ese tipo de instrumentos tiene limitada efectividad en Sudamérica por insuficiencias en formas y fiscalización, y por la debilidad del entramado jurídico.

En segundo lugar, cuando el Estado no puede imponer regulaciones supuestamente neutras y objetivas, entonces concede en un sentido o en otro, de acuerdo con las presiones sociales o con su interés en apaciguar las demandas, lograr apoyos o cumplir metas económicas. Como esto sucede en el contexto de democracias delegativas, en muchos casos termina siendo asunto de los presidentes. Por ejemplo, el gobierno de Morales intenta por todos los medios no ceder a los reclamos de grupos indígenas del Oriente boliviano, pero acepta con mayor rapidez las demandas de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, una organización mucho más poderosa y numerosa, es decir, con mayor capacidad de presión. La administración de Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, decidió vetar una original ley de protección

8. *Contradictions of the Welfare State*, MIT Press, Cambridge, 1984.

9. *The Future of the Capitalist State*, Polity, Cambridge, 2002.

de glaciares –que luego fue ratificada por el Congreso–, inclinándose por la minería de oro en lugar de contemplar las demandas de los movimientos ambientalistas.

En tercer lugar, el Estado puede simplemente ignorar o enquistar las demandas y los conflictos, o incluso rechazarlos. Esto es común frente al extractivismo, ya que muchos reclamos parten de grupos ciudadanos numéricamente pequeños, como comunidades campesinas o indígenas, que no generan presión política suficiente ni significan un riesgo electoral, y además reciben poca atención en los centros urbanos por estar localizados en sitios remotos. Ejemplos de esta

Muchos reclamos parten de grupos ciudadanos numéricamente pequeños, como comunidades campesinas o indígenas, que no generan presión política suficiente ni significan un riesgo electoral, y además reciben poca atención en los centros urbanos ■

situación son las posturas de minimizar los impactos ambientales de las grandes represas amazónicas sostenidas por Lula, o la condescendencia irónica de Mujica con los ecologistas.

En cuarto lugar, se encuentra la distribución de recursos fiscales. La medida más popular que aplican los gobiernos progresistas son las llamadas «transferencias condicionadas», pagos de dinero focalizados en los grupos más empobrecidos o de riesgo (posiblemente el más conocido es la Bolsa Familia que reciben más de cinco millones de familias en Brasil). Es por lo tanto una compensación

económica, con fines redistributivos. Estos programas han contribuido a los recientes éxitos en reducir la pobreza y la marginación en casi todos los países del bloque progresista. Son instrumentos simples y directos que pueden alcanzar una enorme cobertura (por ejemplo, según datos de la Cepal, reciben ayudas de este tipo 37,1% de la población ecuatoriana, 26% de la brasileña y 18,6% de la boliviana). Pero, además, estas políticas refuerzan la figura presidencial y logran claros réditos electorales.

Estos programas (como los bonos en Bolivia) pueden financiarse en buena medida gracias a los altos precios de los *commodities* exportados. Y ello genera a su turno un fuerte incentivo para promover nuevos proyectos extractivistas. Surge así un círculo vicioso: los planes contra la pobreza requieren de nuevos proyectos extractivistas, y estos a su vez generan nuevos impactos sociales y ambientales, que requerirán de futuras compensaciones.

Es importante insistir en el valor simbólico de estos programas y en el papel que desempeñan en la defensa del nuevo extractivismo. De allí parten las advertencias gubernamentales que tipifican los reclamos sociales y ambientales como trabas a la inversión, el crecimiento económico o el desarrollo. Pero, a su vez, esas respuestas no solucionan la reproducción de los conflictos socioambientales: estos siguen su marcha y en varios casos se recrudecen.

De ese modo, el Estado progresista busca lograr delicados equilibrios entre sus concesiones al capital y la necesidad de regularlo, entre alentar el extractivismo y amortiguar sus impactos sociales, y así sucesivamente. Buena parte de los instrumentos que le permiten manejar esas tensiones tienen una limitada efectividad. Los controles y la fiscalización siguen siendo débiles, pero las compensaciones económicas se vuelven más visibles y exitosas, y a partir de eso se cosecha legitimidad social y política. No obstante, las compensaciones no resuelven problemas de fondo, como generación del empleo o diversificación productiva, y entonces el Estado siempre está enfrentando nuevas tensiones que obligan a renovar el equilibrio. Un horizonte multidimensional del bienestar queda drásticamente reducido (sea en una versión clásica de inspiración europea o incluso en las ideas sudamericanas actuales del «buen vivir»). Por lo tanto, por ahora no prevalece un camino hacia un Estado de Bienestar.

En cambio, se conforma lo que podría llamarse un «Estado compensador», cuyo elemento clave son los equilibrios, para los que se utilizan varios instrumentos, entre los que se destacan las compensaciones económicas. Son equilibrios dinámicos, también inestables e incluso riesgosos, ya que buena parte de los ingresos dependen de flujos de exportación de materias primas cuyo precio o demanda esos gobiernos no controlan. En algunos casos el equilibrio se rompe, y el Estado debe recomponer las relaciones bajo nuevas condiciones o incluso debe apelar a una relegitimación por medios plebiscitarios (como ha hecho recientemente Rafael Correa en Ecuador).

Si bien en esta dinámica la captación de la renta extractivista es importante, el «Estado compensador» se diferencia en varios aspectos del Estado rentista clásico. Este último ha sido descrito para regímenes autoritarios o totalitarios, con fuerte sesgo patrimonial, bajo un extractivismo transnacionalizado y elites locales que capturan parte de esa renta en ausencia de esquemas sustantivos de redistribución¹⁰. Buena parte de estas características no se aplican

10. V. por ejemplo Kenneth Omeje: «Extractive Economies and Conflicts in the Global South: Re-Engaging Rentier Theory and Politics» en K. Omeje (ed.): *Extractive Economies and Conflicts in the Global South*, Ashgate, Londres, 2008.

a los gobiernos progresistas en tanto son democracias, despliegan mecanismos de redistribución, intentan fortalecer el Estado, etc., aunque es cierto que, sobre todo en el caso venezolano, pueden existir algunos atributos rentistas.

Este «Estado compensador» también es diferente de la condición manejada en Europa (antes de la crisis global) sobre una posible transición al posfordismo, o de un Estado enfocado en el trabajo de tipo schumpeteriano (el *Schumpeterian workfare state* de Jessop¹¹). En cambio, en América del Sur persisten estructuras económicas muy heterogéneas, que van desde el campesinado hasta algunos conglomerados industriales. Si bien el estilo extractivista busca un salto «modernizador» hacia la globalización, de todos modos sigue atado a las materias primas y alejado de la industrialización. Fernando Coronil apunta en la dirección correcta al señalar que, allí donde los ingresos dependen de la mercantilización de la naturaleza, la captura de la renta condiciona la organización de las actividades económicas y del Estado¹².

Estas ideas de un bienestar anclado en la compensación económica gozan de buena salud y legitiman el estilo extractivista. Los apoyos tienen múltiples orígenes: unos provienen de los que defienden el llamado a la justicia social propio de la izquierda; otros son sectores conservadores y grupos empresariales que apuestan al crecimiento económico y las exportaciones. Una importante legitimidad adicional se obtiene desde algunos movimientos sociales, como sindicatos de los sectores minero o petrolero (como sucede en Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela). En Brasil se registra una mayor adhesión, ya que hay centrales sindicales que invierten sus fondos de pensión en grandes empresas extractivistas.

Paralelamente, existen amplios sectores sociales que se contentan con un Estado compensatorio y que dejan de reclamar o presionar por avances en otros frentes, como la educación o la salud. Esto es comprensible, ya que muchos grupos sufrieron duras crisis sociales y económicas durante los años neoliberales, y actualmente disfrutan de mejoras reales. Pero tampoco puede descartarse que allí se expresen, en parte, residuos del cambio cultural generado en la impronta neoliberal, que fortaleció el privatismo y el individualismo económico. No es un hecho menor que los esquemas de bonos como pagos de dinero sean también funcionales a esa racionalidad economicista.

11. Ob. cit.

12. *El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*, Universidad Central de Venezuela / Nueva Sociedad, Caracas, 2002.



Finalmente, tal como ya se comentó, existe en América del Sur una antigua herencia cultural basada en la explotación de la naturaleza, que entiende el territorio como repleto de riquezas. Allí está anclado el mito de un «Estado mágico» que tan solo debe extraer esas riquezas para sostener el crecimiento económico¹³.

■ **Capitalismo benévolo y opciones de desarrollo**

El extractivismo y el Estado compensatorio necesariamente implican que el progresismo acepta el capitalismo y que considera que sus impactos negativos pueden ser rectificadas o amortiguados. La pretensión de una compensación posible se hace funcional a ese capitalismo, y las opciones de transformaciones sustanciales quedan acotadas o bien se ensayan en terrenos que no ponen en riesgo ni los procesos de acumulación ni la inserción global. Existen diferentes posturas en ese marco, ya que mientras el gobierno de Chávez exhibe una retórica anticapitalista y explora alternativas en la producción y la integración regional, sigue dependiente de un estilo primarizado y globalizado. En cambio, los gobiernos de Lula o Mujica han dejado muy en claro que su campo de acción está dentro del capitalismo y que solo se puede discutir cómo se redistribuyen los excedentes que capta el Estado.

**La compensación
progresista por
momentos se asemeja
más a la caridad
y la beneficencia
que a una verdadera
política social ■**

Por ejemplo, Mujica sostiene repetidamente, con toda sinceridad, que no se puede discutir si captar o no la inversión extranjera, sino que lo único debatible es cómo utilizar las ganancias que esta puede dejarle al país.

Por lo tanto, la imagen que se defiende es la de un capitalismo benévolo. Se reconocen sus imperfecciones y se sostiene que el Estado las podrá reducir, amortiguar o compensar. Pero, tal como se indicó más arriba, esto reduce el campo de la justicia y las opciones de crear un Estado de Bienestar universalista. La compensación progresista por momentos se asemeja más a la caridad y la beneficencia que a una verdadera política social. Atiende más el pago de bonos, pero no logra resolver problemas en otras áreas, como la educativa o sanitaria. Incluso se acerca, en algunos países, a una economía social-cristiana defensora de la asistencia social a los desamparados.

13. F. Coronil: ob. cit.

También existen efectos en las propuestas sobre el desarrollo. Los llamados a una estrategia «nacional y popular» –para usar la terminología empleada actualmente en Argentina– repiten la apelación al protagonismo estatal y a una mayor captación de excedentes, pero no cuestionan, por ejemplo, la racionalidad del extractivismo. Esto desemboca en que se reclama nacionalizar el petróleo, pero no se aborda la liberalización del sector minero y su transnacionalización. Las rupturas o asociaciones con grupos empresariales no dependen tanto de los sectores involucrados o del estilo de desarrollo que expresan, sino de condiciones vinculadas al ejercicio del poder político partidario o a las potenciales capturas de renta. En Brasil, las propuestas del «nuevo desarrollismo» son mucho más detalladas¹⁴. Se postula un regreso del Estado en varios frentes, pero con toda claridad se indica que es una estrategia capitalista, liberal y funcional al mercado. No se pone en cuestión el crecimiento como objetivo, ni el extractivismo como medio.

Sin duda, el nuevo desarrollismo o el «nac & pop» argentino preferirían priorizar la industrialización. Pero el problema es que, dados los altos precios de los *commodities*, la tentación es tan grande que sucumben a ella. Sorpresivamente esto también se encuentra en la Cepal, que ha abandonado sus viejos reclamos de diversificación productiva y ahora sostiene que los gobiernos deben aprovechar la bonanza de las materias primas.

Este sesgo hacia las reformas compensatorias hace que la izquierda deba enfrentar el costo de perder confianza intelectual, claridad ideológica o sus identidades definidas, para decirlo en palabras de Panizza¹⁵. Las nuevas opciones aparecen, por lo tanto, más allá del campo convencional del desarrollo. Un buen ejemplo son las actuales discusiones en los países andinos sobre el «buen vivir» como alternativa a la idea misma de desarrollo, que se colocan en una frontera tanto poscapitalista como postsocialista.

■ Las posibilidades y los límites del Estado compensatorio

No cabe duda de que los gobiernos progresistas sudamericanos han generado cambios sustanciales. Detuvieron la ola neoliberal, recuperaron el Estado y se han mantenido en un marco democrático. Han permitido recobrar protagonismo político a sectores marginados, mejoraron las condiciones de vida de millones de personas y buscan encauzar una integración regional.

14. V., por ejemplo, Luiz Carlos Bresser Pereira: *Macroeconomia da Estagnação*, Editora 34, San Pablo, 2007.

15. Ob. cit.

Pero también es cierto que el enorme protagonismo que han ido tomando el extractivismo y las medidas de compensación monetaria están encontrando sus límites, y las capacidades que tienen de legitimación política y apaciguamiento social son ahora más limitadas. En varios casos esto se debe a los agudos impactos del extractivismo: esos efectos alcanzan tal envergadura que ya no existen compensaciones económicas aceptables para las comunidades locales. O bien, esos impactos afectan dimensiones no mercantiles que las poblaciones locales consideran innegociables. El extractivismo está chocando contra límites democráticos, sociales, culturales y ambientales en varios países, lo que desencadena una protesta ciudadana creciente.

El extractivismo está chocando contra límites democráticos, sociales, culturales y ambientales en varios países, lo que desencadena una protesta ciudadana creciente ■

El extractivismo está chocando contra límites democráticos, sociales, culturales y ambientales en varios países, lo que desencadena una protesta ciudadana creciente.

En este marco, se pueden señalar algunas tensiones. En primer lugar, el énfasis otorgado a las transferencias monetarias como un sinónimo de justicia social reduce el amplio y diverso campo

de la justicia a una dimensión (justicia económica redistributiva) y, dentro de esta, a un instrumento (pagos en dinero). La justicia se encoge y otras dimensiones, tales como las que involucran aspectos de la política, la representación y participación, o el ambiente, se minimizan o son desatendidas. Por ejemplo, las demandas originadas en la justicia ambiental son ignoradas o rechazadas por los gobiernos progresistas. Pero para los gobiernos de izquierda, la acusación de desatender la justicia es seria y tiene repercusiones políticas importantes, y eso explica en algunos casos las virulentas respuestas gubernamentales contra ambientalistas, indígenas y otros nuevos movimientos sociales.

En segundo lugar, muchos debates pasan a centrarse únicamente en reclamos alrededor de las compensaciones económicas (cuál es su valor, quiénes serán sus beneficiarios, quiénes serán los intermediarios, etc.). A su vez, se intenta adjudicar un valor económico a casi todo, y esa mercantilización corre el riesgo de asemejarse a la mirada neoliberal. Por factores de este tipo, así como por los indicados más arriba, un Estado compensador no asegura construir un régimen de bienestar de tipo socialdemócrata (al menos en el sentido de Gøsta Esping-Andersen¹⁶).

16. *Fundamentos sociales de las economías postindustriales*, Ariel, Barcelona, 2000.

En tercer lugar, los gobiernos progresistas edifican barreras de contención para evitar imponer nuevas regulaciones al capital que pudieran limitar su crecimiento económico, y con ello sus capacidades de lograr equilibrios por compensación. Por ejemplo, se evitan los mecanismos de consulta y participación ciudadana independiente, en tanto los políticos de izquierda muchas veces sostienen que ya conocen lo que el «pueblo» desea (ya que ellos provienen de ese pueblo, como repiten por ejemplo Lula, Morales o Mujica). En otros casos se apela al pragmatismo, y en su nombre se anula la exploración de alternativas. Ser pragmático antes era uno de los males del neoliberalismo, pero hoy sería una virtud. Finalmente, se redefine el consenso como «lo que la mayoría quiere», y se lo usa como justificación de las concesiones otorgadas al capital. Este tipo de respuestas deja al progresismo casi sin proyecto político de transformación, y por ello se corre el riesgo de que el giro a la izquierda se detenga.

En cuarto lugar, existen situaciones en las que el Estado no acepta demandas que se expresan en dimensiones no económicas, tales como los valores culturales, religiosos o ecológicos de un sitio. Si las reconociera, debería aplicar restricciones que volverían inviables muchos emprendimientos extractivistas. Pero en varios casos pareciera que ni siquiera las entiende y por lo tanto las interpreta de la única manera en que sabe hacerlo: como una disputa por el poder. El ejemplo más notable ha tenido lugar en agosto y octubre de 2011, en Bolivia, con los reclamos y la marcha indígena en defensa de uno de sus territorios, que fueron rechazados por el gobierno de Morales por ser una manifestación «política». El gobierno no responde a los argumentos sociales, económicos y ambientales de los indígenas de las zonas tropicales, sino que los rechaza en tanto ponen en cuestión los planes de desarrollo extractivista de la zona. Aquí la clave es que, entre las impugnaciones utilizadas, se decía que esos argumentos eran «políticos» y solamente eso, cargando el adjetivo de un sentido negativo intenso. Esta es una dinámica que despolitiza a la sociedad, y con ello el progresismo cancela su propia reproducción.

También operan factores en sentido contrario. Por ejemplo, algunos sectores sociales, a pesar de no resultar directamente afectados por el extractivismo, están cambiando sus percepciones. Así como ya se indicó sobre la permanencia de elementos propios de la herencia neoliberal en el individualismo ciudadano o la legitimación obtenida desde algunas centrales sindicales, también existen amplios sectores sociales que rechazan esas posturas y apuestan a valores de solidaridad y protección de la naturaleza, y a partir de eso rechazan el extractivismo. Estos cambios son análogos a aquellos que hace pocos años desembarcaron en la elección de los gobiernos progresistas. Existen amplias reservas de

movilización social en escenarios políticos que siguen evolucionando a rápidos ritmos y con mucha intensidad.

Finalmente, sin dudas el Estado progresista tiene la voluntad de desempeñar un papel activo y acabar con la pobreza. Pero también debe reconocer que muchas de sus medidas son ahora dependientes de una particular circunstancia global, lo que lo hace muy frágil ante los cambios internacionales. Insistir en una ruta extractivista aumenta su dependencia comercial e incrementa los riesgos. Por ello, es necesario retomar el debate y la reflexión sobre cuestiones como las autonomías nacionales y continentales, otro viejo tema de la izquierda que no puede ser olvidado. ☒

POLÍTICA y gobierno

Primer semestre de 2012

México

Volumen XIX N° 1

ARTÍCULOS: **Oswald Lara-Borges**, **Andrea Castagnola** y **Aníbal Pérez-Liñán**, Diseño constitucional y estabilidad judicial en América Latina, 1900-2009. **Daniela Vairo**, El «consenso de los perdedores» y la legitimidad de la democracia en América del Sur. NOTAS DE INVESTIGACIÓN. **Aldo E. Ponce**, **Amalia Mena-Mora** y **Brandon Rottinghaus**, El papel de la propensión al riesgo en las decisiones de voto: El caso de las elecciones mexicanas del año 2000. **Vidal Romero**, Notas para la evaluación de las encuestas preelectorales: Las elecciones para gobernador de 2010 en México. RESEÑAS

Política y Gobierno es una publicación semestral de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Carretera México-Toluca 3655, Km 16,5, Lomas de Santa Fe, 01210 México, DF. Apartado postal 116-114, 01130 México, DF. Tel.: 727.9836/727.9800, ext. 2202. Fax: 570.4277/727.9876. Correo electrónico: <politicaygobierno@cide.edu>. Página web: <www.politicaygobierno.cide.edu>.

Testimonio: nuevos colonialismos en América del Sur y África

*Radiografía de
la megaminería*

JAVIER RODRÍGUEZ PARDO

Una de las características del capitalismo del siglo XXI es el auge del extractivismo, un fenómeno que no es nuevo pero que se ha reconfigurado al calor de las necesidades de la economía y el mundo global. El actual *boom* de los precios de las materias primas ha redibujado territorios, en el marco de leyes benévolas para las empresas extractivas. África y parte de Sudamérica son objetivo de firmas multinacionales que articulan intereses políticos, económicos y a menudo militares para llevar adelante sus negocios.

Argentina nunca fue un país minero (no confundir con un país con minerales). Sin embargo, en la actualidad presenta territorios subastados y ocupados por unas 80 megacorporaciones dedicadas especialmente a la extracción metalífera, la mayoría canadienses y del «club» de las Islas Británicas (Commonwealth). En 2011, los proyectos mineros argentinos sumaban más de 200, en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación, o esperando luz verde. De ellos, unos 60 corresponden a las provincias norteñas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, medio centenar aún pretende operar en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y los restantes se desarrollan

Javier Rodríguez Pardo: docente, periodista de investigación y militante de asambleas socioambientales. Fue fundador del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), que frenó el establecimiento de un repositorio de desechos radiactivos en Gastre (Patagonia argentina). Es cofundador de Renace Argentina y autor de los libros *En la Patagonia NO* (Lemú, El Bolsón, 2006) y *Vienen por el oro, vienen por todo* (Ciccus, Buenos Aires, 2009). Integra la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, Argentina).

Palabras claves: extractivismo, minería a cielo abierto, Barrick Gold, América del Sur, África.

en las patagónicas provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro. A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que examinan vastas áreas cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con una inexplicable laxitud legal: las cifras extractivas estremecen por el volumen de la devastación que se practica no solo en Argentina sino en el conjunto de América Latina. Gas, petróleo, bosques, biodiversidad, minerales, agua y suelos fértiles fueron siempre los objetivos recurrentes de la política colonial, situación que hoy se magnifica con claridad en su adaptación neoliberal a través de reflatadas «invasiones» en nueva versión. El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile firmado por Carlos Menem y Eduardo Frei en 1997 es un buen ejemplo de neocolonialismo. Se trata de un instrumento legal que cede literalmente la Cordillera de los Andes a las firmas transnacionales y transforma vastos territorios en un virtual «tercer país» con legislación y código propios de funcionamiento: 4.441 km de frontera argentino-chilena y una franja de unos 150 km a cada lado componen ese nuevo territorio regido por el extractivismo. En el resto de la geografía argentina, las corporaciones mineras obtuvieron ventajas que no rigen para las otras actividades comerciales: un paquete de disposiciones jurídicas y un código minero, encabezados por la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, les permiten pagar regalías paupérrimas, las eximen de impuestos y gravámenes, les facilitan obtener subsidios en insumos y reintegros por exportaciones, al mismo tiempo que tributan con declaraciones juradas –con la evidente posibilidad de fraguar los datos- una vez que los bienes extraídos arriban al país de destino y no al atravesar la aduana. Las corporaciones mineras eluden, en definitiva, los controles reales que deberían tutelar las exportaciones. Un importante matutino porteño lo destacaba ya hace años con inocultable sorpresa: «los propios representantes de las empresas mineras comentaron públicamente que Argentina supera en oportunidades de negocios a Australia y a Estados Unidos merced a un marco legal conveniente en materia económica y fiscal, y flexible en el terreno medioambiental»¹.

América Latina padece las «invasiones» mineras porque la tecnocracia globalizada de las corporaciones descubrió la manera de extraer los minerales de baja ley, minerales críticos y estratégicos que faltan en el Norte y que abundan en partículas diseminadas en territorios del llamado Sur, a los que se accede dinamitando extensos ecosistemas, pulverizando rocas, destruyendo glaciares, expulsando a comunidades y contaminando con una sopa química las nacientes de acuíferos y las napas en las áreas donde se ejecuta

1. *La Nación*, 19/4/1996, en el marco de la conferencia «Haciendo minería en la Argentina».

la actividad extractiva. Todas las manifestaciones mineras registradas en las direcciones de los organismos provinciales respectivos figuran como poli-metálicas; yacimientos de oro, plata, cobre y uranio contienen también minerales como molibdeno, renio y las llamadas «tierras raras», generalmente de mayor relevancia que el mineral madre motivo de la explotación. Del socavón de antaño se pasó a la minería a cielo abierto, y el *open pit* hegemonizó nuevos paisajes y convirtió territorios en verdaderos quesos gruyer. Los estragos que produce esta nueva minería, que desecha la linterna en el casco del obrero, son considerables: requiere de mayores volúmenes de agua, más energía para movilizar equipos y plantas y, cuanto más baja es la denominada ley mineral, de mayor cantidad de compuestos químicos con cianuro y ácido sulfúrico, más voladuras y más escoria arrumbada en los alrededores: por cada anillo de oro la minería abandona unas 20 toneladas de escombros, cúmulos de contaminación e impacto ambiental en todos los órdenes.

Como señalamos, las transnacionales mineras pagan en función de lo que informan en sus declaraciones juradas, pero además, aunque se les aumente el canon, miles de proyectos dejarán un pasivo ambiental a perpetuidad. No se trata de unas pocas explotaciones capaces de comprometer un ecosistema; son cientos de mineras y subsidiarias que intentan operar en una misma provincia. «Pueblo minero, pueblo mísero», decía un antiguo proverbio del pasado europeo que repetían acongojadas comunidades mineras de asturianos y vascos. Sin embargo, el actual *boom* latinoamericano es presentado como un proceso razonable por medio del cual los recursos deben ser arrancados de la tierra a cambio de trabajo y de ingresos escasos. Se les dice «recursos» porque se puede acudir a ellos, recurrir a ellos, pero ¿debemos hacerlo? ¿Quién lo decide, quién lo propone y por qué? ¿Con qué derecho se justifica semejante impacto y dolo si 86% del oro termina en las estanterías de los joyeros y la mayor parte del 14% restante, en las bóvedas de los bancos? Solo una minúscula porción (3%) del 14% remanente se utiliza en la industria. ¿Se acude al recurso o, en realidad, al bien común? La actual minería a cielo abierto extrae arrasando, apela al ecosistema y destruye su complejidad para obtener los bienes que son comunes a todos los habitantes. Las riquezas existentes en el planeta no son recursos naturales, son bienes comunes, pero en el debate nos dirán (ya

Las transnacionales mineras pagan en función de lo que informan en sus declaraciones juradas, pero además, aunque se les aumente el canon, miles de proyectos dejarán un pasivo ambiental a perpetuidad ■

lo hacen) que las viviendas, las rutas, los vehículos y los electrodomésticos, todo proviene de la minería y, en gran parte, de la minería metalífera. De modo que –proclaman los defensores más eufóricos– la irracionalidad y la demencia del ecologismo fundamentalista nos quieren hacer retornar a la Prehistoria; pero estos argumentos en realidad ocultan, por ejemplo, que el agua vale más que el oro y que la actividad minera la agota en regiones que solo cuentan con un par de oasis, como las provincias cuyanas de Mendoza y San Juan.

La lógica habitual del ingeniero minero únicamente entiende que si hay mineral y es rentable extraerlo, se extrae, y no acepta la discusión sobre dónde, cuándo, cómo, cuánto y para qué se extrae. Sin formularse estas preguntas, las empresas se dedican a derribar montañas buscando minerales que –metafóricamente– solo existen en polvo, minimizando el pasivo ambiental con cálculos que finalizan en las bolsas de valores del «Primer Mundo»; es que la roca mineral –extinguida– perdió su formato vetiforme. Es el saqueo al que se refieren quienes critican las aberraciones de la prospección minera y de la bioprospección, el que fue decididamente advertido en septiembre de 2002 en la ciudad de Esquel cuando el activismo social

La respuesta de los pueblos latinoamericanos no es violenta, al menos por el momento. Se trata de pobladas que intentan defender el agua y los territorios considerados como el bien común natural máspreciado ■

de ese pequeño pueblo de la cordillera chubutense proclamó «¡Vienen por el oro, vienen por todo!» y mediante un plebiscito derribó con 82% de los votos las intenciones mineras de la aurífera canadiense Meridian Gold.

La respuesta de los pueblos latinoamericanos no es violenta, al menos por el momento. Se trata de rebeliones, pobladas que intentan defender el agua y los territorios considerados como el bien común natural máspreciado del hábitat.

Curiosamente, el agua que escasea en países del Norte está presente en Argentina con relativa abundancia; sin embargo, en el Noroeste argentino, la escasez de agua y la desertización son alarmantes. Pese a ello, la minera BHP Billiton mandó perforar cinco pozos para, a través de dos acueductos de 3.000 litros por segundo cada uno, llevar agua dulce desde la provincia argentina de Salta hasta Monturaqui, una estación chilena que se encuentra a 25 km de Socompa y a 75 km de mina La Escondida. De acuerdo con estudios realizados para BHP Billiton, los acuíferos de Atacama están en franco retroceso y

la producción de cobre de La Escondida no podría continuar sin agua². Son varias las explotaciones cupríferas chilenas que esperan el agua dulce que se bombeará desde el desierto salteño para lixiviar las rocas metalíferas. Una de ellas es mina Zaldívar, de Barrick Gold, ubicada a solo 10 km de La Escondida y a distancia semejante de Chuquicamata, gigantesca mina chilena de cobre a cielo abierto que opera Codelco, en Calama, y que consume 1.800 litros de agua dulce por segundo durante las 24 horas.

Hace 500 años se detectaban minerales a ojo, hoy se los detecta mediante satélites. La teledetección es un método eficaz para que los riesgos de inversión minera y los costos de la búsqueda de yacimientos se reduzcan sustancialmente. En 1900, EEUU obtenía cobre 5% de ley mineral; el que obtiene hoy apenas llega a 0,4% de ley. El planeta colapsa y la principal potencia mundial continúa con igual o mayor derroche; cada estadounidense consume por año casi 20 toneladas de minerales. La pregunta recurrente es qué planeta sería este si China consumiera la misma cantidad de minerales por habitante, y la respuesta es única: tendríamos un mundo inhabitable. Si consideramos que dentro de 40 años se habrá duplicado la cantidad de habitantes del planeta, habría que imaginar entonces una respuesta que evite la inmolación humana.

Para las corporaciones transnacionales como Barrick Gold, estas cuestiones parecen ser manejables sin reparar en los métodos. Basta recordar cómo fue creciendo la minera mayor del oro, de la mano de George Bush (padre), Adnan Khashoggi y Peter Munk³. Para nosotros, se trata de un caso testigo. En su condición de ex-presidente, Bush se convirtió en un importante accionista de Barrick y miembro honorario de la junta de asesoría internacional de la empresa. Adnan Khashoggi fue accionista de Barrick Gold Corporation; multimillonario traficante de armas árabe saudita, aliado de Bush y famoso por sus ventas ilícitas de armas a Irán⁴, fue detenido luego por el tráfico de armas a los «contras» nicaragüenses. Peter Munk fracasó en los negocios y pasó a ser un niño mimado de la monarquía británica, socio de Khashoggi y presidente de Barrick Gold Corporation. Brian Mulroney, ex-primer ministro de Canadá, director y mediador de Barrick, asistió en los comienzos mineros

2. *El Tribuno*, Salta, 15/4/2008.

3. V., por ejemplo, Hugo Alconada Mon: «Peter Munk, el polémico rey Midas de los negocios mineros» en *La Nación*, Buenos Aires, 6/11/2011, disponible en <www.lanacion.com.ar/1420837-peter-munk-el-polemico-rey-midas-de-los-negocios-mineros>.

4. V. «Arabia Saudí intentó retener los fondos de Khashoggi al estallar el 'Irangate'» en *El País*, 17/2/1987, disponible en <www.elpais.com/articulo/internacional/KASHOGUI/_ADNAN/ISRAEL/ESTADOS_UNIDOS/ARABIA_SAUDI/IRAN/IRANGATE/Arabia/Saudi/intento/retener/fondos/Khashoggi/estallar/Irangate/elpepiint/19870217elpepiint_15/Tes>.

a Bush en la junta internacional de la empresa. En una nota que publicamos en *La Séptima*⁵, revista sanjuanina en la que denunciarnos las actividades de Barrick en los yacimientos de Veladero y Pascua Lama, reproducimos un texto del periodista Anton Chaitkin que afirma que «la inversión inicial mayoritaria de Barrick fue aportada por Khashoggi y algunos socios suyos del tráfico de armas, que por aquellas fechas organizaban el trueque de armas y drogas entre Irán, Israel y Nicaragua, que condujo en 1986 al escándalo de Irán y los contras»⁶. La representación legal de Barrick Gold en la provincia de San Juan respondió duramente al artículo, amenazó con iniciar acciones legales contra mí y exigió el derecho a réplica con el mismo espacio utilizado por las notas publicadas. Sostuvo que «aseverar que el Sr. Munk o cualquier persona en Barrick está involucrada con el narcotráfico o venta de armas es totalmente irresponsable, injurioso, escandaloso e indignante»⁷. Mi respuesta, por así decirlo, fue un nuevo informe: «Barrick miente», que ratifica el dossier cuestionado⁸. La doctora Jimena del Valle Daneri, representante legal de Minera Argentina Gold SA y Barrick Exploraciones Argentinas SA, ambas subsidiarias de Barrick Gold Corporation, según copia del poder que adjuntaron (en la causa legal que sugirieron iniciarme), no niega la vinculación de Barrick con

La biografía autorizada de Munk, Peter Munk: fabricación de un magnate moderno, describe vínculos, acciones y negocios del presidente de Barrick Gold y permite rastrear socios y orígenes empresarios, asociaciones investigadas judicialmente y, sobre todo, el método para sortear dificultades financieras y políticas ■

el ex-presidente de EEUU, pero se esmera en rechazar «toda participación de Bush en el proyecto minero de Zaire», entre otras consideraciones. Por otra parte, la biografía autorizada de Munk, *Peter Munk: fabricación de un magnate moderno*⁹, describe vínculos, acciones y negocios del presidente de Barrick Gold y permite rastrear socios y orígenes empresarios, asociaciones investigadas judicialmente y, sobre todo, el método para sortear dificultades financieras y políticas.

5. «La macabra Barrick de Bush», 26/11/2004.

6. A. Chaitkin: «The Bush Gang and Barrick Gold Corporation» en *Executive Intelligence Review* 24 N° 2, 3/1/1997.

7. Carta fechada en San Juan, Argentina, el 9 de diciembre de 2004, dirigida a *La Séptima* y firmada por Jimena Del Valle Daneri.

8. *La Séptima*, 9/2/2005.

9. Donald Rumball: *Peter Munk: The Making of a Modern Tycoon*, Stoddart, Toronto, 1996.

Traficante de armas y amante del lujo hasta la excentricidad –su yate favorito apareció en una película de James Bond–, Khashoggi merodeó todos los grandes escándalos de los años 70 y 80. Entre otros, el Irán-contras, el bcci, el banco de Gaith Pharaon, del megalavado y hasta la desaparición del patrimonio (mal habido, claro) de los filipinos Ferdinand e Imelda Marcos, por cientos de millones de dólares.¹⁰

Además, Khashoggi fue socio de Munk en emprendimientos hoteleros. El empresario saudí fue arrestado en 1989 por fraudes relacionados con propiedades inmobiliarias adquiridas por el matrimonio Marcos en Manhattan y cuadros que desaparecieron del Museo de Arte Contemporáneo de Manila¹¹.

Respecto de la mina Goldstrike en Nevada, la defensoría legal de Barrick que contraatacó mi escrito en la provincia de San Juan insistió en que «el Sr. Bush no tuvo desempeño alguno en la adquisición de esa mina para Barrick»; contesté recomendando repasar los numerosos artículos periodísticos sobre el tema, en particular uno escrito por Mark Sonnenblick que describe cómo «George Bush le regaló 10.000 millones de dólares a Barrick Gold»¹², o mejor aún, la denuncia del 11 de marzo de 1993 en la subcomisión respectiva del Congreso Nacional de EEUU, efectuada por Philip M. Hocker, presidente del grupo ambientalista Mineral Policy Center.

Por razones de espacio, en mi artículo «La macabra Barrick de Bush» omití mencionar a un singular número de ejecutivos y accionistas privilegiados de Barrick. Se destacaba Andrónico Luksic, asesor de la firma minera y acaudalado empresario chileno. Luksic maneja los destinos de mina Pelambres, sobre la cordillera, en el límite con la provincia de San Juan, donde se asientan del lado argentino los yacimientos de cobre y polimetálicos Pachón, segunda explotación binacional en ciernes, como la de Pascua Lama. El empresario fue construyendo un imperio bancario en sociedad con el Hong Kong and Shanghai Bank, conocido también como el «banco del tráfico de opio». En la actualidad, un proyecto conjunto entre Antofagasta Minerals –empresa perteneciente al grupo Luksic– y Barrick Gold los fuerza a litigar juntos contra el gobierno de Pakistán, que les impide explotar la concesión minera de Reko Diq por violar reglas locales¹³.

10. H. Alconada Mon: ob. cit.

11. Félix Monteiro: «Kashogui planea aceptar la extradición y evitar la cárcel» en *El País*, 21/4/1989.

12. M. Sonnenblick: «George Bush's \$10 billion giveaway to Barrick Gold» en *Executive Intelligence Review* vol. 24 N° 2, 3/1/1997.

13. Sandra Novoa F.: «Luksic activará negociación con gobierno pakistaní para proyecto Reko» en *La Tercera*, 3/12/2011, disponible en <<http://diario.latercera.com/2011/12/03/01/contenido/negocios/10-92675-9-luksic-activara-negociacion-con-gobierno-pakistaní-para-proyecto-reko.shtml>>.

Lo que seguramente causó mayor espanto en los lectores sanjuaninos de «La macabra Barrick de Bush» fue la descripción del genocidio en Zaire, que comenzó en septiembre de 1996, poco antes de la entrada de Barrick y Anglo American en esa zona minera. Los testimonios recogidos por Jeffrey Steinberg prueban que la invasión del este de Zaire coincidió con la entrada de Barrick y Anglo American para adueñarse exactamente de esa zona, y narran el espantoso genocidio llevado a cabo por fuerzas financiadas por franceses y británicos. En ninguna guerra –dice Steinberg– está ausente el botín. Este moderno mundo empresario incluye mafias sostenidas en estrategias globales para la apropiación de yacimientos, que enlazan a ex-oficiales de inteligencia, ejércitos y escuadrones de la muerte, sicarios de las mineras. Según Steinberg, la destrucción de África tiene un ideólogo: «Barrick Gold, junto con la Corporación Anglo American, con sede en Sudáfrica, está involucrada en las operaciones para arrebatarnos los metales estratégicos a las naciones de África Central, mediante el mayor genocidio per cápita que se haya visto en los tiempos modernos»¹⁴.

El auge del teléfono móvil desató la guerra del coltan, un mineral que extiende la vida de las baterías y combina dos metales: colombita y tantalita, de los que se extraen el tántalo y el niobio. Según parece, el continente guarda 80% de las reservas mundiales. Con el coltan se fabrican potentes teléfonos celulares y misiles balísticos intercontinentales, y su precio supera varias veces los del tungsteno y el oro; el mundo de la electrónica, la ciencia del espacio y las centrales nucleares dependen del desarrollo de este mineral¹⁵. En 1997, al caer en Zaire el presidente Mobutu (apoyado por capitales franceses), irrumpe Laurent Kabila, apoyado por Ruanda y Uganda (y sostenido por EEUU y Gran Bretaña), a costa de millones de caídos en enfrentamientos tribales sangrientos. En menos de un año, el conglomerado de intereses antimobutistas conquistó Kinshasa y cambió el nombre del país, que pasó a llamarse República Democrática del Congo. Las grandes empresas mineras anglosajonas obtuvieron concesiones en Katanga, al sur, área rica en cobre y otros minerales. Entre los beneficiados por el nuevo reparto destacan tres: Barrick Gold, de Canadá; American Mineral Fields, en la que Bush padre también tenía intereses, y la

14. J. Steinberg: «George Bush's 'Heart of Darkness'» en *EIR* vol. 24 N° 2, 3/1/1997.

15. Keith Harmon Snow y David Barouski: «El saqueo del Congo I» en *Business in Africa Magazine (International Edition)*, 8/2006, reproducido en *Rebelión*, 28/9/2006, <www.rebellion.org/noticia.php?id=38262>. V. tb. Ramón Lobo: «La fiebre del Coltan» en *El País*, 2/9/2001 y Deirdre Griswold y Johnnie Stevens: «Bush y Clinton en la red: Tras el asesinato de Kabila» en *Znet en español*, 24/1/2001, reproducido en *Rebelión*, 18/7/2001, <www.rebellion.org/hemeroteca/ddhh/kabila180701.htm>; Alberto Vázquez-Figueroa: *Coltan*, Ediciones B, Barcelona, 2008; Kevin Fedarko, Peter Graff y Marguerite Michaels: «Death Cries of a Nation» en *Time*, 11/11/1996; José Ferraz: «El coltan», video reportaje, 2006, disponible en <www.youtube.com/watch?v=Nx8C-YSA2TY>.

sudafricana Anglo-American. Las empresas francesas, aliadas de Mobutu, quedaron fuera. Pero Kabila muy pronto cayó también en desgracia al proyectarse como un nuevo Lumumba, cuando comenzó a exigir a las transnacionales el pago de impuestos por la explotación de las riquezas mineras...

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no duda en afirmar que el estratégico coltan financia estos genocidios y es una de sus causas, pero el resto de los minerales también siembran muertes que benefician a las corporaciones transnacionales: el antiguo Congo quedó convertido en el escenario de una guerra en la que han participado direc-

tamente los ejércitos de siete países. Madeleine Albright lo llamó la «Primera Guerra Mundial africana»: las fuerzas de Kabila, Angola, Zimbabwe, Sudán y Chad en un bando; tres guerrillas congoleñas, Ruanda, Burundi y Uganda, en el otro. El expolio de diamantes, oro y coltan del este del Congo llevó a los ejércitos de Ruanda y Uganda a enfrentarse a tiros tres veces (dos en 1999 y una en 2000) por el control de Kisangani¹⁶.

Los propios ingleses divulgaron los sucesos de manera impactante. El influente diario *The Times*, de Londres, publicó una opinión concluyente:

En noviembre de 1996, Washington acordó su apoyo diplomático a la rebelión en el este de Zaire, formada esencialmente por los tutsi (etnia fundadora del FPR de Kigali, entonces en el poder), que se saldó con la caída de Mobutu. En consecuencia, los medios franceses ven una conspiración anglófila con Kabila, en la que Inglaterra pone su experiencia de la era imperial, y los americanos, el dinero y el entrenamiento militar que los tutsi han necesitado para invadir el Zaire en solo siete meses. Puede que la teoría de la conspiración oculte una verdad. Entre los beneficiarios del cambio de régimen se encuentra George Bush, que con el ex-primer ministro canadiense Brian Mulroney es consejero de la Barrick Gold de Toronto y ha obtenido de los rebeldes una concesión minera de oro de 80.000 km², en el noreste de Zaire. Pero la conspiración es más profunda y más sutil.¹⁷

16. Ver Ramón Lobo: «Ruanda, en busca del contexto 2 (1998-2010)» en *Aguas Internacionales*, blog de *El País.com*, 21/7/2010, <<http://blogs.elpais.com/aguas-internacionales/2010/07/ruanda-en-busca-del-contexto-19982010.html>>.

17. Sam Kiley: «New Leaders Take Africa's Destiny Into Their Own Hands» en *The Times*, 20/5/1997; Uwe Friesecke: «Strategic Considerations of the Rwandan Catastrophe of 1994», *dossier* preparado para el Equipo de Defensa Caso Ntagerura, Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Arusha, Tanzania, 25 de junio de 2002.

**El antiguo Congo
quedó convertido en el
escenario de una guerra en
la que han participado
directamente los ejércitos
de siete países. Madeleine
Albright lo llamó la «Primera
Guerra Mundial africana» ■**

Este análisis no recibió objeciones de los involucrados. En cambio, los sucesos de Tanzania preocuparon mucho más a los magnates de Barrick y a sus vinculados políticos. Los abogados de Barrick que contestaron mi artículo «La macabra Barrick de Bush» también se preocuparon por desmentir mi nota referida a esos hechos: 400.000 personas, mineros artesanales, granjeros, campesinos, comerciantes pequeños, fueron desalojados por la fuerza de Bulyanhulu, en la región de Shinyanga, Tanzania central occidental, después de dos años de lucha en los que gobierno y mineras reclamaban el enclave de los depósitos del oro. Según varias denuncias, más de medio centenar de trabajadores fueron muertos (al parecer enterrados vivos) cuando en 1996 las autoridades y la compañía minera canadiense decidieron rellenar los pozos de extracción¹⁸. El trabajo sucio quedó hecho, y en marzo de 1999, Barrick Gold Corporation adquirió los depósitos de Bulyanhulu al comprar la Sutton Resources y su subsidiaria de Tanzania, responsables directas del genocidio. En el Foro Económico Mundial de 2007, Munk respondió las acusaciones afirmando que «cuando vamos a Tanzania o a Argentina o a la punta de Paquistán, aplicamos los mismos estándares ambientales y antipolución que en la Columbia británica». Las evidencias parecen refutarlo.

En secuencia semejante, Barrick opera mina Porgera, en Papúa Nueva Guinea. La misión Human Rights Watch investigó denuncias sobre expulsión de poblaciones y violaciones a mujeres de la comunidad local por parte de fuerzas de seguridad de Barrick Gold. Fui testigo presencial de las acusaciones en el Parlamento de Ottawa, llevadas a cabo por los indígenas a los que Barrick les incendió las viviendas. Los congresistas canadienses, preocupados por los métodos extractivos de sus empresas en el extranjero, trataban entonces un proyecto de ley (C-300) con ánimo de regularlas y controlarlas, motivo por el cual fui invitado a exponer en el Congreso. Pero en definitiva el proyecto no prosperó, precisamente debido al poder del lobby minero.

En los cinco continentes, Barrick se ha teñido de sangre (como en mina Pierina, en Perú) y ha ejecutado fraudes (la mina El Indio jamás tributó al fisco chileno al no declarar ganancias). Barrick fue noticia por contaminación, destrucción territorial y saqueo, con derrumbes (Lake Cowal, Australia), derrames de

18. Alain Deneault, Delphine Abadie y William Sacher: *Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique*, Les Éditions Écosociété, Montreal, 2008. Las empresas Barrick Gold y Banro negaron estas informaciones, acusaron a los autores de orquestar una campaña de difamación y los demandaron por us\$ 11 millones. V. «Dos mineras demandaron a tres investigadores por us\$ 11 millones» en BAE, <[www.diariobae.com/diario/2011/05/27/471-dos-mineras-demandaron-a-tres-investigadores-por-us\\$11-millones.html](http://www.diariobae.com/diario/2011/05/27/471-dos-mineras-demandaron-a-tres-investigadores-por-us$11-millones.html)>, 27/5/2011.

gasoil y multas (Veladero, Argentina) e informes de impacto ambiental adulterados, en los que se mencionaban inexistentes cuerpos de hielo de diez años de antigüedad, cuando en realidad se trataba de glaciares que la empresa intentó trasladar con palas mecánicas. En 2008, el Fondo Soberano Noruego se deshizo de las

acciones de la Barrick Gold por razones de ética ambiental; concretamente, condenó los «daños irreparables» en Papúa Nueva Guinea¹⁹.

Son varias las puntas del neogenocidio empresario transnacional. Como ha afirmado Noam Chomsky,

A comienzos de año, luego de que se informó que abogados del Departamento de Justicia de EEUU intentaron demostrar que el presidente podía autorizar el uso de la tortura, el decano de la Facultad de Derecho de Yale, Harold Koh, dijo al *Financial Times*: «La idea de que el presidente tiene el poder constitucional de permitir la tortura es como decir que tiene el poder constitucional de cometer genocidio».²⁰

A medida que los pueblos resistan, la respuesta de las potencias industrializadas también se endurecerá; necesitan perpetuarse, consolidar su dominio en un futuro que se presenta incierto para todos, en un planeta colapsado por una devastación consumista que ofrece cada vez menos insumos. Gran parte del Norte insiste con un modelo económico tan agotado como errátil e igualmente defiende su estatus de derroche y de poder, sabe que los recursos se acaban y los acopia, transfiere sus industrias contaminantes a regiones ignotas del Sur, mitiga su hacinamiento poblacional, la escasez de agua, el espacio territorial que perdió, y ejecuta para ello una irrupción masiva. Cobre y estaño, oro y diamantes dejaron de ser el botín preferido de las corporaciones mineras monopólicas que explotan las montañas orientales del Congo al aparecer el coltan, también frecuente en el continente sudamericano; estos minerales se convirtieron en la *vedette* de la minería, y muy pronto serían vitales para una variedad de artefactos electrónicos de la modernidad aeroespacial y médica (implantes) y para la industria bélica. De pronto los diarios europeos se tiñeron de sangre; EEUU decidió orquestar una guerra civil que desplazaría a gobierno y fuerzas congoleñas que no controlaba, como ya vimos, provocando

En 2008, el Fondo Soberano Noruego se deshizo de las acciones de la Barrick Gold por razones de ética ambiental; concretamente, condenó los «daños irreparables» en Papúa Nueva Guinea ■

19. V. la respuesta de la empresa minera en <www.barricksudamerica.com/minera/temas_respuesta_fondo_inversion.php>.

20. «La presidencia imperial y sus consecuencias» en *La Jornada*, 5/1/2005.

dos millones y medio de muertos y más de medio millar aniquilados por los tutsi y otras etnias al cruzar en fuga y en éxodo la frontera. ¿Acaso eso no es genocidio?

El advenimiento de un sinfín de denuncias sobre violación de derechos humanos no se hizo esperar, al tiempo que Nokia, Motorola, Compaq, Sony y otras fábricas pertenecientes a japoneses, chinos, alemanes y norteamericanos comenzaban a dominar el mercado mediante firmas de la talla de Cabot Corporation, OM Group de EEUU, la HC Starck de Alemania y Nigncxia de China, responsables de un genocidio escandaloso –si es que acaso hay algún tipo de genocidio que no lo sea–.

Los minerales críticos y estratégicos hoy son las «tierras raras», unos 15 elementos de la tabla periódica que a principios del siglo xx no tenían aplicación y cuya utilidad se desconocía, de ahí su nombre. Hoy la demanda mundial obliga a China, principal productora, a limitar las exportaciones de estos productos, previendo el mercado de automóviles eléctricos que irrumpe de manera sostenida y que requiere de aleaciones con el «raro» neodimio. Otro componente de estas «tierras» es el lantano, crucial para las baterías de los automóviles, en la electrónica y en comunicaciones digitalizadas, la biotecnología, la balística intercontinental, el dominio de las patentes, el territorio, el poder del conocimiento, la hegemonía del poder; el Norte viene por todo y, para entonces, estos pueblos del hemisferio sur habrán transitado de la resistencia a la rebelión, aunque amen desesperadamente la paz.

En este plano, juega un papel crucial la Ley Antiterrorista, patrocinada en su momento por EEUU, por orden y presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y secundada por gobiernos como el de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que lleva adelante una suerte de progresismo liberal desarrollista y una política pendular entre el revisionismo defensor de los derechos humanos y el apoyo a las corporaciones transnacionales extractoras de *commodities*. Esta ley permitiría juzgar acciones promovidas por militantes de movimientos sociales que ejercen el derecho a la protesta, que se oponen al uso licencioso del agua de la megaminería hidroquímica a cielo abierto, a la biodiversidad diezmada por el saqueo, rigurosamente defendida por campesinos y pueblos originarios. La criminalización de la protesta social es el resorte que les faltaba a las corporaciones transnacionales que condicionan sus inversiones al otorgamiento de licencias sociales para operar en paz su extracción utilizando trabajadores cautivos por necesidades básicas insatisfechas. Para el mundo globalizado de las corporaciones, un país con ley antiterrorista es un país confiable. ☐

Capitalismo, migraciones y luchas sociales

*La mirada
de la autonomía*

El capitalismo global es la sede de una tensión respecto a la cuestión de las migraciones: por un lado, intenta su valorización mediante políticas migratorias y, por el otro, procura reducir el excedente de movilidad mediante políticas de control. En este marco, los migrantes actúan *como si fueran ciudadanos*, lo que favorece procesos de resistencia, organización y subjetivación. Este artículo se enmarca en una lectura de las migraciones desde la autonomía, enfocada en los deseos, las expectativas y los comportamientos de los migrantes, y procura ver en la irregularidad de muchos de ellos algunas claves para pensar el capitalismo contemporáneo.

SANDRO MEZZADRA

Según Dimitris Papadopoulos, Niamh Stephenson y Vassilis Tsianos,

hablar de la autonomía de las migraciones implica entender la migración como un movimiento social en el sentido literal de las palabras, y no como una mera respuesta al malestar económico y social. (...) Desde luego, el enfoque de la autonomía de las

Sandro Mezzadra: doctor en Historia de las Ideas Políticas por la Universidad de Turín. Es profesor de Teoría Política Contemporánea y de Estudios Poscoloniales en la Universidad de Bolonia. **Palabras claves:** capitalismo, migraciones, movimientos sociales, autonomía, ciudadanía, trabajo vivo.

Nota: traducción de Mariano Grynszpan. Una primera versión de este texto fue presentada en la conferencia internacional «Indeterminate! Kommunismus», celebrada en Fráncfort del 7 al 9 de noviembre de 2003. El texto fue publicado en una versión revisada en italiano («Capitalismo, migrazioni, lotte sociali. Appunti per una teoria dell'autonomia delle migrazioni» en S. Mezzadra [ed]: *I confini della libertà. Per un'analisi politica delle migrazioni contemporanee*, DeriveApprodi, Roma, 2004) y luego se tradujo a varios idiomas. La presente versión no solo ha sido revisada y actualizada, sino que prácticamente constituye un nuevo texto, que tiene en cuenta las críticas y los debates desarrollados recientemente en contextos académicos y activistas.

migraciones no considera la migración de forma aislada respecto a las estructuras sociales, culturales y económicas; por el contrario, es concebida como una fuerza creativa dentro de estas estructuras.¹

Para abordar el tema de la autonomía de las migraciones, es necesaria entonces una «sensibilidad diferente», una *mirada* diferente. Esto significa que hay que observar los movimientos y conflictos migratorios desde una perspectiva que priorice las prácticas subjetivas, los deseos, las expectativas y los comportamientos de los propios migrantes. Esto no implica adoptar una concepción romántica de la migración, ya que se tiene siempre presente la *ambivalencia* de los comportamientos y las prácticas subjetivas. Dentro de la migración, considerada como un movimiento social, se incorporan nuevos dispositivos de dominación y explotación, así como nuevas prácticas de libertad e igualdad. En este sentido, el enfoque de la autonomía de las migraciones debe ser comprendido como una perspectiva distinta hacia la «política de movilidad»: una perspectiva que enfatice la participación subjetiva dentro de las luchas y confrontaciones que constituyen materialmente el campo de esa política. El enfoque en cuestión muestra cómo la misma «política de control» se ve forzada a establecer un acuerdo con una «política de migración» que exceda estructuralmente sus prácticas de (re)fronterización. De hecho, permite analizar la producción de irregularidad no como un proceso de exclusión y dominación, administrado por el Estado y las leyes, sino como un proceso tenso y basado en conflictos, en el que los movimientos subjetivos y las luchas relacionadas con la migración son un factor activo y fundamental.

Cuando se refieren a las luchas y los movimientos migratorios, las corrientes dominantes suelen emplear el punto de vista de la ciudadanía y sostienen que los migrantes quieren convertirse en ciudadanos. El enfoque de la autonomía de las migraciones hace algo diferente: observa que los migrantes –documentados e indocumentados– *actúan* como ciudadanos e insiste en que esos migrantes *ya son* ciudadanos². Esto requiere conceptualizar la ciudadanía de un modo distinto del empleado por los estudios convencionales, en los que la preocupación esencial consiste en integrar a los migrantes dentro de un marco legal y político ya existente. Nosotros, en cambio, destacamos la importancia de las prácticas y reivindicaciones de aquellos que no necesariamente son

1. *Escape Routes. Control and Subversion in the 21st Century*, Pluto Press, Londres-Ann Arbor, 2008, p. 202.

2. Manuela Bojadžijev y Serhat Karakayali: «Autonomie der Migration. 10 Thesen zu einer Methode» en Transit Migration Forschungsgruppe (ed.): *Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migration an den Grenzen Europas*, Transcript, Bielefeld, 2007, p. 205.



© Nueva Sociedad / Calvi 2012

Fernando Calvi (Córdoba, Argentina, 1973) ha ilustrado más de 30 libros. Colabora con las revistas *Barcelona*, *Ñ* y *Fierro*. Ha publicado en España, Italia, Francia, Estados Unidos y Noruega. Dictó talleres sobre guión de historietas en la Universidad de Córdoba y en la Feria del Libro de Buenos Aires. En la actualidad dirige un taller de historieta en su casa, en el barrio de San Telmo. Correo electrónico: <calviarte@gmail.com>.

ciudadanos en términos jurídicos, con el fin de desarrollar una comprensión adecuada para transformar el propio marco legal de ciudadanía. Así surge la posibilidad de conceptualizar los movimientos y las luchas de los migrantes irregulares como un elemento central para la construcción y transformación de la ciudadanía, considerada como una «institución en estado de cambio»³. Sin embargo, desde mi punto de vista (aquí es donde existe una diferencia respecto a la posición adoptada por Papadopoulos, Stephenson y Tsianos), el enfoque de la autonomía de las migraciones debe desarrollarse también en relación con otro aspecto: debemos comprender cuál ha sido el papel que ha desempeñado la movilidad en la historia y en la realidad contemporánea del capitalismo. Lejos de reducir «las subjetividades de movilidad a una subjetividad productivista del capitalismo»⁴, este texto resalta las tensiones y los conflictos que tienen lugar en la experiencia muy arraigada de los migrantes y sitúa el enfoque de la autonomía de las migraciones dentro de un contexto más amplio, que analiza la producción de subjetividad bajo el capitalismo. Precisamente desde esa perspectiva, se abordan diferentes cuestiones que están en juego en los debates actuales sobre migración (desde la denominada «nueva economía de la migración» hasta los conceptos de integración, ciudadanía y democracia), para delinear el enfoque de la autonomía de las migraciones. De acuerdo con el principal argumento desarrollado aquí, la irregularidad es una condición ambigua, que conforma un aspecto político clave en las luchas sociales contemporáneas en torno del capital y la migración.

Es necesario subrayar que aquí se presenta un argumento desarrollado en el marco de experiencias políticas y de investigación cuya base –cautelosamente y de forma provisional– podríamos denominar «europea». Aunque estoy convencido de que es necesario crear un marco analítico capaz de captar la especificidad de las migraciones *globales* contemporáneas, este texto tiene una «ubicación» específica. No obstante, he intentado tener siempre en cuenta las limitaciones y dificultades generadas por el hecho de que los debates críticos sobre migración «se han realizado casi invariablemente en el contexto de la migración hacia Europa o hacia sus ex-colonias»⁵. John

3. Étienne Balibar: *Nous, citoyens d'Europe? Les frontières, l'État, le peuple*, La Découverte, París, 2001; Engin F. Isin: *Being Political. Genealogies of Citizenship*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2002 y «Citizenship in Flux: The Figure of the Activist Citizen» en *Subjectivity* N^o 29, 2009, pp. 367-388; y S. Mezzadra: «Le vesti del cittadino. Trasformazioni di un concetto politico sulla scena della modernità» en S. Mezzadra (ed): *Cittadinanza. Soggetti, ordine, diritto*, Clueb, Bolonia, 2004, pp. 9-40.

4. D. Papadopoulos, N. Stephenson y V. Tsianos: ob. cit., p. 207.

5. John Chalcraft: «Labour in the Levant» en *New Left Review* N^o 45, 5-6/2007, p. 27.

Chalcraft señala de manera convincente que debemos tener en cuenta otras historias y experiencias migratorias, sobre todo en términos de la migración Sur-Sur. Esto no solo es útil en sí mismo, sino que también nos ayuda a evaluar cómo se analiza la migración en Europa y en el «mundo occidental» y nos permite, con un criterio metodológico, entrenar y descentralizar nuestra mirada crítica.

Sin embargo, lo que distingue el enfoque de la autonomía de las migraciones respecto a una perspectiva «economicista» es su énfasis en la subjetividad del trabajo vivo como un elemento constitutivo y antagónico en la relación del capital. Esto sigue la tradición del marxismo autonomista y se aferra a un elemento de subjetividad que se pierde fácilmente en una lectura más tradicional y «objetivista» de Marx. Por otra parte, la explotación siempre ha sido y es, hoy más que nunca, un proceso *social* cuyo análisis no puede limitarse al punto de producción. La explotación atraviesa la estructura completa de producción y reproducción. Desde esa perspectiva, la explotación de los migrantes debe ser localizada a lo largo de todo el proceso y la experiencia migratoria; siempre se enfrenta a la acción de los migrantes, como su condición de posibilidad y la base material de su potencial impugnación.

Como destacué anteriormente, el núcleo del enfoque de la autonomía de las migraciones que aquí se describe está compuesto por esa acción, es decir, por la producción de subjetividad de los migrantes como un campo disputado y contradictorio.

Lo que distingue el enfoque de la autonomía de las migraciones respecto a una perspectiva «economicista» es su énfasis en la subjetividad del trabajo vivo como un elemento constitutivo y antagónico en la relación del capital ■

■ Migración, capitalismo y atenuación de la movilidad

Migración y capitalismo: indudablemente, se trata de un tema complejo. Tanto desde la perspectiva histórica como desde la teoría, la problemática en cuestión es suficiente para que uno quede aturdido. Las luchas en torno de la movilidad atraviesan toda la historia del capitalismo, desde que el primer cercamiento en Inglaterra movilizó a la población rural local y desde que el primer barco cargado de esclavos cruzó el Atlántico. Incluso podría decirse que la fricción entre una «política de migración» y una «política de control»

constituye el núcleo de la historia del capitalismo. El resultado de estas luchas y tensiones es un dispositivo complejo, que se basa tanto en la *valorización* y la *contención* de la movilidad de la mano de obra como en la forma específica de subjetividad –formas de vida, deseos y hábitos heterogéneos– que se corresponde con las prácticas de movilidad⁶. El *excedente* de movilidad en relación con este complejo dispositivo conforma el principal aspecto en las luchas y políticas migratorias. Por un lado, el capital intenta reducir el excedente de movilidad a su código de valor a través de la mediación del Estado y otros mecanismos políticos y administrativos, lo que significa que lo *explota*. Por el otro, las luchas migratorias suelen caracterizarse por la transformación de este momento de excedente en una base material de resistencia y organización.

En esta perspectiva, la migración constituye un campo esencial de investigación, que nos permite comprender críticamente el capitalismo. Podría decirse que no hay capitalismo sin migración, y que el régimen que intenta controlar o atenuar la movilidad de la mano de obra juega un papel estratégico

**Reconfigurados
constantemente bajo la
presión de las luchas
y los movimientos
laborales, los regímenes
migratorios proporcionan
un ángulo por el cual
se reconstruyen complejas
formas de sujeción de la
mano de obra al capital ■**

en la constitución del capitalismo y las relaciones de clase. Reconfigurados constantemente bajo la presión de las luchas y los movimientos laborales, los regímenes migratorios proporcionan un ángulo por el cual se reconstruyen complejas formas de sujeción de la mano de obra al capital. Esto no es menos específico por ser paradigmático, en el sentido de que el control de la movilidad afecta la parcialidad de la mano de obra migrante de maneras particulares y, al mismo tiempo, afecta la totalidad de las relaciones laborales.

Por lo tanto, el análisis crítico de los regímenes migratorios contemporáneos permite obtener una perspectiva crítica de las transformaciones contemporáneas en materia de *composición de clase*, como se define a lo largo de las líneas del marxismo autonomista italiano⁷. Desde esta perspectiva, a la luz de los procesos contemporáneos asociados a la flexibilización del mercado laboral y la precarización del trabajo, lo que resulta particularmente importante son los movimientos y las luchas de

6. Cf. Jason Read: *The Micro-Politics of Capital. Marx and the Prehistory of the Present*, State University of New York Press, Albany, 2003, esp. cap. 1.

7. Ver S. Mezzadra: «Italy, Operaism and Post-Operaism» en Immanuel Ness (ed.): *International Encyclopedia of Revolution and Protest*, Blackwell Publishing, Oxford, 2009, pp. 1841-1845.

los migrantes irregulares, así como la política de control pertinente. Obviamente, en los tiempos modernos siempre ha habido migrantes que viven en condiciones «irregulares». Pero el «inmigrante ilegal», como concepto jurídico y como eje específico de las políticas de control y del discurso público, solo cobró notoriedad en Europa con el cambio radical en las políticas migratorias aplicado tras la crisis del petróleo de 1973, y con la crisis del fordismo⁸.

En noviembre de 1973, Alemania Federal paralizó el reclutamiento de mano de obra extranjera. Esta medida, junto con otras iniciativas similares impulsadas en países del norte de Europa, significó el fin de los programas y modelos de «trabajadores invitados» que habían dado forma a las políticas y los escenarios migratorios en la Europa occidental de posguerra. La reunificación familiar y el asilo se convirtieron en las principales vías para ingresar de forma legal y permanente en el espacio europeo, mientras que la migración siguió su curso independientemente del nuevo régimen jurídico. Esta dinámica autónoma de la migración debe ser entendida en el marco de las luchas radicales de los trabajadores migrantes (a menudo, de tipo autónomo), que caracterizaron los últimos años del sistema de «trabajadores invitados» y alcanzaron su expresión más notoria con la espectacular huelga producida en 1973 en la planta de Ford en Colonia⁹. Tanto estas luchas como las migraciones autónomas posteriores a 1973 demuestran los límites de la «teoría de amortiguación» que subyacía a los programas de «trabajadores invitados», según la cual los trabajadores migrantes podían ser repatriados en cualquier momento en caso de crisis económica (para externalizar el desempleo). Al mismo tiempo, los primeros intentos de flexibilizar el mercado laboral, acompañados por la persistencia de un amplio sector de economía informal –en especial (pero no solamente) en los países del sur de Europa–, consolidaron las condiciones económicas que favorecerían la migración «irregular» desde comienzos de la década de 1980. Esto facilitó la oferta de mano de obra barata, flexible y obediente, como requerían las políticas migratorias europeas a lo largo de los años 90. A pesar de las condiciones totalmente diferentes, a partir de mediados de los 70 también se observaron tendencias similares en Norteamérica, en los países recientemente industrializados y en los productores de petró-

8. Catherine Wihtol de Wenden: *Citoyenneté, nationalité, et immigration*, Arcantere, París, 1988; Liliانا Suárez-Navaz: «La lucha de los sin papeles. Anomalías democráticas y la (imparable) extensión de la ciudadanía» en L. Suárez-Navaz et al. (eds.): *Las luchas de los sin papeles y la extensión de la ciudadanía. Perspectivas críticas desde Europa y Estados Unidos*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2007, pp. 15-33.

9. M. Bojadžijev: *Die windige Internationale. Rassismus und Kämpfe der Migration*, Westphälisches Dampfboot, Münster, 2008, pp. 157-160.

leo. Durante las últimas décadas ha aumentado la fuerza de trabajo «irregular» de alta movilidad, muchas veces con la aceptación tácita por parte de Estados que han buscado fomentar la acumulación del capital transnacional¹⁰. Bajo estas condiciones, Anne

Anne McNevin señala que «los migrantes irregulares son incorporados a la comunidad política como participantes económicos, pero no se los considera ‘incluidos’. Son excluidos inmanentes» ■

McNevin señala que «los migrantes irregulares son incorporados a la comunidad política como participantes económicos, pero no se los considera ‘incluidos’. Son excluidos inmanentes»¹¹. En ese sentido, cabe mencionar que las prácticas y técnicas de «securitización» surgieron en este contexto mucho antes del 11 de septiembre de 2001. En los discursos populares y administrativos, se ha presentado a los migrantes irregulares como intrusos y,

por ende, como una importante amenaza para la soberanía y la seguridad del Estado. Por consiguiente, se incrementaron aún más las restricciones en cuanto a su acceso al espacio y a la libertad de movilidad. Aunque aquí no la analizaremos en detalle, esta cuestión es esencial para que podamos comprender la política contemporánea de movilidad en general, y la condición de los migrantes irregulares en particular.

La *precariedad* radical de los migrantes irregulares es la representación extrema de un conjunto de características producidas y reproducidas continuamente por un régimen migratorio específico, cuyo funcionamiento condiciona la vida de los migrantes regulares e irregulares, así como la de los refugiados. Analizaré algunas de las principales consecuencias teórico-políticas que surgen del enfoque de la autonomía de las migraciones. Pondré el énfasis en la crisis de representación de los movimientos migratorios en términos de «flujos» gobernables, que es muy evidente en la actualidad, independientemente de si uno «considera los requisitos de los empresarios» u «observa las motivaciones subjetivas de los migrantes»¹². Esta crisis plantea hoy un desafío radical a todas las políticas migratorias, cuyo eje es el concepto de *integración*.

10. Stuart Rosewarne: «Globalization, Migration and Labour Market Formation: Labour's Challenge?» en *Capitalism, Nature, Socialism* vol. 12 N° 3, 2001, pp. 71-84.

11. A. McNevin: «Political Belonging in a Neoliberal Era: The Struggle of the Sans-Papiers» en *Citizenship Studies* vol. 10 N° 2, 2006, p. 141.

12. Fabio Raimondi y Maurizio Ricciardi: «Introduzione» en F. Raimondi y M. Ricciardi (eds.): *Lavoro migrante. Esperienza e prospettiva*, DeriveApprodi, Roma, 2004, esp. p. 11.

■ Una nueva economía de la migración

El problema de esta teoría no radica tanto en la idea de integración como tal, sino más bien en el tipo de mirada que se produce hacia la migración una vez que el concepto de integración se incorpora como herramienta clave dentro de la investigación. Parafraseando al experto en migraciones argelino Abdelmalek Sayad, se podría decir que esto suele formar una suerte de espejo, en el que los migrantes siempre son vistos a través de la lente de la «sociedad receptora» (nacional), de sus «códigos» y sus «problemas»¹³. Por lo tanto, detrás del concepto de integración subyace el espectro del nacionalismo metodológico, del «punto de vista nativo» sobre los migrantes, que ha sido criticado de manera convincente por Nicholas De Genova en el contexto estadounidense¹⁴. La misma tensión existente entre una «política de migración» y una «política de control» se borra en el espejo de la integración, tal como ocurre en la «nueva economía de la migración». En realidad, la «nueva ortodoxia» sigue una modalidad clásica del discurso público estadounidense: considera que la migración es la confirmación de la movilidad social ascendente en el sistema capitalista y, en la línea de la «sucesión étnica», de la propia ciudadanía de Estados Unidos. Tanto en este país como en otros lugares muy distantes, las luchas sociales y políticas en torno de la migración han determinado una profunda renovación sindical en los últimos años¹⁵. Estas luchas experimentaron un recrudescimiento después del 11 de septiembre y se manifestaron de manera ostensible en las movilizaciones de 2006¹⁶. Sin embargo, desde el punto de vista de la «nueva ortodoxia», las luchas en cuestión son consideradas a lo sumo como variables dependientes en un modelo de acceso a una ciudadanía en esencia *comercial*¹⁷. La imagen de la ciudadanía estadounidense propuesta es unilateralmente expansiva; no tiene en cuenta el papel constitutivo jugado en su historia por la dialéctica inclusión/exclusión (en especial, mediante la posición de los «extranjeros ilegales») ni la jerarquización interna por líneas étnicas y «raciales», que ha producido verdaderos casos de *ciudadanos extranjeros*¹⁸. En este sentido, el marco integrador asociado a una

13. *La double absence*, Éditions du Seuil, París, 1999.

14. *Working the Boundary. Race, Space, and Illegality in Mexican Chicago*, Duke University Press, Durham-Londres, 2005.

15. V., por ejemplo, Immanuel Ness: *Immigrants, Unions, and the New us Labor Market*, Temple University Press, Filadelfia, 2005.

16. Susan Coutin: «¡Sí, se puede! Los sin papeles en Estados Unidos y la lucha por la legalización en los primeros años del siglo XXI» en L. Suárez-Navaz et al. (eds.): ob. cit., pp. 155-183 y N. De Genova: «Conflicts of Mobility, and the Mobility of Conflict: Rightlessness, Presence, Subjectivity, Freedom» en *Subjectivity* N^o 29, 2009, pp. 445-466.

17. Bonnie Honig: *Democracy and the Foreigner*, Princeton University Press, Princeton, 2001, p. 81.

18. Cf. Mae M. Ngai: *Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America*, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2003, pp. 5-9; Lisa Lowe: *Immigrant Acts. On Asian American Cultural Politics*, Duke University Press, Durham-Londres, 1996.

«nueva ortodoxia» de inspiración estadounidense elimina las tensiones que atraviesan el núcleo de la política contemporánea de movilidad.

Obviamente, la migración no tiene lugar en un vacío. Es imposible comprender la migración contemporánea si no se la analiza dentro del contexto correspondiente: el de las transformaciones radicales y catastróficas producidas en numerosos países africanos en la década de 1980 como consecuencia de los Programas de Ajuste Estructural impulsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la afluencia de inversiones extranjeras directas a partir de la década de 1960, la creación de «zonas de producción para la exportación» y la caída de la agricultura tradicional¹⁹. Basado en la obra de James Rosenau sobre relaciones internacionales, Nikos Papastergiadis ha utilizado el concepto de «turbulencia» para definir la multiplicidad de rutas y patrones que caracterizan a las migraciones globales contemporáneas, subrayando al mismo tiempo que los cambios asociados a estos movimientos resultan impredecibles²⁰. Desde el enfoque de la autonomía de las migraciones se puede interpretar que estos elementos de turbulencia intensifican las tensiones entre los movimientos migratorios y los equilibrios (el orden en el funcionamiento y la reproducción) del «mercado laboral» y la ciudadanía. Este enfoque sostiene que la migración conforma, estructuralmente, un *excedente* de los equilibrios mencionados. En torno de este excedente se pone en juego en forma continua la redefinición de los dispositivos de explotación y dominación, cuyos efectos se irradian hoy sobre todo el trabajo vivo y sobre toda la ciudadanía.

■ Gestión de la migración, producción de irregularidad

Los regímenes migratorios afectan aspectos claves de la soberanía, tanto desde una perspectiva histórica como contemporánea. Su función consiste en controlar las fronteras, distinguir entre ciudadanos y extranjeros y, fundamentalmente, decidir a quién se admite en el territorio nacional. Cuando hablamos del desarrollo de un régimen global de gestión de la migración²¹, no nos referimos a la aparición de un gobierno político integrado para este

19. V., por ejemplo, Saskia Sassen: *The Mobility of Labor and Capital. A Study in International Investment and Labor Flow*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988. [Hay edición en español: *Movilidad, trabajo y capital. Estudio sobre la corriente internacional de la inversión y del trabajo*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993.]

20. N. Papastergiadis: *The Turbulence of Migration. Globalization, Deterritorialization und Hybridity*, Polity Press, Cambridge, 2000.

21. Ver Franck Düvell: «Die Globalisierung der Migrationskontrolle. Zur Durchsetzung des europäischen und internationalen Migrationsregimes» en *Die Globalisierung des Migrationsregimes. Zur neuen Einwanderungspolitik in Europa, Materialien für einen neuen Antiimperialismus* N^o 7, 2002, pp. 45-167.

fin; aludimos, más bien, a la formación contradictoria y fragmentaria de un cuerpo de conocimientos dentro de comunidades políticas y epistémicas dispares. Las técnicas administrativas de control, las «normas» técnicas y los programas de capacitación circulan a escala mundial, ejerciendo una gran influencia en la formulación de las políticas migratorias nacionales. Por lo tanto, es necesario que nuestro análisis crítico respecto al régimen migratorio global emergente esté enmarcado en las enormes transformaciones que en las dos últimas décadas han reconfigurado la política internacional y el propio concepto de soberanía. La relación constitutiva (que es, al mismo tiempo, una tensión) entre la soberanía nacional y el capitalismo ha sido puesta en peligro y desplazada por procesos de globalización y financierización del capital²². Saskia Sassen señala que la soberanía «sigue siendo una propiedad sistémica», aunque «su inserción institucional y su capacidad para legitimar y absorber todo el poder legitimador, es decir, para ser la fuente de la Ley, se han tornado inestables»²³. El poder se está reconfigurando, en un contexto en el que la lógica de la soberanía se entrelaza con la lógica de la gobernabilidad neoliberal, con una gobernanza que se presenta como un sencillo proceso de persuasión sin coerción, según patrones neutros de cálculo y gestión de riesgos. Para los fines de este artículo, es importante recordar que la «razón política neoliberal» se ve forzada a considerar a los sujetos destinatarios de sus estrategias de gobernanza como «actores autónomos», tanto a escala nacional como internacional²⁴.

Los propios sujetos de soberanía son cada vez más cambiantes y heterogéneos. El régimen migratorio global en desarrollo constituye un claro ejemplo al respecto: se trata de un régimen del ejercicio de la soberanía con una estructura *híbrida y mixta*²⁵.

Los propios sujetos de soberanía son cada vez más cambiantes y heterogéneos. El régimen migratorio global en desarrollo constituye un claro ejemplo al respecto: se trata de un régimen del ejercicio de la soberanía con una estructura híbrida y mixta ■

22. Andrea Fumagalli y S. Mezzadra (eds.): *Crisis in the Global Economy. Financial Markets, Social Struggles, and New Political Scenarios*, Semiotext(e), Cambridge, MA-Londres, 2010.

23. S. Sassen: *Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages*, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2006, p. 415. [Hay edición en español: *Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales*, Katz, Buenos Aires, 2010.]

24. V. por ejemplo, Barry Hindess: «Citizenship and Empire» en Thomas Blom Hansen y Finn Stepputat (eds.): *Sovereign Bodies: Citizens, Migrants, and States in the Postcolonial World*, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2005, pp. 241-256.

25. Michael Hardt y Antonio Negri: *Empire*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2000, parte 3.5. [Hay edición en español: *Imperio*, Paidós, Buenos Aires, 2002.]

La definición y el funcionamiento de este régimen de soberanía implican la participación de Estados-nación con un grado de exclusividad cada vez menor, aunque los Estados persisten junto a formaciones «posnacionales» como la Unión Europea y a nuevos actores globales como la Organización Internacional para las Migraciones y ONG «humanitarias» en el contexto de la globalización²⁶. Es particularmente importante recordar esto al analizar un sitio estratégico de los regímenes migratorios contemporáneos: la *frontera*²⁷.

En los últimos años, varios expertos han analizado con un espíritu crítico la frontera, así como el campo de detención para inmigrantes, como un sitio de «excepcionalidad» que se corresponde con el restablecimiento de un concepto monolítico de soberanía. Este enfoque ha echado luz sobre la violencia y el imperio de la fuerza que están presentes en la vigilancia de la frontera. Sin embargo, su «tono apocalíptico»²⁸ no debe hacer olvidar que esa fuerza y esa violencia se articulan dentro de estructuras más complejas y refinadas relacionadas con el poder y el territorio. Otro de los riesgos de este enfoque radica en que puede borrar las luchas y los movimientos a través de los cuales los migrantes desafían la frontera en la vida cotidiana, convirtiéndola en «el sitio de la ley (...) y su crítica negativa»²⁹. Creo que es mucho más productivo seguir cuidadosamente estos movimientos, estas luchas y los procesos diarios de flexibilización de las fronteras, en los que operan nuevas tecnologías de control y dominación. En definitiva, estas no son menos feroces y letales –«necropolíticas», se podría decir, como Achille Mbembe³⁰– que la violencia ocurrida, por ejemplo, en el mar Mediterráneo, donde desde 1988, según datos independientes, han muerto 14.957 migrantes en su intento por llegar a Europa³¹.

Los migrantes irregulares –sujetos que al mismo tiempo se producen como incluidos y excluidos («excluidos inmanentes», según la mencionada definición de McNevin)– ocupan un límite difuso entre el adentro y el afuera, la inclusión y la exclusión. Estos sujetos juegan un papel constitutivo

26. Transit Migration: ob. cit.; Fabian Georgi: *Migrationsmanagement in Europa*, vDM, Saarbrücken, 2007; Rutvica Andrijasevic y William Walters: «The International Organization of Migration and the International Government of Borders» en *Environment and Planning* vol. 28 N^o 6, 2010, pp. 977-999.

27. S. Mezzadra y Brett Neilson: «Border as Method, or, the Multiplication of Labor» en *Transversal* N^o 6, 2008, disponible en <<http://eicpp.net/transversal/0608/mezzadraneilson/en>>, fecha de consulta: 6/3/2010.

28. M. Hardt y A. Negri: *Commonwealth*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2009, pp. 3-8; É. Balibar: *La proposition de l'égalité. Essais politiques et philosophiques 1989-2009*, PUF, París, 2010.

29. L. Lowe: ob. cit., p. 35.

30. «Necropolitics» en *Public Culture* vol. 15 N^o 1, 2003, pp. 11-40.

31. Fuente: <<http://fortresseurope.blogspot.com>>, fecha de consulta: 7/3/2010.

en las luchas y tensiones que atraviesan los sistemas de fronteras. En este marco, la irregularidad es uno de sus aspectos estratégicos. A pesar de que los efectos más inmediatos de una política de control se manifiestan en la fortificación de las fronteras y la sofisticación de los mecanismos de detención/expulsión, es claro que la gestión de los regímenes migratorios contemporáneos no se orienta hacia la *exclusión* de los migrantes. La función de estos regímenes, en cambio, consiste en evaluar, medir en términos económicos y, por lo tanto, *explotar* los elementos de excedente (de *autonomía*) que caracterizan los movimientos migratorios contemporáneos. En otras palabras, el objetivo no es cerrar herméticamente las fronteras de los «países ricos», sino establecer un sistema de diques para producir, en última instancia, «un proceso activo de inclusión del trabajo migrante a través de su ilegalización»³². Esto conlleva un proceso de *inclusión diferencial*³³, en el que la irregularidad aparece como una condición producida y como un aspecto clave en la política de movilidad.

**Los migrantes irregulares
–sujetos que al mismo
tiempo se producen como
incluidos y excluidos
(«excluidos inmanentes»)—
ocupan un límite difuso
entre el adentro y el afuera,
la inclusión y la exclusión ■**

El proceso de ilegalización o irregularización puede ser definido mediante su vínculo con la explotación del trabajo migrante. Esto se torna evidente en la exposición de Claude-Valentin Marie, incluida en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del año 2000, que indica que el trabajo migrante empleado de manera «clandestina» dentro de la economía informal es, en muchos casos, un factor emblemático en la fase actual de la globalización³⁴. Trataremos de identificar algunos de estos factores, que son menos visibles en el informe de la OCDE. Podemos decir que el migrante «clandestino» o irregular es la figura subjetiva en la cual la «flexibilidad» del trabajo (que aparece, ante todo, como el comportamiento social del trabajador, expresado en términos de movilidad) choca con el funcionamiento de los más rigurosos dispositivos de control e implementación. Por cierto, no se trata de identificar en el migrante «clandestino» o irregular a una nueva vanguardia potencial en la totalidad de la composición de clase, sino de utilizar esta posición subjetiva específica

32. N. De Genova: «Migrant 'Illegality' and Deportability in Everyday Life» en *Annual Review of Anthropology* N° 31, 2002, p. 439.

33. S. Mezzadra y B. Neilson: «Frontières et inclusion différentielle» en *Rue Descartes* N° 67, 2010, pp. 102-108.

34. «Measures Taken to Combat the Employment of Undocumented Foreign Workers in France» en OECDE: *Combating the Illegal Employment of Foreign Workers*, OECDE, París, pp. 107-131.

como una lente a través de la cual se puede leer la composición contemporánea del trabajo vivo. Dentro de la complejidad de su conjunto, esta composición de clase es definida con precisión en su dimensión tendencialmente *globalizada* a través de una alquimia variable de «flexibilidad» (movilidad) y control, junto con un modelo cada vez más diversificado de estratificación. Una vez analizada desde el punto de vista de la migración (en particular, la migración irregular

Mediante la vigilancia de sus fronteras y las políticas de ciudadanía, los Estados-nación intervienen día a día (y bajo las condiciones impuestas por un régimen global emergente de gestión de la migración) en un proceso continuo destinado a constituir política y jurídicamente los «mercados internos de trabajo» ■

contemporánea), la propia categoría de mercado laboral –con sus segmentaciones características³⁵– muestra aquí su naturaleza totalmente problemática.

Con independencia de una crítica marxista, la economía institucional y la nueva sociología económica estadounidense han señalado que la expresión «mercado laboral» solo tiene un valor metafórico. Se considera que allí faltan las condiciones básicas para la existencia de un «mercado»: la independencia de los actores del intercambio y la tendencia hacia el equilibrio³⁶. En lo que respecta a la migración contemporánea, Harald Bauder recurrió a algunas posturas críticas de Pierre Bourdieu para mostrar cómo se relaciona la situación laboral de los migrantes internacionales con los procesos de diferenciación social, cultural e institucional³⁷. En realidad, mediante la vigilancia de sus fronteras y las políticas de ciudadanía, los Estados-nación intervienen día a día (y bajo las condiciones impuestas por un régimen global emergente de gestión de la migración) en un proceso continuo destinado a constituir política y jurídicamente los «mercados internos de trabajo». Por lo tanto, la gestión de la migración juega un papel estratégico allí donde fracasa la lógica del mercado. Como infiere Bauder, «la ciudadanía es un mecanismo legal para que los trabajadores sean asignados a una jerarquía de categorías de estatus»³⁸. La posición de los

35. Michael J. Piore: *Birds of Passage. Migrant Labour and Industrial Societies*, Cambridge University Press, Cambridge, 1979.

36. V., por ejemplo, Robert P. Althausen y Arne L. Kalleberg: «Firms, Occupations, and the Structure of Labor Markets: A Conceptual Analysis» en Ivar Berg (ed.): *Sociological Perspectives on Labor Markets*, Academic Press, Nueva York, 1981, pp. 119-149.

37. Harald Bauder: *Labor Movement. How Migration Regulates Labor Markets*, Oxford University Press, Oxford-Nueva York, 2006, p. 8.

38. *Ibid.*, p. 26.

migrantes irregulares forma parte de este mecanismo legal: la irregularidad es, simultáneamente, uno de sus productos y una condición clave para su funcionamiento.

■ Familias, hogares y comunidades

Las luchas, tensiones y violencias que atraviesan los regímenes de frontera y migración se reinscriben dentro del proceso migratorio completo (mucho más allá del tema de la frontera) y dan forma a la experiencia subjetiva de los migrantes. Teniendo esto en cuenta, es necesario retroceder un paso y volver a hablar de la «nueva ortodoxia», sobre todo acerca de uno de los puntos que parece otorgar la mayor importancia a la «autonomía de las migraciones»: la consideración del aporte fundamental que realizan las redes familiares y comunitarias a la dinámica migratoria y a la integración de los migrantes en las «sociedades receptoras». Alejandro Portes critica la imagen abstracta del individuo racional como protagonista de los movimientos migratorios (presupuesta durante mucho tiempo por el enfoque neoclásico) y señala: «Reducir todo al plano individual significa limitar la investigación de modo inaceptable, ya que se impide el uso de unidades de análisis más complejas –familias, hogares y comunidades– como base para la explicación y la predicción»³⁹. Es la única forma en que la experiencia social ingresa en el campo analítico desde la perspectiva de la «nueva ortodoxia». Sin embargo, hay un claro paralelismo entre la crítica dirigida a la economía neoclásica por la «nueva economía de la migración» y la crítica comunitaria de la representación del individuo esgrimida en la teoría política liberal clásica. Este paralelismo se ve confirmado por Michael Walzer, quien considera que la principal contribución de las «olas migratorias» hacia EEUU consiste precisamente en el regalo realizado por los migrantes; estos dan a la sociedad receptora recursos comunitarios, que actúan como un suplemento afectivo del vínculo social continuamente cuestionado por el desarrollo capitalista⁴⁰. En mi opinión, este paralelismo debería servir de advertencia para evitar cualquier uso acrítico de las referencias a las redes familiares y comunitarias. Como dijo brillantemente Bonnie Honig, la inspiración «progresista» de Walzer puede ser anulada con facilidad. Para ello hay que recurrir a una serie de discursos que enfatizan la importancia de (algunos de) los migrantes a la hora de restablecer la eficacia de los papeles sociales y los códigos de género, que han sido puestos en tela de juicio en el mundo occidental en las últimas

39. «Immigration Theory for a New Century: Some Problems and Opportunities» en *International Migration Review* vol. 31 N^o 4, 1997, p. 817.

40. V. por ejemplo M. Walzer: *What it Means to Be an American*, Marsilio, Nueva York, 1992.

décadas, principalmente por los movimientos feministas⁴¹. Este punto no es vago ni abstracto: un sector del mercado en expansión, en el que operan las nuevas agencias matrimoniales transnacionales, nació en torno de una demanda masculina dirigida a lograr la renormalización patriarcal de los papeles de género dentro de la familia. Se ofrecían mujeres «sumisas y afectuosas» a las que solo les interesaban «la familia y los deseos del marido»⁴². No hace falta decir que la xenofilia, alimentada por el exotismo y las fantasías de una «nueva masculinidad», puede convertirse fácilmente en xenofobia cuando se descubre que esas mujeres «sumisas y afectuosas» en realidad solo están interesadas en obtener la documentación de residencia y aprovechan la primera ocasión para empacar y marcharse...

La trayectoria seguida por estas mujeres, que puede aproximarse a la de tantas trabajadoras del sexo que ingresan a la Europa de Schengen⁴³, parece ofrecernos una perspectiva privilegiada para abordar la subjetividad de las personas migrantes. Lo que se describe como una feminización creciente de las migraciones⁴⁴ constituye, por otra parte, un espacio importante para la investigación. Desde luego, aquí nos enfrentamos a procesos que son profundamente ambivalentes. En un excelente análisis relativo a la situación de las trabajadoras domésticas filipinas en Roma y en Los Ángeles, Rhacel Salazar Parreñas investiga cómo se corresponde la fuga de las relaciones patriarcales en el país de origen con la sustitución del trabajo afectivo y de cuidado, que ya no quieren realizar las mujeres occidentales «emancipadas»⁴⁵. Salazar Parreñas muestra de manera convincente en qué medida la migración femenina contemporánea tiende a reproducir la subordinación de clase y de género. Con una investigación adicional de las migraciones femeninas dentro del «Sur global» (sobre todo, los movimientos de la fuerza de trabajo que han sostenido la productividad de las zonas de producción para la exportación), probablemente se lograría una comprensión más profunda y precisa⁴⁶. Por

41. B. Honig; ob. cit., pp. 82-86.

42. *Ibíd.*, p. 89.

43. Se refiere al acuerdo firmado en 1985 por el cual se han eliminado los controles fronterizos internos entre 26 Estados europeos [N. del E.]. Ver R. Andrijasevic: «The Difference Borders Make: (Il)legality, Migration and Trafficking in Italy among Eastern European Women in Prostitution» en S. Ahmed et al. (eds.): *Uprootings/ Regroundings: Questions of Home and Migration*, Berg, Oxford-Nueva York, 2003, pp. 251-272.

44. Por ejemplo, Stephen Castles y Mark J. Miller: *The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World*, Guilford Press, Nueva York-Londres, 2003, p. 9.

45. *Servants of Globalization: Women, Migration and Domestic Work*, Stanford University Press, Palo Alto, 2001.

46. V., por ejemplo, sobre la migración femenina intrarregional en Asia, Nana Oishi: *Gender and Migration: An Integrative Approach*, Working Paper N° 49, The Center for Comparative Migration Studies, University of California, San Diego, marzo de 2002, <www.ccis-ucsd.org/PUBLICATIONS/wrkg49.PDF>.

ejemplo, solo hay que pensar en la trascendental migración femenina interna de la China contemporánea, que describe de forma impactante Pun Ngai⁴⁷. Como resultado de su investigación etnográfica, Pun sostiene que la dinámica de la migración femenina produce una «revolución silenciosa» y profundamente contradictoria en la sociedad china. Este movimiento desafía la división existente entre lo rural y lo urbano, reconfigura las relaciones entre el Estado y la sociedad, reestructura la familia patriarcal y rehace las relaciones de clase y de género⁴⁸. Es importante destacar que en China se ha establecido un régimen migratorio muy complicado en torno del sistema *houkou* de registro de hogares. El mecanismo en cuestión ha sido importante para filtrar, restringir y redirigir la movilidad laboral a lo largo de un conjunto de fronteras internas, que circunscriben las ciudades costeras del país y las zonas económicas especiales⁴⁹. Esto genera procesos de irregularización, independientemente de que se trata de una migración interna. Dichos procesos son analizados por Pun Ngai en términos de lo que Vicki Squire describe elegantemente como una tensión entre la «política de migración» y la «política de control».

Lo que se demuestra efectivamente a través de investigaciones como la de Pun es que la migración, en general, expresa procesos de desintegración (así como de continua recomposición y reformulación) de los sistemas tradicionales de pertenencia. Esto hace insostenible, tanto desde el punto de vista analítico como político, la imagen del migrante que suele presentar la bibliografía internacional: un sujeto «tradicional», totalmente *sumergido* en redes familiares y comunitarias, ante el cual se encuentra el individuo occidental (en la búsqueda del confort o como expresión de resentimiento). Los migrantes pueden ser definidos, en cambio, como «sujetos en transición», si aclaramos que el concepto de transición se utiliza aquí *sin* implicar ningún

La migración, en general, expresa procesos de desintegración (así como de continua recomposición y reformulación) de los sistemas tradicionales de pertenencia ■

47. *Made in China. Women Factory Workers in a Global Workplace*, Duke University Press, Durham / Londres, 2005.

48. *Ibíd.*, p. 55.

49. Kam Wing Chan: «Internal Labor Migration in China: Trends, Geographical Distribution and Policies», trabajo presentado en la Reunión de Expertos de las Naciones Unidas sobre Población, Distribución, Urbanización, Migración Interna y Desarrollo, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 21 a 23 de enero de 2008; C. Cindy Fan: *China on the Move. Migration, the State and the Household*, Routledge, Londres-Nueva York, 2008.

telos predeterminado⁵⁰. Obviamente, no tiene sentido hablar de una subjetividad migrante singular, ya que ese concepto puede presentarse solo en plural. Por supuesto, hay infinidad de maneras de ser «migrante», que se conforman y dividen según clase, género y «raza». El énfasis en la ambivalencia de la irregularidad puede ofrecer una perspectiva interesante para observar la producción de subjetividad (con todas las tensiones, violencias y luchas que la caracterizan) como un aspecto estratégico en la política de movilidad. Esto, a su vez, nos permite analizar críticamente algunas de las características más innovadoras del capitalismo contemporáneo. Para ello es necesario definir una situación en la que parezca haberse desdibujado significativamente la distinción tradicional entre economía, política y cultura. Significa que ya no es posible hablar de la explotación del trabajo y la valorización del capital sin plantear de inmediato el problema que consiste en comprender las transformaciones de la ciudadanía y las «identidades»; y que tampoco se puede hablar de clase trabajadora sin tener en cuenta, al mismo tiempo, todos los procesos de desintegración en el plano de la pertenencia. Es en estos procesos donde encontramos la huella indeleble de la subjetividad del trabajo vivo, que configura irreversiblemente a la clase trabajadora como *multitud*.

■ Conclusión

Como indiqué al comienzo, lo que caracteriza el enfoque de la autonomía de las migraciones es precisamente su énfasis en el hecho de que los migrantes *actúan* como ciudadanos, con independencia de su estatus jurídico de ciudadanía. Esto nos plantea el problema de la «eficacia», como lo denomina Judith Butler⁵¹. Se trata de un tema que aún no tiene solución dentro del enfoque de la «democracia radical», bajo el cual pueden subsumirse las obras de Jacques Rancière y Bonnie Honig. El problema resulta particularmente evidente en la medida en que la condición, los movimientos y las luchas de los migrantes «irregulares» presentan una importancia estratégica dentro de la actual coyuntura. El énfasis puesto por Engin Isin⁵² en la dimensión *activista* de la ciudadanía (el derecho a *reivindicar* derechos), impulsada entre otros por el movimiento francés *sans-papiers* en 1996, constituye en mi opinión una importante contribución al debate teórico de ciudadanía y migración⁵³. Sin embargo,

50. Esto contrasta con la sociología clásica de migración de la Escuela de Chicago, por ejemplo, que ha propuesto la «integración» como un fin necesario del proceso de transición.

51. J. Butler y Gayatri Chakravorty Spivak: *Who Sings the Nation-State? Language, Politics, Belonging*, Seagull, Londres-Nueva York-Calcuta, 2007.

52. «Citizenship in Flux: The Figure of the Activist Citizen», cit.

53. V. tb. A. McNevin: ob. cit.

esto no tiene que ver con la esencia del problema delineado por Butler. Dentro de los actuales debates críticos y radicales, hay una tendencia a concebir la política exclusivamente en términos de *ruptura* o en términos de *acontecimiento*. Para decirlo con las palabras de Rancière, el núcleo tiende a permanecer en la «singularidad de un momento político» que «interrumpe la temporalidad del consenso»⁵⁴. Aunque este núcleo es importante y fascinante, me interesa destacar la importancia de otra temporalidad de luchas, que se diferencia de la que es inherente al acontecimiento y, desde luego, de la que es inherente al consenso. Me refiero a la temporalidad de las prácticas materiales, que crean las condiciones para que sea posible la insurgencia a través de procesos de confrontación y solidaridad (como las prácticas aplicadas en Francia antes y después de 1996, que permitieron que los migrantes irregulares ejercieran su derecho a permanecer, independientemente del reconocimiento legal de ese derecho). Si se observan estas prácticas, el límite entre los migrantes regulares e irregulares suele desdibujarse. Así surge un espacio con una perspectiva diferente y más prometedora, que ofrece la posibilidad de construir coaliciones heterogéneas y bases comunes para que se produzca un encuentro entre los migrantes y otros sujetos en conflicto.

Desde el punto de vista de la política de movilidad en el capitalismo contemporáneo, la irregularidad aparece como una condición profundamente ambivalente. Sin embargo, el enfoque de la autonomía de las migraciones sugiere que la irregularidad no es un simple aspecto relacionado con las tensiones entre una política de migración y una política de control. Se trata de un aspecto que afecta nuestra propia comprensión, imaginación y reinención de la comunidad política, es decir, de las condiciones *comunes* de producción y cooperación social. Quienes proponen el enfoque de la autonomía de las migraciones sostienen que en ningún caso se debe pensar en los migrantes (irregulares o regulares) como una especie de «vanguardia» o como «sujetos revolucionarios». El enfoque en

El enfoque de la autonomía de las migraciones sugiere que la irregularidad no es un simple aspecto relacionado con las tensiones entre una política de migración y una política de control. Se trata de un aspecto que afecta nuestra propia comprensión, imaginación y reinención de la comunidad política ■

54. J. Rancière: *Moments politiques. Interventions 1977-2009*, La Fabrique, París, 2009, pp. 7-9. [Hay edición en español: *Momentos políticos*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2010].

cuestión sitúa el análisis de la irregularidad dentro de un marco más amplio, que examina las transformaciones del capitalismo contemporáneo desde el punto de vista del trabajo vivo y su subjetividad. En ese marco, este artículo ha considerado las transformaciones de conceptos políticos claves, como ciudadanía y soberanía, y ha desarrollado un análisis sobre los regímenes migratorios y los movimientos generados a lo largo de las luchas migratorias. Obviamente, para seguir desarrollando el enfoque de la autonomía de las migraciones será necesario llevar a cabo un proyecto político y de investigación en el nivel colectivo y a largo plazo. Se deberá abordar la heterogeneidad y la diversidad radical que caracterizan la composición del trabajo vivo contemporáneo⁵⁵. En este proyecto político y de investigación, la irregularidad es, y probablemente seguirá siendo, un aspecto estratégico clave. ☐

55. S. Mezzadra: «Living in Transition» en *Transversal* N^o 11/2007, disponible en <<http://translate.eipcp.net/transversal/1107>>, fecha de consulta: 6/3/2010.

México: el país de los muertos sin nombre

YAOTZIN BOTELLO

Las autoridades mexicanas logran detener a capos del narcotráfico en arrestos de película. Sin embargo, muchas veces estos procedimientos atentan contra los derechos humanos y la cifra de muertos sigue creciendo. Peor aún: desde que el Ejército salió a las calles y comenzó la guerra, ya nadie sabe quiénes son los «buenos» y quiénes los «malos». Muchos hablan de la «marca de sangre» de la época y algunos periodistas buscan ponerles nombre a las víctimas, en medio de la culpabilización generalizada de los muertos y desaparecidos. Otros buscan salidas, como la legalización de las drogas. Y muchos simplemente esperan...

Cuando en México cae un capo del narcotráfico, se lo presenta ante las cámaras, en una exhibición pública que debería convertirse en sus primeros momentos de escarmiento por el mal que ha hecho. Varios policías bien armados y encapuchados lo sujetan de los brazos mientras le dan órdenes como «mira al frente», «a la derecha», «a la izquierda», «gírate». De fondo hay una pared como de utilería donde se ven los logos del gobierno que se hizo cargo de su captura. La escena recuerda a un famoso

futbolista dando una entrevista delante de una pared tapizada de marcas deportivas...

Así pasó en 2011 con Raúl Lucio Hernández, «el Lucky», uno de los fundadores de la sanguinaria banda Los Zetas; con Óscar García Montoya, «el Compayito», ex-líder de la agrupación criminal La Mano con Ojos. También con José Antonio Acosta, «el Diego»; en 2010, con Sergio Villarreal, «el Grande»; con Édgar Valdez, el famoso mexicano-estadounidense apodado

Yaotzin Botello: periodista mexicano residente en Alemania. Desde 2004 es corresponsal del periódico mexicano *Reforma*. En Berlín ha seguido de cerca el tema del narcotráfico y escribe en medios locales sobre la situación en México. Es miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera en Alemania (vAP) y del Programa Internacional de Periodistas (IIP).

Palabras claves: narcotráfico, carteles, corrupción, Estado fallido, Felipe Calderón, México.

«la Barbie»; con Gerardo Álvarez, «el Indio»; con la muerte en 2009 de Arturo Beltrán Leyva, «el Barbas», y el arresto en 2008 de su hermano Alfredo, «el Mochomo». Todos capos de los más buscados por el gobierno mexicano o estadounidense, y siempre con el mismo patrón: un capo narco arrestado con camiseta tipo polo (muchas veces de Ralph Lauren), policías encapuchados sujetándolo y, atrás, una pared con logotipos gubernamentales.

Los medios de información hacen fotografías y las grandes planas se tapizan de estas microhistorias exprés. Sobra decir que le dan la vuelta al mundo. Parecería que a México le va muy bien en su campaña contra el narcotráfico. Pero también podría ser una gigantesca campaña de medios que ha puesto en marcha el presidente mexicano Felipe Calderón para mostrar que el poder militar o policial es el camino correcto para detener la violencia.

En realidad, las pesquisas de los capos del narcotráfico no han impactado mucho –o nada– en la disminución de la violencia. Más bien parece ocurrir lo contrario. Nunca antes un presidente había capturado a tantos capos del narcotráfico, pero tampoco nunca antes un presidente democrático había tenido en tan solo cinco años de mandato tantos muertos. El pensador mexicano Jesús Silva-Herzog osó llamar a este sexenio presidencial el «sexenio de la muerte». Y lo explicó así:

Escribir que este ha sido el sexenio de la muerte no es estridencia amarillista: es constatación de su naturaleza trágica, casi podríamos decir, de su maldición. Por supuesto que el gobierno de Felipe Calderón ha sido muchas cosas pero su destino y su memoria estarán ligados irremediablemente a la muerte. El segundo gobierno panista buscó enmendar muchas de las herencias que venían del primero. Imprimió cierto orden en la agenda, restableció la seriedad de la oficina presidencial. Resistió una severa crisis económica, promovió importantes obras de infraestructura e impulsó el seguro popular. Durante su sexenio se vivieron importantes reformas en materia judicial y cambió el perfil de algunas instituciones. Se mantuvo la perniciosa alianza con el sindicato de maestros limitando su tímido impulso reformista. Un balance de la gestión calderonista habrá de aquilatar todo esto, pero nada podrá remover de ella la marca de sangre como el sello de estos penosos años de México.¹

Y Silva-Herzog prosigue sobre la imagen de época que se va sedimentando y sus consecuencias indelebles:

No: este no será recordado como el gobierno de la infraestructura. No será recordado como el gobierno de la educación o del trabajo. Será recordado como el sexenio de la muerte. A un año de que concluya esta malhadada administración, ya puede decirse que la guerra contra el crimen organizado ha representado una reversión histórica que va mucho más allá de la seguridad. Se trata de un retroceso para México en su lento proceso de civilización. Nada menos. No puede negarse que

1. «El sexenio de la muerte» en *Reforma*, 14/11/2011.

México es hoy un país más inhóspito, más bárbaro, más cruel, más salvaje de lo que era hace cinco años.²

Efectivamente, cada año las cifras de muertos han aumentado de manera exponencial. Mientras en 2009 fueron 6.587 personas (todas cifras confirmadas oficialmente y de personas muertas con violencia, es decir, relacionadas con la guerra contra el narcotráfico), en 2010 fueron 11.800. En 2011 se estaba cerrando con «solo» 12.000 muertos; sin embargo, cifras extraoficiales hablan de 35.000. Incluso algunas organizaciones comenzaron a tomar en cuenta la cifra de desaparecidos, de quienes no se sabe nada durante semanas o meses, con lo que la cifra se elevó a 40.000. Y algunos medios de información difundieron en diciembre de 2011 la escalofriante cifra de 60.000 muertos.

Paralelamente a la detención de los grandes capos del narcotráfico, se ha observado otro fenómeno que, incluso, se podría relacionar directamente con el aumento de las muertes. Se trata de la creación de nuevas bandas. Los expertos lo explican con palabras mitológicas: *le quitas la cabeza a un ente pero salen varias cabezas más*. Ese fue, por ejemplo, el caso de La Mano con Ojos, creada por Óscar García Montoya después de que la policía capturara a su jefe, uno de los líderes del cartel de los Beltrán Leyva, Édgar Valdez, «la Barbie». La organización no llevaba ni un año

de existencia cuando el propio García Montoya también fue detenido. Y muchas otras agrupaciones han surgido tanto a partir del descabezamiento de un cartel como por disputas internas en los carteles por el control del territorio y por negociaciones con otros grupos.

Un cartel de droga puede ser visto entonces como una empresa que, independientemente de quién la dirija, siempre seguirá hacia adelante. Y si estas empresas que viven de negociar con una producción ilegal pueden existir es principalmente porque el Estado se lo permite. Un experto en asociaciones criminales y narcotráfico en México, el uruguayo Edgardo Buscaglia, lo ha definido de la siguiente forma: «Las mafias no son dependientes de las personas, sino de las estructuras corruptas del gobierno y de la economía»³.

La frase es lapidaria. Marca una verdad que todo el mundo sabe y que pocos denuncian, y sentencia al gobierno del presidente Felipe Calderón a repensar la forma en que está combatiendo el narcotráfico. Fue en diciembre de 2006 cuando Calderón sacó al Ejército a las calles para comenzar a combatir a los carteles de la droga. Con la «enfermedad» tan avanzada, era necesario intervenir

2. *Ibíd.*

3. En entrevista con el autor, Berlín, 6 de junio de 2011.

quirúrgicamente: esta fue la idea que usó el presidente mexicano para comenzar a justificar lo que después se denominó oficialmente «guerra contra el narcotráfico».

En estos cinco años del sexenio presidencial se ha luchado así contra las estructuras criminales. Pese a que las crecientes cifras de muertos y desaparecidos se hicieron más públicas, el discurso oficial se mantuvo en sus trece: la guerra es un objetivo de Estado. Como argumentos críticos, entraron a escena el alto consumo de droga en Estados Unidos y el creciente narcomenudeo en México como fuerzas que alimentaban la producción y el tráfico de drogas; también comenzó a atribuirse la culpa a EEUU por la flexibilidad de su regulación para obtener armas que fácilmente han terminado en manos de los criminales mexicanos.

Pero al mismo tiempo, ha emergido un creciente y cada vez más protegido sistema de corrupción que ha fomentado la existencia de estructuras criminales o la creación de nuevas, así como una sistemática violación de los derechos humanos que ha hecho que todos los muertos de esta guerra sean considerados criminales sin excepción y sin derecho a reivindicación.

En el documental *El Sicario, Room 164*⁴, basado en una entrevista del escritor y periodista estadounidense Charles

Bowden, especialista en temas de crimen organizado y narcotráfico, un presunto ex-sicario explica, con la cara tapada con una malla negra y haciendo dibujos en cartulina a falta de otras imágenes, que para hacer una «operación» —entrega de droga, transferencia monetaria o secuestro de una persona— llegan a cerrar calles completas. Roban autos que usarán ese día para evitar cualquier identificación; sobornan a los policías para que dejen de patrullar la zona o, incluso, para que les acordonen el área (por si también hay grupos criminales enemigos que quieran aprovechar la ocasión); y si alguien interfiere, simplemente lo matan.

Además de por policías, otros análisis sugieren que la red de «halcones», como se denomina en el lenguaje del narco a las personas que proveen información de inteligencia, está compuesta por taxistas, meseros y vendedores ambulantes.

Todos y cada uno de los personajes involucrados están cometiendo uno o muchos delitos.

El manejo de las drogas en México es, por lejos, lo que deja más dinero a estas estructuras criminales, pero eso no significa que ese deba ser el único delito por controlar. Los delitos contra la salud y el tráfico de drogas son apenas la punta del *iceberg*.

4. Dirigido por Gianfranco Rosi, Francia-Italia, 2010.

El narco mexicano comete la mayoría de los delitos que se imputan a los grupos del crimen organizado en el mundo, salvo el manejo de armas atómicas. Fuera de eso, las mafias realizan tráfico de armas y de migrantes, extorsión, piratería, contrabando, secuestro, robo, producción y tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. Y además de beneficiarse de las estructuras corruptas del país, las bandas criminales mexicanas también se aprovechan de la globalización de mercados para operar. Según estudios liderados por Buscaglia, empresas mexicanas o de otros países como España y Alemania bien podrían ser pantallas que financian u ocultan el capital de las mafias mexicanas. Este especialista apunta que «el gobierno mexicano puede mandar a cuantos soldados quiera a la calle, pero mientras no toque sus estructuras patrimoniales no podrá resolver nada»⁵.

Pero ¿puede decirse que todo esto hace de México un «Estado fallido», como se ha llegado a afirmar en EEUU? Puede ser. Pero México no es como otros países «fallidos» en el mundo, donde hay ausencia del Estado, algo que se utiliza como argumento en el caso de los países africanos. En México hay ciertamente instituciones. El país dio en las urnas un giro hacia una democracia más plena en el año 2000, y tiene gobiernos federales y locales que, al menos hasta ahora, han sido elegidos por medio de una especie de sufragio efectivo. El nivel de

abstencionismo es alto, pero la gente sale a votar a alguno de los partidos políticos que se «ofrecen» en el mercado electoral. Las instituciones se han abierto a la transparencia. Todo esto y mucho más es cierto, pero también se puede decir que es solo el comienzo, o que aún está a medias y que el futuro es incierto.

Los últimos informes de la ONG Transparencia Internacional lo reseñan muy bien: México ha logrado buenas instituciones y tiene la intención de cambiar, pero en la base de sus estructuras, sobre todo en los niveles de gobierno locales y municipales, se mantiene una percepción de la corrupción muy baja. En 2011, México aparece en el índice de percepción de la corrupción elaborado por este organismo en el lugar 100 de 183 países y con una calificación de 3 puntos sobre 10⁶.

Otro índice, pero esta vez el de opacidad, construido por el Milken Institute en 2008, un *think-tank* estadounidense con base en California, enlistó a México en el lugar 31 de 60 países estudiados. Eso significa que México tiene muchas instituciones que no funcionan o funcionan mal. Los autores

5. En entrevista con el autor, cit.

6. Este indicador recoge una visión panorámica y clasificación de 183 países según su nivel de corrupción, en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de esos países y muy diversos especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales. Fuente: entrevista del autor con Alejandro Salas, director del Departamento de las Américas de Transparencia Internacional.

del estudio, los analistas Joel Kurtzman y Glenn Yago, hicieron un cálculo de lo que podría estar ganando México si abatiera la corrupción: «Si México elevara sus estándares legal, económico, contable y regulatorio a los niveles de EEUU (EEUU está en el lugar 13 del índice, mientras que Finlandia se ubica en el primero), el PIB nominal per cápita se podría incrementar en us\$ 18.000 para llegar a unos us\$ 28.000 al año [cifras de 2009, cuando fue hecho el estudio], y recibiría mucha más inversión extranjera directa, que crearía puestos de trabajo»⁷.

La debilidad de las instituciones y del gobierno en general está provocando que el narco mexicano se siga apoderando del país. El Estado mexicano está fragmentado, y en los mapas donde ahora se colorean los territorios de dominio de los grandes carteles del narcotráfico se aprecia una nueva geografía del país. Apenas se ven unos cuantos espacios que quedan sin colorear. Según las estadísticas dadas a conocer por el mismo Poder Legislativo en 2010, el narco está controlando 71% de los municipios de México.

En casos concretos de la guerra contra el narcotráfico, es cierto que hay policías, militares e integrantes de la Marina luchando en sus oficinas y en las calles, pero en la realidad no se sabe si ellos son los «buenos» o los «malos».

El uso de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico ha sido fuertemente criticado. Primero, por suplantar las labores que corresponden normalmente a la policía, en lugar de reformar esta última institución; y segundo, por el alto índice de violaciones a los derechos humanos que se cometen, pues los militares no están entrenados para desenvolverse frente a ciudadanos comunes y corrientes. Unos 45.000 miembros de las fuerzas militares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional de México están dedicados desde hace cinco años a cumplir labores policíacas en el combate contra el crimen organizado, en operaciones de confiscación de armas, drogas, vehículos robados y explosivos, pero lo hacen sin un marco jurídico que justifique su actuación. La Ley de Seguridad Nacional propuesta por el presidente Calderón en abril de 2009 le daría legalidad a este proceder, pero como la iniciativa ha sido impugnada por especialistas, legisladores y defensores de los derechos humanos, no ha podido ser aprobada.

Al mismo tiempo, si se sigue privilegiando la fuerza sobre cualquier opción operativa, la violencia va a seguir su camino ascendente; y lo mismo sucederá con el miedo y la migración de familias, así como con el

7. J. Kurtzman y G. Yago: *Opacity Index 2007-2008. Measuring Global Business Risks*, Milken Institute, Santa Monica, 2008.

cierre de comercios. Un grupo mexicano llamado «Periodistas de a pie» ha tratado de dar cuenta de las violaciones de derechos humanos siguiendo de cerca la labor del Ejército y de las policías. Su trabajo se ha centrado en reconstruir los hechos a partir de descripciones y testimonios de las víctimas o de sus familiares para dar una visión bidimensional a los hechos. Entre ellos se destaca Marcela Turati, quien por esta labor obtuvo a finales de 2011 el Premio Alemán de Periodismo otorgado en México. Se la conoce en el país como la periodista que llega a la escena del crimen cuando la sangre «todavía está fresca». Y es ella quien escribió el libro *Fuego cruzado*, publicado en enero de 2011 y con el que hizo público un esfuerzo que hasta entonces nadie había hecho: darles una identidad a las víctimas del narcotráfico. La tesis central del libro parte de la idea de que tantos miles de muertos no pueden ser todos criminales, y es así como descubre que muchas personas «cayeron en combate» por el fuego cruzado entre las autoridades y los narcos en vías públicas, y también los casos de indígenas que, por estar aislados en pueblos alejados de la «civilización» o por no hablar español, son tomados como chivos expiatorios por los miembros del Ejército y condenados a la «paz eterna»:

Todos los días, en algún lugar del país se registra un enfrentamiento armado entre las fuerzas federales y alguno de

los grupos criminales. La violencia homicida que recorre México pisotea vidas, las avienta a una trituradora, las destroza. Cada una de las balas disparadas deja una huella imborrable. Hace tanto daño como una bomba. Afecta a gente a su paso. Sume en depresión a familias completas. El miedo las toma de rehén. Tortura a sus miembros hasta en sueños. Incuba enfermedades en sus organismos. Las arruina económicamente. Se ensaña especialmente contra los más pobres, a quienes roba más oportunidades y condena a repetir el ciclo de la exclusión. Deja maltrechas sociedades enteras.⁸

Para estos sufrimientos no hay cifras. Se han dado a conocer algunas, pero siempre variarán y serán contestadas con otras. El hecho es que entre las noticias sobre personas descabezadas, calcinadas, disueltas en ácido, colgadas de puentes con mensajes tatuados en sus barrigas o tiradas de a decenas sobre autopistas como ganado volcado en un accidente automovilístico, están las pequeñas noticias de esas personas que, días después de los macabros hechos, acuden a las morgues a hacer fila. Son personas normalmente descritas como de escasos recursos o empleos comunes y corrientes o precarios, que están a la espera de ver si el muertito que está en la tabla de autopsia es su hermano, su papá, su mamá, su hijo.

Por más absurda que pueda parecer, la declaración de uno de los narcotra-

8. M. Turati: *Fuego cruzado*, Grijalbo, México, DF, 2011.

ficantes más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses da cuenta de la paradoja del país. Se trata de Ismael «el Mayo» Zambada, entrevistado en un lugar desconocido y después de varios días de trayecto por el periodista y ex-director del semanario político mexicano *Proceso* Julio Scherer. «El Mayo» dijo estar de acuerdo con que el gobierno intente capturarlo, pero «rechaza las acciones bárbaras del Ejército. (...) Los soldados, dice, rompen puertas y ventanas, penetran en la intimidad de las casas, siembran y esparcen el terror. En la guerra desatada encuentran inmediata respuesta a sus acometidas. El resultado es el número de víctimas que crece incesante»¹⁰. Lo que se está viviendo en México es una represión que no implica una sanción judicial. Cifras de la Procuraduría General de la República indican que entre 70% y 92% de los detenidos por narcotráfico son liberados. Solo los grandes son detenidos o muertos y mostrados públicamente.

¿Cuáles son las soluciones ante un panorama como el mencionado? ¿Qué puede comenzar a hacer el gobierno mexicano para detener la ola de violencia y, con ello, frenar la delincuencia organizada? Si, por ejemplo, se legaliza la marihuana, ¿desaparecen los narcotraficantes? No, dicen los expertos. El consumo de drogas en EEUU y en la Unión Europea es un gran factor de supervivencia de los carteles del narcotráfico en México,

pero no es el principal. El tráfico de drogas existía antes y sigue existiendo después de la violencia. Asimismo, las tiendas estadounidenses de armas siguen existiendo después de pedirle al gobierno de Barack Obama que prohíba la venta. Y sin embargo, se pueden dar pequeños pasos al respecto para conseguir algunas soluciones. Estos pasos también deberían llevar un orden.

Por ejemplo, si se busca despenalizar las drogas, primero se debería pensar en un marco de prevención social que implique la cooperación estrecha entre las secretarías de Salud, de Trabajo y de Educación, además de un trabajo cercano con la sociedad civil. También haría falta un marco regulatorio, pues si México no puede regular sus antibióticos ni aspirinas, parece poco verosímil que logre regular las drogas. En Berlín, el Partido Pirata tiene una propuesta concreta para Alemania basada en la experiencia de México. El partido es de reciente creación y, aunque se ve como un grupo de estudiosos de la computación, logró entrar en 2011 en la política al ganar bancas en el Parlamento de Berlín. Una de sus propuestas se refiere a la política de prevención de drogas, y aunque suena muy sencilla, implica mover las estructuras más cimentadas e inamovibles: dictar clases

9. J. Scherer García: «Si me atrapan o me matan... nada cambia» en *Proceso* N° 1744, 4/4/2010, p. 10.

en la escuela primaria y secundaria donde se hable de las causas y los efectos de las drogas, activar centros de salud ex profeso, certificar y legalizar. En la práctica, se trata de algo similar a lo que ha hecho Holanda con sus *coffee shops*: etiquetar las bolsitas de marihuana e indicar la cantidad de THC (tetrahidrocannabinol, la sustancia psicoactiva) que contiene, así como se etiquetan los alimentos envasados para detallar sus ingredientes; si hay presencia de sustancias dañinas; o cuáles son incluso las

condiciones de trabajo, de seguridad y de medio ambiente utilizadas en el cultivo, la cosecha y el acopio de reservas. Y si además a esto se le añaden los impuestos, se estaría logrando lo que alguna vez EEUU, cuando también podría haber sido catalogado como «Estado fallido», logró en su lucha contra las mafias del alcohol de Al Capone.

Es un camino aún por construir, pero para que el Estado mexicano no «falle», el show tiene que detenerse. ☒

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Enero de 2012

Quito

Nº 42

DOSSIER: Antropología visual en Latinoamérica. Presentación del dossier, **X. Andrade y Gabriela Zamorano**. Un segundo encuentro: la fotografía etnográfica dentro y fuera del archivo, **María Fernanda Troya**. Imagen, objeto y arte: la fotografía de Guido Boggiani, **Alejandra Reyero**. Antropología visual y testimonio en la postdictadura chilena, **Andrea Chamorro Pérez y Juan Pablo Donoso Alliende**. Derecho maya y video comunitario: experiencias de antropología colaborativa, **Carlos Y. Flores**. Diseño curatorial en la poética y política de la etnografía actual: una conversación entre **Tarek Elhaik y George E. Marcus**. DEBATE: Los usos ambiguos del archivo, la Historia y la memoria, **Eduardo Kingman**. DIÁLOGO: Antropología, ciudad y jóvenes. Un diálogo con Teresa Caldeira, **Mauro Cerbino**. TEMAS: ¿Existe una reforma agraria en la Bolivia del Movimiento al Socialismo?, **Bruno Fornillo**.

Íconos es una publicación cuatrimestral de Flacso-Ecuador, La Pradera E7-174 y Av. Almagro, Quito, Ecuador. Tel.: (593 2) 3238888. Correo electrónico: <revistaiconos@flacso.org.ec>. Página web: <www.flacso.org.ec>. Pedidos y suscripciones: <lalibreria@flacso.org.ec>.

Summaries ■ Resúmenes en inglés

Pablo Rossell Arce: 2011: The Watershed of «Evoism»? : Bolivia Since the Tipnis Conflict [3816]

Evo Morales protagonized an historic moment when he became President of Bolivia, pushed by a mass of actors from an indigenous-peasant origin who had never before achieved such a level of access in the spaces of State power. His first term in government (2006-2009) was marked by a series of milestones that consolidated his leadership in the ambit of a national-popular programme that successfully faced off opposition from the right. The second term, with an already solid leadership, is marked by a succession of fights and power disputes between those who make up his social base. The recent conflict over the Tipnis is a reflection of these internal disputes. *Key Words: Development Model, Social Conflict, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis), Evo Morales, Bolivia.*

Alberto Koschützke: Chile Against Itself: The Limits of Market Fundamentalism and the Student Protests [3817]

The cycle of open demonstrations initiated in Chile with the students' revolt

contributed to feeding a debate about the country model that has been constructed since the dictatorship, in which, despite the undeniable advances in various fields, has consolidated a profound commodification of social life. Beyond the demands in areas of education, environment or gender, the massive nature of the protests during 2011 has pitted the country against itself, while the current president deepens the pro-market rhetoric and governs as if he were the director of «Chile Corp.» and the citizens, mere users and consumers. *Key Words: Education Model, State, Market, Social Movements, Sebastián Piñera, Camila Vallejo, Chile.*

René Ramírez Gallegos: Left and «Good Capitalism»: A Critical Contribution from Latin America [3818]

In the debate about the construction of a left-wing political project there are two opposing opinions or stances: on the one hand, that of those who propose to administrate and better regulate capitalism – as Will Hutton's article maintained in the last edition of *NUEVA SOCIEDAD* –; on the other, that of those who maintain anti-capitalist positions

– in which this current text is framed. The author defends the argument that a Left which does not renounce the generation of alternatives to capitalism, but at the same time is responsible for managing the government, must think of the «grand transition» without losing the horizontal view of the «grand transformation». For this, the Ecuadorian Yasuní-ITT initiative is analysed and is presented as an example of how to combine concrete innovative proposals (transition) and overcome utopias of capitalist development (transformation). *Key Words: Left, Capitalism, «Buen Vivir» (Sumak Kawsay) [Good Life], Yasuní-ITT.*

Pierre Salama: Questions and Answers about the Global Crisis [3819]

The increasing complexity of the financial instruments implies evermore difficulties when it comes to evaluating the causes, the forms of contagion, and the effects differentiated in the current economic and financial turbulences. This article focuses on some of these interactions and looks to shine light on the relation between the financial system and the real economy, the partial disconnect of emerging countries in this world in crisis, the current risks and the problems derived from the responses applied by the governments of the eurozone. *Key Words: Crisis, Deindustrialization, Financial Deregulation, Relocation, Eurozone.*

Jorge Eduardo Navarrete: The Global Crisis: Narrowing the Gaps: The Challenge of the Emerging Countries [3820]

Whilst the majority of the advanced economies suffer the effects of the financial – and economic – crisis, the emerging bloc has been closing some gaps with these economies, at least

with regard to their GDP. Without doubt, in regard to other variables, such as per capita income, technological spending or average levels of nutrition, they are still openly in favour of the North. The concept of the «lost decade», coined in the analysis of the periphery, is ever more useful for developed countries. In the face of a crisis without a solution on the horizon, the G-7 repeats a series of expressions of desires, whilst the policies of adjustment threaten to generate effects contrary to those sought. *Key Words: Crisis, Depression, Advanced Economies, BRIC, G-7, G-20.*

Alma Espino: The Gender Dimension of the Crisis: Is There a Feminist Agenda? [3821]

The decommodification of welfare and the relocation of the task of caring to an economic category, has articulated proposals still in construction, referred to «*buen vivir*» and to criticisms of traditional development, could be elements to constitute a feminist economic agenda. However, this is still embryonic and public policies, despite some advances, still don't include a gender dimension in the economic approach. All of which makes for a challenge for feminism: to further study the relationship between inequality and economy. *Key Words: Economic Crisis, Feminism, Public Policies, Care, Decommodification, Latin America.*

Oscar Ugarteche: Mexico: So Far from God, So Close to the Crisis: Mechanisms of Economic Contagion in North America [3822]

In August 2007 the Great Recession began, which has unfolded in stages and spread from the epicentre, the United States, to the rest of the world. Apparently, the world economy is being outlined in two speeds, in which the States that are less dependent

on the us' dynamic or less articulate in the international financial markets withstand better the impact of the crisis. From the us, the impact spread towards its neighbours in North America and the Caribbean in a different way to that in European countries, because other transmission belts as well as the financial ones are also in play: migrations and remittances, short and long-term investments, tourism and international commerce. *Key Words: Crisis, Migrations, Economic Integration, North American Free Trade Agreement (NAFTA), Mexico, United States.*

Martín Schorr: Argentina: New Model or «Tailwind?»: A Characterisation in Comparative Terms [3823]

Since exiting the convertibility regime, after the 2001 crisis, Argentina has chosen a growth pattern that favoured the expansion of the productive sectors. Although the international context and the high prices of primary goods have been very favourable, alone they cannot explain the strong Argentine growth of recent years, sustained in a large measure by investment and consumerism. Nevertheless, the productive structure has not changed noticeably, the dependence on natural resources is still very marked and external competitiveness in the industry has been slowed by the revaluation of the real exchange rate due to the high levels of local inflation, but above all, due to the lack of a national plan for reindustrialisation. *Key Words: Growth Pattern, Terms of Trade, Post-Convertibility, Exchange Rate, Latin American Economies, Argentina.*

Eduardo Gudynas: Compensating State and New Extractivism: The Ambivalences of South American Progressivism [3824]

South America, governed mostly by parties and movements that define

themselves as progressive, has without doubt achieved various advances in recent years, in general centred around the reduction of poverty and the return of a more active State. However, part of the good performance goes in parallel with the consolidation of a model sustained in the exploitation of nature – from gas to soya, passing through a diversity of mining products – and the consolidation of extractive logics and practices. The article analyses the powers and the limitations of the new «Compensating States», and the difference between old and new extraction and growing socio-environmental conflicts. *Key Words: Extractivism, Compensating State, Progressivism, Environment, Development, South America.*

Javier Rodríguez Pardo: New Colonialism in South America and Africa: Radiography of Large-Scale Mining [3825]

One of the characteristics of capitalism in the 21st century is the boom of extractivism, a phenomenon which is not new but which is reconfigured in the heat of the necessities of the economy and the global world. The current boom in prices of primary materials has redrawn territories, in the frame of laws benevolent to extractive businesses. Africa and part of South America are targets of international firms that articulate political, economic and sometimes military interests to move forward their businesses. *Key Words: Extractivism, Open-Pit Mining, Barrick Gold, South America, Africa.*

Sandro Mezzadra: Capitalism, Migration and Social Conflicts: The Gaze of Autonomy [3826]

Global capitalism is the seat of a tension about the question of migration:

on the one hand, capitalism valorises it through migratory policies and, on the other, seeks to reduce excessive mobility through policies of control. In this frame, migrants act *as if they were citizens*, which favours resistance processes, organization and subjectivation. The autonomy of migration approach focuses in the desires, expectations and behaviours of migrants, and considers the irregularity of many of the migrants as a key to think of contemporary capitalism. *Key Words: Capitalism, Migration, Social Movements, Autonomy, Citizenship, Live Work.*

Yaotzin Botello: Mexico: The Country of the Nameless Dead [3827]

The Mexican authorities manage to detain drug trafficking bosses in film-like arrests. However, often these procedures threaten human rights and the death toll keeps rising. Worse still: since the Army went out onto the streets and the war started, nobody now knows who are the «good» and who are the «bad». Many talk of the «blood stain» of the time and some journalists look to name the victims, amid the generalized blame for the dead and disappeared. Others look for ways out, such as the legalisation of drugs. And many simply wait... *Key Words: Drug Trafficking, Cartels, Corruption, Failed State, Felipe Calderón, Mexico.*

PÁGINAS

Noviembre de 2011
Lima
Nº 224

ARTÍCULOS: Contra la irresponsabilidad financiera por el bien común, **Javier M. Iguíñiz Echeverría**. El desempleo juvenil: principal herencia del neoliberalismo, **Fernando Villarán**. Políticas públicas para impulsar el empleo juvenil, **Juan Chacaltana**. Inclusión social y relaciones laborales en tiempos de cambio, **Leopoldo Gamarra Vilchez**. Sindicatos en el Perú: de la mediación de intereses económicos hacia la interlocución política, **Sylvia Cáceres**. Recordando la *Laborem exercens*, **Luis González-Carvajal Santabárbara**. Humanistas y nuevas tecnologías. La transformación del trabajo intelectual, **Daniel Luna y Eduardo Marisca**. Tomados de la tierra, al servicio de ella, **Felipe Zegarra R.** Carta a Ellacuría. El «siempre» del pueblo crucificado. «Qué hacer con los buenos». Dean Brackley, **Jon Sobrino**. Memoria y política, **Gonzalo Gamio Gehri**. La responsabilidad social empresarial con rostro humano, **Estela Martínez Dorival**. Discurso del papa Benedicto XVI en el encuentro interreligioso de Asís. Comunicado de CEAS. Laguna Parón: agua y vida.

Edita y distribuye Centro de Estudios y Publicaciones, Camilo Carrillo 479, Jesús María – Apdo. 11-0107 – Lima 11, Perú. Tel.: (511) 4336453 – Fax: (511) 4331078. Correo electrónico: <paginas-cep@amauta.rcp.net.pe>. Página web: <www.cep.com.pe>.

Alemania: F. Delbanco, Tel.: (49 4131) 2428-8, e-mail: <post@delbanco.de>.

Argentina: Distribuidores: Jorge Waldhuter, 14 de Julio 58, Buenos Aires, Tel./Fax: 6091.4786, e-mail: <jwalibros@ciudad.com.ar>. Librerías, Buenos Aires: Librería Universitaria de Buenos Aires, Tucumán 1792.

Bolivia: en La Paz: Yachaywasi, Tel.: 2441.042, e-mail: <yachaywa@accelerate.com>, Fax: 244.2437. Plural Editores, Tel./Fax: 2411.018, e-mail: <plural@plural.bo>.

Brasil: en San Pablo: Librería Española e Hispanoamericana, Tel.: 3283.4700, e-mail: <libreriaespanola@terra.com.br>; en Porto Alegre: Outras Américas, e-mail: <nuevasoc@uol.com.br>.

Colombia: Librería Fondo de Cultura Económica, Calle 11 No. 5-60, Barrio La Candelaria, Bogotá, Colombia. Tel.: (571) 2832200, e-mail: <libreria@fce.com.co>.

Costa Rica: Librería Nueva Década, Tel.: (506) 225.8540, e-mail: <ndecada@ice.co.cr>.

Ecuador: LibriMundi, Tel.: (5932) 252.1606, 223.4791, e-mail: <librimu1@librimundi.com.ec>.

España: Marcial Pons-Librero, Tel.: (34 914) 304.3303, e-mail:

<revistas@marcialpons.es>; Mundi-Prensa Libros, (34 914) 363.702.

Guatemala: F&G Libros de Guatemala, 31 avenida "C" 5-54, zona 7, Colonia Centro América, 01007 Guatemala, Tel.: (502) 2433 2361 (502) 5406 0909, e-mail: <informacion@fygeditores.com>.

Japón: Italia Shobo, Fax: 3234.6469; Spain Shobo Co., Ltd., Tel.: 84.1280, Fax: 84.1283, e-mail: <info@spainshobo.co.jp>.

Nicaragua: Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Km 9 1/2 carretera a Masaya, Tel.: 276.1774 (Ext. 8), Apartado Postal 2438, e-mail: <comunicacion@ipade.org.ni>.

Perú: El Virrey, Bolognesi 510, Miraflores, Lima, Tel.: 444.4141, e-mail: <info@elvirrey.com>.

Puerto Rico: en Río Piedras: Compañía Caribeña de Libros, Tel.: (1-787) 297.8670, e-mail: <cclibros@yahoo.com>.

Ventas y consultas por Internet:
<www.nuso.org>

Distribución internacional a librerías:
<distribucion@nuso.org>

PARA SUSCRIBIRSE A NUEVA SOCIEDAD

SUSCRIPCIÓN	ANUAL	BIENAL
Incluye flete aéreo	6 números	12 números
América Latina	US\$ 70	US\$ 121
Resto del mundo	US\$ 107	US\$ 196
Argentina	\$ 215	\$ 430

> Formas de pago

- Pago online:** Ingrese en <<http://www.nuso.org/suscribe.php>>, donde encontrará un formulario para registrar su pedido y efectuar el pago.
- Pago con tarjeta de crédito vía postal:** Complete el cupón incluido en la revista y envíelo por correo a: Nueva Sociedad, Defensa 1111, 1° A, C1065AAU Buenos Aires, R. Argentina.
- Pago con cheque:** Envíe un cheque por el importe correspondiente a la orden de **Fundación Foro Nueva Sociedad** a la siguiente dirección: Nueva Sociedad, Defensa 1111, 1° A, C1065AAU Buenos Aires, R. Argentina, acompañado de los datos del suscriptor (nombre, domicilio postal completo, teléfono, correo electrónico).

> Para otros medios de pago y cualquier otra consulta, escriba a <distribucion@nuso.org>.

#AMERICLATINA

Política y ciberactivismo hoy

COYUNTURA

Margarita López Maya. Venezuela entre incertidumbres y sorpresas

Maristella Svampa. Argentina, una década después. Del «que se vayan todos» a la exacerbación de lo nacional-popular

Julio Sevares. El ascenso de China: oportunidades y retos para América Latina

TRIBUNA GLOBAL

Klaus Busch / Dierk Hirschel. Europa en la encrucijada. Propuestas para salir de la crisis

TEMA CENTRAL

Raúl Trejo Delarbre. ¿Hacia una *política 2.0*? Potencialidades y límites de la red de redes

Omar Rincón. Mucho ciberactivismo... pocos votos. Antanas Mockus y el Partido Verde colombiano

Ted Henken. Una cartografía de la blogósfera cubana. Entre «oficialistas» y «mercenarios»

Yves Gonzalez-Quijano. Las revueltas árabes en tiempos de transición digital. Mitos y realidades

Hernán P. Nadal. Testimonio: ciberactivismo y medio ambiente. El caso de Greenpeace Argentina

Damián Profeta / Jimena Zuluaga / Horus Estéfano Díaz, Colectivo Honduras / Marcella Lopes Berte. NUEVA SOCIEDAD en la web 2.0. Selección de entradas del blog *NuSo*

ENSAYO

Federico Vázquez Calero. La trampa de la nostalgia. La seducción del orden mafioso y el Estado imaginario en México

SUMMARIES

ESTADOS (DES)UNIDOS

Crisis, desigualdad y democracia

COYUNTURA

Salvador Martí i Puig. «Pienso, luego estorbo». España: crisis e indignación

Adriana Boersner / Makram Haluani. Moscú mira hacia América Latina.

Estado de situación de la alianza ruso-venezolana

TRIBUNA GLOBAL

Will Hutton. La socialdemocracia liberal, la equidad y el buen capitalismo

TEMA CENTRAL

Robert Kuttner. Barack Obama, la economía y el progresismo estadounidense

Victoria Hattam. El dilema de Obama: un presidente mestizo cercado por la derecha

Alejandra Matus. Las ambivalencias de la democracia. El dinero contra la soberanía popular

Bob Edgar. Más poder para las corporaciones. Democracia y financiamiento electoral

Stephen Pimpare. ¿Por qué no hay más fuego esta vez? Claroscuros del Estado de Bienestar estadounidense

Paul Krugman / Robin Wells. ¿Por qué las caídas son cada vez mayores? Entre la codicia y el fraude

María Graciela Abarca. Disparen contra los sindicatos. La ofensiva conservadora y la «revuelta de Wisconsin»

Ernesto Semán. Occupy Wall Street: ¿la contracara del Tea Party?

Bárbara Renaud González. Like it or not, baby! Crónicas de la frontera, entre honey y miedo

ENSAYO

Martín Bergel. El anti-antinorteamericanismo en América Latina (1898-1930). Apuntes para una historia intelectual

SUMMARIES



www.nuso.org

Enero-Febrero 2012

COYUNTURA

Pablo Rossell Arce 2011: ¿el parteaguas del evismo? Bolivia después del conflicto del Tipnis

Alberto Koschützke Chile: los límites del fundamentalismo de mercado y las protestas estudiantiles

TRIBUNA GLOBAL

René Ramírez Gallegos Izquierda y «buen capitalismo». Un aporte crítico desde América Latina

TEMA CENTRAL

Pierre Salama Preguntas y respuestas sobre la crisis mundial

Jorge Eduardo Navarrete La crisis global: las brechas se reducen

Alma Espino La dimensión de género de la crisis. ¿Existe una agenda feminista?

Oscar Ugarteche Mecanismos de contagio económico en América del Norte

Martín Schorr Argentina: ¿nuevo modelo o «viento de cola»? Una caracterización en clave comparativa

Eduardo Gudynas Estado compensador y nuevos extractivismos

Javier Rodríguez Pardo Testimonio: nuevos colonialismos en América del Sur y África

Sandro Mezzadra Capitalismo, migraciones y luchas sociales. La mirada de la autonomía

ENSAYO

Yaotzin Botello México: el país de los muertos sin nombre

